

El cientista político Joan Garcés fue un testigo privilegiado del período de la Unidad Popular. Sus reflexiones y la cantidad y calidad de su información constituyen un aporte excepcional para el conocimiento del gobierno de Allende.

EDICIONES BAT

**Santiago de Chile
Caracas, Venezuela
Barcelona, España**

2ª edición

Joan E. Garcés

**ALLENDE y la
EXPERIENCIA CHILENA**

Las armas de la política



ENSAYO

Dl gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, intentó avanzar hacia el socialismo dentro del marco constitucional democrático. La problemática central de esta obra es la viabilidad de la conquista del poder por parte de las organizaciones representativas de la clase obrera en un país —como Chile— políticamente desarrollado, con valores democráticos muy arraigados en la población y con una estructura económica dependiente del sistema capitalista internacional.

Según Joan Garcés, que fue asesor político del presidente Allende, un proceso revolucionario que se desenvuelve en una región dominada militarmente por el imperialismo debe evitar derivar hacia una situación de guerra civil. De lo contrario, ésta favorece al contendiente que cuenta con mayores recursos económicos y militares. Además, la etapa de transición al socialismo se halla directamente condicionada por la estrategia y la táctica seguidas para el acceso al poder. Vía insurreccional y pluralismo político tienden a excluirse. Este último es consubstancial con la vía político-institucional, la cual sólo es posible en un sistema representativo que se base en la voluntad popular expresada a través del ejercicio de las libertades democráticas. El gobierno de la Unidad Popular chilena es analizado aquí con la autoridad y el conocimiento únicos que concede al autor el haber sido colaborador personal del presidente Allende. No puede comprenderse plenamente esa experiencia histórica sin conocer los elementos revelados a lo largo de este libro, condicionantes de las opciones estratégicas y tácticas del proceso revolucionario que más ha influido en la izquierda europea con posterioridad a la revolución rusa y a la guerra civil española.

Este libro se publicó originalmente en francés, en 1976, y luego en castellano, japonés e italiano. Ediciones BAT inaugura con él su colección de ensayos, con la intención de contribuir al mejor conocimiento y comprensión de lo que ocurre en Chile y en el mundo, hoy.



Joan E. Garcés es natural de Liria, en Valencia, España. Profesor investigador titular de la *Fondation Nationale de Sciences Politiques* de París, y consultor permanente de las Naciones Unidas. Actualmente es *visiting fellow* del *Institute for policy studies*, de Washington, Estados Unidos. En España fue fundador de la Federación de Partidos Socialistas, en 1976, y de la Izquierda Socialista, en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en 1979.

Otros libros suyos son: "Chile: el camino político hacia el socialismo" (Barcelona, Ariel, 1961); "*Democratie et Révolution*" (Bruselas, Marabout, 1975); "Desarrollo político y económico. Los casos de Chile y Colombia" (Madrid, Tecnos, 1971) y "España intervenida y la unidad de Europa" (1990).

Con este libro, publicado originalmente por Ariel (Barcelona, 1976), Garcés ha intentado cumplir con lo que le pidió el presidente Allende el mediodía del 11 de septiembre de 1973, al despedirse en el palacio de La Moneda: "... alguien tiene que contar lo que aquí ha pasado, y sólo usted puede hacerlo".

NOTA A LA SEGUNDA EDICION

Este libro de Joan Garcés apareció en versión francesa, japonesa, italiana y castellana, en 1976. ¿Por qué publicar en 1990, en el Chile de la transición democrática, un texto que no pudo circular durante el régimen militar? Las razones son varias y variadas:

Primero, porque el autor, el cientista político Joan Garcés, fue un testigo privilegiado del período de gobierno de la Unidad Popular. Sus reflexiones y la cantidad y calidad de su información constituyen un aporte excepcional para el conocimiento del gobierno de Allende.

Segundo, porque muchos elementos de su análisis resultan útiles para interpretar la situación de Chile en la actualidad. Cuestiones como el papel del Estado en la economía; las relaciones entre fuerzas armadas y poder civil, y la viabilidad de un proyecto político y económico enfrentado a una resistencia tanto civil como militar, siguen ocupando el centro del debate.

Tercero, porque las reflexiones de Garcés, socialista español, sirven para entender muchos de los fenómenos que están ocurriendo en Europa del Este.

Todo ello nos hizo pensar que era acertado y provechoso presentar Allende y la experiencia chilena - Las armas de la política como el primer volumen de la colección de ensayos de Ediciones BAT.

El editor

PRESENTACION

El proceso chileno ha puesto en evidencia graves lagunas o errores de la praxis revolucionaria dominante en el movimiento obrero y popular. Laguna ha sido, por ejemplo, el desconocimiento que en sus partidos y organizaciones dirigentes existía sobre la política militar anti-insurreccional, particularmente antigolpe de estado, a través de las técnicas de la defensa civil. La ausencia de una concepción teórica y operativa de estas últimas creó un vacío en la estrategia político-militar de la Unidad Popular que redujo progresivamente su capacidad de iniciativa y de defensa.

Semejantes insuficiencias se vieron acompañadas por otras más graves. El carácter de la alianza y coexistencia entre clases y sectores sociales, la naturaleza y función del estado, la necesidad de una dirección unida del movimiento popular, la defensa de la nación como totalidad frente al asedio de una potencia extranjera, son algunos de los problemas de cuya solución depende el destino de un proceso de transformación de un sistema capitalista en favor de una alternativa socialista, y en los que la experiencia chilena ha revelado hasta qué punto algunos de los conceptos más generalizados de la teoría de la transición al socialismo pueden ser inadecuados ante las exigencias cambiantes de la evolución histórica y la especificidad única de cada proceso social.

Todo ello, sin embargo, no debe empalidecer el hecho de que la meta y el camino que intentó seguir el pueblo protagonista de este libro, la denominada *vía chilena al socialismo*, reunía un síndrome de elementos definitorios —políticos, sociales, económicos, militares— que la convierten en la experiencia más moderna hasta la fecha de revolución anticapitalista, conteniendo los gérmenes de una modalidad de transición al socialismo nunca antes desarrollados hasta un nivel comparable: plena vigencia de la democracia como forma de vida en el seno de los sectores y organizaciones integrantes del bloque social popular, reconocimiento de derechos políticos y civiles iguales a la oposición, respeto del estado de derecho como norma de regulación de la vida colectiva, rechazo de la guerra civil como vía de resolución de las contradicciones sociales, libre ejercicio de las libertades de organización, conciencia y expresión sin

más restricciones que las contempladas en un régimen legal fundamentado en la voluntad nacional manifestada a través del sufragio universal, libre, secreto y con pluralidad de partidos, etc.

De modo complementario, las técnicas contrarrevolucionarias que fueron puestas en práctica por el gobierno norteamericano y la burguesía criolla para derrotar a los trabajadores chilenos, son un ensayo de un fenómeno de envergadura: la prueba de la capacidad de ciertas tácticas y estrategias aplicadas a la destrucción y escarmiento de un pueblo en busca de su liberación social y nacional en el presente contexto de las relaciones mundiales, en particular en su proyección latinoamericana pero con elementos comunes válidos para otras regiones, incluida Europa occidental.

En la medida en que tales técnicas contrarrevolucionarias han predominado en la práctica, han demostrado estar de alguna manera más desarrolladas que las utilizadas coetáneamente por el movimiento popular. Y el éxito de su aplicación en Chile entre 1970 y 1973 anticipa, y asegura, su reaparición en otras latitudes donde la sobrevivencia del sistema capitalista se enfrenta a un desafío de naturaleza comparable.

Algunas de las dimensiones más cruciales de la historia del gobierno de la Unidad Popular, las de orden estratégico, es propio de su carácter que sólo fueran plenamente conocidas por la dirección superior del gobierno. Difícilmente puede comprenderse o interpretarse esta experiencia histórica sin ellas. La confianza política y la amistad con que me distinguiera Salvador Allende me situaron en una posición de responsabilidad singular en el período comprendido entre junio de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. La masacre del palacio de la Moneda y las ejecuciones de dirigentes que siguieron me han convertido lamentablemente en el único superviviente de los colaboradores políticos personales del presidente Allende. Era mi deber contribuir al entendimiento del período que se cerraba aquel 11 de septiembre con este testimonio, que dirijo en primer lugar a los trabajadores chilenos, escrito a partir del ángulo de enfoque que fue el mío: la presidencia de la república, síntesis que era de un gobierno, de la coalición de partidos de la Unidad Popular y de la Central Unica sindical, de un estado institucionalizado y de una sociedad nacionalmente vertebrada.

J. E. G.

París, julio de 1975.

I TRADICION HISTORICA Y PRAXIS PRESENTE O LA ACTUALIDAD DE UN VIEJO DEBATE

El problema que nos ocupa se refiere a la conquista del poder por las organizaciones de trabajadores con voluntad de reemplazar el modo de producción capitalista por el socialista. Queremos plantearlo en el marco de una sociedad políticamente desarrollada, con prácticas y valores democráticos arraigados en la estructura social, generalizados al conjunto de la población e institucionalizados, en una estructura económica integrada y dependiente del sistema capitalista internacional —en grado mayor o menor—. Con lo que delimitamos nuestro campo visual a los países que han experimentado de una u otra forma la revolución democrático-liberal, históricamente vinculada al desarrollo del capitalismo industrial y de los conflictos sociales entre burguesía y clase obrera. Queremos, asimismo, referir nuestro análisis al período actual, condicionado por el desenlace de la guerra de 1939-1945 y por la tecnología termo-nuclear de que disponen las políticas militares de Estados Unidos y la Unión Soviética, principales centros de poder mundial de los sistemas capitalista y socialista, respectivamente.

Algunas de las cuestiones teórico-prácticas que esta problemática tiene planteadas son de larga trayectoria en el decurso de las luchas revolucionarias del movimiento obrero. Preciso será, por consiguiente, tener en cuenta antecedentes cuya influencia ha sido considerable en la formación histórica y en la praxis actual de las fuerzas organizadas con una teleología socialista. En cada experiencia histórica confluyen factores que resultan específicos en su ubicación estructural y en su articulación con circunstancias nacionales y externas únicas. Pero cada marco histórico concreto se ve, a su vez, trascendido en

la medida que se manifiestan fenómenos sociales recurrentes que, en condiciones distintas de tiempo y espacio, se hallan presentes en todos los países que han recorrido o recorren un proceso de agotamiento y transformación de las estructuras básicas en que se asienta el modo de producción capitalista.

El desarrollo de un sistema socioeconómico, en el cual los trabajadores y sus organizaciones representativas sean hegemónicas en el conjunto del cuerpo social, requiere la resolución favorable, por parte de aquéllos, de la pugna en torno del *poder*. Resolución que no se produce en un momento temporalmente delimitado y preciso, en función de un hecho histórico de trascendencia especial, sino que se prolonga a lo largo del ciclo de cambio de las estructuras socioeconómicas, antecede y sigue a las manifestaciones de crisis en que se confrontan de modo más directo y nítido las fuerzas favorables y adversas al sistema capitalista. El control del poder por los trabajadores no se resuelve tampoco de una vez por todas con motivo de una gran victoria política y militar, sino que se requiere de una acción anterior y posterior continuada y permanente; en todo caso, hasta que la configuración social se encuentre articulada de modo tal que las causas —nacionales e internacionales— de la concentración del poder entre los propietarios y los manipuladores del capital dejen de existir. Aun con toda su importancia, el logro de la dirección del aparato del estado no es sino el término de una etapa en el largo camino de la socialización del poder, que se continúa ciertamente con otros recursos y características distintas, pero que se prolonga por años, por décadas..., por último por tiempo indefinido, en la medida que las contradicciones y conflictos en torno del poder y de su utilización surgen y se desarrollan en cualquier sociedad, tanto entre clases y capas sociales distintas como dentro de una misma clase. En un sistema socialista, las contradicciones políticas son de naturaleza sin duda diferente de las propias de configuraciones socioeconómicas anteriores, pero no por ello el problema de su control y del sentido de su utilización deja de ser causa de tensiones y conflictos.

Importa destacar que la modalidad concreta que asume la transición al socialismo en un país depende, en gran manera, de las características distintivas que informan la fase previa a la conquista del poder del estado por los trabajadores. Lo que

viene a significar que la forma y el contenido del período de transición están condicionados por la naturaleza de la crisis que puso término a la capacidad de continuidad (mantenimiento + evolución) del sistema capitalista. Y en especial por un hecho que, aun siendo instrumental, tiene la más alta trascendencia en el terreno práctico: la mediación o no de una guerra —civil o internacional— como vehículo de solución del conflicto en torno de la hegemonía de los intereses del bloque social obrero-popular por encima de los del burgués.

Que una situación de crisis estructural se resuelva o no a través del enfrentamiento armado depende no sólo de factores internos al sistema en cuestión, sino también externos. Entre estos últimos es decisiva la capacidad de intervención que puedan tener los sistemas de fuerza (económica, militar y política) del mundo capitalista y socialista sobre el país cuya clase dominante siente amenazados los pilares de su hegemonía social. Entre los factores internos, dos son especialmente relevantes: por un lado, el nivel de contradicción existente entre los distintos sectores sociales, que los lleva a agruparse en torno del polo burgués o proletario, y por el otro, el carácter del estado y del sistema político.

La naturaleza de la crisis de un sistema capitalista se halla de este modo condicionada por la conciencia de sí y para sí de la clase obrera y su capacidad orgánica relativa frente a la de su principal antagonista. Así como por la naturaleza de la estructura económica del país y su relación de dependencia respecto del sistema capitalista internacional.

CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA Y GUERRA CIVIL

Sin crisis social no hay cambio de régimen ni, con mayor motivo, de sistema político. La desarticulación de los mecanismos integradores y reguladores de un sistema económico es el principal precipitante de una crisis social. Pero ni toda crisis económica conduce a una crisis social, ni toda crisis socioeconómica desemboca en crisis general del sistema político existente, sino que el proceso está condicionado por la presencia y naturaleza de otros fenómenos sociales.

Es en torno de estos últimos, de su delimitación, articula-

ción y función, que gira el debate político, tanto teórico como práctico. En ambos terrenos las fuerzas sociales interesadas en la continuidad de las variables esenciales del sistema capitalista, y las partidarias de su reemplazo por otras de orientación socialista, sostienen una batalla sin tregua.

Después de la segunda guerra mundial, coincidiendo con el período de liquidación de los imperios coloniales europeos y el propósito de Estados Unidos de asumir la dirección central del mundo no socialista, la sociología norteamericana ha llevado a cabo una vasta inversión de recursos técnicos y humanos en el estudio y comprensión del cambio sociopolítico.

La modernización y el desarrollo político de los países industriales hegemónicos han sido analizados sistemáticamente con el propósito de establecer las relaciones institucionales y estructurales que han permitido el desarrollo del modelo capitalista de crecimiento, y las conclusiones han sido puestas al servicio de los centros de poder económico, militar, político y cultural del sistema capitalista internacional para su difusión e instrumentación generalizada. No sólo en países periféricos sino también en los centrales. El estudio de la articulación entre las principales escuelas sociológicas, en especial la funcionalista y estructuralista de inspiración parsoniana, y los intereses materiales de mantenimiento del sistema capitalista, está por hacer. Pero es sin duda un campo fructífero para profundizar la relación entre epistemología e intereses sociales.

En los años de la "guerra fría" y durante los años sesenta, las teorías funcionalistas que se ocupan del análisis de la dinámica del cambio, del crecimiento y del desarrollo, están guiadas predominantemente por la problemática en torno de la conservación y continuidad del sistema, buscando siempre las causales del equilibrio que absorba las presiones sin transformar las estructuras básicas.¹

En un balance hecho en 1973, uno de los principales exponentes de la teoría funcional-estructuralista del desarrollo político se veía llevado a constatar que

1. La obra de Talcott Parsons y Edward Shils, *Toward a general theory of action*, Harvard University Press, Cambridge, 1951, cuya influencia teórica y metodológica posterior ha sido considerable, es particularmente representativa a este respecto.

La búsqueda de una teoría para el desarrollo empezó en la misma era que produjo los Cuerpos de Paz. Muchas esperanzas y expectativas vanas sobre la muerte de la ideología y acerca de la evolución en Occidente, así como sobre el descubrimiento de modelos de modernización a bajo costo y altamente rentables para las naciones nuevas, se han venido desvaneciendo desde entonces.²

Aunque esta constatación es en sí misma víctima de la ideología de su autor, al identificar la causa —necesidad material de evitar la "revolución en el Oeste"— con el efecto —esperanza de invalidar la "ideología" socialista y de llevar a cabo la "modernización" sin revolución anticapitalista—, ella es sintomática del contexto histórico en que tiene lugar la reflexión teórica.

Es frecuente observar entre los especialistas en ciencias sociales de motivación anticapitalista un cierto menosprecio, cuando no desconocimiento, de la especulación teórica dentro de las principales escuelas sociológicas contemporáneas de Norteamérica. Se comete con ello un doble error. Si por un lado esta ignorancia contribuye a desaprovechar algunas elaboraciones técnicas de indudable eficacia y valor, cualquiera sea la axiología o teleología de las fuerzas sociales que las utilicen, y de un nivel de sofisticación que rara vez se encuentra entre los sociólogos de vocación socialista, por otro lado se deja de percibir la magnitud del peligro que la utilización de estas técnicas sociales encierra para el presente y futuro de las relaciones humanas, en especial en los países que están dentro del sistema capitalista internacional. No sólo las ciencias físico-naturales han sobrepasado el umbral en el que los recursos técnicos con que cuentan pueden ser puestos al servicio de la destrucción de una comunidad o de la humanidad entera. Aunque de manera diferente, menos ostensible, también contribuyen a ello las ciencias sociales, al poner sus técnicas al servicio del poder de estados con vocación de opresión local o mundial, obsesionados en incrementar la capacidad de sus aparatos de control

2. Gabriel A. Almond, "Approaches to developmental causation", en G. A. Almond, S. C. Flanagan, R. J. Mundt, *Crisis, choice and change. Historical studies of political development*, Little Brown and Co., Boston, 1973.

social, de movilización de recursos especiales en períodos de tensión, de manipulación y neutralización de los movimientos de protesta, de manipulación de las innovaciones institucionales intersocietarias, etc. Las técnicas modernas para mantener el poder económico —sobre los medios de producción, distribución e intercambio—, el poder político-militar sobre los medios de represión, el poder social sobre los medios de coacción y el poder cultural sobre los medios de creación, difusión y conservación de los valores, cuentan con disponibilidades históricamente sin paralelo, muy superiores a las que tenía a su alcance el estado nazi que arrastró a Europa a la mayor vorágine de terror y destrucción hasta entonces conocida.

Sólo la democratización y socialización creciente de los instrumentos de poder puede evitar a las sociedades contemporáneas ser sometidas al despotismo que las técnicas, cada vez más perfeccionadas, de control y destrucción ponen al alcance de los sectores o clases dominantes atemorizados de perder su hegemonía social. Los regímenes nazi-fascistas surgidos de los años veinte y treinta perdieron una batalla militar en 1945, pero no han perdido todavía la guerra... En estos términos razonaba el general Franco tras la derrota de sus protectores en Alemania e Italia. Y los hechos posteriores le dieron la razón durante tres décadas. Estados Unidos y la derecha europea asumieron el relevo de Hitler y Mussolini para ayudarlo a mantener su régimen. Al mismo tiempo que respaldaban a cuantos gobiernos antipopulares en el Tercer Mundo no cuestionaban los fundamentos de la estructura del poder del sistema capitalista mundial. Desde Diem en Vietnam al general Park en Corea, pasando por el general Suharto en Indonesia y las dictaduras militares brasileña y griega instauradas en 1964 y 1967 con la complicidad directa de los Estados Unidos,³ cuáles no han sido los progresos técnico-científicos de los medios de represión para mantener los sistemas sociopolíticos tradicionales. Al decir de James R. Schlesinger,

3. Véase Jean Meynaud, *Rapport sur l'abolition de la démocratie en Grèce*, Montreal, 1970, I, pp. 309 y ss.; Moniz Bandeira, *Presença dos Estados Unidos no Brasil*, *Civilização brasileira*, Río de Janeiro, 1973, pp. 456-475; Nguyen Kien, *Le Sud-Vietnam depuis Dien-Bien-Phu*, Maspero, París, 1963; B. R. Anderson-R. T. McVey, *A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia*, Cornell Univ., Ithaca, N. Y., 1971.

[...] nuestra política con aquellos que no están completamente ni con el Occidente ni con los soviéticos será más efectiva cuando se haya construido un sistema de disuasión, un sistema de recompensas y sanciones que es percibido anticipadamente, por lo menos de manera vaga [...] El énfasis que hemos puesto en los paradigmas de democracia, de igualdad de ingresos, en los programas de bienestar, me parecen equivocados. Aquello en lo que nosotros estamos fundamentalmente interesados es en gobiernos estables, no comunistas, que dirijan —y puedan conservar— el apoyo de sus pueblos [...] Demasiada insistencia en la introducción de las formas democráticas, donde el espíritu de la democracia no existe puede dar oportunidades [...] a quienes podrían promover cambios sistemáticos, a quienes podrían impulsar la revolución [...]. Hay momentos en que los procedimientos democráticos deben ser introducidos, y hay momentos en que semejante introducción debe ser evitada [...] Ello implica que nosotros necesitamos adquirir las técnicas para mantener la fuerza del liderazgo de quienes deberíamos desaprobamos en otras condiciones.⁴

El exponente de tan clara doctrina fue promovido a director de la CIA en 1973, y nombrado secretario de Defensa posteriormente, hasta noviembre de 1975.

En los Estados Unidos y Europa, en los propios terrenos de batalla donde fue combatido por las armas el fascismo, nadie puede pretender razonadamente que el peligro de una reiniciación de aquél —en formas renovadas pero de contenido más temible— haya desaparecido. Que el sistema social actual entre en una crisis de envergadura bastante para poner en jaque la hegemonía del bloque social hoy dominante, y éste no dejará de intentar recurrir a medios de represión de una capacidad destructiva equivalente al grado de la amenaza que siente cernirse sobre él.

Es en función de los recursos técnicos y científicos contemporáneos, de la capacidad de ser utilizados por las fuerzas sociales en pugna, que debemos contemplar en todo momento la lucha por el poder. Y, sin embargo, cuántos postulados legados por la historia del movimiento obrero anterior a la

4. J. R. Schlesinger, *Strategic leverage from aid and trade*, en D. M. Abshire, ed., *National security*, F. A. Praeger, Nueva York, 1963, pp. 602-701.

primera guerra mundial continúan sobreviviendo, a pesar del profundo cambio intervenido en el desarrollo de las fuerzas de producción, y de los medios generados para asegurar la continuidad de las estructuras básicas de subordinación de los trabajadores a las organizaciones representativas del capital. Permítasenos volver la mirada hacia algunos antecedentes históricos de fenómenos políticos presentes.

Todavía está vivo en los países capitalistas un clásico dilema que animó las polémicas tácticas del movimiento obrero europeo a fines del siglo XIX. A título de ilustración, retengamos un ejemplo entre muchos, el debate entre los líderes socialistas franceses Jean Jaurès y Jules Guesde. ¿La clase obrera, debe considerar la posibilidad de conquistar el poder controlando progresivamente los centros político-representativos del estado burgués fundamentados en el sufragio universal? Sí, responde Jaurès, apoyándose en una premisa y en una condición. La primera, que al asumir puestos representativos, desde las municipalidades hasta el gobierno central, el movimiento obrero "es tanto una fracción del proletariado en ascenso como una fracción del estado burgués". La segunda, "que la clase obrera esté organizada, unificada, que frente a todos los restantes partidos anárquicos y discordantes aquélla sea un solo partido, al igual que es una sola clase".

No, replica por el contrario Guesde,

la revolución que os concierne sólo será posible si vosotros sois vosotros mismos, clase contra clase, sin conocer y no deseando conocer las divisiones que pueden existir en el mundo capitalista [...] el día en que el proletariado comprendiera y practicara la lucha de clases capitalista, ese día no habría más socialismo [...] los trabajadores serían una clase más, un partido a la zaga, domesticado, sin razón de ser y, sobre todo, sin porvenir.⁵

Esta contraposición de tácticas tenía lugar en 1900, aun dentro de un mismo partido, el Socialista francés. Después de la guerra europea y del éxito de la revolución de octubre de 1917 en Rusia, el mismo debate ha continuado, pero desde un

5. Jean Jaurès y Jules Guesde, *Les deux méthodes. Conférence dans le cadre du parti socialiste* (SFIO), Librairie Populaire, París, 1925, pp. 23, 24, 36 y 38.

Partido Socialista dividido en dos. La historia del movimiento obrero posterior a 1917 está marcada por esta división.

¿La conquista del poder por los trabajadores en los países industriales sólo es posible tras una guerra internacional, o una sucesión de guerras internacionales? Esta es la conclusión lógica a la que lleva el desarrollo de la vía insurreccional como táctica revolucionaria. La integración e interdependencia del sistema capitalista mundial hace que éste reaccione solidariamente contra la amenaza revolucionaria en una de sus partes; en especial el país o conjunto de países hegemónicos se arrojan la responsabilidad principal en la tarea de sofocar las rebeliones locales. Aunque con un significado social distinto, es un mecanismo semejante al que operó en toda Europa contra la consolidación primero, y la irradiación después, de la revolución burguesa en Francia a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, inspirando la doctrina y la acción intervencionista de las grandes potencias de la Santa Alianza en los países amenazados por algún intento revolucionario liberal-burgués.

Los socialistas de mediados del siglo XIX buscaron en la experiencia histórica de las revoluciones burguesas anteriores extraer enseñanzas y anticipaciones sobre las modalidades que adoptarían las revoluciones proletarias. La teoría y la práctica de las insurrecciones obreras como vía de conquista de poder, están impregnadas del éxito de la insurrección de París en 1789 y de las jornadas de las barricadas de 1830 que derrocaron a los Borbones. Durante más de un siglo, en muchos movimientos obreros nacionales se ha buscado denodadamente una nueva Bastilla que tomar por asalto. Del mismo modo muchos socialistas del siglo XIX buscaron en la experiencia internacional que acompañó a los levantamientos revolucionarios burgueses una anticipación de lo que debía esperarse que acaeciera a los levantamientos obreros futuros. Francia fue el país donde la revolución burguesa más avanzó por la vía insurreccional después del levantamiento de París en 1789. Pero Inglaterra, al frente de las monarquías tradicionales del continente, terminó venciendo a los ejércitos salidos de la revolución, y la monarquía tradicional fue restaurada en Francia y en todos los otros países que se habían visto afectados, de uno y otro modo, por el efecto de propagación de la experiencia francesa. De ahí que, a mediados del siglo XIX, tras la derrota de las insurrec-

ciones populares que tuvieron lugar en París y otros puntos de Europa en 1848, no es extraño que Marx considerara que:

La liberación de Europa, sea por la sublevación de las nacionalidades oprimidas que buscan su independencia, sea por el derrocamiento del absolutismo feudal, se halla determinada, por consiguiente, por el éxito de la sublevación de la clase obrera francesa. Pero cada revolución social francesa fracasó debido a la burguesía inglesa, a causa de la dominación mundial, industrial y comercial de la Gran Bretaña. Cualquier reforma social parcial en Francia y, en general, en el continente europeo es siempre un buen deseo piadoso, vacío, en la medida que se pretende irreversible. Y la vieja Inglaterra será derrocada por una *guerra mundial* en la que sólo el partido de los Cartistas, el partido obrero organizado inglés, puede ofrecer las condiciones para la victoria de una sublevación contra sus gigantescos opresores.⁶

Según esta perspectiva, la derrota en una guerra internacional de la metrópoli hegemónica del capitalismo mundial podría permitir la revolución socialista en el seno de aquélla, condición *sine qua non* para que la clase obrera de otros países pudiera a su vez intentar o estimar definitiva la toma del poder. La tesis que el desarrollo del capitalismo lleva en su seno la creación de las condiciones de la guerra internacional, y que las profundas mutaciones producidas por ésta debían dar paso al triunfo de la revolución proletaria, es una constante en la teoría marxista del siglo XIX. Así, reflexionando sobre el destino de Europa tras las guerras victoriosas de Prusia sobre Francia y Austria que permitieron la unificación de Alemania, Engels preveía en 1887 que en lo sucesivo

para Prusia-Alemania no puede haber otra guerra que no sea la mundial, más aún, una guerra mundial de amplitud e intensidad jamás conocidas. De ocho a diez millones de soldados se degollarán unos a otros [...] las devastaciones de la guerra de los Treinta Años, concentradas en tres o cuatro años, se extenderán a todo el continente [...] los viejos estados con su prudencia tradicional se hundirán, decenas de coronas rodarán

6. K. Marx, "Die revolutionäre Bewegung", en *Neue Rheinische Zeitung*, n.º 184 (1 enero 1849), y en K. Marx y F. Engels, *Werke*, Berlín, 1961, VI, pp. 149-150.

por el pavimento, y nadie se dignará recogerlas. No es posible prever cómo terminará todo esto, ni cuál de los beligerantes saldrá victorioso del combate. Un solo resultado es absolutamente seguro: todo el mundo estará agotado, y nosotros contaremos con las condiciones para la victoria final de la clase obrera.⁷

Treinta años después, la primera guerra mundial y la revolución bolchevique probaban hasta qué punto semejante anticipación tenía fundamentos reales. Concepción de la evolución de la historia, que en el caso de Engels no era lineal ni determinista a corto plazo, importante es decirlo, pero sí en una perspectiva de secuencias temporales más amplias:

La guerra nos hará retroceder [al proletariado] quizás hasta el fondo, y nos arrancará sin duda muchas posiciones ya conquistadas. Pero cuando vosotros [los capitalistas] habréis desencadenado las fuerzas que ya no podréis continuar dominando, las cosas seguirán implacablemente su curso normal: al final de la tragedia vosotros estaréis arruinados, y la victoria del proletariado estará ya asegurada o será por último inevitable.⁸

Lenin aceptó y desarrolló estos planteamientos, pero los modificó en función de su propia experiencia nacional, al sostener que la victoria del socialismo era posible en un pequeño número de países e incluso en uno solo, en virtud de la ley del desarrollo económico-político desigual del capitalismo. Entre los bolcheviques acabó por imponerse la tesis de que no cabía esperar el triunfo en los países industrializados para iniciar la revolución socialista en Rusia. En lo demás, Lenin coincidía con Marx en que el nuevo estado socialista sería asediado por los del mundo capitalista, por lo que debía atraer hacia sí a

las clases oprimidas de los otros países, empujándolas a la insurrección contra los capitalistas, empleando incluso —en caso de necesidad— la fuerza militar contra las clases explotadoras y sus estados.⁹

7. F. Engels, "Lo que Europa está esperando" (Londres, 15 diciembre 1887), publicado en *Sozialdemokrat* (15 enero 1888).

8. *Ibid.*

9. Lenin, "A propósito de la consigna de Estados Unidos de Europa", en *Oeuvres choisies*, I, pp. 775-776.

De esta perspectiva leninista nos importa retener aquí dos elementos. Primero, la consideración de la insurrección obrera como vía principal de conquista del poder. Después, el apoyo logístico-militar que aquélla requiere para vencer por la fuerza de las armas a las clases explotadoras y a sus estados. En otras palabras, la complementariedad e interdependencia existente entre la insurrección obrera y la guerra civil en el supuesto de que la burguesía tenga capacidad de respuesta frente al levantamiento popular.

Sin previa revolución socialista en los países capitalistas dominantes, venía a decir Marx en 1849, las insurrecciones obreras en los otros países o están condenadas al fracaso o, de triunfar, no pueden ser consideradas como irreversibles, ya que pesa sobre ellas la amenaza de la intervención contrarrevolucionaria extranjera. La existencia de un estado socialista consolidado, agregaba Lenin, permitirá en lo sucesivo que los trabajadores insurrectos cuenten con su ayuda solidaria, incluida la militar.

Aparentemente contrapuestas, en sustancia estas dos proposiciones se complementan. En torno de ambas podría agruparse la historia social del último siglo y medio. Allí donde las fuerzas capitalistas, nacionales o internacionales, se han encontrado en posición dominante, las insurrecciones obreras han sido ahogadas en sangre. Sólo en los países donde en el momento oportuno han podido contar con un respaldo económico-militar suficiente para sostener un enfrentamiento con las fuerzas contrarrevolucionarias, o disuadirlo, las organizaciones de la clase obrera han conquistado o retenido el poder. No hay excepción. Así, por ejemplo, sin el respaldo económico-militar de Hitler y Mussolini, la sublevación militar de la derecha española en julio de 1936 no hubiera podido mantenerse, ni quizá nacer. Sin el arribo de material de guerra soviético pocos meses después, la clase obrera española no hubiera podido resistir durante 1937 y 1938 la prolongación de la guerra. En 1939, el equipamiento bélico de las tropas de Franco era muy superior al del ejército gubernamental, lo que resolvió la suerte del enfrentamiento. Sin el apoyo económico-militar del bloque socialista, la revolución cubana difícilmente hubiera sobrepasado el año 1961, y la guerra de Indochina no hubiera seguido la evolución que ha conocido.

Cualesquiera que sean las circunstancias internas de una sociedad, la toma del poder por los trabajadores se halla sobredeterminada por la incidencia de la correlación de fuerzas movilizadas en torno suyo por los sistemas mundiales capitalista y socialista. Incidencia asimétrica y cambiante según el período histórico y la región geopolítica.

Regresemos por un momento, sin embargo, a la polémica en el seno del Partido Socialista francés entre Jean Jaurès y Jules Guesde. Este último, al criticar la posición de Jaurès favorable a una táctica obrera de conquista de los centros político-representativos del estado burgués, se fundamentaba en una premisa de larga tradición en la historia revolucionaria: la socialización de los medios de producción será posible "en cuanto el partido obrero habrá agrupado en torno a su programa de expropiaciones una minoría proletaria suficiente".¹⁰

"Una minoría proletaria suficiente." Un frente de clase, y una minoría social. Evidentemente, Guesde es lógico consigo mismo cuando no sólo descarta como vía hacia el poder la táctica político-institucional de lograr una mayoría socialista en el Parlamento —en esa época centro del poder político del estado—, sino también la táctica insurreccional a través de la huelga general revolucionaria, porque "habría que esperar demasiado tiempo".¹¹ La fundamentación que hace Guesde de semejantes tesis es doble. Por un lado, la referencia histórica a las experiencias revolucionarias burguesas:

es violentamente, por la fuerza, como el Tercer Estado se ha instalado en el poder. Es violentamente, por la fuerza, que a la primera quiebra de la burguesía gubernamental el Cuarto Estado, organizado en su élite, meterá su mano de productor sobre la república de nuestro tiempo.¹² ■

En segundo lugar, la ilusión largo tiempo mantenida de que la lucha electoral del partido obrero —necesaria en ciertas fases del proceso revolucionario— tiene que desembocar fatalmente en la insurrección proletaria. La legalidad electoral bur-

10. Jules Guesde, "La prise du pouvoir", en *Socialiste* (1892).

11. *Ibid.*

12. Jules Guesde, "Action électorale et action révolutionnaire", en *Socialiste* (1894).

guesa sería así utilizada como arma defensiva y ofensiva para preparar la “ruptura de la legalidad”, verdadero camino de la revolución.

Que el incremento del poder político de la clase obrera por la denominada “vía electoral” culmina en la insurrección obrera es una creencia ampliamente compartida por los dirigentes del movimiento socialista internacional de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Todavía en 1918, Émile Vandervelde, líder del Partido Socialdemócrata belga, sostenía que

contrariamente a lo que algunos pretenden, yo no he subordinado jamás la emancipación del proletariado a su advenimiento electoral o legal [...] [el aumento de su fuerza electoral] pone a prueba su derecho a la insurrección, realizando su revolución ineluctable. Éste es el lenguaje que yo he empleado en todas partes y en todo momento.¹³

Sin embargo, en ningún país donde el movimiento obrero ha conquistado y ha practicado las formas de lucha política propias de un sistema fundado en el sufragio universal, se ha instalado un gobierno socialista por la vía insurreccional. Y lo contrario es igualmente cierto: en ningún país donde ha triunfado una insurrección proletaria, el movimiento obrero había incorporado a su praxis las formas de lucha democrática fundamentadas en el sufragio universal, es decir, en la democracia política.

La razón de esta constante histórica merece ser considerada atentamente. En el fondo del problema se encuentra el hecho de que los fundamentos socioeconómicos y políticos que hacen viable la lucha social por la vía político-electoral, no sólo son distintos sino incluso contrapuestos a los de la vía insurreccional. Un proceso de desarrollo revolucionario que ha seguido una de estas vías tácticas, no puede proseguir por la otra si previamente no han desaparecido los fundamentos de la primera. Cambio de vía que es mucho más complejo que el simple cambio de agujas de una red ferroviaria, pues reposa en condicionamientos de la estructura socioeconómica y en las

13. Émile Vandervelde, *Le socialisme contre l'État. Problèmes d'après guerre*, Berger-Levrault, París, 1918.

relaciones políticas, económicas y militares —nacionales e internacionales— que requieren secuencias de tiempo generalmente largas.

No establecer las diferencias estructurales, institucionales y temporales que configuran la naturaleza y la factibilidad de una u otra perspectiva táctica puede conducir a las confusiones más espectaculares. Como la muy clásica de disociar las urnas electorales y los fusiles al estilo de

Siempre la fuerza ha coronado y permitido culminar la acción gubernamental o política iniciada en el boletín de voto. El fusil ha completado la urna. De ahí nuestras dos armas, impuestas por la experiencia de toda la historia: las urnas primero, el fusil después, que los acontecimientos pondrán en nuestras manos, a pesar de nosotros mismos.¹⁴

Semejante contraposición entre voto y fusil es inexacta, y ha llevado a consecuencias prácticas catastróficas. No hay ningún sistema político basado en el sufragio universal que primero nazca y después se mantenga operante, si no cuenta con fusiles que lo respalden. Es decir, con un ejército o fuerza armada que, por una u otra razón, apoya una forma de estado democrático. Lo que en realidad se contrapone a las formas de lucha social por la vía político-institucional no son los fusiles —que la presuponen— sino los fusiles abriendo fuego —es decir, la guerra civil—. De ahí que la presencia simultánea de formas de lucha legales e ilegales sólo es posible desarrollarla hasta sus últimas consecuencias en la perspectiva táctica que implica propiciar —o dejarse arrastrar a— la guerra civil como medio de resolución del conflicto estratégico en torno de la detentación del poder. Lenin establecía claramente el nexo lógico entre ambos supuestos. Cuando criticaba al legalismo de los partidos socialistas europeos y exigía que “es necesario completarlo mediante la creación de una base ilegal, de una organización ilegal, de un trabajo socialdemócrata ilegal, sin por ello entregar una sola posición legal” partía del supuesto de que el trabajo revolucionario que merecía el nombre de socialista era el que estaba conforme con que

14. Jules Guesde, *Le socialisme au jour le jour*, París, 1899, p. 396.

la consigna que generaliza y orienta este trabajo, que ayuda a unir y a soldar a quienes desean concurrir a la lucha revolucionaria del proletariado contra su gobierno y su burguesía, es la consigna de *guerra civil*.¹⁵

En los orígenes de la escisión de los partidos socialdemócratas después de la guerra de 1914-1918, la división de la clase obrera que más ha marcado la historia contemporánea de los países industriales, se encuentra —entre otros factores acumulativos—, la creencia de todo un sector del movimiento obrero internacional, encabezado por el triunfante partido bolchevique ruso, de que la lucha de clases mediante la articulación de formas legales e ilegales debía aceptar llegar hasta el límite de la guerra civil e incluso ingresar en esta última.

Se necesitará una perspectiva histórica mucho más amplia que la que tenemos ahora, cincuenta años después de aquella escisión, para juzgar cabalmente la influencia positiva o negativa de esta última proposición táctica en el destino del movimiento obrero durante el siglo xx, particularmente en los países industriales de Europa y, por extensión, en todas las regiones del mundo que han dependido económica y militarmente de aquéllos durante las pasadas décadas. Pero entre las constataciones que hasta la fecha se pueden hacer se encuentra la siguiente: desde que el partido bolchevique demostró en 1917 la posibilidad de que la clase obrera conquistara y retuviera el poder, en los países industrializados todo intento de revolución socialista por la vía de la guerra civil ha terminado en fracaso o en baño de sangre. De modo semejante a como desde 1959-1960, en cuanto Estados Unidos y la derecha latinoamericana percibieron el sentido revolucionario del movimiento castrista que acababa de instaurarse en Cuba, dispusieron toda una estrategia militar y político-económica para aplastar de inmediato los conatos de emulación guerrillera en el continente. Sólo en los casos vinculados a los efectos derivados de una guerra internacional, y en países de régimen colonial, semi-colonial o bajo dominación extranjera —Yugoslavia, China,

15. V. I. Lenin, *La faillite de la II Internationale* (1915), Ed. Sociales, París, 1953, pp. 59-62. El subrayado es nuestro. El punto de vista de Trotsky puede verse en escritos como *La guerre et la révolution: le naufrage de la IIe Internationale, les débuts de la IIIe Internationale*, Ed. Tête des Feuilles, París, 1974 (publicados originalmente entre 1922 y 1924).

Vietnam, Corea del Norte—, la guerra civil ha sido ganada por las fuerzas populares. Y cuando la guerra civil revolucionaria tiene un escenario geográfico nacional, como en el caso del Vietnam del Sur, su evolución y desenlace se encuentra internacionalizado en la medida que dependen no sólo de sus protagonistas locales principales, sino también del nivel de la solidaridad de terceros países con los combatientes, en especial de los socialistas —encabezados por la URSS— y de los capitalistas —encabezados por los Estados Unidos—.

Así, desde el punto de vista de su dimensión internacional podemos decir que cuanto más un proceso revolucionario de significado anticapitalista se aproxima en su desarrollo a la guerra civil, más su suerte está directamente condicionada por las relaciones militares entre las grandes potencias y su resultado sobre el país en cuestión. Cuanto más absoluto es el poder militar de una potencia en una región geográfica, sin contrapeso, mayor es la propensión que tiene a propiciar la solución de un conflicto revolucionario en el terreno de las armas, si ello contribuye a sofocarlo más eficazmente que por otros métodos. Poco importa el relieve o significado del país afectado. La estrategia norteamericana posterior a la segunda guerra mundial ha venido elaborando un consenso creciente en torno del principio según el cual toda acción revolucionaria en un lugar intrínsecamente sin importancia puede atentar contra la seguridad de los Estados Unidos, al estimular acciones posteriores en lugares más importantes que pueden llevar a una cadena de revoluciones capaz de provocar el declive de su hegemonía mundial. El presidente Ford lo expone claramente cuando sostiene en público que “ha sido tradicional en nuestro país —antes, durante y después de la segunda guerra mundial— mezclarnos directa o indirectamente en los asuntos de un país extranjero si nuestra seguridad nacional se halla en juego. Mientras la intervención tenga lugar eficazmente, nosotros no deberíamos excluir una acción responsable de esta naturaleza. Rechazarla categóricamente o fijarle limitaciones precisas no sería conveniente por parte del presidente de Estados Unidos”.¹⁶

16. Palabras del presidente Ford ante los miembros del Consejo de Asuntos Mundiales de San Francisco, el 22 de septiembre de 1975 (*Le Monde*, 24 septiembre 1975).

En cualquier guerra limitada, el raciocinio seguido por una potencia militar hegemónica para determinar su nivel de intervención empieza por evaluar el grado de implicación en ese conflicto de cualquier potencia militar rival, y las consecuencias que ello conlleva para su propia seguridad. Prosigue por la estimación de la capacidad material y psicológica de sus aliados en el país en cuestión para sostener los costos de la lucha contra las fuerzas adversarias, y sólo en tercer lugar atiende a la identidad y naturaleza de los directamente enfrentados en el conflicto local.¹⁷

Un proceso revolucionario que se desarrolla en un contorno internacional militarmente dominado por las fuerzas capitalistas debe evitar a cualquier costo derivar hacia una situación de guerra civil. Cuanto más se aproxima hacia ésta, más medios tiene la contrarrevolución para vencer militarmente a la vanguardia revolucionaria. Así, por ejemplo, aun cuando el golpe militar del 25 de abril de 1974 —no una insurrección obrera— derrocó el estado parafascista portugués y permitió la instauración de un gobierno de coalición entre las Fuerzas Armadas y los partidos populares sin disparar un solo tiro, si había una previsión que se podía hacer sobre la evolución del nuevo régimen era que la contrarrevolución no abandonaría el propósito de crear las condiciones susceptibles de permitirle provocar la guerra civil, puesto que anticipaba que el desenlace de esta última no podía ser sino la derrota de las organizaciones obreras. Portugal está dentro del sistema militar de la OTAN, sin que las fuerzas militares del Pacto de Varsovia puedan compensar la capacidad —y voluntad— de intervención del primero en respaldo de cualquier cuerpo armado con designios antirrevolucionarios. Desde este punto de vista, el desafío que tenían planteado los partidos obreros y populares portugueses era el de hacer progresar el proceso revolucionario *evitando* la guerra civil. Lo que implica unas opciones tácticas bien distintas de aquellas que, al aceptar o presuponer la continuidad del proceso a través de la guerra civil, la *facilitan*.

17. En lo que al pensamiento norteamericano posterior a la segunda guerra mundial se refiere, una recopilación representativa es la de E. J. Rosi, ed., *American defense and detente*, Dodd, Mead and Co., Nueva York, 1973, en particular el resumen de R. E. Osgood, "The reappraisal of limited war", pp. 453-471.

En la medida en que haya mediación entre toma del poder por la clase obrera, guerra civil y guerra internacional, la previsión de Marx de 1849 antes mencionada tiene hoy mayor validez que entonces: sólo la revolución socialista en el propio centro neurálgico del mundo capitalista puede permitir la construcción del socialismo en los países sometidos a su sistema de dominación. Algunas "innovaciones" han surgido, sin embargo, en los instrumentos bélicos a lo largo de los siglos XIX y XX. En la época de los misiles balísticos intercontinentales con cabezas múltiples y de los blindados, las barricadas como forma de lucha popular tienen la misma actualidad que los fusiles de aguja. Si el conjunto de las guerras napoleónicas costaron a Europa alrededor de dos millones de vidas humanas,¹⁸ la guerra mundial de 1914-1918 fue cinco veces más mortífera¹⁹ y la de 1939-1945, veinticinco, causando unos cincuenta millones de víctimas. El armamento creado después de 1945 puede hacer desaparecer prácticamente a todo el género humano en caso de una nueva conflagración general.

Por otro lado, si la guerra civil entre 1918 y 1920 costó a la Unión Soviética un millón de muertos en combate,²⁰ es decir, trece personas por cada mil habitantes, la guerra civil española de 1936-1939 elevó aquella cifra a veinte muertos por igual número de habitantes,²¹ y la de Vietnam, entre 1961 y 1973, significó más de un millón de vietnamitas muertos en combate como soldados regulares o irregulares, es decir, treinta muertos por cada mil personas.²² Pero las víctimas entre la

18. Véase S. Dumas y K. O. Vedel-Petersen, *Losses of life caused by war*, Clarendon Press, Oxford, 1923, p. 28.

19. *Ibid.*, pp. 144-145.

20. H. Carrere d'Encausse, *L'Union Soviétique de Lénine à Staline, 1917-1953*, Ed. de Richelieu, París, 1972, p. 108. Al millón de muertos en combate hay que sumar otros siete millones y medio de víctimas civiles, fallecidas a causa del hambre y la miseria provocados por la guerra interior. En 1921, la población de la URSS era de 132 millones de habitantes.

21. G. Jackson, *The Spanish republic and civil war, 1931-1939*, Princeton University Press, Princeton, 1965, p. 539. Comparando fuentes oficiales y oficiosas, Jackson evalúa en 580.000 el número de muertos, aunque casi la mitad de ellos no murieron en combate sino ejecutados por las fuerzas franquistas después del término de la guerra.

22. Véase G. Le Quang, *La guerre américaine d'Indochine, 1961-1973*, Ed. Université, París, 1973, p. 197. A las cifras anteriores hay que agregar más de un millón de heridos sólo en Vietnam del Sur. La población total de ambos Vietnam, en 1972, era de poco más de 39 millones.

población civil han aumentado en una proporción aún mayor. Mientras la guerra civil soviética significó la muerte de unos 60 civiles por cada mil, en Vietnam se calculan las víctimas civiles en cerca de 150 por mil. A lo que habría que añadir las vastas destrucciones de la ecología del país producidas por los sofisticados medios de aniquilamiento biológico ensayados por Estados Unidos en Vietnam, sin precedente en la historia.

El costo de las crisis internas e internacionales del sistema capitalista y de su superación por la vía de la guerra civil o mundial ha cambiado muchas veces de valor cualitativo desde 1844. En gran parte debido al desarrollo científico-técnico de los medios de represión y destrucción. Pero tras el estallido de la primera bomba atómica en Hiroshima en 1945, las guerras totales anteriores pueden ser respecto de la futura lo que las de arcos y flechas a la de 1939-1945. Y si el costo de la próxima conflagración internacional es la destrucción de la humanidad, o algo equivalente, ¿cabe atribuir a la invocación de la guerra como vehículo de solución de los conflictos presentes y futuros otro valor que el negativo absoluto?

LA INSURRECCIÓN COMO TÁCTICA REVOLUCIONARIA

La guerra civil favorece a aquel contendiente que cuenta con mayores recursos económico-militares. Y tras la batalla, *vae victis*... los sistemas políticos cimentados con la argamasa regada en la sangre de las guerras revolucionarias tienen una dureza y firmeza especiales, tanto en el caso del triunfo de la revolución —URSS— como de la contrarrevolución —por ejemplo, el régimen franquista en España—.

Como camino hacia el socialismo, la insurrección obrera y la guerra civil sin la presencia de una guerra internacional demostraron estar cerrados en los países industriales durante el siglo XIX, y lo continúan hoy. Por otro lado, sin la unidad política de la clase obrera y demás sectores discriminados o explotados, el sufragio universal tampoco puede permitir a los trabajadores el reemplazo del modo de producción capitalista en los países donde éste ha entrado en crisis. En virtud de ambos supuestos, ¿cuánto no ha pesado la división del movimiento obrero europeo entre la II y la III Internacional en facilitar,

durante los años veinte y siguientes, una solución fascista a los países europeos que atravesaban una crisis más aguda en su sistema sociopolítico, permitiendo el acceso al poder de las fuerzas que precipitaron al mundo en la guerra de 1939-1945? Y ¿cuánto no ha influido el antagonismo entre los partidos socialdemócratas y comunistas en prolongar la hegemonía del bloque social burgués en los países de régimen democrático liberal, al impedir que el sufragio universal permitiera a las organizaciones obreras llegar al poder en los países cuyo modo de producción capitalista había entrado en crisis y transformarlo según criterios socialistas?

Los fundamentos sociopolíticos y los medios que hacen posible la táctica insurreccional de conquista del poder son distintos de los de la guerra popular, como lo muestran las diferencias entre la experiencia bolchevique de 1917 y la china entre 1934 y 1949. Pero las diferencias son todavía más grandes entre las dos anteriores y la táctica político-institucional. Esta última es viable sólo en un sistema político representativo, fundamentado en la voluntad popular expresada a través del ejercicio de las libertades políticas por el conjunto de la comunidad.

Diferencias importantes tanto antes como después de la toma del poder por los trabajadores, pues la etapa de transición al socialismo se halla directamente condicionada por la vía táctica seguida para el acceso al poder. Vía insurreccional y pluralismo político tienden a excluirse, mientras que este último es consubstancial a la vía político-institucional.

La estructura organizativa y operativa concebida por Babeuf para promover una insurrección en París en 1795,²³ reaparece en algunos de sus elementos fundamentales en las experiencias insurreccionales obreras posteriores, hasta nuestros días, sin que las diferencias y variantes particulares de cada caso histórico afecten a su esencia:

- a) la dirección del movimiento debe dotarse de una dirección centralizada, netamente jerarquizada, susceptible de adaptarse a circunstancias de clandestinidad;
- b) las acciones de encuadramiento, propaganda y movili-

23. Ph. Buonarroti, *Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf*, Lib. Romantique, Bruselas, 1828.

zación popular deben ser llevadas a cabo por equipos especialmente preparados para esta tarea, profesionalizados;

c) el movimiento así organizado debe desarrollar una política tendente a generar un poder alternativo al que se trata de derrocar, en particular un ejército popular capaz de derrotar al del gobierno en funciones.

En la conspiración de los Iguales estaba previsto que la acción insurreccional propiamente dicha se daría como primera tarea ocupar los centros militares y los edificios gubernamentales, seguiría por la distribución de los bienes de producción y de consumo más necesitados por las capas populares (tierras, viviendas, alimentos, etc.), así como por la organización de un gobierno provisional.

La insurrección de Babeuf fue abortada, pero sus dirigentes alcanzaron a formular las directrices según las cuales debía proceder el gobierno provisional revolucionario que querían instaurar:

a) el gobierno provisional debía proceder en nombre y al servicio de la mayoría de la nación, pero sin estar sometido al control directo de aquélla;

b) el gobierno provisional asumiría la tarea de elaborar y promulgar una constitución democrática, pero antes de proceder a ello el gobierno asumiría una forma autoritaria no subordinada a normas jurídicas pre-existentes;

c) la organización centralizada y jerarquizada que preparó y dirigió la insurrección debía vigilar y controlar la actuación del gobierno provisional hasta que los objetivos de la revolución hubieren sido alcanzados.

Semejante estructura de la preparación, génesis y desarrollo de un poder revolucionario, fue acompañada en el caso de la conspiración de los Iguales y en la praxis del movimiento obrero durante los dos primeros tercios del siglo XIX, por dos factores de una importancia singular. Primero, el carácter social y políticamente minoritario, la *élite du Quart-Etat*, de que hablaba Guesde todavía en 1892, en que se apoya la toma del poder. Después, como consecuencia de lo anterior, la incompatibilidad congénita entre un régimen revolucionario así gestado y la vigencia de la democracia representativa fundada en la práctica de las libertades políticas y cívicas por todos los ciudadanos. Una insurrección triunfante que es socialmente mino-

ritaria no puede organizarse políticamente y fundar la legitimidad del poder en la voluntad popular manifestada a través del sufragio. Sólo la revolución socialmente mayoritaria puede hacerlo.

De ahí el balance crítico que hacía Blanqui, en 1870, de sus experiencias anteriores:

La invocación precipitada del sufragio universal en 1848 fue una traición premeditada [...] las provincias se habían convertido en el objetivo del clero, de los funcionarios y de los aristócratas. Pedir el voto a semejante población esclavizada, equivalía a pedirselo a sus dueños [...]. Un año de dictadura parisina en cuarenta y ocho años hubiera ahorrado a Francia y a la historia el cuarto de siglo que llega a su término. Si hacen falta diez años esta vez, no vacilemos [...].²⁴

No hay movimiento revolucionario inspirado en la toma del poder por la vía insurreccional que, en la práctica, antes y después de Blanqui, no haya contemplado en términos análogos el papel del sufragio universal:

El pueblo no sabe: es preciso que sepa. Esto no se puede lograr en un día, ni en un mes. Siendo así que la contrarrevolución ha monopolizado la palabra desde hace cincuenta años, ¿es excesivo concederle como un año a la libertad? [...]. Las elecciones, si se llevan a cabo, serán reaccionarias [...]. Si el aplazamiento de las elecciones no permite al partido popular destruir los prejuicios y las calumnias difundidas en contra suya por las facciones retrógradas que se han arrogado violentamente, desde hace cincuenta años, el monopolio de la enseñanza política de las masas, el voto de mañana no podrá ser libre. Estará dictado por preponderancias hostiles, cuyo maquinismo ha adaptado la mayor parte de la población al yugo. La presencia de una Asamblea reaccionaria, lejos de restablecer la seguridad y la confianza, precipitaría la ruina del crédito y de las transacciones, desencadenando la guerra civil.²⁵

24. "Le communisme, avenir de la société", en A. Blanqui, *Textes choisis*, Ed. Sociales, París, 1955, p. 166.

25. A. Blanqui, "Deuxième pétition pour l'ajournement des élections" (14 marzo 1848) y "Adresse au gouvernement provisoire" (17 marzo 1848), en *Textes choisis*, pp. 113-116.

El eco de estos planteamientos se ha escuchado en Portugal tras la insurrección militar de 25 de abril de 1974 que terminó con cinco décadas de dictadura fascista. De ahí que el Movimiento de las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista hayan retrasado un año la elección de una Asamblea Constituyente, contrariando los anhelos de la derecha, y que antes de dar la palabra al sufragio universal el MFA y los partidos obreros hayan querido tomar la precaución de instaurar las instituciones básicas del nuevo poder revolucionario, sustrayendo a la futura Asamblea Constituyente la competencia de cuestionarlas.

Hace un siglo y medio, en marzo-abril de 1850, Marx y Engels recibieron en Londres la visita de dos emisarios de Blanqui,²⁶ llegando en aquella oportunidad a ponerse de acuerdo en reconocer como objetivo común dos de los supuestos fundamentales de la vía insurreccional: instauración de la dictadura del proletariado y exclusión del poder político de las clases privilegiadas, hasta la realización del comunismo.

De semejante coincidencia entre blanquismo y marxismo conviene retener aquí su dimensión realmente sustantiva, la exigencia táctica de que la insurrección revolucionaria victoriosa requiere organizarse en dictadura para consolidarse, pues las diferencias entre Blanqui y las concepciones marxistas sobre el socialismo son por lo demás profundas. Frente a la posición del revolucionario francés de considerar que una minoría de dirigentes podía sustituir a toda una clase en la dirección de la sociedad, asumiendo la representación del proletariado, Engels sostenía que:

El supuesto de Blanqui de que una revolución puede ser llevada a cabo a través de la insurrección de una pequeña minoría conlleva la necesidad de una dictadura tras el éxito del levantamiento. Por supuesto que esto último no es una dictadura del proletariado, de la totalidad de la clase revolucionaria. Se trata más bien de la dictadura de la pequeña minoría que ha hecho la revolución, y que a su vez se ha organizado bajo la dictadura de uno o varios individuos.²⁷

26. Según V. P. Volguine, de la Academia de Ciencias de las URSS, "Les idées politiques et sociales de Blanqui", introducción a los *Textes choisis*, p. 25.

27. F. Engels, *The programme of the Blanquist communards in exile*, 1874.

Con todo, con ser claro el rechazo de la dictadura de una organización sobre el conjunto de una clase, hay un problema de fondo que los teóricos marxistas del siglo XIX no podían resolver, faltos como estaban de experiencias de insurrecciones triunfantes: ¿cómo estructurar el poder, su generación, ejercicio y control, en una sociedad en transición hacia el socialismo?

Las indicaciones son necesariamente someras:

necesidad de modificar la sociedad, mantenimiento de las instituciones democrático-republicanas como sus órganos motores, agrupación en torno del proletariado en tanto que fuerza revolucionaria [...].

Así ve Marx el sentido de las luchas obreras en Francia entre 1848 y 1850.²⁸ Elección popular y revocabilidad de los funcionarios públicos, salarios para éstos idénticos a los de los obreros, supresión del ejército profesional en favor de un ejército popular, son las prefiguraciones del futuro régimen de transición al socialismo que Marx entrevió en la Comuna de París de 1871. La última, la existencia de un ejército del pueblo, más que una consecuencia es una condición previa para el éxito de una insurrección obrera; las dos restantes son apreciaciones parciales que, por lo demás, el fracaso de las insurrecciones del siglo XIX no dio ocasión de demostrar que era imposible llevarlas a la práctica, como las experiencias socialistas del siglo XX lo probarían fehacientemente.

La presencia de mecanismos democráticos de elección de las autoridades, en el sentido que lo entendían los marxistas del siglo XIX, resultó inviable en las experiencias de transición al socialismo del siglo actual. Entre otras razones, por el hecho de que cada modo de generación de un nuevo régimen político-social engendra sus propias formas de gobierno, sus relaciones jurídicas particulares, que dependen de la relación entre las determinaciones generales de la toma del poder en un estadio social dado, por una parte, y las formas particulares que adopte la génesis del nuevo régimen político-social, por otra parte. Y un régimen de dictadura del proletariado nacido de una insurrección socialmente minoritaria —como era lo propio del

28. K. Marx, "Du 13 juin 1849 au 10 mars 1850", en *Les luttes de classe en France*, Ed. Sociales, Paris, 1967, p. 145.

nivel de desarrollo del capitalismo europeo en los dos primeros tercios del siglo XIX—, es incompatible con un nivel de democratización interna como el que implican las anticipaciones tentativas de Marx sobre el período de transición.

Los orígenes de la teoría política marxista están enraizados en el período histórico en que el nivel de desarrollo económico de las sociedades más industrializadas no ofrecía al proletariado mejor camino de acceso al poder que el insurreccional, puesto a prueba repetidas veces a lo largo del siglo XIX, en particular en Francia. Ello ha marcado toda la problemática marxista sobre la cuestión del poder, en la medida que se parte de la premisa de que el grado de desarrollo del modo de producción capitalista es tan bajo que la revolución socialista basada en el proletariado no puede ganarse a la mayoría del cuerpo social sino *después* de la toma del poder. De aquí se desprende de modo natural que mientras el régimen socioeconómico en construcción a partir de la insurrección triunfante cuenta con una base social minoritaria, las formas de organización política tienen que ser necesariamente las de una dictadura. Cuanto más reducida es la base social de apoyo de un régimen político, tanto más rígido y monolítico necesita ser éste para imponer su autoridad, en especial si está procediendo a una transformación de las estructuras básicas de la sociedad. En semejante nivel de subdesarrollo del modo capitalista de producción, la insurrección aparece como la única vía de acceso del proletariado al poder, y la dictadura la única forma de mantenerlo.

En este sentido, la insurrección obrera como camino hacia el poder se corresponde con un nivel de desarrollo de las estructuras económicas capitalistas suficientemente reducido como para que la supresión del modo de producción *no pueda* ser obra de la acción consciente y organizada de la *mayoría* social de un país. Transformar la revolución de la minoría en revolución de la mayoría exige un nivel de desarrollo económico suficientemente alto para que la mayor parte de la sociedad sienta necesidad de suprimir el modo de producción capitalista. Lo que no puede darse en los países cuyas formas de producción capitalista se encuentran en sus inicios o en los niveles intermedios que eran, *mutatis mutandis*, los de Europa occidental en

el siglo XIX. De ahí que la revolución socialista en los países donde se ha iniciado en el siglo XX, desde Rusia hasta Yugoslavia, desde Vietnam a Cuba, no pudiera adoptar en el camino hacia el poder otra modalidad táctica que la *insurreccional*, y la de la *dictadura* del proletariado para su desempeño y organización.

DEMOCRACIA POLÍTICA Y SOCIALISMO MAYORITARIO

La insurrección obrera como vía de conquista del poder y comienzo del período de transición al socialismo, presupone de modo complementario la ausencia de prácticas democráticas generalizadas entre las grandes masas, escasa participación en la vida pública e instituciones políticas no afirmadas en la voluntad consciente y organizada de la mayoría de los ciudadanos. En semejantes circunstancias podía concebirse que una minoría resuelta arrebatara el poder a otra minoría, en medio de la pasividad del resto. El propio Engels reconocía en 1895 que ésta era la concepción teórica que fundamentaba las elaboraciones tácticas suyas y de Marx a mediados de siglo,²⁹ en medio de un movimiento obrero débilmente organizado, sin formación ni experiencia políticas:

En 1848, se podía contar el número de gente capaz de entender, aunque sólo fuera pasablemente, en qué dirección se debía buscar esta emancipación. En París mismo, las propias masas proletarias no tenían aún, después de la victoria, absolutamente ninguna idea clara sobre el camino a seguir. Y, sin embargo, el movimiento estaba ahí, instintivo, espontáneo, imposible de ahogar.³⁰

Si el *Manifiesto del Partido Comunista* fue escrito en 1848 en semejante contexto, no puede sorprender que ni una sola

29. "Todas las revoluciones han llevado, hasta el presente, al desplazamiento de la dominación de una clase determinada por la de otra [...] Incluso cuando la mayoría colaboraba a ello, lo hacía —consciente o no— al servicio de una minoría; pero precisamente por eso, y también a causa de la actitud pasiva y sin resistencia de la mayoría, la minoría tenía el aire de ser la representante del pueblo entero" (Engels, Introducción a la obra de Marx, *Les luttes de classe en France, 1848-1850*, Ed. Sociales, París, 1967, p. 17).

30. *Ibid.*, p. 18.

vez se mencione en él al sufragio universal como vía de acceso al gobierno. Sólo tras conocer y estudiar la realidad socioeconómica inglesa, su vida política, la experiencia y fortaleza de su movimiento obrero —el más poderoso de Europa en esa época—, Marx llegó a contemplar alrededor de 1878 que en Inglaterra y Estados Unidos la insurrección no era el mejor camino hacia el poder para los obreros, sino más bien la lucha por la ampliación de la democracia y la conquista de una mayoría sociopolítica capaz de hacerles ganar el Parlamento. Vía político-electoral que, a diferencia de la insurreccional, no implicaba para el movimiento obrero la necesidad de negar y destruir totalmente el aparato del estado (“la máquina burocrático-militar”) como condición previa de la revolución socialista. A diferencia de lo que ocurría en los aparatos estatales cerrados y refractarios a los intereses de los trabajadores, las conquistas democráticas de estos últimos en los países industrializados abrieron una perspectiva desconocida por el marxismo de mediados del siglo XIX. En 1895 era Engels quien constataba las razones de la diferencia:

Al utilizar así eficazmente el sufragio universal, el proletariado había puesto en práctica un método de lucha totalmente nuevo, que se desarrolló rápidamente. Se vio que las instituciones estatales donde se organiza la dominación de la burguesía ofrecen todavía posibilidades de utilización nuevas, que permiten a la clase obrera combatir esas mismas instituciones del estado [...] Y es de esta manera como la burguesía y el gobierno llegaron a sentir más miedo de la acción legal que de la ilegal del Partido obrero, de los éxitos electorales que de los de la rebelión. Pues en esta última, a su vez, las condiciones de lucha se habían transformado también seriamente [...] No nos hagamos ilusiones al respecto: una auténtica victoria de la insurrección contra las tropas en el combate de calles, una victoria como en la batalla entre dos ejércitos, es muy excepcional [...] ³¹

Sin embargo, en 1917 Lenin entendía que habían dejado de tener vigencia las observaciones de Marx sobre el camino parlamentario y legal de la clase obrera hacia el poder que *no* pre-

31. Engels, *ibid.*, pp. 26-27.

suponían una destrucción del estado semejante a la del camino insurreccional y la guerra civil:

ello era concebido en 1871, cuando Inglaterra era todavía un modelo de país puramente capitalista, pero sin militarismo y, en gran medida, sin burocracia. Marx hacía también una excepción con Inglaterra, donde la revolución e incluso la revolución popular parecía posible —y lo era, en efecto—, sin destrucción previa de la “máquina del Estado perfectamente lista”. Hoy, en 1917, [...] esta restricción de Marx no tiene ya vigencia [...]. Actualmente, en Inglaterra como en América, “la condición primera de toda revolución popular real” es la demolición, la destrucción de la “máquina del Estado perfectamente lista” ³²

Semejante revisión por Lenin del análisis de Marx sobre el camino del poder en los regímenes de democracia parlamentaria con vasta participación popular, hecha en vísperas de la insurrección bolchevique y refrendada por el éxito de ésta, iba a tener decisivas consecuencias. La diferencia de condiciones e implicaciones de todo orden entre la táctica insurreccional y la político-institucional, es una perspectiva aún hoy por desarrollar para la teoría política marxista. Muy al contrario, es una de las más confusas, oscurecida por apasionadas polémicas entre los marxistas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que se encuentra en el corazón mismo de la confrontación teórico-práctica que conduciría, después de 1918, a la división de los partidos de la clase obrera en Europa y al enfrentamiento entre los partidos comunistas y socialdemócratas.

Una corriente del movimiento obrero, en especial en los países más industrializados, a partir de la última década del siglo XIX piensa que:

el equipamiento de los ejércitos modernos es infinitamente superior a las armas de que dispone la población civil, cualquier resistencia de esta última se encuentra, por lo general, reducida de inmediato a la impotencia. Por el contrario, las clases revolucionarias disponen hoy en día de armas mejores que las del siglo XVIII para organizar la resistencia desde el punto de vista

32. Lenin, *L'Etat et la révolution* (agosto-septiembre 1917), Denoël, Paris, 1971, pp. 44-45.

económico, político y moral (libertades de asociación, de expresión y sufragio universal). Sólo Rusia es una excepción a este respecto [...] ³³

y que, por consiguiente,

hay que ser un político ciego para sostener todavía hoy que el sistema representativo asegura, incluso bajo el reino del sufragio universal, el dominio de la burguesía, y que para derrocarlo haya que empezar por suprimir este sistema. A estas alturas se ve manifiestamente que un régimen verdaderamente parlamentario puede ser el instrumento de la dictadura del proletariado tanto como lo ha sido de la de la burguesía.³⁴

Otra corriente del movimiento obrero, mayoritaria en la subdesarrollada y autocrática Rusia de los zares, entiende que ha perdido toda validez la distinción que Marx y Engels hacían entre el camino parlamentario hacia la conquista del estado (realidad inglesa) y la destrucción de este último mediante la insurrección del proletariado.

El debate en torno de estas dos líneas prosigue aún hoy día. La teoría política revolucionaria tiene en su pasivo el inconmensurable costo social que, para el movimiento obrero de los países industrializados y de democracia avanzada, ha supuesto la confusión en que se han mantenido ambas tácticas. Durante tres generaciones, una parte considerable de militantes y dirigentes revolucionarios de los países industrializados han heredado, y reproducido, una praxis que prácticamente ignora las especificidades del camino hacia el poder en sistemas con un movimiento obrero de masas organizado legalmente dentro de estados democráticos. Chile es el más reciente de una larga cadena de episodios trágicos que, de una u otra manera, se han visto favorecidos por semejante confusión de tácticas. Tendremos ocasión de ver más adelante el peso decisivo de esta última en los errores de la dirección del movimiento popular chileno entre 1970 y 1973, cuya acumulación terminó por franquear el paso a una sangrienta contrarrevolución, deri-

33. K. Kautsky, *Neue Zeit* (diciembre 1893).

34. K. Kautsky, *Parlamentarisme et socialisme*, prefacio de Jean Jaurès, Parti Socialiste (SFIO), Lib. du Parti Socialiste, 1900, p. 165.

vando en masacre obrera la evolución histórica que había permitido la instalación del gobierno de Allende en 1970.

La táctica insurreccional presupone la inevitabilidad de la guerra civil en el camino hacia el poder, está vinculada a una concepción particular de las relaciones entre clases y sectores sociales e implica una organización política subordinada a las dos condiciones anteriores.

La división de los partidos socialistas europeos después de 1918 obedece a causas múltiples, en especial a la guerra mundial de 1914-1918 y al apoyo que a ella brindó un sector de los principales partidos obreros al hacer causa común con los intereses imperialistas de sus respectivas burguesías nacionales. Pero la opción táctica que desde años antes venía debatiéndose en el seno de los partidos socialistas, acabó por convertirse en esa coyuntura en factor de división y enfrentamiento duradero entre socialistas y comunistas. La Internacional comunista encuentra su razón de ser en la convicción de que "en casi todos los países de Europa y América la lucha de clases está entrando en la fase de la guerra civil". En consecuencia, "bajo estas condiciones los comunistas no pueden tener confianza en la ley burguesa. *En todas partes* deben crear un aparato paralelo ilegal, que en el momento decisivo debe ayudar al partido a cumplir su deber para con la revolución".³⁵

Sin embargo, no es tanto esta preparación teórica y práctica hacia la guerra civil como vía hacia el poder lo que aquí nos importa subrayar, sino la política de relaciones entre clases y capas sociales que la informa: considerar que el destino del socialismo está en las manos de una vanguardia proletarizada diferenciada que, más pronto o más tarde, deberá imponer su hegemonía sobre los otros sectores sociales, incluidos los no propiamente burgueses. Es decir, sobre la pequeña burguesía y también sobre aquellos sectores de obreros y trabajadores que no hagan suyo el programa y la táctica de la vanguardia. El partido de la revolución continúa, así, emplazándose objetivamente en la posición minoritaria que es consubstancial a la

35. "Condiciones para el ingreso en la Internacional comunista", n.º 3 publicadas por primera vez en *Der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale: Protokoll der Verhandlungen vom 19 Juli in Petrograd und vom 23 Juli bis August 1920 in Moska*, Hamburgo, 1921).

táctica insurreccional. Si semejante ruptura y diferenciación se instrumenta a lo largo de las etapas de la lucha por el poder, sólo una insurrección victoriosa puede llevar al partido de la revolución a conquistarlo y, dada su condición minoritaria, para retenerlo necesitará negar las libertades políticas tanto a la clase antagónica burguesa como a los trabajadores que no acepten la política de la vanguardia. La hegemonía del proletariado así concebida sólo puede imponerse en un enfrentamiento armado, por poco que el amplio frente de oposición cuente con los medios para sostenerlo. Frente de oposición mayoritario y eventualmente guerra civil, que sólo es posible en la medida que una parte considerable de los propios sectores populares —obreros, campesinos, sectores medios— haga causa común contra la socialmente minoritaria vanguardia revolucionaria.³⁶

Un movimiento obrero que llega al poder por esta vía es obvio que necesita destruir previamente las instituciones políticas, jurídicas y militares del estado preexistente. Tanto las de un régimen dictatorial como las de uno democrático-burgués.

La táctica político-institucional reposa sobre fundamentos muy distintos, tiene una lógica de desarrollo diferente y la toma del poder por los trabajadores tiene unas consecuencias políticas igualmente contrapuestas a las de la vía insurreccional. Detengámonos un momento en este punto.

El acceso al poder por los trabajadores por la vía político-institucional requiere la presencia acumulativa de factores como los siguientes:

a) Una clase obrera poderosa desde un punto de vista numérico y de sus posiciones en la estructura productiva de la

36. La imposibilidad de unir al conjunto de los sectores populares en torno de una insurrección en nombre del socialismo, y el aislamiento de la clase obrera en este caso, era reconocida por Engels en 1895: "Una insurrección que cuente con la simpatía de todas las capas del pueblo difícilmente volverá a darse; en la lucha de clases las capas medias no cabe duda que no se agruparán jamás todas ellas en torno del proletariado de manera tan completa que, en contrapartida, el partido revolucionario reunido en torno de la burguesía desaparezca casi totalmente. El 'pueblo' aparecerá, por consiguiente, siempre dividido y, en todas partes, es ésta una poderosa palanca [...] que faltará [...]. De ahí que los poderes dirigentes quieran a toda costa arrastrarnos allí donde hablan los fusiles y golpean los sables [...] si las condiciones han cambiado para la guerra entre los pueblos, no han cambiado menos para la lucha de clases" (Engels, Introducción... cit., pp. 29-31).

sociedad, lo que implica un nivel relativamente alto de industrialización y desarrollo del modo capitalista de producción;

b) un movimiento obrero con alto nivel de unidad y cohesión interna, lo que es imposible si sus organizaciones representativas están divididas y enfrentadas a nivel nacional y/o internacional;

c) la coalición en torno de la clase obrera de vastos sectores sociales populares —desde los campesinos a los pequeños propietarios y trabajadores asalariados del terciario— unidos en el rechazo, primero, de las consecuencias negativas que sobre ellos tiene el capitalismo y, también, en el interés común de construir un régimen socioeconómico socialista;

d) como consecuencia de los factores anteriores, existencia de un sistema sociopolítico de elevada democratización interna, fundado en la participación consciente y organizada de los ciudadanos en la vida pública, ejercida en un régimen de amplias libertades pluralistas garantizado por un Estado de derecho con instituciones sólidas.

Llegar al poder en un contexto semejante requiere, pues, que el movimiento popular sea por sí mismo —o mediante un juego de alianzas— capaz de reducir a las fuerzas conservadoras a una situación de aislamiento sociopolítico y militar que les impida recurrir a la guerra. Ello sólo es posible si la lucha en torno al poder diferencia en los hechos la *coexistencia* con los sectores sociales que sin ser inicialmente partidarios del socialismo no pueden ser por sí mismos centro de oposición a la revolución —asalariados, trabajadores independientes, pequeños propietarios— y la *negación* sociopolítica y económica de la clase antagónica —la burguesía ligada al capital internacional—. Tal diferenciación entre *coexistencia* y *negación* es válida, también, en el período inicial de transición al socialismo. Que el movimiento socialista, aun siendo mayoritario antes y después de la toma del poder, acepte coexistir con los sectores no socialistas pero tampoco objetivamente antagónicos, requiere que les reconozca, sin prejuicios ni cálculos equívocos, derechos políticos y económicos que los integren voluntariamente a un proyecto de futuro en que sus intereses específicos sean compatibles con la transición hacia una sociedad socialista —la naturaleza y modalidad de esta etapa de transición es necesariamente distinta de la iniciada por la vía insurreccional—

Si aquella relación de coexistencia y complementariedad no se establece, esos sectores no pueden aceptar un gobierno de los trabajadores sino sometidos por la fuerza, lo que puede llevar a la clase obrera al aislamiento y a enfrentarse con la mayoría del resto del cuerpo social. Los sectores intermedios, en este supuesto, tienden a agruparse en torno del polo antagónico, reduciendo a la clase obrera a la “disyuntiva de ser martillo o yunque”: revolución socialista impuesta por la violencia (situación de guerra civil, estalle o no, y dictadura del proletariado) o contrarrevolución (masacre obrera e imposición de un régimen de dictadura burguesa). Esta disyuntiva sólo se puede resolver por una modalidad u otra de enfrentamiento armado, cuya suerte depende muy especialmente del carácter específico de las fuerzas armadas del estado. Si éstas se identifican mayoritariamente con sectores distintos de los propiamente obreros, el enfrentamiento militar será desfavorable para las organizaciones obreras, de no intervenir una fuerza militar extranjera más poderosa en su apoyo, y viceversa. Lo que internacionaliza el conflicto social interno, dejándolo sometido a determinaciones externas al país. En cualquier caso, el sistema sociopolítico anterior al período del enfrentamiento armado queda destruido en sus estructuras e instituciones básicas. El país se instala en la guerra civil y en la dictadura.

La instauración de un gobierno de orientación socialista por vía distinta de la insurreccional, requiere no sólo la unidad de las organizaciones obreras sino, además, la alianza y/o coexistencia político-social de éstas con las organizaciones representativas de los trabajadores de los sectores medios, tanto si comparten el gobierno como si se encuentran en la oposición. El respeto de los derechos políticos a los sectores sociales que no son propiamente la “vanguardia” revolucionaria, o que están en contradicción con ella, es indispensable para mantener a través de la expresión de las aspiraciones colectivas la identidad del cuerpo social.

En la vía político-institucional, las relaciones sociales se canalizan a través de una dinámica de incitación-estímulo entre los sectores contradictoriamente diferenciados, que persigue la reestructuración socioeconómica y política de la sociedad a través de una estrategia indirecta que evite el conflicto violento y la ruptura de los mecanismos sociales de coexistencia e identifi-

cación colectiva. Para hacer posible que las armas de fuego —guerra civil en cualquiera de sus modalidades— resuelvan los antagonismos sociales, es precisa la subversión de estos mecanismos de ordenación y regulación social, abriendo el paso al enfrentamiento directo. Situación esta última en la que puede desembocar la vía político-institucional en la medida que sean destruidos o desvirtuados los mecanismos con que cuenta la sociedad para evitar su desintegración.

Por su parte, la vía insurreccional contempla la agudización de las tensiones como camino hacia la polarización de las fuerzas sociales y, producido el conflicto, el proceso de relaciones sociales es regulado a través de la dinámica coerción-disuasión, que encuentra su resolución natural en el enfrentamiento violento entre las organizaciones antagónicas —estrategia directa—.

Vías directa e indirecta hacia un nuevo orden sociopolítico en relación con la guerra civil

Táctica indirecta	Táctica directa
incitación a la coexistencia entre grupos sociales no antagónicos	agudización de las tensiones entre grupos sociales no antagónicos
↓	↓
diferenciación a través de la irradiación-estímulo	diferenciación a través de la disuasión-coerción
↓	↓
reestructuración socioeconómica y política	conflicto agudo entre fuerzas organizadas
↓	↓
nuevo orden sociopolítico	guerra o enfrentamiento civil violento
	↓
	nuevo orden sociopolítico

LA EXPERIENCIA DE CHILE

En la realidad práctica, la anterior diferenciación táctica suele presentarse entrelazada, cuando no combinada. En Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, puede decirse que el ingreso en el periodo de transición al socialismo era concebido a través de una vía predominantemente indirecta por el Partido Comunista, el Radical, y una gran parte del Socialista y del MAPU. Otros sectores de estos dos últimos partidos y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) —que no formaba parte del gobierno— entendían, por el contrario, que sólo instrumentando una política según las directrices de la táctica directa el socialismo podría abrirse camino en el país. A su vez, desde el punto de vista de las tácticas contrarrevolucionarias también se daba una contraposición semejante. Mientras el movimiento Patria y Libertad —inspirado en Falange Española—, el Partido Nacional y el sector Frei de la Democracia Cristiana

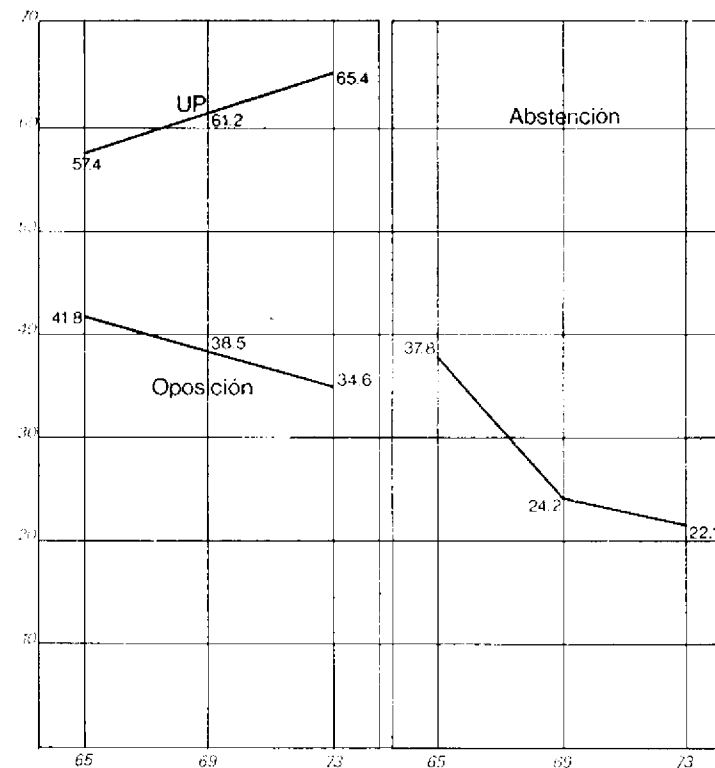
CUADRO 1

Chile 1970-1973. Tácticas revolucionarias y contrarrevolucionarias

	Dominante	Latente
Directa	MIR	Izquierda Cristiana
	Sectores del Partido Socialista	
	Sectores del MAPU	
Indirecta	Patria y Libertad	Sector Frei del PDC
	Partido Nacional	
	Derecha Radical (PDR)	
	Allende	
Indirecta	Partido Radical	Sectores del Partido Socialista
	Partido Comunista	
	Sectores del MAPU	
	Sector Tomic del PDC	

GRÁFICO 1

Comunas mineras. Evolución electoral en las parlamentarias de 1965, 1969 y 1973 *



* Los porcentajes de 1973 corresponden a la votación obtenida por el conjunto de los partidos de la UP, por un lado, y de la oposición (PN, PDC, PDR, PIR, PDN), por otro lado. En las elecciones de 1964 y 1965 se ha procedido, a efectos de precisar mejor la comparación, a una reordenación retrospectiva, comuna por comuna, de las alianzas de 1973. Así, en la UP se contabilizan, para 1964, 1965 y 1969, las votaciones del PC, del PS, de la Unión Socialista Popular, del Partido Social Demócrata y la mitad de la del Partido Radical. En la oposición, para los mismos años, se acumulan los sufragios del PDC, PN, PDN y la mitad de la votación del Partido Radical, ya que éste se escindió en tres corrientes en 1969 y 1972, agrupándose dos de ellas contra la UP en 1973. En los gráficos posteriores se reproduce el mismo cálculo.

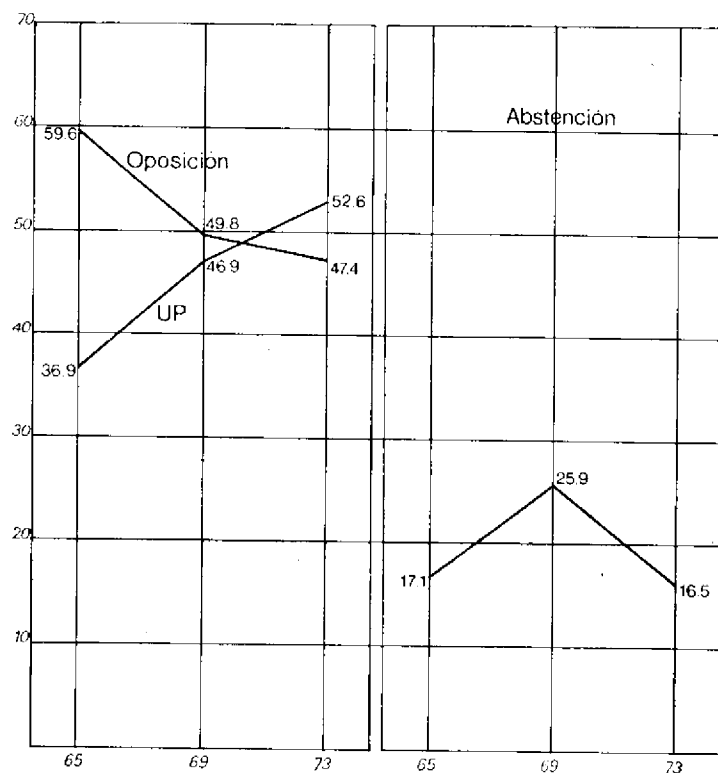
oponían en mayor o menor grado a la acción de la UP una resistencia conforme a la táctica directa, el sector Tomic de la DC siempre lo hizo dentro de una indirecta.

Tendremos ocasión de ver en los capítulos siguientes la influencia que sobre la suerte del gobierno de la UP tuvieron las discrepancias tácticas que coexistían en su seno.

En Chile, la unidad de los partidos obreros —Socialista y Comunista, coaligados en el Frente de Acción Popular— era de por sí suficiente en 1964 para agrupar a la mayoría de los obreros industriales y mineros. Si tomamos las 29 comunas de ma-

GRÁFICO 2

Comunas industriales. Evolución electoral en las parlamentarias de 1965, 1969 y 1973

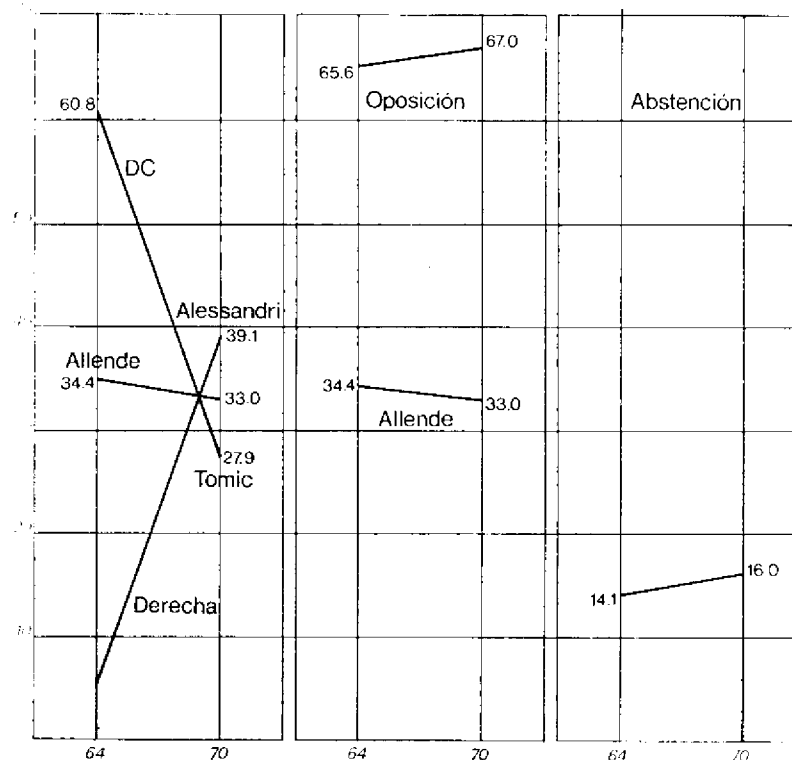


yor densidad de mineros y las 24 comunas con mayor densidad de obreros industriales —con más del 40 por ciento de su población activa en el sector minero o industrial, respectivamente, según el censo de 1960— encontramos que la candidatura de Salvador Allende a la presidencia de la república reunía el 57,4 por ciento de los votos en las comunas mineras y el 44,6 por ciento en las industriales.

En cambio, en las 26 comunas de mayor densidad de sectores medios —con más del 40 por ciento de la población activa ocupada en el sector terciario— la unión socialista-comunista no alcanzaba el 35 por ciento en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970:

GRÁFICO 3

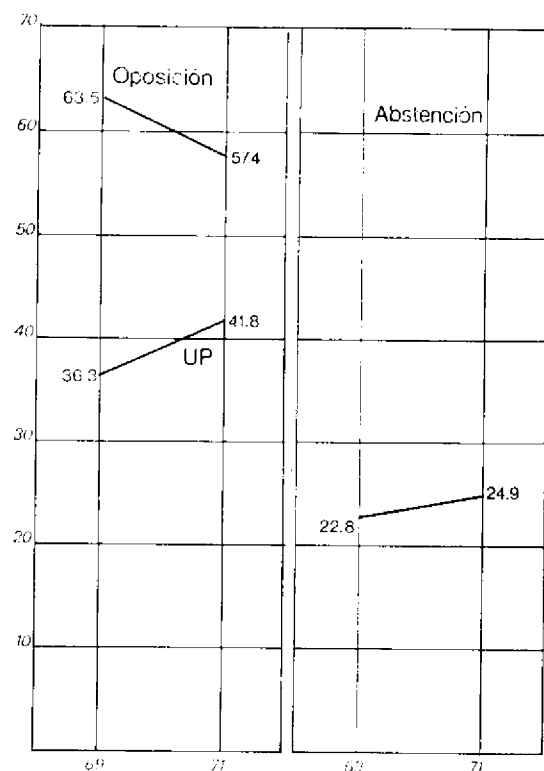
Comunas urbanas. Evolución electoral entre las elecciones presidenciales de 1964 y 1970



En los gráficos puede observarse cómo, en 1970, la incorporación formal a la alianza socialista-comunista del Partido Radical, del MAPU, el PSD y el API, todos originarios de los sectores medios,³⁷ reafirmaron y consolidaron las tendencias observadas seis años antes en cuanto a la capacidad de concentración del electorado en torno de los partidos obreros. Algo semejante puede decirse respecto del comportamiento del electorado cam-

GRÁFICO 4

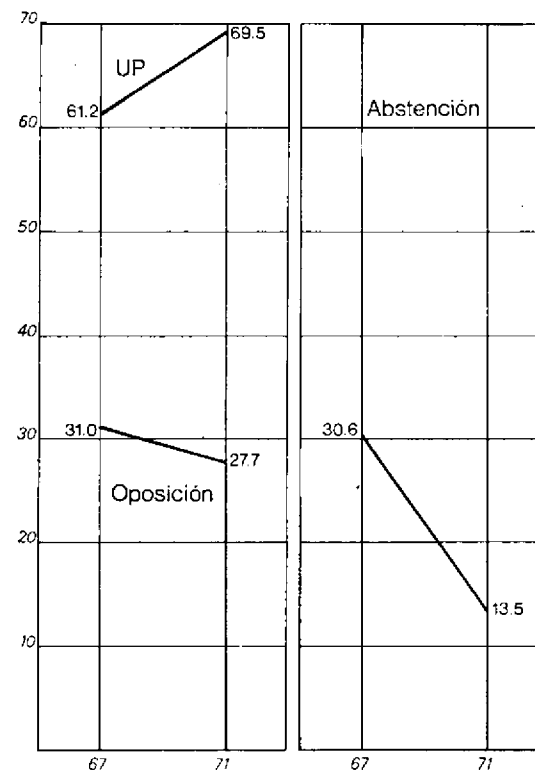
Comunas urbanas. Elecciones municipales de 1967 a 1971



37. En las elecciones municipales de 1971, el Partido Radical obtuvo el 8,16 por ciento de la votación y el PSD el 1,36 por ciento. En las parlamentarias de marzo de 1973, el Partido Radical reunió el 3,72 por ciento y el MAPU el 2,53 por ciento.

GRÁFICO 5

Comunas industriales. Elecciones municipales de 1967 y 1971



pesino,³⁸ aunque entre 1964 y 1970 su apoyo a la candidatura de la izquierda unida se incrementó considerablemente.

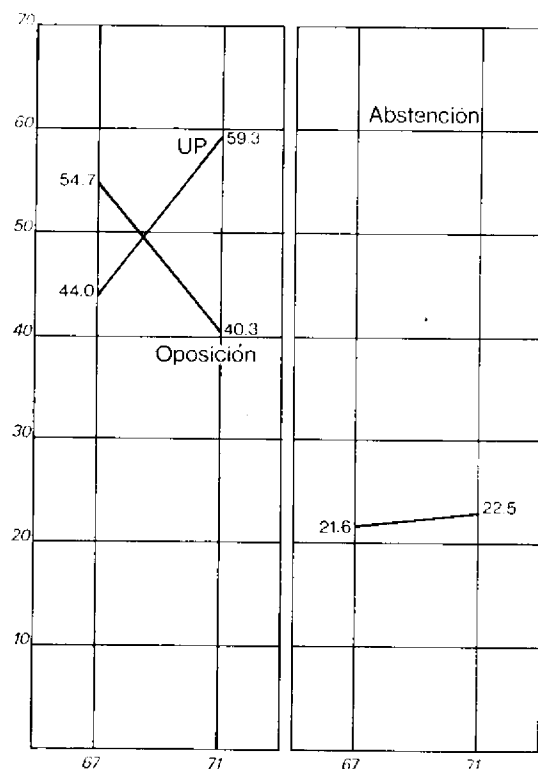
Durante los años inmediatos y posteriores a la instauración del gobierno de la Unidad Popular, la movilización política y la incorporación de nuevos sectores urbanos, campesinos, mineros y de obreros industriales al proceso revolucionario fue en ascenso, aunque a ritmo desigual (véase gráficos 4, 5 y 6).

38. Los datos y gráficos relacionados con la evolución del electorado campesino entre 1964 y 1973 no son reproducidos aquí, por haber sido incautados en el saqueo de mi biblioteca que siguió al golpe militar de septiembre de 1973, y no ser posible reconstruirlos.

La solidez y fortaleza de la Unidad Popular reposaba en la acumulación de fuerzas que implicaba la alianza socialista-comunista desarrollada desde 1956, primero en el terreno sindical y, a partir de 1958, entre los dos partidos políticos. Ello significó no sólo la unidad sindical en una sola central, a pesar

GRÁFICO 6

Comunas mineras. Elecciones municipales de 1967 y 1971



de los esfuerzos de la derecha por quebrarla, sino una neta hegemonía socialista-comunista entre los trabajadores organizados. En mayo de 1972, con motivo de la elección del Consejo Nacional de la Central Única de Trabajadores, por sufragio indi-

vidual directo, secreto y nacional de los afiliados, las listas agrupadas en la UP sumaban el 66,7 por ciento de los sufragios, contra un 26,3 por ciento para la lista única de la oposición conservadora —DC— y un 2,5 por ciento para la extrema izquierda. En esta correlación entre los trabajadores se hallaba la fuerza real del gobierno de Allende.

CUADRO 2

Resultados de la elección del Consejo Directivo Nacional de la CUT (mayo 1972)

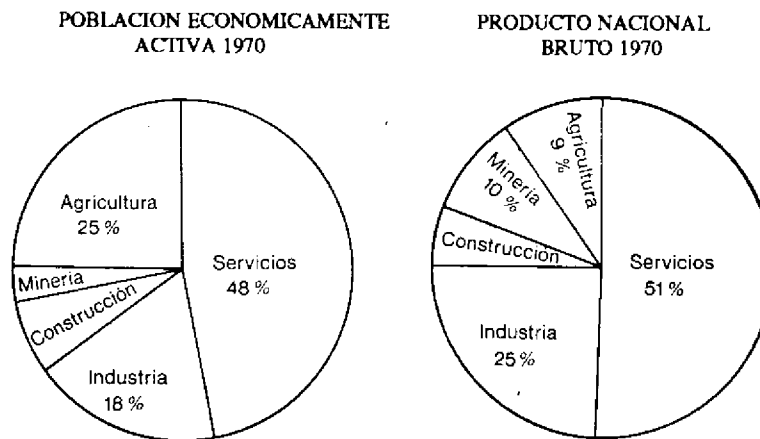
Tendencia política	N.º de votos recibidos	%	N.º de dirigentes elegidos
1. Comunista (UP)	173.068	30,89	18
2. Socialista (UP)	143.140	26,44	16
3. Democracia cristiana	147.531	26,33	16
4. MAPU (disidentes demócrata-cristianos, de la UP)	25.983	4,63	2
5. Radical (UP)	21.910	3,91	2
6. Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR, guevarista)	10.192	1,81	1
7. Unión Socialista Popular (disidentes socialistas, no miembros de la UP)	5.420	0,96	—
8. Izquierda radical	3.572	0,63	—
9. Comunista revolucionario (maoísta)	3.330	0,59	—
10. Izquierda cristiana (disidentes demócrata-cristianos de la UP)	3.216	0,57	—
11. Social-demócratas (UP)	1.616	0,28	—
12. Independientes	1.599	0,28	—
13. Anarquistas	673	0,12	—
14. Blancos y nulos	13.990	2,49	—
TOTAL	560.240	99,93	—

Unidad mayoritaria entre los trabajadores organizados que, no obstante, reflejaba todas las contradicciones de que las distintas listas electorales se hacían portavoces. Y entre los obreros ocurre un fenómeno semejante al que se da en el seno de

los sectores medios: o las contradicciones internas cuentan con cauces e instituciones representativas capaces de expresar y defender sus diferencias —estructura democrática de relaciones—, o solamente una fuerza dictatorial puede negar las contradicciones mediante la represión violenta, lo que no logra sin el previo aplastamiento de la resistencia interpuesta por los afectados. La UP contaba con una estructura interna que permitía la unidad mayoritaria del movimiento obrero detrás del gobierno, asumiendo las contradicciones internas. Y en 1970 y en 1971, el conjunto de la UP mantuvo unas relaciones de *coexistencia* con los sectores medios de oposición que, al aceptar los intereses diferenciados entre ambos conjuntos, hizo posible que estos sectores medios prefirieran aceptar un gobierno de la UP antes que la alternativa que ofrecía la derecha.

GRÁFICO 7

Estructura de la población en Chile



Por ello, con ser condición *sine qua non* el apoyo mayoritario de los trabajadores, éstos no pueden acceder al gobierno en un sistema democrático-representativo y usar del poder del estado en un sentido anticapitalista, si no cuentan con una estructura de relaciones sociopolíticas con los sectores populares y

medios de oposición tal, que les permita absorber las contradicciones sin negar su personalidad diferenciada ni reprimir violentamente sus proyectos de futuro. Ello sólo es posible

a) dentro de un sistema político democrático que repose en su aceptación por las fuerzas sociales mayoritarias del país, estructuradas de manera que puedan evitar una crisis del sistema político sin otra salida que el enfrentamiento violento, y

b) en un sistema económico suficientemente coherente y dinámico para evitar que una crisis de sus mecanismos fundamentales no convierta en antagónicas las contradicciones de intereses entre los distintos sectores y capas sociales en los que se fundamenta el funcionamiento del sistema sociopolítico. En otros términos, evitar que los sectores populares y medios de oposición no se movilicen, bajo la dirección de la gran burguesía, en un frente común contra el bloque social popular.

La transición al socialismo, en estas circunstancias, no puede ser la obra de una minoría, por más que sea mayoritaria en el seno de la clase obrera, sino de la mayoría de la sociedad —por más que existan contradicciones en su seno—.

En Chile se dieron estas circunstancias durante 1970 y 1971, pero la conversión del proceso revolucionario de mayoritario en minoritario tuvo lugar en el transcurso de 1972, bajo el impulso de las manifestaciones de crisis económica explotada políticamente por los partidos capitalistas. Con lo que surgieron los rasgos distintivos comunes a todo proceso revolucionario socialmente minoritario. Un ejemplo significativo es el de la huelga, en mayo-junio de 1973, de una parte considerable de los obreros de la mina de cobre El Teniente. Los partidos de derecha respaldaron y estimularon las reivindicaciones laborales de los mineros, en parte justificadas por un craso error de la burocracia estatal, incitándoles a una marcha de protesta sobre Santiago, lo que aceptaron los huelguistas. Llegados a la capital, el 14 de junio, se produjo una situación altamente reveladora cuando pidieron audiencia al presidente de la república. El clima político en torno del conflicto estaba tan enrarecido por la propaganda de la oposición, que tanto los dirigentes de esta última como los del gobierno daban por descontado que el presidente Allende se negaría a recibir al comité de huelga. Para los mass-media de derechas, se trataba de mostrar como enfrentados a los “trabajadores en huelga” y al “gobierno de

los trabajadores", dimensión importante en el plan de preparación psicológica y legitimación previa del golpe de estado cuya fecha estaba fijada para trece días después (27 de junio).

Ante la sorpresa general, Allende ensaya un acuerdo que resuelva el conflicto minero y recibe oficialmente a una delegación de los huelguistas el mediodía del 15 de junio. Esa misma tarde, sin embargo, los partidos Socialista y Comunista emiten una declaración conjunta condenando la entrevista. Por primera vez, desde 1970, los partidos obreros desautorizaban públicamente al presidente de la república, y precisamente en relación con un conflicto protagonizado por un sector de trabajadores. En una enérgica respuesta al PS y al PC, Allende manifestó con énfasis —también públicamente— su resolución de reconocer la representatividad de todos los sectores obreros, aun de los que estando en contradicción con la UP o el gobierno recurrían a la huelga. Con ello Allende reiteraba su voluntad de mantener el sistema de resolución de las contradicciones sociopolíticas que había permitido a la UP llegar al gobierno en 1970 y dirigir el país durante más de dos años, la única vía existente en Chile para asegurar la continuidad del proceso revolucionario hacia el socialismo. Pero ya la crisis económica estaba resquebrajando la estructura sociopolítica sobre la que había reposado la táctica político-institucional de conquista de poder del estado, y mientras los sectores medios de oposición venían deslizándose —en medio de grandes contradicciones y vacilaciones—, hacia la aceptación de una dictadura armada de la burguesía como alternativa al gobierno de la UP, los partidos obreros se veían arrastrados paulatinamente —aunque con profundas dudas sobre su viabilidad, en especial por parte del PC—, por la dinámica que conduce a la dictadura de la vanguardia del proletariado —sobre el resto del proletariado y la mayoría del cuerpo social— como barrera contra la masacre obrera o la guerra civil.

Conviene tener presente, por otro lado, que la política altamente redistributiva del gobierno de la UP en favor de las masas asalariadas a lo largo de 1971 y 1972, se correspondía con su línea táctica no insurreccional. Existe una relación inversamente proporcional entre la disminución de la pauperización de los trabajadores y el desarrollo de las formas de lucha insurreccional. Por el contrario, en la medida que la evolución de la

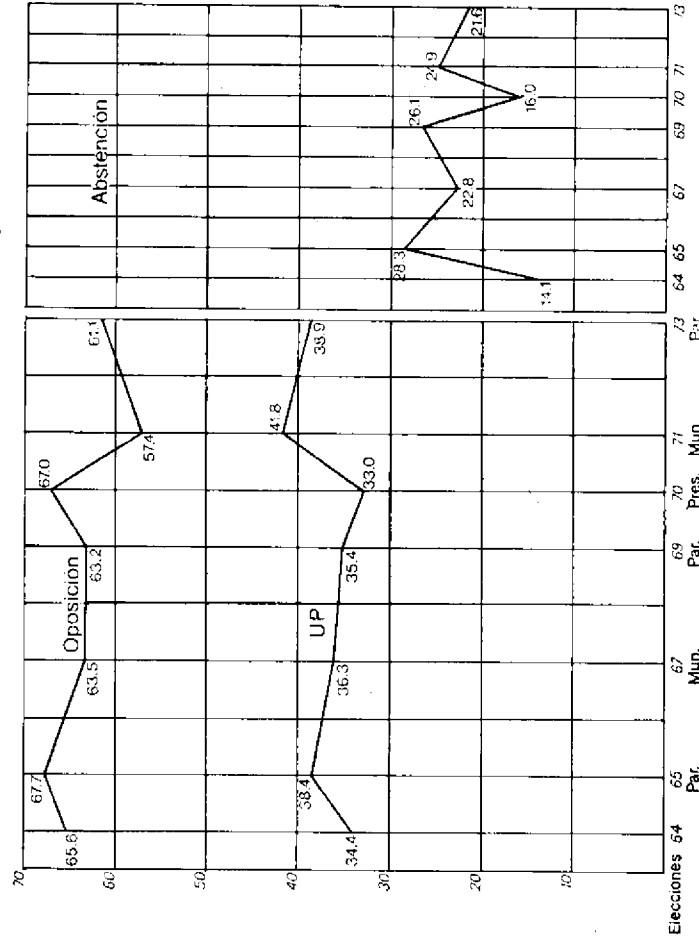
situación económica redujera el nivel de consumo de los sectores medios, éstos iban a ser receptivos a la aceptación de las formas insurreccionales de resistencia que promovía la derecha.

En este sentido, el punto débil de la Unidad Popular eran los sectores medios urbanos. Contrariamente a la mayoría en aumento ininterrumpido con que contaba la UP entre los obreros y los mineros, la base social entre los sectores medios fue prácticamente constante entre 1965 y 1973.

En la medida que el centro de gravedad de los sectores medios estuviera representado políticamente por la DC, la necesidad de que se inclinaran del lado obrero y no hacia el polo burgués hacía que la posibilidad de un acceso de la UP al gobierno por la vía político-institucional dependiera de su entendimiento con la Democracia Cristiana. Y solamente la coexistencia o acuerdo entre las fuerzas sociales de sustentación de ambos conglomerados políticos podía evitar la crisis general del sistema dentro del cual la UP ganó y ejerció la dirección del estado. Siempre y cuando la propia UP no se hubiera convertido por sí misma en el centro de gravedad del bloque social dominante en el país, tanto social como política y militarmente, en cuyo caso su situación hegemónica habría incrementado su capacidad transformadora. Pero aun en este último supuesto, no dejaba de estar planteada la necesidad de construir un sistema político en que el bloque social dominante resolviera a través de mecanismos de coexistencia, y no de negación, sus contradicciones internas, por un lado, y con los sectores sociales de oposición, por el otro lado. Semejante problema se presentó en los hechos a comienzos de 1972, cuando el régimen constitucional entró en crisis, período en el cual Allende resolvió abrir el debate sobre el carácter y contenido de una nueva organización estatal que atendiera a las exigencias de la transición al socialismo. La iniciativa quedó plasmada en el proyecto de Constitución que alcanzó a ser elaborado en agosto de 1972. Veremos más adelante por qué esta acción de Allende en favor del cambio de las instituciones estatales no fue compartida por la dirección de los partidos obreros.

A lo largo de 1972 y 1973, cuanto más progresaban las condiciones que impedían la *coexistencia* entre el bloque social UP y los sectores obreros, campesinos y medios no identificados con aquél, más se aproximaba el proceso revolucionario hacia las

GRÁFICO 8
Comunas urbanas. Evolución electoral entre 1964 y 1973



condiciones del enfrentamiento directo entre la vanguardia anticapitalista y las fuerzas contrarrevolucionarias. A medida que la vía político-institucional de conquista del poder por los trabajadores se veía inhabilitada, más emergía el conflicto armado como vía de solución de los conflictos entre las clases y sectores sociales.

Cuanto más se desarrollaban las contradicciones entre el bloque UP y los sectores medios, cuya presencia dentro del aparato estatal era importante, más se agudizaba la crisis interna del estado. Y a medida que éste perdía legitimidad ante los sectores populares y medios de oposición, mayor era la tendencia a ver en el gobierno a su "enemigo", lo que los llevaba a desarrollar su capacidad de autodefensa, su código de seguridad. Es decir, ingresaban en la dinámica de la "violencia".

Los sectores sociales de la alta y mediana burguesía se han encontrado tradicionalmente resguardados por la autoridad del estado, así como por sistemas normativos de dirección y resolución de los conflictos —propiedad, influencia política directa, grupos de presión, etc.—. Un gobierno como el de la UP invertía la situación radicalmente, poniendo la autoridad del estado al servicio de las clases populares y de la desarticulación de los sistemas normativos de la gran burguesía. La subversión de la autoridad gubernamental y, eventualmente, la destrucción de la autoridad de semejante estado, se convierten así en necesidades imperiosas para los sectores sociales antagónicos con la acción del gobierno UP. Sólo en la medida que entre estos sectores antagónicos no se hallen los medios, dejará la contrarrevolución de tener el terreno abonado para movilizarlos como frente de masas en contra de la clase obrera y demás componentes del bloque socialista. En la medida que la legitimidad del estado llega a ser desafiada masivamente, el uso normativo de la violencia tiende a ser aceptado tanto por los grupos privados como por el propio régimen político. Situación en la que emergen a primer plano las instituciones coercitivas del estado, en particular las armadas.

Mientras subsiste la equivalencia entre los intereses del bloque social hegemónico, el carácter de las instituciones del estado y la composición social de las Fuerzas Armadas profesionales, éstas difícilmente se convierten en un factor de poder contrapuesto al de las instituciones civiles del estado. De ahí que

en los momentos en que la crisis de hegemonía del bloque social dominante conlleva las de las instituciones estatales, las Fuerzas Armadas tiendan a asumir directamente las tareas de ordenación y regulación de la sociedad.

Un sistema político fascista o parafascista que ha logrado consolidar una alianza burguesía-sectores medios en torno de instituciones político-militares de composición e identidad social semejante, no ha sido derrocado nunca desde el interior. Ha habido necesidad de una guerra externa para derribar semejante aparato de estado. La Alemania de Hitler, y la Italia de Mussolini lo demostraron en su tiempo, y el Portugal de Salazar lo ha ratificado treinta años después. Hay que buscar en los frentes de batalla de sus colonias africanas la razón principal de la derrota militar del fascismo portugués.

En una sociedad industrializada, con una clase obrera numerosa, la organización unitaria de ésta en torno a objetivos de democratización política y económica, es el mayor desafío que puede amenazar el dominio del gran capital sobre los centros de poder de la sociedad. Semejante organización unitaria de los intereses representativos de la clase obrera será más factible y efectiva cuanto mejor asuma las diferencias internas, no para negarlas artificialmente sino para hallar en su resultante formas de acción conjunta. Sólo una estructura de poder democrática en el seno de la clase obrera puede permitir su unidad en un sentido amplio. De este modo, en el desarrollo de la democracia interna las fuerzas obreras encuentran uno de los más importantes factores para potenciar su unidad.

Sin embargo, la resolución de la crisis del estado capitalista no puede ser asumida por la sola clase obrera, por más que su capacidad orgánica de acción sea el elemento más importante, sino por el conjunto de los sectores sociales sometidos a relaciones de explotación o discriminación por el modo capitalista de producción. Únicamente la alianza de las organizaciones representativas de la clase obrera con las de gran parte de los sectores medios —productivos y no productivos—, puede permitir al conjunto de estas fuerzas asumir una posición hegemónica en el conjunto del cuerpo social. Requisito indispensable para reordenar la sociedad al servicio de los trabajadores.

En la negación de las estructuras de poder de la sociedad capitalista, en la afirmación y búsqueda de nuevas formas de

organización del sistema productivo, de las relaciones de propiedad y sociales, existen sectores obreros y medios que —por motivos ideológicos o de intereses inmediatos—, no se incorporan positivamente a un proceso de transición hacia el socialismo. Antes de que las organizaciones representativas de los trabajadores controlen totalmente el poder, la alianza prosocialista debe evitar el enfrentamiento directo con aquellos sectores, base de masas de los movimientos contrarrevolucionarios y, eventualmente, fascistas, ligados al gran capital financiero-industrial, nacional e internacional.

A partir de estas premisas, el período de transición al socialismo se ve caracterizado en la práctica por fenómenos como los siguientes:

a) Amplias capas populares y de sectores medios sólo aceptan incorporarse a una alianza centrada en torno de la clase obrera en la medida en que las organizaciones de ésta no les exijan su satelización o sumisión, sino que les garanticen la libre manifestación de su personalidad social y política. En otras palabras, rechazan el reconocimiento del principio doctrinal de un partido hegemónico, por más que en los hechos es la correlación de fuerzas concretas la que condiciona la evolución del proceso histórico.

b) Aquellos sectores populares y pequeñoburgueses no identificados con el bloque prosocialista, pero en *coexistencia* con él, sólo dejan de ser fácil terreno de maniobra contrarrevolucionaria cuando se sienten incorporados a un proceso de transformación social que, deliberada y sinceramente, requiera su colaboración, sin someterlos por medios coercitivos ni darles la impresión de estar siendo satisfechos temporalmente por el movimiento revolucionario mientras éste acumula fuerzas suficientes para aplastarlos.

Pero si la unidad de la clase obrera y su alianza con otros sectores populares puede, en determinadas circunstancias, llevar a la dirección del estado a una coalición de fuerzas anti-capitalistas, una simple alianza electoral no puede garantizar que un régimen de transición al socialismo se consolide y logre llevar a cabo las transformaciones socialistas si no existe *unidad de dirección* dentro de la coalición. Unidad de conducción tanto en el orden táctico —compartir el proyecto instrumental para lograr la meta estratégica—, como en el orgánico —creación

de estructuras operacionales que permitan la unidad de decisión y de ejecución—.

En un proceso de conquista del poder por la vía insurreccional y la guerra civil, aquella unidad requiere más o menos fatalmente un partido único de la revolución, cuyo modelo más representativo es el bolchevique. En cambio, el partido único tipo bolchevique es incompatible con las exigencias intrínsecas de una vía hacia el poder distinta de la de la guerra civil, pues aquél entra en contradicción con el reconocimiento de la pluralidad política dentro de la clase obrera y sectores sociales aliados, así como de los derechos políticos de aquellos sectores con los que el bloque socialista coexiste mediante el reconocimiento de su personalidad diferenciada.

Tendremos ocasión de contemplar más adelante cómo en Chile la UP no logró establecer la unidad de dirección. Y cómo en marzo de 1973, cuando Allende propuso medidas específicas para hacerla posible, fueron precisamente los partidos obreros, el PC y el PS, los que más resueltamente rechazaron caminar hacia la conducción unitaria solicitada por el presidente de la República. ¿Por qué? Habría que considerar la concepción del partido dominante en el seno del PC y del PS para encontrar la respuesta a aquella negativa, que resultó trascendente y decisiva para abrir paso a la masacre obrera en septiembre de 1973. Inadecuación entre algunas dimensiones de la teoría del partido, por un lado, y las exigencias concretas del proceso revolucionario en 1973, cuyo costo para los trabajadores chilenos ha sido invalorable.

INSURRECCIÓN Y CONTRAINSURRECCIÓN

Un gobierno de organizaciones obreras, cualquiera que sea la vía seguida para su iniciación, sólo puede mantenerse en la medida que conserve y consolide la hegemonía del bloque social cuyo apoyo le ha permitido instaurarse. Cuanto mayor sea la capacidad de acción en contra del gobierno revolucionario, desde dentro y desde fuera del país, más rígido necesitará ser el control de aquél sobre los centros de poder de la sociedad. Cuanto más minoritaria sea la base social de sustentación del nuevo régimen, menos podrá tolerar la oposición —tanto la del

antiguo bloque social dominante como la que pueda surgir en el seno de las mismas organizaciones obreras—. Es una lógica vivida por todas las experiencias históricas de insurrección que han llevado a la dictadura del proletariado, cuyo origen es sustancialmente incompatible con el reconocimiento de los derechos políticos a la oposición burguesa, y cuya evolución ha sido siempre contraria a toda "oposición obrera" organizada. La revolución bolchevique tardó varios años en descubrirlo, pero lo confirmó y hasta lo convirtió en norma en el sistema stalinista.

La necesidad de un ejército popular capaz de vencer al ejército profesional del estado prerrevolucionario, el desconocimiento y negación del régimen legal de este último, el desplazamiento del centro de decisiones políticas del aparato del estado al del partido que dirige la insurrección, la prohibición de toda oposición interior y el control estricto de todo tipo de comunicación y relaciones con países extranjeros no revolucionarios, forman parte de una misma dialéctica de toma y mantenimiento del poder a través de la insurrección obrera y del desarrollo de un régimen sociopolítico capaz de contener una eventual insurrección contrarrevolucionaria.

Así como los fundamentos sobre los que reposa la vía político-institucional de conquista del poder por las organizaciones obreras son distintos de los de la insurreccional, también un gobierno popular instalado sin recurso a la guerra civil tiene que instrumentar una política contrainsurreccional totalmente distinta de la desarrollada por los regímenes de dictadura del proletariado. No establecer la diferencia conduce a confusiones que pueden ser trágicas.

La teoría política marxista, clásica y contemporánea, siempre ha dado por descontado que las fuerzas antisocialistas, tanto desde dentro como desde fuera del país, no se resignarían a aceptar sin resistencia la instauración y fortalecimiento de un régimen anticapitalista mientras contaran con medios para ello. Pero todo cuanto ha desarrollado la teoría y la práctica de las tácticas y técnicas contrainsurreccionales propias de los regímenes instaurados a través de una guerra, ha elaborado poco las exigencias socioeconómicas, militares y políticas para evitar la insurrección contra un gobierno popular instalado sin previo enfrentamiento armado.

Hagamos una primera referencia al problema militar. Un gobierno representativo de las organizaciones obreras instalado legalmente a través del sufragio universal puede quizás considerarse, como Engels, en la Alemania de 1892, que

la legalidad [...] trabaja a maravilla en nuestro provecho, tanto que sería una locura por nuestra parte conculcarla mientras las cosas sigan a este ritmo. Es mucho más correcto preguntarse si no serán más bien los burgueses [...] quienes violarán la ley y el derecho para aplastarnos por la violencia.

pero difícilmente puede compartir su conclusión

pero dejemos que se desenvuelvan los acontecimientos. Mientras tanto, dispáren ustedes primero, señores burgueses.³⁹

Antes de la primera guerra mundial y de la ruptura de la II Internacional socialista, los partidos obreros de los países más industrializados, partidarios del acceso al poder por un camino distinto del insurreccional, apenas iban más allá que Engels. Así, cuando Kautsky formula directamente la cuestión

si nosotros debemos quitarnos de la cabeza la idea del pueblo resistiendo por la fuerza de las armas a las armas de la fuerza pública, ¿debemos por ello entender que jamás el proletariado resistirá por la fuerza a los golpes de fuerza de sus adversarios? Delante de un golpe de estado, ¿permaneceremos indefensos? ¿Acaso no hay para nosotros ninguna otra arma política más que el boletín de voto?⁴⁰

su respuesta es la misma que, durante décadas, continuaron compartiendo los movimientos obreros de los países industrializados con regímenes democráticos: “¡la huelga general!”

Si la historia del movimiento obrero, en los países más desarrollados económica y políticamente, ha demostrado la validez de la primera parte de las proposiciones que mencionamos como ilustración de una opinión generalizada en los partidos obreros, la experiencia de los años veinte en Italia, y la de los años treinta en Alemania y España, mostraron ya hasta qué punto

39. F. Engels, “El socialismo en Alemania”, *Neue Zeit* (1892).

40. K. Kautsky, en H. Lagardelle, ed., *La grève générale et le socialisme*.

la huelga general era un instrumento impotente para atajar el camino a las dictaduras de carácter fascista.

Es digno de asombro observar la longevidad entre los movimientos obreros del culto místico a la huelga general como instrumento de disuasión de la contrarrevolución en coyunturas de crisis de hegemonía social, a pesar de los reiterados y espectaculares fracasos históricos que ha experimentado. Ninguna huelga general obrera que no haya sido respaldada por trabajadores en armas, ha derrocado nunca un régimen que ha contado con un aparato represivo dispuesto a defenderlo, ni tampoco ha impedido la toma del poder por las fuerzas antisocialistas cuando éstas han contado con un ejército dispuesto a respaldarlas, de modo activo o pasivo. Es igualmente una ilusión la disyuntiva que establecía Rosa Luxemburg como culminación de la huelga general revolucionaria

entonces, o la huelga general es ahogada en sangre, o los soldados hacen causa común con el pueblo y éste asume la dirección del estado, [...] la huelga general, desde ese punto de vista, no es otra cosa sino la *revolución sin armas*.⁴¹

Sin armas, la huelga general como “revolución proletaria” tiene en realidad una disyuntiva distinta: o masacre obrera o guerra civil. Sin intervención, directa o indirecta, de una fuerza militar extranjera del lado de las organizaciones obreras, el ejército de un estado moderno cuya estabilidad se halla seriamente amenazada, o se mantiene unido ante los huelguistas —y es la masacre— o se divide —y es la guerra civil—.

En Chile, entre 1970 y 1973, los sindicatos y partidos obreros de nuevo creyeron que la huelga general y la ocupación de empresas era la mejor respuesta en el caso de que la derecha intentara un golpe de estado. Así fue repetido públicamente durante tres años en múltiples ocasiones. Pero aunque hubo varias huelgas generales obreras en respaldo del gobierno de la UP, cuando estalló el primer putsch, la mañana del 29 de junio de 1973, no fue tanto la orden inmediata de huelga general y la ocupación de los centros de trabajo la que detuvo a los putschistas, como la acción de un sector del propio ejército. El 11 de septiembre siguiente, bastó que este sector del ejército

41. Rosa Luxemburg, *Parvus*, *ibid.*, p. 258.

no pudiera actuar para que la ocupación de empresas terminara en baño de sangre. Y ni siquiera hubo necesidad de que los dirigentes convocaran la huelga general: los propios putschistas ordenaron el *lock-out* total. Cuando una semana después el nuevo régimen dio orden de reanudar el trabajo, decenas de miles de obreros habían sido muertos o estaban detenidos, la organización sindical y de los partidos destruida, sus líderes asesinados o en fuga. Sólo éstos no cumplieron la orden militar de incorporarse a sus puestos de trabajo; el resto, el millón de afiliados a la Central Única de Trabajadores, lo hizo escrupulosamente.

Evidentemente, ni Engels, ni Rosa Luxemburg, ni las organizaciones obreras italianas y alemanas que se opusieron a la llegada al poder de Mussolini y Hitler, ni la izquierda chilena contaban con un ejército popular que oponer al profesional del estado. Afirmar después: ¡debieron crearlo!, es un recurso que evita el fondo del problema: no lo crearon porque no era posible hacerlo... —cualesquiera que hubiesen sido sus deseos—. Y, sin embargo, las teorías políticas socialistas, particularmente la marxista, hace más de un siglo que se enfrenta con el problema militar en relación con el poder del estado, sin haberlo hecho avanzar mucho más allá de donde se encontraba al término de la primera guerra mundial y comienzo de la revolución bolchevique. El debate en torno a él entre las distintas corrientes de los partidarios obreros europeos antes de la muerte de Lenin, todavía está vivo. En Chile, demostró encontrarse lejos de estar resuelto, contribuyendo de modo considerable a facilitar el baño de sangre del 11 de septiembre de 1973.

II EL PLAN ITT-CIA-FREI DE 1970

Las intervenciones militares en la política interna son frecuentes. Excepción son los países que no han vivido esta experiencia en las últimas décadas, y el resto del mundo se limita, por lo general, a mencionarlos y llevar el registro de ellas. Sin embargo, la que tuvo lugar en Chile en 1973 ha tenido repercusiones singulares.

La forma brutal y sangrienta como se inició, así como la represión física y económica desencadenada después, llamaron la atención de la opinión pública internacional, por más que ésta se encuentra ininterrumpidamente enfrentada a las manifestaciones de violencia que se dan en todas las latitudes. Con todo, detrás de los trágicos acontecimientos chilenos hay algunos elementos que trascienden el marco estrictamente nacional y, por su carácter, merecen ser puestos de relieve.

No estamos ante una "conspiración de palacio" o un "cuartelazo". Ni ante una intervención militar exógena del tipo "desembarco de marines" en el Santo Domingo de 1965 o derrocamiento de Makarios en Chipre en 1974 por oficiales de Grecia. Se trata de una irrupción militar en un país en que, a diferencia de muchos otros de América latina y otras regiones del mundo, las instituciones políticas habían dado prueba de gran estabilidad en medio de la creciente movilización social que ha caracterizado la historia chilena de los últimos cuarenta años.

El golpe de Pinochet comparte algunos rasgos dominantes de las intervenciones militares más modernas en los países dependientes de Norteamérica. Se sitúa dentro de la línea operativa aplicada por Estados Unidos desde 1961 a la defensa hemisférica: instrumentar a las instituciones militares como

fuerzas de orden interno y conservación social.¹ El gobierno de la Unidad Popular intentó evitar que la doctrina difundida en las Fuerzas Armadas del continente durante los años sesenta, encomendándoles como tarea dominante mantener la seguridad nacional, tuviera en Chile el contenido conservador que le dieron en Brasil después de 1965 y en Argentina después de 1966: preservación de la estructura social y económica tradicional, subordinada a los intereses mundiales de los Estados Unidos. Por el contrario, Allende se esforzó en identificar seguridad nacional con *régimen político democrático —paz civil— nacionalización de la economía* frente al capital foráneo —*socialización del poder político y económico*—. Tres años de gobierno UP no pudieron contrabalancear el peso ideológico del pasado ni, menos, la ininterrumpida dependencia estructural de las Fuerzas Armadas chilenas respecto de las norteamericanas.

De hecho, en forma deliberada y sistemática las instituciones militares latinoamericanas, como las de muchos países de Europa occidental, han venido siendo adoctrinadas para enfrentar a un supuesto "enemigo interno" —las organizaciones sociales populares antioligárquicas o prosocialistas— cuya forma de lucha tradicionalmente se teme que sea la *insurreccional*. Ello contribuye a comprender que la junta militar chilena haya querido aprovechar esta fundamentación ideológica para justificar el derrocamiento del gobierno. Dado que en 1973 lo que se da en Chile es una insurrección cívico-militar de la oposición al gobierno legalmente constituido, después del 11 de septiembre los propagandistas de la CIA y los jefes militares de la sublevación centraron su campaña publicitaria en la denuncia de una imaginaria "insurrección armada" —Plan Zeta— que habría estado preparando la propia coalición de partidos de la Unidad Popular.² Naturalmente, la negación

1. En América latina, en particular, ante el peligro de que el caso cubano se repitiera. Véase W. Barbier y C. Neale Ronning, *Internal Security and Military Power (Counterinsurgency and Civic Action in Latin America)*, Ohio State University Press, Columbus, 1966.

2. El equipo de la CIA en Santiago dirigió las operaciones de los *mass-media* destinados a estimular la justificación y aceptación del golpe militar, así como las destinadas a orientar las actuaciones del nuevo gobierno. Dos colaboradores de la CIA ayudaron a la Junta a preparar el *Libro blanco del cambio de gobierno en Chile*, versión oficial de la insurrección, según ha revelado el comité del Senado de Estados Unidos encargado de investigar las operaciones clandestinas norteamericanas en Chile entre 1963 y 1973 (*Covert*

por el sector militar representado por Pinochet del concepto democrático de seguridad nacional asumido por el sector militar encabezado por el general Prats, ha significado que el régimen surgido del 11 de septiembre de 1973 se caracterice por las normas opuestas a las defendidas por el gobierno derrocado: *destrucción y negación del régimen democrático; guerra civil (ejército en guerra contra el pueblo); desnacionalización de la economía en provecho del capital extranjero; monopolización del poder político y económico por la burguesía*.

Es erróneo limitar la razón de ser y vigencia de la doctrina militar en torno del "enemigo interno" a los solos países de África, Asia o América latina. Bien al contrario, el desarrollo de la *coexistencia pacífica* entre la URSS y los Estados Unidos se fundamenta en el supuesto de que la solución estratégica a nivel mundial de la pugna entre el socialismo y el capitalismo se orienta hacia formas distintas de la del enfrentamiento armado. Esto, en el interior de los países capitalistas tiene su equivalente en el desarrollo de formas de lucha social distintas de la armada. En particular, en los países con industrialización más avanzada esta etapa se corresponde con la consolidación del desplazamiento de las tácticas insurreccionales de lucha obrera por otras propias de la vía no armada.

Chile aparece hasta la fecha como la manifestación más completa de la posibilidad de acceso al gobierno de un movimiento socialista revolucionario utilizando los mecanismos legales, y, a su vez, del hecho de que es la reacción proamericana la que se ve obligada a destruir la democracia representativa para detener la continuidad del proceso revolucionario. Lo que ha venido a mostrar una laguna en los dispositivos militares de preservación del *statu quo*. Preparados ideológicamente para hacer frente a la insurrección popular, se vieron desorientados cuando el movimiento revolucionario buscó y logró el gobierno a través de los cauces legales.

Con la sustitución del estado de "guerra fría" por el de "coexistencia pacífica" operada en la década de los sesenta, en los regímenes políticos de democracia representativa la doctrina

action in Chile, 1963-1973, Staff report of the Select Committee to study governmental operations with respect to intelligence activities, Senado de Estados Unidos, Washington, 1975, p. 40).

*La doctrina político-militar de la Seguridad Nacional.
Dos concepciones*

A	} Seguridad Nacional contra enemigo interno	Estados Unidos
		Brasil (1964) Pinochet (1973)

<i>Negación del régimen democrático</i>	Ejército instrucción de representación del pueblo	Desnacionalización de la economía en provecho del capital extranjero	Poder político y económico monopolizado por la oligarquía y burguesía
<i>Régimen político democrático</i>	Ejército garante de la paz civil dentro del régimen democrático	Recuperación nacional de los recursos básicos de manos del capital foráneo	Socialización del poder político y económico

B	} Seguridad Nacional contra enemigo externo	Schneider
		Allende Prats (1970-1973)

militar antisocialista no encuentra a su adversario potencial más inmediato en el extranjero, sino que tiende a buscarlo en el interior mismo del país. Lo identifica en aquellos movimientos organizados y con potencialidad bastante para aspirar a la dirección del estado pero que, a su vez, se proponen transformar en profundidad las estructuras socioeconómicas sobre las que reposa el funcionamiento del sistema capitalista.

Cuando el general Jacques Beauvallet, secretario general de la Defensa Nacional francesa hasta mayo de 1973, se pregunta: "¿Por qué no considerar como la amenaza más inmediatamente peligrosa todo aquello que afecta a la cohesión del país, puesto que la guerra nuclear continúa siendo la más fundamentalmente peligrosa pero de posibilidades reducidas..."³ está vislumbrando un eventual enfrentamiento de las instituciones militares con aquellas organizaciones cuyo proyecto político contem-

3. *Défense Nationale* (agosto-septiembre 1973).

pla alterar una *cohesión* social basada en la subordinación de los trabajadores al capital y sus representantes.

La sublevación militar chilena vuelve a confirmar por un lado que una formación ideológica conservadora impide a las instituciones militares asumir un proyecto nacional autónomo respecto de Estados Unidos. Por otro lado, prueba que cuando la estructura interna tradicional está amenazada de transformación por la asunción del poder real por los trabajadores, las Fuerzas Armadas se definen de acuerdo con los intereses reales de los sectores sociales con los que se identifican. Y ambos hechos se dan tanto en circunstancias de tensión internacional entre los bloques socialista y antisocialista, como en ausencia de aquélla.

El aparato militar del estado no es autónomo, ni social ni políticamente. En el caso de Chile, era bien sabido que por su composición social se hallaba integrado a los sectores medios, y que por su formación ideológica estaba mayoritariamente adscrito a los valores dominantes del sistema político. Es decir, estado de derecho y democracia representativa. La trayectoria seguida por las Fuerzas Armadas en relación con el gobierno popular está enmarcada dentro de la evolución de estos factores sociales e ideológicos. A medida que los sectores medios fueron entrando en conflicto con el bloque social de la UP, el aparato armado del estado fue desarrollando su contradicción con el gobierno. Y en la misma medida que la evolución del proceso revolucionario hizo entrar en conflicto los intereses específicos de los sectores burgueses, y también de los proletarios, con un régimen legal que permanecía estático, el conjunto de las instituciones del sistema político representativo tradicional se mostraron cada vez más incapaces de continuar cumpliendo su función canalizadora y ordenadora de la dinámica social.

Fenómeno general que, en su correspondencia dentro de las instituciones militares, se tradujo en el debilitamiento, aislamiento y, finalmente, derrota del sector ideológicamente identificado con el régimen político democrático. Evolución ésta que no se puede comprender sino en función del desarrollo del conflicto entre los sectores medios y el centro de gravedad del aparato estatal chileno —el ejecutivo—, lo que repercutía sobre el sector conservador del aparato militar. El propio general Leigh, cabecilla de los insurrectos, reconocía la influencia de la defini-

ción ideológica predominante dentro de las Fuerzas Armadas al declarar, el 22 de septiembre de 1973, que el principal obstáculo que encontraron para arrastrar al grueso de las Fuerzas Armadas detrás de sus planes golpistas fue el tener que derrocar a “un gobierno constitucional”.⁴ Lo que, de paso, contribuye a explicar una de las causas materiales que obligaron a la Unidad Popular a respetar el régimen constitucional y, por otra parte, la necesidad ineludible de destruir este último a que la oposición se vio abocada.

Desde el punto de vista social, el golpe de Pinochet no ofrece mayor singularidad. Es una nueva manifestación del reiterado fenómeno histórico de intervención militar cuando se produce una coyuntura de *crisis hegemónica*,⁵ caracterizada por la imposibilidad en que los dos bloques sociales en pugna se encuentran para imponer su poder sobre el conjunto de la sociedad. Pero si éste es el problema de fondo, no basta constatarlo en Chile en 1973 sino que debemos buscar los mecanismos socioeconómicos que lo hicieron posible. Con lo que llegamos a una cuestión práctica: cuando en un régimen democrático representativo las instituciones políticosociales vigentes no son ya capaces de impedir que un movimiento de carácter revolucionario conquiste y ejerza el gobierno sin quebrar la legalidad, ¿cómo han operado las fuerzas conservadoras para contenerlo? El plan ITT-Kissinger-Frei nos proporciona los primeros elementos de la respuesta.

En 1962, el gobierno de Estados Unidos aprobó una subvención de 50.000 dólares para el PDC de Chile, y otra de 180.000 dólares para su líder principal Eduardo Frei. Nuevas subvenciones del orden de los 3.160.000 dólares fueron entregadas por los servicios especiales norteamericanos al PDC en 1964.⁶ Ese año tuvieron lugar las elecciones presidenciales que opusieron al candidato único de la izquierda unida —el socialista Allende— al portavoz de todos los restantes sectores políticos —el demócrata cristiano Frei—. Sin embargo, sería exagerado sostener que semejante intervención norteamericana fue

4. *La Prensa*, Buenos Aires (22 septiembre 1973).

5. A. Gramsci, *Notes sur Machiavel, la politique et l'état nouvel*, Ed. Sociales, París, 1959, pp. 246-251.

6. *Covert action in Chile...*, pp. 14-17.

determinante en el resultado electoral. Las condiciones sociopolíticas de Chile en aquellos momentos, en particular las que permitieron el amalgamamiento de toda la oposición contraria al bloque socialista-comunista detrás del representante del PDC, son las que hicieron posible el buen éxito del juego electoral para impedir el acceso de la izquierda al gobierno, por más que la injerencia de Estados Unidos fue “escandalosa y casi obscena”, según un oficial de los servicios de inteligencia en misión en Chile en 1964.⁷

Fueron, asimismo, esencialmente los factores internos los que en 1970 permitieron que el mismo mecanismo político derrotara al candidato del PDC —Tomic— y que el candidato de la Unidad Popular ganara las elecciones presidenciales del 4 de septiembre, a pesar de los dos millones de dólares invertidos por la CIA en acciones clandestinas entre 1964 y 1969, de los 3.055 millones de dólares donados o prestados al gobierno Frei oficialmente por las agencias gubernamentales de Estados Unidos e instituciones gubernamentales bajo su control,⁸ y de los 1.700.000 a dos millones de dólares invertidos por las compañías multinacionales y el gobierno de Estados Unidos en la campaña presidencial de 1970 para derrotar a Allende.⁹ En septiembre de 1970, por primera vez, un hombre político de definición marxista, al frente de una amplia coalición que quería alterar las estructuras socioeconómicas del país en sentido socialista, vencía todas las barreras legales de un régimen político-representativo y, de acuerdo con la normativa interna del estado, estaba legitimado a dirigir el gobierno en un sistema de hegemonía presidencial.

Ante este hecho, durante los sesenta días que separaban la elección presidencial y la fecha de transmisión del mando —3 de noviembre—, un amplio frente político, que agrupaba la derecha del PDC y los sectores que respaldaron la candidatura presidencial conservadora de J. Alessandri, procedió a improvisar una serie de actuaciones para invalidar el resultado de la

7. *International Herald Tribune* (7 septiembre 1972). El artículo, de Laurence Stern, entre otras cosas manifiesta que “un ex-embajador de EE. UU. en Chile ha estimado, en privado, en 20 millones de dólares el costo de la intervención en favor del señor Frei”.

8. *Covert action in Chile...*, pp. 17 y 34.

9. *Ibid.*, pp. 19-24.

consulta electoral. Hasta la fecha, las más elocuentes sistematizaciones de ese conjunto de acciones son las contenidas en las comunicaciones intercambiadas entre la ITT y personalidades del gobierno de Estados Unidos, núcleo neurálgico que apoyó, cuando no dirigió, las maniobras, así como los informes de las comisiones de encuesta del Senado de Estados Unidos presididas por el senador F. Church, que fueron hechos públicos en 1973 y 1975.

El plan para impedir la instalación de la Unidad Popular en el gobierno puede desglosarse en un esquema con varios niveles, concebidos de modo alternativo pero cuyos efectos debían ser acumulativos:

- a) La derecha y las Fuerzas Armadas locales utilizadas como instrumento de orden interno.
- b) Desnaturalización de las instituciones políticas y "baño de sangre".
- c) Presión económica y guerra psicológica al servicio de la cohesión del sistema internacional americano.
- d) Provocar acciones de violencia y arrastrar a Allende hacia posiciones de fuerza.
- e) La desintegración del sistema socioeconómico nacional vehículo del golpe militar.

Para ilustrar lo anterior nos apoyaremos particularmente en algunos de los documentos confidenciales de la ITT, publicados por el Subcomité de compañías multinacionales del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos y en los documentos presentados por la CIA ante el comité especial del Senado norteamericano encargado de estudiar las operaciones gubernamentales relacionadas con las actividades de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.¹⁰

10. Este subcomité llevó a cabo en marzo-abril de 1973 una investigación sobre la intervención del gobierno norteamericano y de algunas compañías multinacionales en la política interior chilena durante las elecciones presidenciales de 1970, reproducida en *Hearings before the Subcommittee on Multinational Corporations*, U.S. Senate, LXXXIII Congreso, Washington D. C., U.S. Government Print of., 1973, 2 vols. Las investigaciones sobre las acciones clandestinas del gobierno de EE. UU. en Chile se encuentran publicadas en los informes *Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders*, Washington, U.S. Government printing office, 1975, pp. 225-254, y *Covert action in Chile, 1963-1973*, ya mencionado.

CUADRO 3

El Parlamento en octubre de 1970

Partido	Escaños	
	Cámara de Diputados	Senado
Socialista	15	6
Comunista	21	5
Radical	20	7
Acción Popular Independiente		1
Unión Socialista Popular		1
Social Demócrata		1
MAPU	1	2
TOTAL UP	57	23
Demócrata Cristiano	55	20
Nacional	34	5
Democracia Radical	4	2
TOTAL no UP	93	27

LA DERECHA Y LAS FUERZAS ARMADAS LOCALES UTILIZADAS COMO INSTRUMENTOS DE ORDEN INTERNO

La derecha chilena, las empresas norteamericanas con intereses en el país austral y las instituciones gubernamentales de Estados Unidos interesadas en América latina, confiaban en una estrecha victoria del candidato de la derecha el 4 de septiembre. Para asegurarla, vislumbran la utilización de tres recursos: 1) la división de las fuerzas políticas anticapitalistas; 2) la contribución del sector conservador del PDC, encabezado por el presidente de la república en ejercicio E. Frei; 3) la intervención militar.

El 1 de septiembre de 1970, este esquema adquiere su primera configuración:¹¹

11. Los fragmentos de la documentación confidencial de la ITT aquí citados han sido todos publicados en los *Hearings* del Senado de Estados Unidos antes mencionados.

La mayor parte de los indicadores disponibles apuntan la victoria del candidato conservador Jorge Alessandri en las elecciones presidenciales por un 40 % de la votación total.

No obstante, esto no asegura que asuma la presidencia y, de hecho, parece casi cierto que conduciría a la violencia, lo que pondría a la fuerza de seguridad de la nación en una dura prueba.

Ya que la ley requiere que cualquier candidato a la presidencia debe obtener más del 50 por ciento de la votación para ganar, con certeza el Congreso decidirá quién es el ganador en una sesión no más tarde del 24 de octubre.

Los sectores de izquierda (PDC-Unidad Popular) controlan 157 de los 200 escaños del Congreso. La decisión del Congreso para elegir presidente requiere una simple mayoría (101 escaños). El Congreso no está, repito, no está obligado a reconocer como presidente al candidato que obtenga la mayoría relativa en la elección directa, aunque tradicionalmente el Congreso ha votado por el hombre que ha obtenido la mayoría. Pero, por una gran variedad de razones —la álgida enemistad entre la derecha y la izquierda, el deslizamiento hacia el socialismo nacionalista izquierdista a lo largo de América latina pero especialmente en Chile— la tradición podría no sobrevivir la prueba venidera.

Esto parece arruinar las posibilidades de Alessandri en la resolución del Congreso, a menos que los sectores de izquierda estén seriamente divididos en cuanto a su ideología, estrategia y objetivos. Un factor clave en la inevitable decisión del Congreso será el margen por el que ganará Alessandri. El presidente Frei ha dicho a los lugartenientes de Alessandri (recientemente, la semana pasada) que si su hombre gana por 100.000 o más votos, él usaría el poder de su cargo para persuadir al Congreso y a los militares para ver que Alessandri sea rápidamente ratificado como presidente.

Aunque las Fuerzas Armadas son una colectividad supuestamente apolítica, ellas acarrearán una considerable influencia en la situación poselectoral inminente. Hace unos tres meses que el jefe de las Fuerzas Armadas, general René Schneider, declaró públicamente que el ejército respetaría cualquier decisión tomada por el Congreso. Esta declaración, inusual antes de las elecciones, fue entendida como que los militares no se sentirían necesariamente obligados a reconocer el voto popular.¹²

12. Ibid., pp. 562-565. Memorandum de la ITT.

A título de ejemplo del nivel de intervención de Estados Unidos en el proceso electoral chileno, baste mencionar que el Comité Cuarenta, el organismo gubernamental de mayor autoridad en materias de Seguridad de Estados Unidos, autorizó a la CIA invertir no menos de 11 millones de dólares entre 1962 y 1970 para impedir que Allende fuera elegido presidente. Es lo que testimonió el propio director de la CIA, William Colby, el 22 de abril de 1974 ante el Subcomité de Inteligencia del Senado norteamericano.¹³

DES NATURALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y "BAÑO DE SANGRE"

Pero el 4 de septiembre, el sufragio universal da la victoria a Allende (36,3%), frente a Alessandri (34,8%) y a Tomic (27,8%). En ese momento, los demócratas liberales chilenos y el capitalismo norteamericano se ven obligados a reconocer que las elecciones libres como procedimiento de designación de las autoridades sólo deben respetarse mientras aseguren la hegemonía de sus intereses. Cuando éste no es el caso, recurren al fraude electoral como primera medida, fingiendo observar la forma mientras violan la substancia. Imposibilitado el fraude electoral, se intenta el fraude constitucional para hacer posible un *golpe parlamentario* el 24 de octubre siguiente: que la mayoría del Congreso designe presidente de la república a Alessandri, previo el compromiso público de éste de dimitir y provocar nuevas elecciones presidenciales, como prometió en su declaración del 9 de septiembre.

El Comité Cuarenta, en una reunión presidida por H. Kissinger el 14 de septiembre de 1970, "prestó atención especial al denominado gambito 'Rube Goldberg', consistente en que el Congreso eligiera a Alessandri el 24 de octubre, que dimitiera luego y dejara constitucionalmente libre a Frei para postular una segunda elección presidencial. Se le pidió al embajador Korry dirigirse directamente al presidente Frei para ver si es favorable a comprometerse en esta línea de acción. Un extraordinario de 250.000 dólares fue aprobado para el apoyo clan-

13. *The Sunday Times* (22 septiembre 1974).

destino de los proyectos que Frei o su gente de confianza estimara oportunos'. También se aprobó que la Agencia lanzara una campaña propagandística para llamar la atención sobre el daño que encerraría la asunción de Allende".¹⁴

La acción sobre el ala conservadora del PDC debía permitir la conformación de una mayoría parlamentaria refractaria a las aspiraciones programáticas de la UP. Como pretensión inmediata, debía rechazar la designación de Allende por el Congreso. Si no lo lograba, debía hacer inviable la articulación posterior entre el Ejecutivo y el Legislativo, con las consecuencias derivadas de bloqueo y crisis del estado.

Pero en el caso de que el movimiento popular disponga de alguna capacidad de acción de masas para defender su victoria electoral, o para reaccionar frente al fraude, las fuerzas conservadoras locales y los representantes americanos instrumentarán los medios para someterlos a cualquier costo, haciendo un escarmiento. Es lo que se contiene en los documentos de la ITT que siguen:

6 de septiembre 1970: ¹⁵

El domingo por la tarde en una sesión muy confidencial y privada con el doctor Arturo Matte, cuñado de Alessandri y su asesor más próximo, me fue resumida su estrategia: están de alguna manera esperando el tribunal electoral para demostrar que el recuento oficial de los votos favoreció a Alessandri, no a Allende, y que el presidente Frei va a apoyar esta decisión. Las Fuerzas Armadas, cuya mayoría de líderes son pro-alessandristas, se espera que apoyen a Frei. La mecánica de cómo sería esto llevado a cabo fue apenas tocada y yo infiero que sería necesario algún dinero y presiones influyentes quizá de Washington.

El doctor Matte dijo que con el apoyo de Frei y de las Fuerzas Armadas, un amplio sector del bloque demócrata-cristiano sería persuadido a votar por Alessandri. Una vez elegido por el Congreso, Alessandri volvería a su antigua promesa y renunciaría a la Presidencia. Esto acabaría en nuevas elecciones,

14. Memorándum de la CIA "Decisión sobre la política relacionada con nuestra acción clandestina en la elección presidencial chilena de septiembre de 1970" (9 octubre 1970), citado en *Alleged assassination plots...*, pp. 230-231.

15. *Hearings...*, cit., pp. 583-585. Memorándum de la ITT.

en las que Frei sería elegido por otro período presidencial. El sector de Alessandri se da perfectamente cuenta de las consecuencias de tal maniobra. Un baño de sangre, ya que la extrema izquierda no tomaría esto sin reaccionar violentamente. El doctor Matte, sabiendo esto, lo cree necesario para prevenir que el comunismo tome el control del país.

En resumen:

El presidente Frei y las Fuerzas Armadas quedan como los elementos claves, la catálisis, en esta situación. Políticamente, Frei no puede permitir que su partido DC colabore estrechamente con Allende porque esto reforzaría el control de la izquierda. Al mismo tiempo, no permite verse identificado con la táctica del golpe ya que su imagen perdería su brillo en América latina como parangón de la izquierda democrática (de lo cual está muy orgulloso).

El 15 de septiembre, el presidente Nixon se reunía con su asesor sobre materias de seguridad nacional, H. Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, y el ministro de Justicia, John Mitchell, en la Casa Blanca. El tema del día era Chile. Las notas manuscritas tomadas por Helms durante la reunión reflejan su contenido y las instrucciones del presidente de Estados Unidos:

[...] gastar duro, no importan los riesgos que conlleve, [...] diez millones de dólares disponibles, más en caso de necesidad, trabajar a tiempo completo —los mejores hombres disponibles—, elaborar un plan de supuestos variables, hacer aullar de dolor a la economía [chilena], 48 horas para un plan de acción.¹⁶

17 de septiembre: ¹⁷

Matte dijo que las Fuerzas Armadas se dan cuenta del gran peligro que representa para la democracia la asunción de Allende al poder. Están de acuerdo en que debe ser detenido. No obstante, la jefatura de las Fuerzas Armadas y Frei prefieren una salida constitucional (es decir, elección de Alessandri por el Congreso); esto no excluye la violencia —espontánea o provocada—.

16. *Alleged assassination plots...*, p. 227.

17. *Ibid.*, p. 611. Memorándum al primer vicepresidente de la ITT.

LA PRESIÓN ECONÓMICA Y LA GUERRA PSICOLÓGICA AL SERVICIO DE LA COHESIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL AMERICANO

Para apoyar a las fuerzas locales partidarias del mantenimiento del sistema capitalista, los centros de decisión competentes del poder económico-político-militar de Estados Unidos usarán de sus vastos recursos en el conjunto de su imperio para perturbar el sistema económico chileno, actuando sobre los circuitos internos y externos que regulan sus finanzas, producción, distribución e intercambio internacional.

Se trataba de provocar con rapidez manifestaciones de crisis económica que permitieran a las organizaciones conservadoras locales crear las condiciones sociales, políticas y militares necesarias para conservar su hegemonía. Dentro de este plan, importaban tanto las realizaciones tangibles como la "imagen" pública que se creaba. Por ello se intensificó la campaña de intoxicación psicológico-propagandística dentro y fuera del país.

Una acción concertada de esta naturaleza sobre los fundamentos de la comunicación integrada e interdependiente de la comunidad nacional debía enervarlos y crear una situación de caos. O la sensación subjetiva de su presencia.

CUADRO 4

*Técnicas de acción clandestina. Gastos de la CIA en Chile 1963-1973*¹⁸

Técnicas	Monto en dólares
Propaganda para elecciones y otras ayudas a partidos políticos	8.000.000
Elaboración y difusión de propaganda y apoyo a <i>mass-media</i>	4.300.000
Influencia en instituciones (sindicatos, estudiantes, campesinos, mujeres) y ayuda a organizaciones del sector privado	900.000
Estímulo al golpe militar	200.000

18. *Covert action in Chile...*, p. 7.

CUADRO 5

Chile: vulnerabilidad y dependencia externa
(millones de dólares)

	1950-1959	1960-1969	1960-1964	1965-1969
A. Transacciones corrientes del balance de pagos				
1. Exportaciones de bienes y servicios	4.495,4	7.934,6	2.885,6	5.049,0
2. Importaciones de bienes y servicios	-4.222,9	-8.062,5	-3.508,5	-4.554,0
3. Saldo comercial	272,5	-127,9	-622,9	495,0
4. Pagos de utilidades e intereses (neto)	-631,6	-1.382,3	-435,3	-947,0
5. Donaciones privadas (neto)	19,5	68,5	35,5	33,0
6. Saldo en cuenta corriente	-339,6	-1.441,7	-1.022,7	-419,0
B. Financiamiento del desequilibrio corriente				
1. Financiamiento neto ext. total	339,6	1.441,7	1.022,7	419,0
2. Movimiento autónomo neto de capital	353,3	1.481,5	688,5	793,0
3. Movimiento compensatorio neto	12,0	-24,5	305,5	-330,0
4. Errores y omisiones netos	-25,7	-15,3	28,7	-44,0
C. Composición del movimiento autónomo neto de capital	353,3	1.481,5	688,5	793,0
1. Inver. dir. neta	268,4	-36,1	72,9	-109,0
2. Préstamos de largo y mediano plazo (netos)	7,2	1.319,0	537,0	782,0
3. Pasivos de corto plazo (neto)	-5,0	286,7	130,7	156,0
4. Donaciones oficiales netas	72,8	84,2	66,2	18,0
5. Fondos o activos nacionales	9,9	-172,3	-118,3	-54,0

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales.

Pauta de intervención que Estados Unidos observó no sólo en 1970, sino a lo largo de todo el período del gobierno de la UP. Así, está comprobado que la sola CIA —para no hablar de otras instituciones dedicadas al mismo menester— destinó más de trece millones de dólares (que en el mercado negro chileno tenían un equivalente hasta cuatro veces superior), para financiar los *mass-media* y las organizaciones gremiales que promovieron las huelgas generales de 1972 y 1973. En especial la del transporte y comercio. Ello debía permitir el desencadenamiento de una movilización colectiva hostil hacia los agentes que la propaganda responsabilizaba de la tensión y ansiedad —es decir, la Unidad Popular—. Los centros de poder económico, social, político, cultural y militar en manos de los sectores adversos a la UP, eran accionados en esa dirección:

14 de septiembre 1970: ¹⁹

Le dije a Mr Vaky ²⁰ que le dijera a Mr Kissinger que Mr Geneen ²¹ está deseoso de venir a Washington a discutir los intereses de la ITT y que estamos preparados para ayudar económicamente con sumas hasta de siete cifras. Dije que la preocupación de Mr Geneen no es “después que se robaron el caballo” sino que todo el tiempo hemos temido la victoria de Allende y hemos estado tratando sin éxito de alertar a otras compañías americanas sobre el destino de sus inversiones para que se unieran a nosotros en nuestros esfuerzos pre-electorales.

17 de septiembre: ²²

Los militares chilenos no se moverán unilateralmente para evitar que Allende asuma el gobierno. Sólo actuarán si es dentro del marco de la Constitución.

El esfuerzo anti-Allendista más que probablemente reque-

19. *Hearings...*, cit., pp. 599-600. Memorandum al vicepresidente de la ITT en Washington sobre las conversaciones con la oficina de H. Kissinger y el ministro de Justicia.

20. Viron Vaky, asesor de Henry Kissinger para asuntos de América latina.

21. Harold Geneen, jefe de Operaciones y presidente del consejo de administración de la ITT.

22. *Hearings...*, cit., p. 610. Al primer vicepresidente de la ITT.

CUADRO 6

Chile: destino de las exportaciones, origen de las importaciones y saldos de comercio por principales regiones y países

Países y regiones	Destino de las exportaciones y origen de las importaciones (porcentajes)				Saldos de comercio (millones de dólares)	
	1958		1968		1958	1968
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones		
Estados Unidos .	40,4	51,6	22,4	38,4	-56	-74
CEE	28,3	18,2	31,9	18,4	+35	+163
AEEL	16,7	9,4	19,5	9,7	+26	+111
Europa oriental .	—	0,5	0,1	0,4	-2	-2
Japón	0,5	2,9	13,3	1,7	-10	+112
América Latina .	9,8	13,3	10,0	25,6	-17	-96
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	-24	+197

FUENTE: CEPAL, a base de estadísticas oficiales.

rirá alguna ayuda financiera del exterior. El grado de esta asistencia se conocerá mejor alrededor del primero de octubre. Hemos prometido nuestra ayuda si es necesaria.

El 21 de septiembre, el cuartel general de la CIA en Washington envía a su corresponsal en Santiago dos cablegramas con órdenes precisas y tajantes. Hasta la fecha sólo conocemos el contenido de uno de ellos, fragmentariamente:

“3. El propósito de la operación es evitar que Allende asuma el poder. El soborno del Parlamento ha sido descartado. El objetivo es la solución militar...” ²³

El 29 de septiembre, el primer vicepresidente de la ITT recibía el comunicado siguiente: ²⁴

Las Fuerzas Armadas están preparadas para moverse y bloquear a Allende; pero solamente con el consentimiento de Frei, el cual no parece venir. En otras palabras, Frei le ha

23. Cable 236, Hq. to Santiago (21 septiembre 1970), citado en *Alleged assassination plots...*, p. 228.

24. *Hearings...*, cit., pp. 614, 622 y 623.

pasado la pelota a las Fuerzas Armadas y los militares no actuarán sin órdenes de Frei, a no ser que las condiciones internas requieran su intervención.

Con seguridad Allende ha comprendido esta maniobra. Se ha referido a ella en declaraciones públicas recientes. Con seguridad también se da cuenta de la complicidad del gobierno y de Frei. La semana pasada el ministro de Hacienda hizo un informe pesimista sobre la economía del país, culpando de ello al resultado de las elecciones del 4 de septiembre. La declaración fue emitida con la bendición de Frei. Aunque aparenta ser una evaluación objetiva y realista de las condiciones económicas, la declaración soliviantó al campo allendista, que lo criticó seriamente como una provocación.

Hemos recomendado, aparte de la ayuda directa, lo siguiente:

[...]

Que ayudemos a mantener un centro de "reubicación familiar" en Mendoza o Buenos Aires para las esposas y niños de personajes claves implicados en la lucha. Esto comprendería como a 50 familias por un período de un mes a seis semanas, quizá dos meses.

Que apliquemos cuanta presión podamos sobre la United States Information Service de Washington para que dé instrucciones a la USIS de Santiago que comience a mover los editoriales de *El Mercurio*²⁵ alrededor de América latina y hacia Europa. Hasta que salí de allá tenían órdenes de no sacar nada de Chile.

Según estimaciones de la CIA, más de setecientos artículos, emisiones radiofónicas, editoriales y actividades similares en *mass-media* de Europa y América latina tuvieron su origen, durante aquellas seis semanas, en la propia Agencia.²⁶

EL PLAN DE ACCIÓN PARA PROVOCAR EL COLAPSO ECONÓMICO

El 29 de septiembre, el Comité Cuarenta celebró una nueva reunión. Se concluyó que el gambito Frei había sido sobrepasado por los acontecimientos y estaba muerto. La solución

25. El periódico conservador más importante de Chile. En el memorándum de esta fecha se dice que la ITT y otras compañías americanas lo están subvencionando directamente; así como a comentaristas de radio y televisión.

26. *Covert action in Chile...*, p. 25.

alternativa que tenía pensada —la dimisión de los ministros de Estado y su reemplazo por nuevos ministros militares—, fue también estimada como sin destino. Se llegó al acuerdo de que era imposible provocar una acción militar a menos que se ejercieran fuertes presiones sobre la economía chilena. Por ello se resolvió dirigirse a empresas norteamericanas para que coordinaran sus acciones en este sentido con el gobierno de Estados Unidos, se cortaron todos los préstamos, se presionó a empresas para que retuvieran sus inversiones en Chile y se pidió a otros países que colaboraran en el mismo designio. Para llevar a cabo este plan, se constituyó un equipo de trabajo integrado por el jefe de los servicios clandestinos de la CIA para el Hemisferio Occidental, William V. Broe, y representantes del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad y del Departamento del Tesoro.²⁷

Sin mayor demora, aquel mismo 29 de septiembre William V. Broe ponía en ejecución las medidas aprobadas. He aquí la comunicación que dirigió, por ejemplo, a Edward Gerrity, primer vicepresidente de la ITT:²⁸

Los bancos no deben renovar los créditos o deben demorarse en hacerlo.

Las compañías deberán arrastrar los pies al mandar dinero, hacer entregas, despachar repuestos, etc.

Las compañías de ahorro y préstamo de allá tienen problemas. Si se aplica presión tendrían que cerrar sus puertas, creando así mayor presión.

Se dio una lista de compañías y se sugirió que las abordáramos según lo indicado. Se me dijo que de todas las compañías implicadas sólo la nuestra había respondido y comprendido el problema. El visitante agregó que el dinero no era problema. Indicó que se habían dado ciertos pasos, pero que buscaba ayuda adicional dirigida a inducir un colapso económico.

Podemos contactar compañías claves para obtener sus reacciones y hacer sugerencias en la esperanza de que cooperen. Información que recibimos hoy de otras fuentes indica que de todas maneras hay una crisis económica en aumento.

27. *Ibid.*

28. *Hearings...*, cit., p. 626.

15 de octubre: ²⁹

El embajador Korry manifestó que ha reducido el monto de la ayuda norteamericana, "que ya está corriendo por las cañerías", tanto como ha sido posible. Estima el monto en 30 millones de dólares USA.

El embajador dijo que tenía dificultades en convencer a Washington de la necesidad de "cortar" toda posible ayuda a Chile, pero insistió porque lo necesita como un factor de regateo. Los Estados Unidos no deben admitir que han hecho "el corte" y deben decir como en el pasado: "no ha habido suspensión de la ayuda a Chile; el programa está en revisión".

22 de octubre: ³⁰

El doctor Dan se propone mantener una reunión con su Comité Latinoamericano a comienzos de la próxima semana para ver qué otras presiones podemos orquestar para hacer que el Departamento de Estado endurezca su actitud. No tenemos muchas esperanzas y creemos que la mejor presión debe proceder de otros países latinoamericanos. También fue sugerido que tratáramos de determinar si cualquiera de las grandes compañías europeas está en las mismas condiciones que nosotros, en Chile y otros países latinoamericanos. Si es así, ¿creen ustedes que hay alguna posibilidad de agitarlos?

Tras la instalación del gobierno de la Unidad Popular, el 3 de noviembre de 1970, este plan de acción necesitó sus propios organismos permanentes, encargados de aplicarlo día a día. Henry Kissinger creó un comité *ad hoc* con representantes de todas las instituciones gubernamentales interesadas, tanto civiles como militares, que sólo se disolvió tras el derrocamiento del gobierno chileno. Los documentos de la ITT revelan la constitución —pocas semanas después del comienzo del gobierno de la UP— de un comité semejante de empresas multinacionales. En él se concentraba el poder formidable de que da idea la simple enumeración de algunas de las firmas presentes: Ford Motor, Anaconda Co., Bank of America, First National City Bank, Ralston Purina, Internacional Telephone and

29. *Ibid.*, pp. 656-657. Al vicepresidente de la ITT en Washington.

30. *Ibid.*, p. 676. Del vicepresidente de la ITT en Washington al primer vicepresidente de la ITT.

Telegraph Corporation, Firestone Tire and Rubber Co., W.R. Grace and Co., Charles Pfizer and Co., Dow Chemical Co., Kennecott Copper Co., Bethlehem Steel Co.³¹ Dentro de Chile, las organizaciones patronales, los partidos y movimientos políticos de oposición y las instituciones corporativas dirigidas por adversarios de la UP representaron la contraparte necesaria para el buen éxito de las maniobras externas.

11 de febrero de 1971: ³²

Acción de las empresas multinacionales sobre el gobierno de Estados Unidos

Bill Merriam ³³ ha formado un comité *ad hoc* de todos los representantes en Washington cuyas compañías tienen inversiones en Chile.

Hubo un intercambio libre de información y un programa conjunto para hacer entender a todas las agencias del gobierno el peligro que está surgiendo en Chile.

Este era un grupo muy efectivo.

Campaña propagandística contra la Unidad Popular de Chile

En los últimos días de septiembre de 1970, la CIA tenía en Chile agentes que eran periodistas procedentes de diez países diferentes. Este grupo fue reforzado por otros ocho periodistas de cinco países, bajo la dirección de agentes de alto nivel que trabajaban, en su mayor parte, en funciones de dirección en el terreno de los medios de comunicación de masas. La campaña propagandística comprendía distintos componentes. Predicciones de un colapso económico si Allende ponía en práctica su programa eran reproducidas en artículos hechos por la CIA a lo largo de América y Europa. Si Allende replicaba a las críticas de que era objeto por parte de *El Mercurio*, la CIA utilizaba sus resortes para orquestar cables de solidaridad con el diario chileno por parte de periódicos extranjeros y una asociación internacional de prensa, etc.³⁴

31. *Ibid.*, pp. 1086 y 1092.

32. *Ibid.*, p. 802.

33. Vicepresidente de la ITT, jefe de la oficina de Washington.

34. *Covert action in Chile...*, p. 24.

Tras la instauración del gobierno UP, los mismos procedimientos continuaron siendo observados, como atestigua el memorándum de la ITT de 11 de febrero de 1971:

Jack Horner y Bernie Goodrich³⁵ han establecido contactos con varias personas de los medios de comunicación, interesados en Latinoamérica, y les proporcionaron información sobre Chile de lo que resultaron nuevos planteamientos y artículos en revistas. También fueron establecidos contactos con la Agencia de Información de Estados Unidos y con varios miembros del personal del Banco Interamericano de Desarrollo.

Algo falta, sin embargo, en este espectro de medidas dispares unidas en el propósito de subvertir los fundamentos sobre los que reposa el equilibrio dinámico de una comunidad social. Si los centros de decisión que impulsan los planes aparecen claros en estos documentos confidenciales, públicamente nunca se manifestaron —caso de las empresas y del gobierno americanos—, o lo hicieron bajo recubrimientos bien diferentes —caso de las organizaciones legales de la derecha indígena—. Estas últimas se presentaron como abanderadas de la lucha por la democracia, las libertades sin restricciones, la dignidad de las personas (en especial de los trabajadores), el Estado de Derecho, la independencia nacional frente a potencias extranjeras, etc., acusando a los partidos obreros y a la Unidad Popular en su conjunto de ser su negación en potencia o en acto.

No obstante, mientras que en las experiencias históricas de insurrección popular es corriente que los movimientos obreros y campesinos manifiesten abiertamente en contra de qué instituciones del sistema existente se sublevan, al tiempo que proponen realizaciones alternativas de significado revolucionario, el comportamiento de la burguesía en una fase de insurrección contrarrevolucionaria es bien distinto.

En un país de prácticas y valores dominantes propios de una democracia avanzada, cuando la burguesía se enfrentó a un movimiento popular que se expandía dentro de un régimen liberal, lo hizo invocando siempre los principios democráticos de la ideología liberal. Aunque su propósito era destruirlos

35. Gerente del servicio de prensa de la ITT.

al descubrir que habían sido apropiados por el movimiento popular o se revelaban propicios al desarrollo de un proceso de significado anticapitalista. Lo que hizo en cuanto el éxito de la insurrección puso todo el poder en sus manos, aplicándose a destruir las instituciones representativas y a negar los derechos políticos a sus adversarios.

En estas circunstancias, cuando la especificidad histórica del país no permite fácilmente que los valores y formas de lucha fascista adquieran legitimidad entre las grandes masas, cuando la derecha local o la contrarrevolución en general no pueden invocarlos abiertamente, la burguesía se encuentra atrapada en un círculo vicioso. Para derrotar a un movimiento revolucionario triunfante dentro de la legalidad y las instituciones democráticas, tiene que destruir a éstas. Pero no puede movilizarse abiertamente en torno de tal meta porque pierde *legitimidad* ante la ideología dominante. Al resultar ya insuficientes los mecanismos legales y electorales para mantener su hegemonía de clase, tiene que recurrir a la subversión e insurrección. Pero no puede reconocerlo, descubrir públicamente su juego, mientras el aparato del estado esté funcionando regularmente. Vale decir, con todas sus instituciones de control y ordenadoras (administrativas, judiciales, armadas) en condiciones de reprimir las actuaciones subversivas. La reacción se ve abocada, por consiguiente, a descomponer ese aparato del estado que no controla suficientemente, y cuya dinámica de "dominación" en alguna medida está funcionando en favor de los trabajadores y sus intereses. Pero así como la clase obrera en insurrección ha pensado en —y ha declarado— la necesidad de "destruir" ese aparato de dominación sobre ella que es el aparato del estado existente, la burguesía insurrecta se ve obligada a pensar, razonar y actuar en los mismos términos (pero sin poder descubrirlo), en la medida que lo que tienen enfrente no es un *estado obrero* o *popular*, sino su propio aparato del estado liberal tomado *por dentro* por su clase antagónica y, hecho decisivo, que es utilizado para transformar las estructuras socioeconómicas sobre las que se apoya la hegemonía social de la burguesía. Si la opción fascista no es recusable —condena de la "democracia y del liberalismo decadentes"—, la burguesía se ve forzada a mantener el enfrentamiento ideológico en torno de los mismos valores y principios que

—objetivamente— necesita destruir. Y no deja de hacerlo en la primera ocasión que se le presente.

El aparente círculo vicioso sólo existe, no obstante, en el terreno de lo conceptual. En la práctica, es roto mediante distintos procedimientos, de los que merecen ser destacados los dos principales. En primer lugar, imputando al movimiento popular que va a instalarse en el gobierno —o que ya lo ha logrado— los propósitos antidemocráticos, de subversión del régimen legal y sus instituciones, de perturbación económica y social, etc., que están siendo puestos en práctica por la reacción indígena y sus fuerzas aliadas en el sistema capitalista internacional, sin el menor escrúpulo. Valgan unos pocos ejemplos tomados al azar: cuando el 22 de octubre de 1970 la conspiración militar anti-UP llega a su fase ejecutiva y el comandante en jefe del ejército muere asesinado, los órganos de expresión de los putschistas intentan responsabilizar del atentado a sectores de izquierda. Previamente, el 7 de octubre partió desde Washington la siguiente instrucción a la estación de la CIA en Santiago:

a) Reunir información sobre oficiales de mentalidad golpista. b) Crear un clima de golpe mediante propaganda, desinformación y actividades terroristas dirigidas a provocar a la izquierda para tener un pretexto para un golpe.³⁶

El día 14 de octubre, el puesto de mando de Washington precisaba:

Informar a esos oficiales golpistas que el gobierno de EE. UU. les dará su respaldo total en el golpe, con excepción de una intervención militar directa por parte de Estados Unidos.³⁷

Cuatro días después, el cuartel general de la CIA comunicaba a Santiago:

1) Parece todavía que el golpe Ref. A no cuenta con un pretexto o justificación suficiente para hacerlo aceptable en

36. Cable 611, Hq. a Santiago (7 octubre 1970), citado en *Alleged assassination plots*, p. 234.

37. Cable 762, Hq. a Santiago (14 octubre 1970), *ibid.*

Chile o América latina. Parece, por consiguiente, necesario crear uno para sostener lo que va a ser probablemente su invocación de un golpe... Pueden incluir varios temas de justificación del golpe para ser utilizados por los militares. Puede incluir, entre otros: A. Dar a entender con énfasis que los cubanos proyectan reorganizar todos los servicios de inteligencia según el molde soviético-cubano, para crear así la estructura de la policía del estado... B. Que la situación económica es un caos; C. Que al reconocer rápidamente a Cuba y los países comunistas, Allende piensa que los EE. UU. van a cortar su ayuda a las FF. AA., y así debilitarlas como barrera constitucional, para entonces vaciar las armerías en manos de milicias populares comunistas con la misión de poner en práctica una campaña del terror, basada en imaginarios sabotajes laborales y económicos (usen algunas citas de Allende para esto)...³⁸

En junio de 1973, cuando por primera vez la conspiración militar logró sacar los tanques a la calle para disparar contra el palacio presidencial, los órganos de expresión de la derecha —como la revista PEC—, llenan la primera página con este titular: “UP intenta golpe militar”. Y si el 26 de julio del mismo año, terroristas de la extrema derecha matan al edecán naval del presidente, comandante Araya, miembros de la oposición parlamentaria y la prensa de la cadena *El Mercurio*, con la complicidad de algunos miembros del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, realizan un espectacular montaje para “demostrar” que el verdadero asesino es nada menos que... el jefe de la escolta personal del presidente.

Es precisamente el fenómeno de la Unidad Popular, la coalición de todo el movimiento obrero en torno de un mismo programa y de una misma línea de acción operativa, el factor que más peligroso se revela contra las fuerzas capitalistas instaladas en Chile. Todo cuanto contribuya a dividir el movimiento obrero en organizaciones y planteamientos divergentes será estimulado.

Frente al hecho sin precedente de que una alianza popular, con un candidato marxista, sea llevada electoralmente a la dirección del estado, las fuerzas conservadoras del sistema capitalista comprenden muy pronto el peligro que esto encierra no

38. *Ibid.*

sólo para Chile, sino para el conjunto de países industriales con regímenes democrático-liberales institucionalizados. Como sintetizaba el informe de la CIA del 7 de septiembre de 1970:

En relación con las amenazas para los intereses de Estados Unidos, concluimos que:

1. Los Estados Unidos no tienen intereses nacionales vitales en Chile. Podría haber, con todo, algunas pérdidas económicas tangibles.
2. La balanza militar mundial no se vería alterada significativamente por un gobierno de Allende.
3. Una victoria de Allende podría significar, sin embargo, costos políticos y psicológicos considerables:
 - a) La cohesión del hemisferio podría verse amenazada por el desafío que un gobierno Allende plantearía a la OEA, y por las reacciones que ello provocaría en otros países. No se ve, sin embargo, ninguna amenaza probable a la paz de la región.
 - b) Una victoria de Allende representaría un reculón psicológico definido para Estados Unidos y un avance psicológico definido para las ideas marxistas.³⁹

Este último era el principal desafío que percibía el capitalismo internacional. De ahí que desde un primer momento las fuerzas antisocialistas se esforzaran en alterar la línea táctica que acababa de salir victoriosa el 4 de septiembre de 1970. Para ello tenían que estimular a los grupos partidarios de proceder de acuerdo con los supuestos de la vía armada, para moverles a actuaciones violentas o anómicas e impedir, así, el normal desarrollo de la línea programática de la Unidad Popular de crear un proceso socialista de desarrollo sin tener que iniciarlo tras una guerra civil. El "desbordamiento" de la UP por su izquierda fue deliberadamente buscado por las organizaciones norteamericanas y la reacción indígena, para responsabilizar con este pretexto al conjunto del movimiento popular de ser el origen de los efectos perturbadores que de hecho eran el resultado de la puesta en práctica de medidas contrarrevolucionarias.

39. Intelligence Memorandum, "Situation following the Chilean presidential election", CIA's Directorate of Intelligence (7 septiembre 1970), *ibid.*, p. 229.

Es notable la claridad con que la derecha apreció, desde un comienzo, que uno de sus principales objetivos tácticos consistiría en obligar al gobierno UP a adoptar medidas de fuerza ante el hostigamiento de la reacción interna y la presión proveniente del extranjero. Calculaban que al obligar a Allende a apartarse de su línea central de acción, de su estrategia indirecta, iban a conducirlo al terreno propio de la lógica del enfrentamiento directo entre los sectores antagónicos. Y evaluaban esta situación como la ideal para aislar al gobierno y a la UP desde el punto de vista social, estimulando la reacción adversa de las Fuerzas Armadas.

PROVOCAR LAS CONDICIONES DE LA VIOLENCIA Y ARRASTRAR A ALLENDE A ACCIONES DE FUERZA

Todo aquello que dentro de la izquierda se correspondiera con la táctica que tomaba como modelo crear las condiciones de un enfrentamiento armado como medio de resolución del conflicto de clases, interesaba a la contrarrevolución. La utilización —e infiltración— de la extrema izquierda a estos efectos fue hecha con método antes y después de la instalación del gobierno UP, a pesar de que el agente de la ITT en Chile no se equivocaba cuando, tres días después del ingreso de Allende en La Moneda, estimaba que éste no cambiaría de línea táctica ante las provocaciones y presiones. Perseverancia del nuevo gobierno que si, por un lado, exasperó cada vez más a sus enemigos, por otro lado le permitió sortear durante tres años escollos sucesivos y, por último, forzar a la contrarrevolución a sus opciones más costosas, que se materializaron simbólicamente en el asesinato del general Schneider, en octubre de 1970, y en la masacre que se inició el 11 de septiembre de 1973.

El primer asesinato provocó una situación militar desfavorable a la contrarrevolución, cuyos efectos se prolongaron durante tres años. La masacre de 1973 representa, en un sistema de alto desarrollo político, como es el caso de la nación chilena, la derrota *política* definitiva de la burguesía como fuerza social competitiva. En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competen-

cia para retener o alcanzar el poder político, pues se sabe condenada de antemano. Un crimen contra la colectividad genera reacciones masivas de tal envergadura que sólo la represión violenta puede intentar contenerlas.

13 de septiembre de 1970: ⁴⁰

Una solución constitucional, por ejemplo, podría resultar de desórdenes internos masivos, huelgas, guerrillas urbana y rural. Esto justificaría moralmente una intervención de las Fuerzas Armadas por un período indefinido. Pero se desprendería de la exposición de Matte que hay pocas esperanzas de que esto ocurra. Los marxistas no se dejan provocar. "Se les puede escupir en la cara en la calle —dijo Matte—, y darán las gracias." Esto significa que la ultraizquierda se da cuenta y toma todas las precauciones para neutralizar la provocación.

29 de septiembre: ⁴¹

Una esperanza más realista entre los que desean detener a Allende es que una economía en rápido deterioro (corridas bancarias, quiebras de fábricas, etc.) provoque una ola de violencias que resulte en un golpe militar.

[...] Los militares no actuarán a menos que las condiciones internas requirieran su intervención.

Más importante, el desempleo y la intranquilidad masivos podrían producir suficiente violencia para obligar a los militares a moverse. El éxito de esta maniobra depende en gran medida de la reacción de la extrema y violenta izquierda (castrista-marxista) en el campo de Allende. Hasta ahora ha sido capaz de mantener estos elementos bajo control.

Una facción de extrema derecha lanzó una serie de actos terroristas el domingo 27 de septiembre (casi todos bombas), en lo que parece ser un intento de aficionados para provocar al sector castrista-marxista a una respuesta violenta que produciría las condiciones conducentes a la intervención militar. Las bombas no lograron soliviantar nada, fuera de una rápida acción policial de la que resultó el arresto de algunos de los terroristas. Nos dicen las fuentes más autorizadas que éste fue el último

40. *Hearings...*, cit., p. 612. Al primer vicepresidente de la ITT.

41. *Ibid.*, pp. 623-624.

intento de la extrema derecha de provocar a la extrema izquierda de esta manera.

6 de octubre (conversación con el jefe de Operaciones Clandestinas de la CIA): ⁴²

Broe dice que el país está todavía agitado, parece que las mujeres, los trabajadores y los campesinos están en contra de un compromiso —"éste es el grupo que más luchará"— y si hubieran erupciones los militares podrían tomar una resolución.

Broe aconseja seguir haciendo presión: para que Allende no asuma el mando con "respaldo total" y también para debilitarlo en la medida que podamos después que inicie su mandato —además, "siempre hay una oportunidad, algo puede ocurrir más tarde"—. La semana pasada a Allende le propusieron [la DC] que aceptara ciertas condiciones antes de tomar el control del gobierno, lo que no aceptó. Ahora se da cuenta que esta última postura era un error; ha cambiado de opinión y ha aceptado negociar con ellos.

6 de noviembre: ⁴³

La opinión de los conservadores chilenos, quienes tratan ahora de negociar con Allende, de que las represalias políticas y económicas de los EE. UU. forzarán a Allende a moverse más a la izquierda, es una apreciación correcta.

La opinión de otro sector, de que las represalias de los EE. UU. desplazarán a Allende hacia el campo de extrema izquierda y que esto desencadenará una reacción popular y militar contra su gobierno, tiene poco mérito.

LA DESINTEGRACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO-SOCIAL COMO VEHÍCULO DEL GOLPE MILITAR

El plan anti-Unidad Popular del gobierno y empresas norteamericanas, ejecutado a través de los sectores capitalistas chilenos, fue concebido en función de la realidad del país austral. La solidez de sus instituciones estatales, tanto civiles como mi-

42. *Ibid.*, p. 641. Al primer vicepresidente de la ITT.

43. *Ibid.*, p. 750. Memorándum de la ITT.

litares, dificultaba las soluciones más sencillas, de menor costo no sólo para el éxito del plan sino para sus efectos posteriores: fraude electoral, fraude a la Constitución (golpe parlamentario) o putsch militar incruento. Sucesivamente, cada una de estas opciones fue fracasando.

En un proceso revolucionario, la reacción contrarrevolucionaria no cesa mientras cuenta con alguna fuerza. Ésta será equivalente a la que pueda sumar la alianza entre las fuerzas capitalistas internacionales y las autóctonas de una sociedad nacional. Su conjunción recurrirá a todos los procedimientos para salvaguardar la hegemonía de sus intereses: desde la eliminación física de las personas individuales o grupos específicos hasta la descomposición y destrucción de entes colectivos. Pues no otra cosa es el propósito deliberado de provocar la desintegración de un sistema económico y político, para sumir a una comunidad en una situación de desorganización social aguda que perturbe sus mecanismos de equilibrio y ajuste.

A esta conclusión llegaron en Washington y Santiago en 1970. La crisis política total, el reemplazo de los mecanismos políticos democráticos para encauzar la lucha social por los militares de fuerza —golpe militar—, sólo aparecía posible si se provocaba un *colapso económico*, con las consecuencias inherentes sobre la estructura social y lo que de esta última depende. En su informe a H. Kissinger y a Ch. Meyer del 21 de septiembre de 1970, el embajador Korry comunica que “en caso de necesidad, el general Schneider tiene que ser neutralizado, sacándolo de en medio si es preciso”, y que a través del ministro de Defensa le ha enviado el siguiente mensaje al presidente Frei: si Allende asume la presidencia “Frei debe saber que no permitiremos que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca bajo Allende. En cuanto Allende asuma el poder, haremos todo cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y a los chilenos a las mayores privaciones y miserias, una política diseñada a largo plazo para lograr acelerar los duros rasgos de una sociedad comunista en Chile. En consecuencia, si Frei cree que va a haber otra alternativa que la miseria total, que ver a Chile en la absoluta postración, es un iluso”.⁴⁴

44. Según la documentación presentada por el gobierno de Estados Unidos ante la comisión investigadora del Senado, *Alleged assassination plots*, p. 231.

Se necesita tener un singular sentido de la dignidad para que un gobernante o dirigente nacional, por más que sea demócrata cristiano, encaje sin rechistar semejantes amenazas primero, y después coopere en su instrumentación, contra su propio país...

En la dimensión puramente militar de la desintegración del sistema político chileno, debían tomarse las medidas idóneas para que el conjunto de las instituciones armadas lo respaldaran, de modo tal que resultara imposibilitada toda división interna de las Fuerzas Armadas que permitiera a los sectores populares contar con respaldo militar orgánico. Lo óptimo era reducir al mínimo los riesgos de “guerra civil” real, aumentando correlativamente la amplitud factible de “masacre civil”, es decir, desangramiento de la clase obrera y de sus dirigentes, sin contrapartida.

De tener éxito esta confabulación, Estados Unidos tendría la garantía de que un país situado dentro de su perímetro de hegemonía no generaría contradicciones para su estrategia continental y mundial. Para el país en cuestión, conllevaría el costo de una desintegración social y económica profunda, quebrando los pilares básicos de su organización estatal. Los sectores conservadores indígenas mostraron su disposición a colaborar en la instrumentación de semejante designio, necesario para preservar su propia hegemonía local.

El 28 de septiembre de 1970, tras las deliberaciones del Comité Cuarenta antes mencionadas, el general J. M. Philpott, subdirector de la DIA (Defense Intelligence Agency), de las FF.AA. de EE. UU., enviaba a un agregado militar en Santiago una carta del siguiente tenor:

[...] debe trabajar en estrecha colaboración con el jefe de la CIA o, en su ausencia, con su adjunto, y asesorarle sobre las principales figuras militares que pueden jugar un papel decisivo en cualquier movimiento que pueda, eventualmente, negar la presidencia a Allende. No ponga al corriente de este mensaje ni al embajador ni al adicto de Defensa, ni les dé indicios de su sentido. En sus actividades de rutina, siga las instrucciones del embajador. Simultáneamente, yo quiero —y le autorizo ahora— que proceda de manera concertada con el jefe de la CIA. Este mensaje es sólo para usted, y no debe ser discutido

con nadie más que con los agentes de la CIA que serán reconocibles. La CIA se los identificará.⁴⁵

29 de septiembre: ⁴⁶

El presidente Eduardo Frei quiere detener a Allende y lo ha dicho a sus íntimos. Pero quiere hacerlo constitucionalmente. O sea, a través ya de un vuelco del voto en el Congreso o de una crisis interna que requiera intervención militar.

Todas las evaluaciones anteriores de la debilidad de Frei frente a una crisis se están confirmando. Peor, se ha establecido sin lugar a dudas que ha estado jugando un doble juego para preservar su propia imagen como campeón de la democracia latinoamericana. Por ejemplo: les dijo a algunos de sus ministros que estaría dispuesto a ser depuesto por un golpe militar. Esto lo absolvería de cualquier complicidad en un golpe que, a su vez, derrocaría a Allende. Luego se dio vuelta en redondo y dijo a los jefes militares que estaba absolutamente en contra de un golpe.

1. En este momento parece difícil que se derrote a Allende en el Congreso. El candidato demócrata-cristiano derrotado, Radomiro Tomic, todavía apoya a Allende, y puede llevarse consigo un sector importante del voto PDC.

2. A pesar del pesimismo, continúan los esfuerzos para mover a Frei y/o los militares a actuar para detener a Allende.

3. Aunque sus probabilidades de éxito son débiles, no debe desestimarse un bloqueo de la asunción del poder por Allende a través de un colapso económico que tendría brillantes posibilidades.

6 de octubre: ⁴⁷

Los militares todavía podrían hacer algo.

Broe dice que debe mantenerse la presión sobre ellos; ha enfatizado esto varias veces. Sugirió algo como una corrida bancaria; cualquier cosa que mantenga la presión.

45. Cable 380, Hq. a Santiago (28 septiembre 1970), *ibid.*, p. 236.

46. *Ibid.*, p. 623. Memorándum de la ITT.

47. *Ibid.*, p. 642. Carta del vicepresidente de la ITT en Washington al primer vicepresidente.

9 de octubre: ⁴⁸

Hoy he almorzado con nuestro contacto en la Agencia Mc Lean ^{48 bis} y he sintetizado para Ud. los resultados de nuestra conversación. El todavía está muy, pero muy pesimista acerca de la derrota de Allende, cuando tenga lugar la sesión del Congreso el 24 de octubre. Se continúa tomando contactos para que adelanten algún tipo de levantamiento... no hay éxitos hasta la fecha.

La CIA de Santiago informaba a la central que la tendencia anti-Allende dentro de las Fuerzas Armadas y en carabineros se encontraba inmovilizada "por la tradición de los militares de respetar la Constitución" y por "la actitud, pública y privada, del general Schneider —comandante en jefe del Ejército— de abogar por la estricta adhesión a la Constitución". La Agencia se encontraba con el obstáculo de tener que remover "la inercia apolítica, constitucionalmente inspirada, de los militares chilenos".⁴⁹

El 13 de octubre, la estación de Santiago informaba a Washington que el "general Viaux se propone raptar a los generales Schneider y Prats dentro de las próximas 48 horas, para precipitar un golpe".⁵⁰

Tres días después, el cuartel general de la CIA ordenaba a Santiago:

2. Es una actitud firme y mantenida que Allende tiene que ser derribado por un golpe [...] Nosotros debemos continuar creando la máxima presión con este fin, utilizando cualquier recurso idóneo.⁵¹

El 22 de octubre, a las 2 de la madrugada, el agregado militar de Estados Unidos entregaba en un lugar de Santiago tres metralletas a los oficiales del ejército chileno que iban a neutralizar al general Schneider. El general Valenzuela, jefe de la

48. *Ibid.*, p. 644. Del vicepresidente de la ITT en Washington a J. J. McCone, director de la ITT y ex director de la CIA.

48 bis. Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA).

49. Agencia Central de Inteligencia norteamericana, "CIA Report on Chilean task force activities" (18 noviembre 1970), p. 17, *ibid.*, p. 240.

50. Cable 527 (13 octubre 1970), *ibid.*, p. 242.

51. Cable 802, Hq. a Santiago (16 octubre 1970), p. 243.

guarnición de Santiago, dirigía el operativo, y había obtenido la promesa de la CIA de recibir 50.000 dólares, a cobrar después de ejecutar el plan.⁵² Poco después de las 8 de esa misma mañana, el automóvil de Schneider era interceptado cuando se dirigía a su oficina, y el comandante en jefe era mortalmente herido. Lo que permitió al equipo de la CIA en Santiago estimar que "a sólo 24 horas de la reunión del Parlamento, un clima de golpe existe en Chile... El ataque contra el general Schneider ha producido consecuencias muy próximas de las previstas en el plan de Valenzuela... En consecuencia, la posición de los complotadores ha sido reforzada".⁵³

El día siguiente, el director de la CIA, R. Helms, resumió el contenido de las deliberaciones en Washington:

Hubo acuerdo... en que un esfuerzo máximo ha sido realizado, y que ahora sólo los mismos chilenos pueden organizar un golpe con éxito. Los chilenos han sido guiados a un punto donde una solución militar está, por lo menos, abierta para ellos.⁵⁴

El gobierno de Estados Unidos había guiado a Chile al golpe de estado. Pero, por esta vez, la solidez de los factores internos chilenos podían resistir tan formidable presión. El programa conjunto de subversión del orden constitucional de la sociedad chilena ejecutado por Estados Unidos, el presidente Frei y la derecha criolla, fracasó.

Evocando, el 5 de noviembre de 1970, el peligro que se había cernido sobre el país, Salvador Allende manifestaba en su primer discurso como presidente:

En estos sesenta días decisivos que acabamos de vivir, Chile y el mundo entero han sido testigos, en forma inequívoca, de los intentos confesados para conculcar fraudulentamente el espíritu de nuestra Constitución; para burlar la voluntad del pueblo; para atentar contra la economía del país y, sobre todo, en actos cobardes de desesperación, para provocar un choque

52. "CIA Report on Chilean task force activities", p. 22; cit en ibid., p. 245. El 22 de octubre la CIA de Santiago informó a Washington que "la estación ha instruido al agregado militar que tenga listos 50.000 dólares si el general Valenzuela los pide" (cable 592, Santiago a Hq., ibid., p. 245).

53. "Chile task force log." (22 octubre 1970).

54. "Chile task force log." (24 octubre 1970).

sangriento, violento, entre nuestros conciudadanos. Estoy personalmente convencido de que el sacrificio heroico de un soldado, del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, ha sido el acontecimiento imprevisible que ha salvado a nuestra patria de una guerra civil. [...] episodio increíble, que la historia registrará como una guerra civil larvada, que duró apenas un día [...].

¿Por qué fracasó el plan subversivo? Más allá de los hechos episódicos, las razones que frustraron su buen éxito podrían sintetizarse en las dos siguientes:

1) *Tiempo*. En seis semanas fue imposible provocar un nivel de deterioro suficiente en un sistema de instituciones robustas y flexibles como era el chileno. No sólo en el terreno económico, social y militar, sino tampoco en el ideológico valorativo.⁵⁵

2) *Ausencia de imbricación con la dinámica social*. La acción desintegradora fué llevada a cabo en los medios supraestructurales —direcciones de los partidos políticos, Parlamento, gobierno, alto mando militar, grandes asociaciones de propietarios privados—. Pero no fue posible articularla en profundidad con la estructura social para provocar agudas contradicciones internas y explotarlas políticamente. Es importante subrayar que la configuración coyuntural de Chile en 1970 lo hacía imposible, por el hecho de que no sólo el bloque social que conformaba la UP estaba en conflicto con el conservador que respaldaba a Alessandri —base social de la conspiración— sino también la mayor parte del que se agrupaba detrás de la candidatura centrista de Tomic. Conviene tener presente que desde 1967 la derecha conservadora chilena era contraria a la política gubernamental democristiana y a sus iniciativas de reforma modernizante del sistema capitalista.

En síntesis, el plan de intervención norteamericana de septiembre-octubre de 1970 sigue el esquema siguiente:

55. El director de la CIA, R. Helms, declaraba el 15 de julio de 1975 ante la comisión senatorial de encuesta: "[...] mi corazón se encogía en aquellas reuniones, porque [...] la posibilidad de llevar a cabo algo como aquello me parecía entonces absolutamente remoto. En términos prácticos, el ejército era constitucionalista [...] Y cuando uno mira el margen de tiempo dentro del cual el hombre [Nixon] exigía de imprevido realizar algo, parecía casi realmente inconcebible [...]". Ibid., p. 233.

Chile, 1970. Plan de intervención de Estados Unidos

Acciones originales simultáneas	A. Manipulación y desnaturalización de las instituciones políticas	B. Sabotaje del sistema económico desde el extranjero y desde el interior	C. Provocaciones para arrastrar a la izquierda a la "violencia" y a la "acción directa"	D. Campaña psicológica nacional e internacional contra el movimiento popular, "perturbador del orden y la paz"
Efectos derivados de seados	Desorden político	Desorden económico-social	Desorden público	Desorden valorativo-ideológico
Objetivo primero a alcanzar mediante A + B + C + D: derrota política de la UP	a) Ruptura de la cohesión de la alianza popular b) Propiciar antagonismos entre la UP y sectores centristas (DC)			
Objetivo sustitutivo y recurso último: derrota militar de la UP	Golpe militar. Destrucción del régimen político democrático			

LA ESTRATEGIA INDIRECTA CONTRA UN GOBIERNO CON VOLUNTAD DE INDEPENDENCIA

El centro hegemónico norteamericano no recurre a medidas de intervención directas sino que lo hace de modo encubierto, combinando a las distintas fuerzas aliadas de Estados Unidos y a sus organizaciones económicas, políticas y militares, de las que las propiamente chilenas no son sino una parte.

Para lograr sus objetivos en Chile, Estados Unidos prefiere servirse de las instituciones militares externas, como las de Brasil, Bolivia y Argentina, del Pacto Interamericano de Defensa, más bien que de sus propios "marines". El Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, el Import-Export Bank, la Agencia Interamericana de Desarrollo, serán los instrumentos principales de estrangulamiento financiero, pero Estados Unidos no proclamará abiertamente el boicot económico a Chile, como hizo con Cuba. El comité *ad hoc* de empresas multinacionales, coordinará con el gobierno de Estados Unidos las acciones de sabotaje internacional de la economía chilena, pero las declaraciones oficiales negarán siempre que haya una política de discriminación hacia este país. Los servicios pertinentes del Pentágono, de la CIA, del Instituto Latinoamericano para el Sindicalismo Libre, etc. promoverán, financiarán y coordinarán la subversión dentro de Chile, pero en sus testimonios ante las comisiones de encuesta del Congreso sostendrán que no están en condiciones de reconocerlo ni de negarlo.

Al igual que ocurrió en Chipre con el régimen democrático de monseñor Makarios en julio de 1974, no serán las tropas de la VI flota norteamericana las que derrocarán a un presidente que rechazaba la incondicionalidad frente a Estados Unidos, sino las auxiliares de la Junta militar griega. De no mediar las tropas británicas estacionadas en Chipre, probablemente Makarios no hubiera escapado con vida a un putsch que contemplaba su eliminación física inmediata. A no ser por la viva reacción turca y su respuesta desembarcando tropas en la isla, la militarización de ésta hubiera seguido probablemente el mismo destino al que fue arrastrado Chile en 1973 y en 1967 la propia Grecia.

El mantenimiento de la hegemonía norteamericana en las regiones bajo su influencia, requiere la creciente cohesión interna de su sistema internacional. Esta cohesión exige el reconocimiento efectivo de su liderazgo, entendido como la subordinación de los demás países a las directrices económicas, políticas y militares con las que Estados Unidos entiende defender sus intereses. Cuanto más se impone el reconocimiento de la realidad militar y económica de los países socialistas, obligando a aceptar la coexistencia, cooperación y distensión con ellos, mayor es la necesidad que tiene Estados Unidos de reducir las veleidades de "independencia", "no alineamiento" o insubordinación dentro del mundo capitalista. Si esto es compatible con el mantenimiento de regímenes políticos liberales, tanto mejor. Pero si las instituciones democráticas de algún país abren paso a movimientos "antiimperio" (Chile) o simplemente "autonomistas" (Chipre), las fuerzas de mantenimiento de la disciplina deben intervenir de inmediato. Si las presiones políticas o económicas no resultaran suficientes, se aplican las militares, cualquiera que sea el costo de esta operación para la comunidad nacional así reprimida.

No se vea en esta presentación de la política internacional norteamericana la voluntad de caricaturizarla. Las propias autoridades de Washington no tienen reparo en expresarse en términos semejantes. El 26 de junio de 1974, el presidente Nixon recordaba en la sede de la OTAN, pocas horas antes de partir hacia Moscú, dos verdades elementales:

a) La *cohesión* occidental es la piedra maestra de la distensión socialista-capitalista.

b) El mantenimiento de la fuerza de la OTAN es la contrapartida complementaria de esta distensión.⁵⁶

Naturalmente, Kissinger precisaba ante la comisión de Finanzas del Senado que "nosotros no tenemos tropas en Europa para dar en el gusto a los europeos", y su adjunto, Hartman, concluía la idea agregando que esto no era "un acto de caridad política para proteger la seguridad europea, sino la de Estados Unidos".⁵⁷ Pues, para los actuales dirigentes norteamericanos, Occidente es un sólo todo bajo la responsabilidad de Estados

56. *Le Monde* (28 junio 1974), p. 2.

57. *Le Monde* (19 marzo 1974), p. 2.

Unidos, quienes tienen el deber de mantener su dirección (*leadership*).⁵⁸ Ya que, añade H. Kissinger, "EE.UU. tiene intereses y responsabilidades a escala mundial, mientras que nuestros aliados tienen sólo intereses regionales [...], la autonomía de Europa no es un fin en sí".⁵⁹

En este contexto resulta incoherente que haya quienes digan sorprenderse de que el presidente de Estados Unidos exija a los europeos que se alineen *política y económicamente* junto a ellos, bajo la menos sofisticada de las amenazas: retirarles su protección *militar*.⁶⁰ Sólo entre sus colegas ministros de Asuntos Exteriores en 1974, el francés Jobert osaba reconocer en voz alta la situación actual del mundo capitalista: "Los Estados Unidos sostienen que quieren una Europa 'independiente'. Pero cuando Europa ha querido mostrarse independiente o ha querido discutir, al señor Kissinger no le ha gustado nada. ¿Qué desca en Europa, aliados o criados?"⁶¹

Por último, el *establishment* de Estados Unidos ha extraído de su experiencia en Vietnam la conclusión de que en los países bajo su esfera de influencia es preferible ayudar a los amigos por medios que hagan innecesario el envío de tropas norteamericanas:

Yo estoy tentado de pensar —sostiene el secretario de Estado Kissinger— que la introducción de fuerzas militares americanas es el peor medio de hacer frente [a los movimientos contrarios a los intereses de EE. UU.] porque eso implica un elemento extranjero. Si nosotros queremos prestar servicio, es preferible que nos quedemos en el exterior para tratar de reforzar la capacidad de resistencia [de nuestro aliado] y proporcionarle ayuda, sin enviar fuerzas americanas.⁶²

Veamos lo que estos principios significan en nuestro caso particular:

15 de octubre de 1970: ⁶³

58. Declaración de H. Kissinger ante la comisión de Asuntos Exteriores del Senado el 7 de marzo de 1974.

59. Declaraciones del 23 de abril de 1974, según la Associated Press.

60. Discurso de R. Nixon en Chicago (15 marzo 1974).

61. Declaraciones al *New York Times* (10 marzo 1974).

62. Declaración ante la TV norteamericana (6 mayo 1975); *Le Monde* (8 mayo 1975).

63. *Hearings...*, cit., pp. 656-657. Memorandum de la ITT.

El embajador dice que hay varios cursos de acción, siendo el principal provocar a Allende y causar una ruptura en nuestras relaciones con Chile para que así pierda todo sin otra opción.

La segunda sería tratar de convivir con Allende —no apaciguarlo—, tomar una línea firme, pero tratar de negociar en cada oportunidad.

Parece que la segunda alternativa será la que adopte Estados Unidos.

La posición tendrá que ser adoptada pronto, debido a la asunción de Allende en noviembre. El presidente Nixon debe enviar un mensaje de felicitación o el mundo sabrá el desaire.

El embajador confidenció que tiene planeada una línea dura con Allende respecto al cumplimiento de obligaciones.

Personalmente tiene la impresión de que Allende va a pagar sus cuentas, con miras a mantener el prestigio internacional de Chile.

El embajador Korry cree que los puntos de presión de EE. UU. contra Allende incluyen nuestra fuente de fondos de desarrollo, mercado para los productos de Chile, nuestro prestigio internacional, etc. Parece pensar que puede insistir en que Allende se limitará a los procedimientos democráticos internos en lugar de ser un instrumento de Castro y Rusia.

Respecto a Rusia, Korry descarta la participación que los rusos pudieran haber tenido en la elección de Allende.

26 de octubre: Comentario de una autoridad de la Casa Blanca: ⁶⁴

A medida que ahondamos en este cuento, encontramos signos claros y específicos de que la administración Nixon, esto es, el mismo presidente, ve el desarrollo de la situación en Chile con una seria preocupación personal.

Bruscamente, pero no sin reflexión, este informador estima que si Chile estuviera en algún lugar próximo, en América central o en el Caribe, los Estados Unidos aplicarían gran presión para prevenir que Allende asumiera su puesto. Reconozco que esta idea está muy desacreditada como respuesta tradicional de los Estados Unidos en América latina, usada recientemente, en 1965, en la República Dominicana.

Creo que resulta bastante obvio que los militares chilenos

64. Ibid., p. 701. Del primer vicepresidente de la ITT al jefe del Servicio de Operaciones.

tienen la clave del futuro inmediato de Chile. En un escenario amplio, posible, los militares podrían sacar a Frei, meterlo en un avión y enviarlo para Estados Unidos o Europa, y preventivamente asumir el gobierno para evitar que Allende tome el puesto. Los militares, por supuesto, harían la promesa de convocar pronto elecciones libres.

Una estimación de Washington es que los militares chilenos tienen capacidad limitada para manejar violencia civil organizada, incluso con alguna ayuda foránea, digamos, de los muy interesados militares argentinos.

Si, después de un golpe militar, y una sangrienta guerra civil en Chile, los comunistas de Allende ganan de todas maneras, incluso la más leve supuesta huella de una ingerencia de Estados Unidos o apoyo abierto a un golpe, tendría efectos catastróficos en nuestras relaciones y prestigio en América latina.

Sin embargo, creo, y otra vez debo advertirle, no debe transmitir esta información por ninguna vía a Chile, donde los hombres de Allende ahora controlan la comunicación internacional, el embajador Korry puede estar comprometido con las instrucciones de Nixon para hacer todo lo posible para prevenir que Allende asuma el poder.

Esta nota de instrucciones de la Casa Blanca puede sugerirle a Ud. la profundidad de la preocupación presidencial por la situación chilena. Nixon, creo, entre otras razones, incluyendo el establecimiento en el hemisferio de un eje comunista entre La Habana y Santiago, piensa que esto puede afectarle ya desde ahora la elección del año 1972, con la imputación de que los comunistas alcanzaron un avance sustancial en el hemisferio durante su administración.

23 de octubre: Carta de W. R. Merriam, vicepresidente de la ITT a H. Kissinger, asesor del presidente Nixon: ⁶⁵

Creemos que los Estados Unidos deben considerar lo siguiente:

I. Siguiendo instrucciones presidenciales, el embajador norteamericano en Chile debe pedir audiencia pronto al presidente Allende con el propósito de informarle sobre la política norteamericana. La línea del embajador podría incluir:

a) Revisión de nuestra relación histórica con Chile; las aspiraciones democráticas de nuestros dos países; nuestras

65. Ibid., p. 720.

contribuciones en forma de ayuda, préstamos blandos, asistencia militar, socorro en terremotos y desastres, haciendo que se dé cuenta cabal de esta cifra total de UN BILLÓN QUINIENTOS MILLONES vertidos hacia Chile durante los 10 últimos años.

b) Bosquejar la vasta contribución económica y social a Chile por la inversión privada norteamericana.

c) Llamar su atención sobre sus propias amenazas a estas corporaciones e informarle de la profunda preocupación resultante.

d) Referirse al brusco temor económico que golpeó a su país después de la elección de septiembre e informarle de repercusiones semejantes sentidas en los círculos bancarios internacionales. (La United Press International informa que el Eximbank ha bajado a Chile a su categoría de peor riesgo. También informa que la Overseas Investment Corporation, otra agencia del Gobierno norteamericano, no está asegurando nuestras inversiones en Chile.)

e) Informar al presidente Allende de que, si su política requiere la expropiación de la propiedad norteamericana, los Estados Unidos esperan rápida compensación en dólares americanos y moneda extranjera convertible, como lo requiere la ley internacional.

f) Informarle de que, en el caso de no llegar pronta compensación, habrá repercusiones inmediatas en los círculos oficiales y privados. Esto podría significar la suspensión de todos los préstamos de bancos internacionales y de bancos privados norteamericanos.

g) Continuar esta tendencia con todas las presiones posibles que pudieran mantener al doctor Allende dentro de los límites.

II. Como una reafirmación de la política de los Estados Unidos en latinoamérica, cada embajador de los Estados Unidos en el hemisferio —y en la OEA— debe ser llamado al Departamento de Estado e informado individualmente de nuestra orientación diplomática con el doctor Allende.

LA WELTANSCHAUNG DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

El fracaso del plan ITT-CIA-Frei muestra las limitaciones con las que se encuentra la acción contrarrevolucionaria inducida desde el extranjero cuando opera sobre un país dotado de

estructuras internas orgánicas. Cuanto más desarrolladas se encuentran estas últimas, mayor es la necesidad de la potencia extranjera de actuar a través de agentes y mecanismos sociales internos. Sin embargo, cuanto mayor es el grado de penetración de la potencia hegemónica en los centros vitales del país dependiente —económicos, políticos, militares y culturales—, más factible resulta para la primera provocar en el segundo país las circunstancias propicias para sus intereses.⁶⁶

El modelo de acción internacional del capital siempre se ha apoyado en esta realidad. Las modernas empresas multinacionales no hacen sino convertirlo en más operativo gracias a su inmenso poder económico-técnico y a la creciente integración del sistema capitalista internacional, tanto a nivel interregional, Mercado Común Europeo, Mercado subregional andino, etc., como interregional.

Cedamos la palabra a los propios protagonistas. En este caso, a la empresa multinacional que llevaba la iniciativa, la International Telegraph and Telephone Co., en un documento cuya claridad hace innecesaria la glosa:

20 octubre 1970: ⁶⁷

Creemos que se debe obligar al Departamento de Estado a puntualizar por escrito sus puntos de vista, para permitir la confección de una historia formal de los hechos. El Departamento de Estado, como otras agencias, se ha equivocado totalmente sobre los acontecimientos en Chile, pero el Departamento de Estado tiene la responsabilidad fundamental de la posición de Estados Unidos y ésta ha sido consistentemente errónea. Suponemos también, basándonos en sus antecedentes, que probablemente también se equivoquen acerca de los efectos de la presidencia de Allende.

Un miembro del Directorio y yo proponemos que el programa delineado sea ejecutado por: el doctor Kissinger, Mr Meyer y Mr Irwin del Departamento de Estado: por ciertas

66. Una buena síntesis de las relaciones de integración entre los países hegemónicos y dependientes es la de J. Galtung, "A structural theory of imperialism", *Journal of Peace Research*, VIII, n.º 2 (1971).

67. Memorandum del primer vicepresidente de la ITT al jefe del Servicio de Operaciones, *Hearings...*, cit., p. 665.

otras personas a ser determinadas y, finalmente, por el secretario Rogers y el presidente. Cuando estas visitas se hayan realizado exigiríamos que representantes de Estados Unidos en los bancos internacionales tomaran una posición firme contra cualquier préstamo a países que expropian compañías norteamericanas o discriminen contra el capital privado extranjero. Como parte de esta acción general, recurriríamos a nuestros amigos en el Congreso para que advirtieran al gobierno que un permanente maltrato de los capitales privados de Estados Unidos llevará a suprimir el aporte de fondos de los contribuyentes a los bancos internacionales.

La libertad está muriendo en Chile, y lo que esto significa para Latinoamérica y para nosotros, y para los hombres libres de cualquier parte, no es algo grato de contemplar.

Los diez años de adverso rumbo de intranquilidad política y militar de Latinoamérica culminaron recientemente en Chile, donde un declarado marxista, el doctor Salvador Allende, fue elegido presidente. El mundo libre fue sacudido y la empresa privada extranjera, todavía tambaleante del dañino trato en Perú y Bolivia, fue dejada a tientos de medios para proteger sus inversiones.

Los políticos de Washington hace sólo pocos meses estaban usando a Chile como símbolo democrático. Ahora son incapaces de predecir cómo las políticas marxistas del doctor Salvador Allende afectarán al pueblo de Chile, a sus derechos democráticos y a su economía. No obstante, conforme a las promesas preelectorales de Allende, los resultados pueden ser anticipados.

El gobierno de los Estados Unidos de vez en cuando, en los últimos años, ha admitido que nuestros programas de ayuda en Latinoamérica no han cumplido sus objetivos. Aquellos de nosotros que hemos estado cooperando en el área por casi 100 años estamos íntimamente conscientes de esas fallas.

Al igual que el informe del Congreso, yo también siento que estamos en una encrucijada porque debemos decidir, no sólo si nosotros, nosotros mismos, debemos regresar a los principios fundamentales en que se fundó esta nación, sino también si vamos a permanecer firmes en pro de la democracia, del bienestar de aquellos amigos nuestros en Latinoamérica que han basado sus esperanzas y aspiraciones en nuestro poderío. Éste no es el momento de negar nuestra propia herencia, sino que es el momento de la verdad, en el que debemos ponernos de pie para que nos cuenten.

23 octubre: Carta del vicepresidente de la ITT a H. Kissinger: ⁶⁸

Nuestra compañía sabe que los pueblos de las Américas merecen una vida mejor y creemos que tenemos un gran interés en disminuir sus problemas. Los países mismos no pueden proporcionar los fondos que necesitan para el desarrollo, los contribuyentes norteamericanos tampoco, y la empresa privada norteamericana sólo puede proporcionar aquella parte que corresponde a un clima apropiado. Todos están de acuerdo en que el trabajo debe realizarse sobre una base coordinada.

26 de octubre: ⁶⁹

Este comentario refleja también el comentario de una fuente de la Casa Blanca que no puede ser mencionado directamente. Usted tiene copia del texto de esa instrucción de antecedentes de la Casa Blanca.

En sustancia, la fuente de la Casa Blanca expresó sus dudas de que si Allende gana (esto es, está confirmado el 24 de octubre) puede no haber otras elecciones libres en Chile.

La toma del poder de Allende, con todo lo que esto significa para Chile y el resto del hemisferio incluyendo a los Estados Unidos va a presentar problemas masivos según opina la Casa Blanca, especialmente para las fuerzas pro americanas de Latinoamérica. La Casa Blanca parece también reconocer que aparecen mínimas oportunidades para los Estados Unidos de usar su influencia en la situación chilena.

26 de octubre: Del primer vicepresidente de la ITT al vicepresidente de la empresa en Washington: ⁷⁰

Desde las elecciones chilenas la mayor parte de la prensa mundial expresa sus esperanzas de que Chile desarrolle su "propio tipo" de comunismo, más democrático y benigno, con libertades garantizadas y con mínima desarticulación de los negocios y la vida social y cultural. Tales esperanzas están bastante lejanas de las actuales perspectivas.

Ningún gobierno comunista de una nación importante, una vez instalado, ha sido nunca derrocado. Da lo mismo que

68. Ibid., p. 716.

69. Ibid., p. 701. Memorandum del primer vicepresidente de la ITT al jefe del Servicio de Operaciones.

70. Ibid., p. 711.

Allende haya llegado al poder como el primer jefe de estado comunista democráticamente elegido. Es una locura creer que le dará a la democracia otra oportunidad dentro de seis años. Cualquiera que sea la decoración es improbable que haya otra elección verdaderamente libre en Chile.

Con todo, pocos documentos son más reveladores que la carta dirigida por el presidente del Consejo de las Américas a Allende cuarenta y ocho horas después de que asumiera la presidencia. Para el capital norteamericano, no había que esperar que el gobierno chileno tomara la iniciativa. A los pocos días del fracaso del primer programa para provocar un golpe de estado, algunos de los párrafos destinados a sintetizar la razón de ser y objetivos perseguidos por las empresas multinacionales adquieren connotaciones singulares:

Nueva York, 5 de noviembre de 1970

Estimado señor presidente:

Como presidente del Consejo de las Américas, un grupo de 220 compañías con unos 2.000.000 de latinoamericanos ejecutivos, profesionales, y personal técnico, empleados y trabajadores a través de Latinoamérica, le escribo a Ud. después de mi cable del 3 de noviembre, para expresarle nuestra seria preocupación por lo que concierne al futuro de las relaciones entre las fuerzas productivas y dinámicas de Chile y las de Estados Unidos, y para subrayar nuestra posición en cuestiones que afectan al sector privado extranjero.

[...] Creo que las siguientes afirmaciones representan el consenso del pensamiento cara al futuro de la dirección de la mayoría de las compañías de Estados Unidos:

a) Empresas privadas clarividentes trabajando en estrecha colaboración con gobiernos clarividentes es hoy el mejor (estoy tentado de decir el único) método para el desarrollo. Hay muchos ejemplos hoy en todo el mundo para probar que este esfuerzo cooperativo del sector privado y el gobierno será incluso más esencial en el futuro.

b) La nacionalización de empresas económicas privadas, con la subsiguiente propiedad y gestión por el estado, inevitablemente supone un grave costo social para el pueblo y el país. Cientos de miles de ahorradores privados, no sólo extranjeros

sino también chilenos, van a estar forzosamente privados de sus inversiones en aquellas empresas cuya nacionalización está prevista por su plataforma. No hay ninguna evidencia de que el próximo gobierno chileno vaya a poseer, o pueda adquirir, los recursos para poder compensar por la nacionalización a estos cientos de miles de ahorradores en forma inmediata, adecuada y efectiva tal como está especificado en la ley internacional.

c) La compañía multinacional es hoy el elemento más efectivo para el desarrollo e incluso lo será aún más mañana, ya que:

1) La compañía multinacional "es internacional" en primer lugar para servir o desarrollar mercados. Esto es, prosperará sólo si el país que la recibe prospera. Tiene por vocación la prosperidad del país anfitrión. Planifica para el futuro.

2) La compañía multinacional es tan compleja que, para sobrevivir, tiene que estar manejada por una tecnoestructura eficiente con una filosofía de futuro con vistas a obtener beneficios y a su distribución. Estando básicamente orientada hacia el crecimiento, generalmente reinvierte un gran porcentaje de sus ganancias.

3) La compañía multinacional tiene poder y prestigio en su país de origen y puede ser el mejor aliado, allí donde importa, para "vender" las necesidades para el desarrollo en ultramar.

4) La compañía multinacional tiene los recursos tecnológicos, financieros, de personal, y la organización necesaria para el éxito. Opera según objetivos, pero es, en general, suficientemente flexible para reaccionar con la rapidez necesaria cuando considera el muy importante "factor tiempo de desarrollo".

5) La compañía multinacional mira a lo lejos y tiene mentalidad exportadora. Aunque reconoce el valor de programas inteligentes de sustitución de importaciones, no considera a éstos como un fin en sí mismos.

6) La compañía multinacional está tratando seriamente de aprender a ser un buen ciudadano a través del mundo. Debido a la sociedad dinámica y competitiva que ella soporta, sabe que si falla en esta tarea tan importante, otros están ahí para tomar su puesto. Además, su creencia fundamental en una filosofía competitiva la lleva a aceptar situaciones pluralistas en economías públicas-privadas sin el miedo infundado de ser sumergida.

[...] El Consejo de las Américas está hondamente preocupado de lo que puede pasar a las relaciones chileno-norteamericanas [...]. Nosotros estamos, sobre todo, preocupados por que [...] el sector privado de Estados Unidos pueda ser rechazado por Chile a cambio de teorías que alguna vez fueron nuevas, pero que ya no sirven para las nuevas necesidades del año 2000.

[...] El Consejo y las cooperativas multinacionales orientadas hacia el futuro que lo integran, están impacientes por trabajar con todos aquellos que buscan construir una economía pacífica e integrada a través del mundo, dedicada al rápido desarrollo social.

III LA LUCHA POR EL PODER DEL ESTADO

En mayo de 1954, durante la X Conferencia Interamericana de Cancilleres,

uno de los objetivos principales de la delegación de Estados Unidos [...] encabezada por el secretario de Estado Dulles, era lograr el pleno acuerdo entre las repúblicas americanas sobre una tajante e inequívoca decisión de actuar contra la intervención del comunismo internacional en el hemisferio, reconociendo la amenaza permanente que presenta para la paz y seguridad de este último y declarando su intención de adoptar medidas efectivas, individuales y colectivas, para combatirlo.¹

La Conferencia elaboró una "declaración de solidaridad en preservación de la integridad política de los estados americanos contra la intervención comunista internacional" que, entre otras cosas, afirmaba

el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier estado americano por el movimiento comunista internacional, extendiendo a este hemisferio el sistema político de un poder extracontinental, representaría una amenaza a la soberanía e independencia política de los estados americanos, poniendo en peligro la paz de América [...] ²

Es cierto. En enero de 1962, el octavo encuentro consultivo de cancilleres americanos reafirmaba los principios anteriores en los términos siguientes:

1. William G. Bowdler: "Report on the Tenth Inter-American Conference", *Bulletin* (Departamento de Estado de Estados Unidos), XXX (26 abril 1974), p. 634.

2. *Ibid.*, p. 638.

El sistema interamericano se basa en la firme adhesión de sus estados integrantes a ciertos objetivos y principios de solidaridad, declarados en los instrumentos que lo gobiernan; entre estos objetivos y principios se hallan [...] el rechazo de alianzas y acuerdos que pueden conducir a la intervención en América de potencias extracontinentales.³

Tres años después, en mayo de 1965, en nombre de estos principios desembarcaban en Santo Domingo los infantes de marina de Estados Unidos, arguyendo que

las naciones americanas no pueden, no deben y no desean permitir el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental.⁴

Es cierto. Entre 1960 y 1970 Estados Unidos invirtió más de mil quinientos millones de dólares en Chile para mantenerlo vinculado a su sistema político-económico-militar,⁵ y entregó

CUADRO 7

Préstamos concedidos a los gobiernos Frei y Allende por la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Banco Interamericano para el Desarrollo y el Banco Mundial

(en miles de dólares)

	AID	BID	BIRD	Total
Gobierno de Frei (4 nov. 1964 a 3 nov. 1970)	301.963	192.457	98.050	592.471
Gobierno de Allende (4 nov. 1970 a 11 sept. 1973)	0,00	11.600	0,00	11.600

FUENTE: Departamento de Estado de EE. UU., *Hearings...*, cit., pp. 531-533.

3. *Bulletin*, XLVI (1962), p. 281.

4. *Bulletin*, LII (1965), p. 746.

5. Memoria de la ITT a Henri Kissinger, asesor del presidente Nixon en materias de seguridad nacional, 23 de octubre de 1970 (*Hearings...*, cit., pp. 716-721).

decenas de millones a los movimientos conservadores para que impidieran a la izquierda llegar al gobierno. Por su parte, Henri Kissinger pensaba en Italia y Francia tanto como en América latina cuando sostenía el 16 de septiembre de 1970:

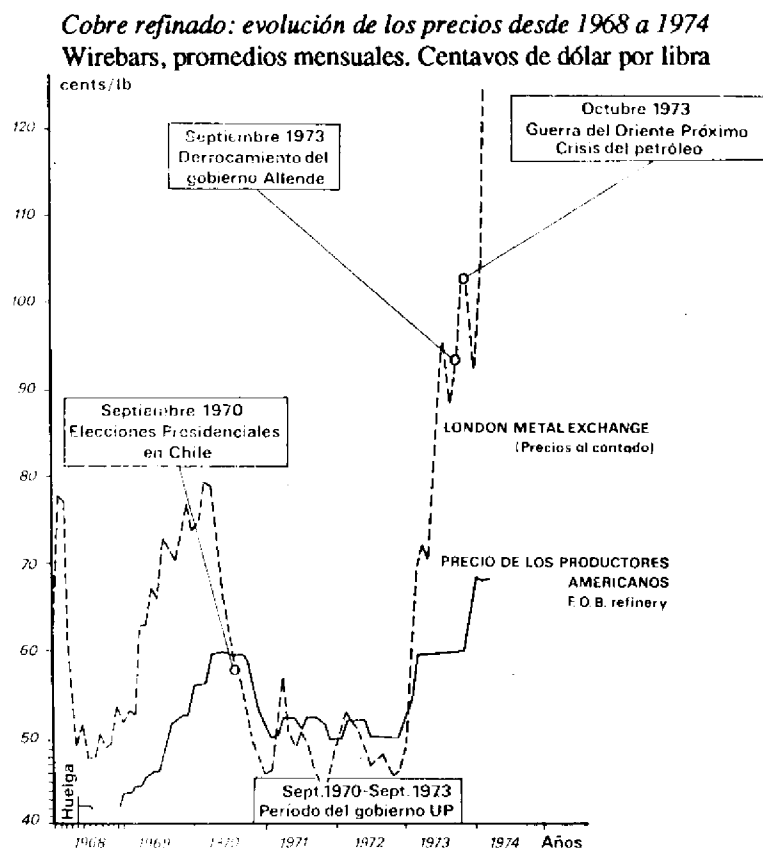
[...] yo no creo que debamos engañarnos a nosotros mismos pensando que si Allende toma el control de Chile ello no va a provocarnos enormes problemas, a nosotros, a las fuerzas democráticas y a las fuerzas pro-Estados Unidos en América latina, así como en todo el hemisferio occidental. Lo que acaecería con el Comité de Defensa del Hemisferio occidental, con la Organización de Estados Americanos, y así sucesivamente, es extremadamente problemático. Así es que nosotros estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos.⁶

Es igualmente cierto.

El cobre es un mineral clasificado como estratégico. Chile es el primer exportador mundial, y el principal miembro de la Organización de Países Exportadores de Cobre (OPEC) que, incluyendo a Perú, Zambia y Zaire, controla alrededor del 50 por ciento del mercado. La segunda mitad de 1973 es el momento en que los países productores de petróleo agrupados en la OPEP resuelven defenderse contra los efectos negativos que sobre ellos hace recaer la inflación del mundo capitalista, y elevan concertadamente el precio del crudo más allá de lo deseado por los países industriales importadores. Por primera vez en la historia del comercio entre los países dependientes exportadores de materias primas y los capitalistas, los primeros usan de las mismas armas económicas que los segundos. Los estados de la OPEP se autoemplazan así a la cabeza del movimiento que, en forma desigual y difusa, pero generalizada, está presionando en favor de una redistribución más equitativa de la riqueza entre los países industriales y los dependientes. Era de interés para Estados Unidos prevenir que los países de la OPEC no siguieran el ejemplo. Desde este punto de vista, hacer desaparecer al gobierno UP de Chile antes de que la crisis del petróleo estallara y reemplazarlo por un gobierno títere, era interesante para Estados Unidos. Es posible. Una escuadra de la marina de guerra norteamericana llega a las costas chilenas en la primera se-

6. *Ibid.*, p. 541.

GRAFICO 9



mana de septiembre de 1973, y el siguiente día 11 tiene lugar el golpe militar. Es cierto. En marzo y junio de 1975 dos otros miembros de la OPEC —Perú y Zaire— denunciaban la participación de los servicios secretos de EE.UU. en la preparación de sendos golpes de Estado frustrados. Es igualmente cierto.

Con la distancia, quizás razones geopolíticas como las anteriores adquieran un rango predominante para explicar el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y su reemplazo por una dictadura burguesa. No obstante, la intervención norteamericana, en colaboración con la derecha chilena, ha sido la

condición necesaria pero no suficiente para abrir las compuertas al terror contrarrevolucionario. Ha habido también necesidad de que dentro de la esfera de competencias del movimiento popular se dieran una serie de factores perturbadores, teóricos y prácticos, para que la violencia pudiera abatirse sin contrapeso sobre los trabajadores.

Los documentos aludidos en el capítulo anterior son exponente de la estrecha interrelación y dependencia entre las fuerzas activas del interior de Chile y los centros de decisión política, económica y militar de Estados Unidos. Pero junto a esta constatación surge con no menos nitidez una segunda: las maniobras de intervención de Estados Unidos no lograron el objetivo perseguido. Es decir, con toda su importancia los factores *externos* resultaron insuficientes. Frente a una realidad estructural coherente y cohesionada, fracasaron en su propósito.

En la vida política práctica, y en su prolongación ideológica, es frecuente encontrar exposiciones que insisten en el poder de intervención del *centro* (EE.UU.) sobre la *periferia* del mundo capitalista. Que semejante poder existe, es indiscutible. Que la voluntad de intervención cuenta con medios para convertirse en operativa, salta a la vista. Pero no por ello los méritos y deméritos de sus designios y realizaciones se encuentran sólo en el centro del imperio, en las estructuras internas de Estados Unidos. Más allá de las facilidades y simplificaciones propios de los debates de rasgos propagandísticos debemos tener presente el peso que en la realidad tienen los factores externos a los centros de decisión de Estados Unidos, entre los que se encuentran no sólo países y comunidades distintas de Norteamérica sino también los muy decisivos factores específicos de las estructuras nacionales individuales. En estrecha, ininterrumpida y compleja interacción, las combinaciones que se establecen entre esta multiplicidad de factores son cambiantes, creando situaciones de poder, recursos e influencias diferentes, según circunstancias de tiempo y lugar. Ello exige un enfoque especial para cada caso, evitando la generalización o reducción simplistas.

Una de las características dominantes en el plan de intervención norteamericana que acabamos de considerar, es la atención privilegiada que en él se concede a la presión sobre el sistema económico. En la medida que el funcionamiento de éste se

viera seriamente alterado, las perturbaciones sociales que se seguirían no sólo estimularían y facilitarían las manifestaciones reivindicativas de los sectores conservadores, sino que también alimentarían las acciones directas —de protesta o de “desbordamiento”— hacia el gobierno por parte de aquellos sectores populares de orientación revolucionaria afectados de uno u otro modo por las manifestaciones de crisis. Fenómeno éste que, de producirse, tendría sobre el gobierno el efecto de una acción de tenaza. Que no sólo amenazaría con conducirle a la situación de enfrentamiento abierto con la oposición conservadora descrita en el cuadro 8, sino que le pondría en contradicción con sectores de su propia base social de sustentación. Y, en esa medida, podía agrietar la coalición de la Unidad Popular, al obligar al gobierno a adoptar también en relación con algunas organizaciones de trabajadores las medidas A o B del cuadro mencionado.

La crisis económica, en la medida que altera o quiebra los mecanismos de control social y político de la comunidad, tiende a desencadenar corrientes de fuerza antagónica que perturban los mecanismos de regulación social del sistema pluralista de democracia representativa. Si éstos llegan a ser desajustados en sus bases de sustentación, un régimen de tipo autoritario termina por establecerse con el fin de imponer nuevos mecanismos sociales de ordenación. La clase o sector social que cuente con más poder, sobrepone su hegemonía sobre el conjunto del cuerpo social. La disyuntiva es o dictadura de la burguesía o dictadura del proletariado, en cualquiera de sus modalidades.

Entre 1970 y 1973, la oposición al gobierno popular ha usado la legalidad como instrumento para lograr tres efectos, aislados o acumulativos según el grado de desarrollo de la insurrección: a) obstrucción parlamentaria; b) bloqueo del aparato estatal, c) desarticulación del estado. Para ello ha procedido a:

1) Impedir la aplicación de las medidas necesarias para instrumentar la política del gobierno, en particular las que significan desplazar poder de manos de la clase dominante a las clases y sectores populares.

2) Impedir la creación de nuevas instituciones destinadas a ordenar y dirigir planificadamente los cambios socioeconómicos inherentes a un modelo no capitalista de desarrollo económico-social. Se trataba de imposibilitar que el estado desem-

CUADRO 8

El gobierno popular ante una dinámica acumulativa de desorden público de sectores conservadores y revolucionarios. Hipótesis límite que hacen inviable la continuidad del régimen político pluralista

		Efectos asimétricos sobre:	
		Base social de gobierno	Base social de oposición
ACCIÓN DEL GOBIERNO	A Impone el poder coercitivo del estado	Agudización de la contradicción entre el gobierno y el movimiento popular. Crisis y descomposición de la alianza sociopolítica sobre la que reposa el gobierno	Resistencia contra la “opresión” gubernamental. Provocación de una crisis de legitimidad del gobierno.
	B No aplica la coerción del estado	Incremento de las acciones directas. Disminuye capacidad de dirección y de control de las partidas gubernamentales. “Desbordamiento” del gobierno institucional.	Vía franca a las acciones de insurrección. Desconocimiento del gobierno. “Vacío de poder”.

peñara su función reguladora y normativa de la vida social. Lo que debía contribuir a incrementar la incompatibilidad institucional entre el gobierno y el resto del aparato del estado.

3) Forzar al gobierno a que, para cumplir con sus funciones específicas, tuviera que crear o servirse de mecanismos de conducción sociopolítica y económica al margen del régimen institucional o, en ocasiones, en contradicción con él.

La crisis del aparato del estado aparece así como indispensable para evitar que la capacidad orgánica del movimiento popular pueda servirse del poder estatal para contrarrestar a los factores y agentes de perturbación socioeconómica.

En la medida que las acciones anteriores no pudieran ser detenidas a tiempo, el gobierno popular podía verse reducido a las circunstancias principales siguientes:

a) Necesidad de adoptar medidas de fuerza más allá de sus capacidades reales en el interior y en relación con Estados Uni-

dos. Infringir el régimen legal suponía entrar en conflicto con el origen de la legitimidad del gobierno. En estas circunstancias, el aparato armado del estado dejaba de obedecerle. Al no disponer de fuerza militar propia, el gobierno popular sería desplazado. La presión norteamericana en los puntos sensibles —como las reuniones del Club de París⁷ en febrero de 1972 y el ultimátum después de marzo de 1973 sobre el monto de la indemnización de las empresas de cobre nacionalizadas—⁸ podían provocar que la UP adoptara medidas de represalia contra Estados Unidos. Circunstancia óptima para legitimar el bloqueo del país disidente en todo lo que estaba al alcance de Norteamérica.

Ello, además de perturbar la capacidad de homeostasis del sistema político-económico chileno, hubiera acelerado dentro del país efectos en cadena (económicos, sociales y militares), que no ofrecen mayor duda en cuanto al desenlace: término de la fase no amada del proceso revolucionario y reemplazo del gobierno UP.

b) Inmovilización relativa del gobierno respecto del ritmo de la dinámica social, pudiendo verse desbordado por su propia base de sustentación, lo cual conduciría a la desarticulación y fractura de la coalición de la Unidad Popular. Es decir, a la descomposición y destrucción interna del resultado acumulativo de la evolución histórica del movimiento popular, con el consiguiente derrumbe del gobierno UP. Situación que de producirse se desarrollaría paralelamente con la

c) Insurrección contrarrevolucionaria.

d) Mantener una situación de "equilibrio catastrófico" (Gramsci), propio de una crisis de hegemonía en la sociedad, que tiende a desembocar en una solución militar del precario equilibrio entre las clases antagónicas, previa descomposición de la alianza y coexistencia de clases en que reposa el gobierno y el conjunto del sistema político.

e) Apelación directa a los recursos tácticos mayores que

7. Reunión de los países industriales acreedores en la que se discutía la solicitud chilena de aplazar el pago de la agobiante deuda externa acumulada por los gobiernos anteriores a 1970 —unos cuatro mil millones de dólares—, cuyo servicio a reembolsar cada año equivalía a un tercio del presupuesto nacional.

8. El gobierno chileno no podía aceptar este ultimátum, por razones legales y políticas internas.

ofrece el sistema político representativo: acuerdo parlamentario, sufragio universal (elecciones, referéndum). Ello exige un requisito *sine qua non*: que la estructura estatal no esté quebrada o paralizada. Es decir, que la lucha de clases haya sido conducida de tal modo que pueda evitar este desenlace, o que los recursos tácticos del sistema político se pongan en acción *dentro del límite de tiempo* en que todavía es posible hacerlo. Si ya no existen los fundamentos socioeconómicos y militares que aseguren el vigor de estas técnicas políticas, invocarlas resulta vano.

f) Renuncia al gobierno. Como solución política que es, requiere los mismos condicionamientos que las opciones tácticas del párrafo anterior. Producida la crisis del estado en medio de una crisis de hegemonía social, esta opción es inviable. La dimisión del gobierno no basta ya para mantener la supervivencia del sistema político representativo. El proceso revolucionario se resuelve, en esta coyuntura, mediante la prueba de fuerza (violencia armada). Pues el movimiento popular, con un alto nivel de movilización, se resiste a que la burguesía recupere el poder total del estado y le arrebathe las conquistas sociales que ha alcanzado. A su vez, la burguesía siente la necesidad de acabar con las organizaciones autónomas de los trabajadores y sus posiciones de poder dentro del estado, pilares donde reposa la fortaleza del movimiento obrero y que han demostrado capacidad suficiente para poner en peligro la continuidad del sistema capitalista.

Control del estado. Cohesión y fortaleza de la estructura estatal. En este círculo neurálgico —el de la coerción organizada y legitimada—, se concentra el antagonismo de las clases en pugna por la hegemonía. En una fase de contradicciones sociales agudas, en la que la disputa gira directamente en torno del *poder* de dirigir la sociedad, el antagonismo entre los sectores sociales se manifiesta a todo lo ancho del cuerpo social. En medio de un proceso revolucionario, cuando es la propia estructura orgánica de la comunidad la que es objeto de presiones que se excluyen unas a otras, no hay institución ni organización en la que dejan de estar presentes, de un modo u otro, las corrientes de fuerza centrales que sacuden a la estructura social en busca de un nuevo equilibrio interno.

En otras palabras, para que en el desarrollo de un proceso

revolucionario el movimiento popular logre no sólo cuestionar sino *cambiar* los fundamentos económicos en que reposa el modo de producción capitalista, se requiere que previamente la dirección del estado se encuentre en manos del bloque social anticapitalista. Si éste llega a controlar el estado después de una resolución militar del antagonismo de clases, la cuestión se simplifica. La derrota militar de una clase hegemónica arrastra tras ella a las instituciones estatales esenciales preexistentes. Esto es algo que la práctica histórica ha demostrado ampliamente, tanto en las experiencias revolucionarias burguesas como en las socialistas.

Nuestra cuestión está planteada para otras circunstancias. Para aquellas en que se dan dos condiciones simultáneas: por un lado, el enfrentamiento bélico como camino de conquista del estado aparece cerrado para el movimiento prosocialista, mientras que, por otro lado, la vía político-institucional les permite en principio alcanzar el control del centro de decisiones del aparato estatal. Fue el caso de Chile en 1970, pudo serlo en Francia en 1974,⁹ y puede acaecer en los próximos años en otros países de régimen democrático desarrollado e institucionalizado.

¿Qué ocurre con el aparato del estado preexistente en semejantes circunstancias? Cuanto mayor desarrollo teórico y práctico ha tenido la respuesta de este interrogante en los supuestos de la vía revolucionaria insurreccional —Comuna de París de 1871, Rusia en 1917, etc.—, tanto más primarios son los análisis teóricos para la vía no insurreccional. Pobreza que pesó duramente en el proceso chileno entre 1970 y 1973. Contemplemos algunas de las constataciones que fue posible observar durante esta experiencia, en relación con el problema del estado.

En primer lugar, merece destacarse que alcanzar el gobierno por la vía electoral implicaba simplemente el inicio de un *período de transición* en el que se daban fenómenos como los siguientes:

a) El modo de producción continuaba siendo el capitalista, cualquiera que fuera la modalidad o el nivel de desarrollo del capitalismo de estado.

9. En las elecciones presidenciales de mayo de 1974, el candidato único de la izquierda unida, F. Mitterrand, no ganó la presidencia de la República por menos del 1 por ciento de los votos.

b) La burguesía retenía todavía bajo su control o mantenía su presencia en importantes centros del poder económico, político, militar y cultural.

En consecuencia, la instalación en el gobierno de un movimiento popular con la voluntad de llevar a cabo las transformaciones que abrieran camino a la edificación de un régimen socialista, tenía lugar en circunstancias en que el proletariado todavía no era la clase dominante.

En segundo lugar, mientras el movimiento popular así instalado en el gobierno no hubiera acumulado fuerzas bastantes (socioeconómicas y militares) para asegurarle la hegemonía, no podía reemplazar la forma de estado preexistente por un aparato de estado *popular*.

En tercer lugar, en este período de transición el movimiento popular necesitaba mantener la cohesión interna, fortaleza democrática y flexibilidad del aparato estatal cuya dirección detentaba. No sólo era su principal instrumento para la transformación de la estructura económica (en coordinación con el movimiento de masas), sino que la capacidad ordenadora y coercitiva del estado le era necesaria para efectuar su obra innovadora así como para contener las acciones de resistencia de la contrarrevolución.

En cuarto lugar, era de esperar que las fuerzas antisocialistas intentarían desplazar al movimiento popular de la dirección del estado, para recuperarla. Primero, sin necesidad de cambiar la forma de estado, usando los recursos internos que éste ofrece para asumir su control —elecciones, Congreso, tribunales, etc.—. Pero si no lo conseguían, procederían a presionar para desintegrar el aparato estatal en que se apoyaba el gobierno.

De ahí que en este *período de transición*, cuando el carácter de clase del estado está todavía en fase de *mutación*, sin haberse consolidado el predominio social de la alianza de clases formada en torno a la obrera, el movimiento popular no sólo tiene que conservar el gobierno en sus manos, sino que necesita algo más, evitar la desintegración del aparato del estado mientras no cuente con los medios necesarios para reemplazarlo por otro.

La descomposición y demolición violenta del estado es un modo de acción inherente a la táctica insurreccional, que históricamente ha sido empleada por las clases subordinadas para

revolucionario el movimiento popular logre no sólo cuestionar sino *cambiar* los fundamentos económicos en que reposa el modo de producción capitalista, se requiere que previamente la dirección del estado se encuentre en manos del bloque social anticapitalista. Si éste llega a controlar el estado después de una resolución militar del antagonismo de clases, la cuestión se simplifica. La derrota militar de una clase hegemónica arrastra tras ella a las instituciones estatales esenciales preexistentes. Esto es algo que la práctica histórica ha demostrado ampliamente, tanto en las experiencias revolucionarias burguesas como en las socialistas.

Nuestra cuestión está planteada para otras circunstancias. Para aquellas en que se dan dos condiciones simultáneas: por un lado, el enfrentamiento bélico como camino de conquista del estado aparece cerrado para el movimiento prosocialista, mientras que, por otro lado, la vía político-institucional les permite en principio alcanzar el control del centro de decisiones del aparato estatal. Fue el caso de Chile en 1970, pudo serlo en Francia en 1974,⁹ y puede acaecer en los próximos años en otros países de régimen democrático desarrollado e institucionalizado.

¿Qué ocurre con el aparato del estado preexistente en semejantes circunstancias? Cuanto mayor desarrollo teórico y práctico ha tenido la respuesta de este interrogante en los supuestos de la vía revolucionaria insurreccional —Comuna de París de 1871, Rusia en 1917, etc.—, tanto más primarios son los análisis teóricos para la vía no insurreccional. Pobreza que pesó duramente en el proceso chileno entre 1970 y 1973. Contemplemos algunas de las constataciones que fue posible observar durante esta experiencia, en relación con el problema del estado.

En primer lugar, merece destacarse que alcanzar el gobierno por la vía electoral implicaba simplemente el inicio de un *período de transición* en el que se daban fenómenos como los siguientes:

a) El modo de producción continuaba siendo el capitalista, cualquiera que fuera la modalidad o el nivel de desarrollo del capitalismo de estado.

9. En las elecciones presidenciales de mayo de 1974, el candidato único de la izquierda unida, F. Mitterrand, no ganó la presidencia de la República por menos del 1 por ciento de los votos.

b) La burguesía retenía todavía bajo su control o mantenía su presencia en importantes centros del poder económico, político, militar y cultural.

En consecuencia, la instalación en el gobierno de un movimiento popular con la voluntad de llevar a cabo las transformaciones que abrieran camino a la edificación de un régimen socialista, tenía lugar en circunstancias en que el proletariado todavía no era la clase dominante.

En segundo lugar, mientras el movimiento popular así instalado en el gobierno no hubiera acumulado fuerzas bastantes (socioeconómicas y militares) para asegurarle la hegemonía, no podía reemplazar la forma de estado preexistente por un aparato de estado *popular*.

En tercer lugar, en este período de transición el movimiento popular necesitaba mantener la cohesión interna, fortaleza democrática y flexibilidad del aparato estatal cuya dirección detentaba. No sólo era su principal instrumento para la transformación de la estructura económica (en coordinación con el movimiento de masas), sino que la capacidad ordenadora y coercitiva del estado le era necesaria para efectuar su obra innovadora así como para contener las acciones de resistencia de la contrarrevolución.

En cuarto lugar, era de esperar que las fuerzas antisocialistas intentarían desplazar al movimiento popular de la dirección del estado, para recuperarla. Primero, sin necesidad de cambiar la forma de estado, usando los recursos internos que éste ofrece para asumir su control —elecciones, Congreso, tribunales, etc.—. Pero si no lo conseguían, procederían a presionar para desintegrar el aparato estatal en que se apoyaba el gobierno.

De ahí que en este *período de transición*, cuando el carácter de clase del estado está todavía en fase de *mutación*, sin haberse consolidado el predominio social de la alianza de clases formada en torno a la obrera, el movimiento popular no sólo tiene que conservar el gobierno en sus manos, sino que necesita algo más, evitar la desintegración del aparato del estado mientras no cuente con los medios necesarios para reemplazarlo por otro.

La descomposición y demolición violenta del estado es un modo de acción inherente a la táctica insurreccional, que históricamente ha sido empleada por las clases subordinadas para

desplazar a la dominante no sólo del gobierno, sino de todo el conjunto del estado.

Teniendo lo anterior tan decisiva importancia, descomponer o mantener la cohesión interna y la fortaleza de un estado democrático moderno, institucionalizado, requiere considerar dónde tienen sus bases de sustentación fundamentales aquella fortaleza y cohesión.

A) ¿En las instituciones armadas? Difícilmente. Mientras los mecanismos civiles del estado cumplen sus funciones regularmente, las Fuerzas Armadas suelen estar consagradas principalmente a tareas propiamente castrenses o conexas, subordinadas a las autoridades designadas a través de los procedimientos legales —poder civil—. Por el contrario, el desbordamiento de las funciones específicamente militares y la irrupción de las Fuerzas Armadas en las restantes actividades estatales suele ser derivación de la crisis del estado. Y no causa. Si en un contexto de desintegración del estado el aparato militar ha mantenido su cohesión interna, la intervención militar no es acompañada de un real enfrentamiento entre cuerpos de ejército regulares (Francia, 1958, Grecia, 1967). El choque armado se produce cuando también la propia institución militar se ha fracturado, haciendo posible el inicio de una verdadera guerra civil (España, 1936).

B) ¿En las instituciones civiles? Cualquiera de ellas —administrativa, jurisdiccional o parlamentaria— adquiere, mantiene o pierde su solidez por fenómenos externos al aparato del estado como son los económicos y sociales. Las instituciones políticas, aun las más desarrolladas técnicamente, están en relación de dependencia respecto de ellos. Al igual que las militares.

La solidez de la organización estatal, en su conjunto, y de cada una de sus instituciones en particular, está en función de la correspondencia que guarden con el centro de gravedad de las fuerzas sociales de una sociedad. La lucha de clases, en su dinámica, desplaza constantemente ese centro. Sólo en la medida que las instituciones del estado siguen una evolución concordante, mantienen su cohesión.

En un sistema político de distribución de funciones, la integración estatal puede mantenerse en la medida que una coali-

ción de clases de características no antagónicas tenga el control de las instituciones donde reposa el poder político y militar. Si alguna de estas instituciones responde a unos intereses sociales distintos, entra en contradicción con las restantes. A mayor grado de antagonismo de las contradicciones sociales, mayor profundidad del conflicto entre las instituciones con intereses de clase divergentes. Cuando la contradicción social se produce en el seno de una misma institución, el desplazamiento a lo largo del *continuum* integridad-desintegración sigue una evolución semejante.

La Unidad Popular chilena gana las elecciones al poder ejecutivo el 4 de septiembre de 1970. Pero esta coalición es minoritaria en el Congreso. En la medida que se produce la *entente* movimiento popular-sectores medios progresistas (DC), en el Congreso se produce una mayoría dispuesta a reconocer que el resultado de los comicios ha sido favorable a la UP. La crisis entre las instituciones civiles del estado es de este modo evitada. El aparato militar, por su lado, tiene una composición social centrada en la pequeña-mediana burguesía. La acumulación de dos factores, ausencia de crisis de las instituciones políticas representativas y ausencia de contradicción social antagónica entre las instituciones armadas y las civiles donde actúan coincidentemente la UP y la DC, son la causa principal del fracaso del plan ITT-Kissinger-Frei.

En la medida que el mismo bloque social controla el ejecutivo y el legislativo, la crisis institucional no se produce y la lucha social se canaliza a través de los mecanismos aceptados o tolerados por el sistema. Para ello se requiere que la misma formación política que detenta el gobierno tenga mayoría en el Congreso o, si son agrupaciones distintas, un acuerdo legislativo tenga lugar entre ellas. El segundo caso era el de Chile en septiembre de 1970. Las *garantías constitucionales* pactadas entre la DC y la UP en octubre de ese año significaron el acuerdo entre las instituciones político-sociales que permitieron a la UP dirigir el ejecutivo a partir del 3 de noviembre siguiente.

La historia de la crisis del estado chileno durante la UP es la de la contradicción entre ejecutivo y Congreso, que se convierte progresivamente en antagonismo excluyente en la medida que el centro de gravedad del primero —clase obrera— entra en conflicto con los sectores medios, cuya inclinación deci-

día si la mayoría del Congreso se pronunciaba en favor de la burguesía o del proletariado.

En Chile el conflicto con la mayoría de la pequeña y mediana burguesía se produce *antes* de que la clase obrera haya conquistado y consolidado su hegemonía social. De este hecho se deriva una consecuencia decisiva: el bloque social de la UP todavía *no ha podido* cambiar el aparato del estado —en sus dimensiones civiles y militares— cuando el enfrentamiento social alcanza niveles inmediatos antagónicos. La cohesión inicial del aparato estatal se descompone en la medida que los sectores sociales que controlan sus distintas instituciones entran en conflicto cada vez más abierto.

De donde se derivan varios efectos. El gobierno, en manos de un solo bloque social, mantiene su cohesión interna. Pero entra progresivamente en contradicción con aquellas instituciones a él subordinadas cuyo contenido social está en conflicto creciente con la clase obrera (burocracia civil y militar). El Congreso, en el que coexisten los dos bloques sociales en pugna, entra paralelamente en descomposición interna.

En estas circunstancias, sólo las instituciones de un contenido social relativamente homogéneo mantienen su coherencia interna. Es el caso del equipo gubernamental, pero también del aparato jurisdiccional, cuyos componentes son de extracción e identificación burguesa. Y del militar, que ya hemos dicho que tiene su centro de gravedad en la pequeña y mediana burguesía conservadora.¹⁰

En el desarrollo de la crisis del aparato estatal, se enfrentan directamente las instituciones que responden a los intereses sociales en fase de exclusión mutua. Tribunales *versus* gobierno, mayoría parlamentaria conservadora *versus* ejecutivo. La intensidad del enfrentamiento no la marcan las iniciativas que se adoptan en estos organismos, sino el grado de antagonismo que el conflicto social ha alcanzado entre las distintas clases y capas sociales. Muchas iniciativas que fueron fácilmente adoptadas a comienzos de 1971 por el Parlamento, este mismo las rechazó vehementemente en 1972.

10. Uno de los raros estudios sobre la dimensión sociopolítica de los militares chilenos es el del norteamericano T. Hansen, *Military Culture and Organizational Decline: A study of the Chilean army*, Ph. D. diss., Michigan University, 1970.

COEXISTENCIA DE CLASES Y DOMINACIÓN DE UNA CLASE

Cuando el conflicto llega a un punto en que se requiere necesariamente que la clase obrera o la burguesa impongan netamente su hegemonía, se observa que una sociedad multclasista no puede mantenerse integrada si las clases antagónicas guardan una correlación de fuerzas equivalente. Se requiere necesariamente el dominio de una y la subordinación de la otra. De ahí que cuando la tensión revolucionaria y contrarrevolucionaria alcanzan el grado de conflicto abierto, ambas clases perciben que para mantener o imponer su hegemonía es indispensable negar todo el poder de la otra, y no sólo algunas de sus manifestaciones. La coexistencia entre las clases sólo se da dentro de un sistema configurado en forma tal que *una* de ellas detenta los controles suficientes para ser *hegemónica*. Las subordinadas manifestarán sus reivindicaciones y aspiraciones, pero a través de los mecanismos tolerados por el sistema existente para ello. Y que están conformados de modo tal que las acciones de las clases y capas subordinadas no pongan en peligro la estructura de dominación imperante. Principio de mantenimiento del desequilibrio interno que es común, por supuesto, a los regímenes políticos autoritarios y democráticos. La diferencia entre unos y otros estriba en los mecanismos de interdependencia e integración que permiten las relaciones de subordinación-hegemonía entre las clases.

El hecho de que en las crisis revolucionarias esta relación de hegemonía-subordinación esté amenazada en su continuidad, con posibilidades de inversión entre los términos, contribuye a explicar la extrema violencia que adoptan las reacciones contrarrevolucionarias en defensa del orden social que les asegura una posición dominante.

Estos supuestos operan igualmente en las relaciones internacionales. La lucha de clases como realidad social experimenta una mutación cualitativa después de 1917, cuando por primera vez se consolida un estado de contenido y definición socialistas, no sólo en su dimensión interna sino externa —internacionalismo proletario—. Cincuenta años después, la escena internacional tiene como centro de gravitación la pugna por la hegemonía mundial del conjunto de países dominado internamente por las

burguesías nacionales y el que lo está por la clase obrera y aliadas. La evolución después de la segunda guerra mundial de las dos fuerzas antagónicas, ha terminado por reducir a dos sistemas predominantes el conjunto de las individualidades estatales de todo el planeta.

Este fenómeno es nuevo en la historia. Pero no podía ser sino inevitable, y en él la innovación dinamizadora lo constituye la Unión Soviética. En la medida que en torno de ella se ha formado un conglomerado de estados que tiene necesidad, aparte la vocación, de extender la revolución socialista al resto del mundo, las fuerzas hegemónicas del conjunto de los sistemas capitalistas se han visto arrastradas por una corriente integradora centrípeta, única forma de lograr la cohesión y coordinación entre las partes integrantes capaz de hacer frente a la confrontación interna y externa con las fuerzas socialistas. Es así como en torno del centro de gravitación de Estados Unidos los regímenes capitalistas industrializados, desde Tokio a Hamburgo, se han organizado en forma de *sistema* único. Y dentro de él se están dando las manifestaciones de mantenimiento-alteración propias de un sistema imperial. Europa occidental ha dejado de ocupar el lugar de centro dominante de un sistema imperial propio y se halla en vías de subordinación total a las necesidades del nuevo sistema que la engloba, les guste o no a las burguesías nacionales de tipo gaullista. Y donde los movimientos obreros y populares desempeñan el papel de agentes principales de desintegración del sistema, en la medida que ponen en cuestión la relación entre hegemonía del capital y subordinación de los trabajadores, eje central del sistema capitalista mundial.

Dentro de un solo sistema no puede darse una relación duradera de equilibrio entre intereses sociales antagónicos. O se impone el emergente —triunfo de la revolución— o el preexistente —victoria de la contrarrevolución—. Las libertades políticas y sociales pluralistas, que requieren el previo reconocimiento de que existen clases con intereses contradictorios que necesitan expresarse, suponen por consiguiente una modalidad de organización del sistema social que acepte la “coexistencia” de clases. Pero dentro de un mismo sistema social esta coexistencia se da en medio de las relaciones de hegemonía-subordinación establecidas, tanto a nivel nacional como internacional. La

Comunidad Económica Europea puede surgir y consolidarse en coexistencia con la estructura económica de Estados Unidos de Norteamérica. Pero en la medida en que ambas forman parte de un solo sistema internacional, la CEE está condenada a ocupar una posición dominante o subordinada respecto de Estados Unidos. Una u otra. La relación de *igualdad* que reivindican en sus discursos algunos dirigentes europeos es imposible si no se dan simultáneamente dos condiciones mínimas:

- a) que la CEE se constituya en un sistema integrado;
- b) que el sistema de la CEE se desgaje del de Estados Unidos.

La primera condición, aunque difícil, era posible intentarla. Y constituye la historia del Mercado Común. La segunda es imposible, mientras Europa occidental continúe con un régimen económico-social capitalista.

La Unión Soviética ha podido promover como línea internacional la “coexistencia” entre sistemas distintos en la medida que a) ella misma primero, y el conjunto de la comunidad de países socialistas después, conformaban un sistema integrado, netamente diferenciado del de los países capitalistas, b) que aceptaba y reconocía la presencia de un sistema distinto, con el cual proponía coexistir pacíficamente.

Esta segunda condición es muy importante. En la medida que se considere que en el mundo no debe existir un sistema económico-político antagónico al propio, se está dentro de la concepción de un único sistema internacional, dentro del cual juega la lógica inevitable de hegemonía-subordinación. Si alguna de las partes llega a amenazar alterarlo, surge el conflicto que debe resolverlo (guerra, en cualquiera de sus formas). Para que el sistema capitalista mundial aceptara la coexistencia pacífica, se requería que previamente reconociera el surgimiento y consolidación de *otro* sistema, no inserto dentro del propio y, por consiguiente, con el que no se encuentra con la necesidad de zanjar la cuestión de la dominación interna. Sólo durante la década de los años sesenta el sistema capitalista *acepta* reconocer que el conjunto del planeta no es ni *tiene* que ser capitalista. Que no forma, por tanto, un solo sistema. Existe otro, el socialista, al que no se puede someter a la relación hegemonía-subordinación, por la sencilla razón de que este conflicto se presenta en circunstancias inéditas en la historia.

La novedad se llama *armamento atómico*. La capacidad de represalia reconocida al bloque socialista en caso de conflicto total por la hegemonía del mundo considerado como un solo sistema, pondría en peligro la propia supervivencia del centro dominante capitalista, es decir, de Estados Unidos.

La política hacia la URSS y la China del período Nixon-Kissinger, su insistencia en que ella asegurará la paz mundial indefinida, no es otra cosa que el repliegue de Estados Unidos —como centro del sistema capitalista internacional— respecto de la voluntad hasta entonces mantenida de considerar a la tierra como un solo conjunto, en el que ellos y sus aliados eran la *potencia dominante*. Sólo después de aceptar este retroceso es posible la *coexistencia* internacional a nivel de igualdad, sin hegemonía-subordinación entre la URSS y Estados Unidos. Pero, insistimos, esta coexistencia sin hegemonía no es posible dentro de un solo sistema. Cuando la Unión Soviética toma la iniciativa de la coexistencia internacional, su hegemonía dentro de la comunidad socialista es una realidad manifiesta. Y si algún país la rechaza —como Yugoslavia y China— surge el conflicto. Estados Unidos, por su parte, ha tenido necesidad de hacer reconocer su propia hegemonía en el sistema capitalista para aceptar la coexistencia con la Unión Soviética. Y lo que es más, cuanto mayor desarrollo alcanza esta nueva fase de la competencia por la hegemonía mundial sobre la base de *dos* sistemas, mayor necesidad ha tenido Estados Unidos de incrementar la cohesión interna del mundo capitalista.¹¹ Y de reprimir a los fenómenos que lo contrariaban.

Esta última es la otra cara de la medalla del Premio Nobel 1973 de la Paz, H. Kissinger. Y que está grabada con imágenes de América latina, África y Asia. Con centenares de miles de muertos y torturados. De miseria mantenida y asesinatos físicos y políticos. Es la contrapartida necesaria del mantenimiento de la relación hegemonía-subordinación dentro del mundo occidental. Y que cuenta también con imágenes europeas, con colores griegos, españoles, portugueses, chipriotas, los de las plazas

11. El presidente Ford define la *détente* como "un proceso que busca establecer unas relaciones más saludables y seguras con la Unión Soviética. Significa mantener la fortaleza de Estados Unidos para imponer respeto a nuestros adversarios y proporcionar un liderazgo a nuestros amigos" (*The Washington Post*, 20 agosto 1975).

donde la cohesión interna del sistema ha exigido adoptar métodos de violencia física. Aparecen hasta los símbolos gaullistas, arrastrados por la lógica fatal de un orden social nacional e internacional en proceso de atrincheramiento para batallas de nuevo estilo.

Si en el período en que la pugna social tiene planteada directa e inmediatamente la cuestión de la hegemonía de clases antagónicas, éstas se hallan implantadas dentro del aparato del estado, la desintegración *inter* e *intra* institucional de los mecanismos estatales es inevitable. Ello abre paso a la solución del conflicto no a través de los mecanismos políticos institucionalizados —inoperantes—, sino de la fuerza física de cada uno de los bloques sociales. A partir de este momento, la fase bélica del proceso revolucionario ha terminado. En Chile, estas circunstancias se impusieron definitivamente entre mayo y agosto de 1973. El bloque social que cuente entonces con mayores recursos internos e internacionales para vencer un enfrentamiento armado, se impondrá sobre el otro. En Chile, esta fase se plantea y resuelve en junio-septiembre de 1973.

En las circunstancias concretas internas y externas de Chile en 1973, el predominio militar no lo tenía el bloque social anti-capitalista. La crisis del Estado, por consiguiente, desembocó en la destrucción violenta de las instituciones de este último que se hallaban en manos de la UP. Como la coexistencia de las clases antagónicas es imposible cuando su enfrentamiento ha alcanzado niveles de exclusión recíproca, la destrucción de las posiciones del adversario es *total*. El gobierno UP es aniquilado. Dentro del ejecutivo, en la burocracia civil y militar, son eliminados todos aquellos que defendían sus intereses. El Parlamento, en crisis interna por el enfrentamiento que se ha producido en su seno entre los bloques antagónicos, se ha auto-destruido mucho antes de que las armas de fuego resuelvan el conflicto. Su clausura por quien gana el enfrentamiento militar, tanto si es un bloque como si es el otro, no hace sino constatar una realidad.

En cambio, las instituciones del estado cuya homogeneidad social interna se corresponde con el bloque cuya hegemonía se ha impuesto, permanecen. Así, el aparato jurisdiccional preexistente es mantenido por la fuerza militar que ha conseguido la victoria el 11 de septiembre.

IV EL GOBIERNO POPULAR Y LAS FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO

La acción contrarrevolucionaria aplicada en el proceso chileno contribuye a mostrar cómo procedieron las fuerzas capitalistas. Con ello no descubrimos, sin embargo, nada sustancialmente nuevo. La esencia de estas actuaciones perseguía un objetivo principal: mantener a una nación-estado dentro de un sistema internacional cuya hegemonía detenta otro país. Para alcanzar este fin, se produce la coalición y coordinación de las fuerzas conservadoras locales y de las internacionales representadas por las del país dominante. El fenómeno es tan antiguo como la historia de las relaciones internacionales. Por encima de este sustrato sólo se da la adaptación a circunstancias específicas de tiempo histórico y lugar geopolítico.

La intervención militar en sí misma tampoco encierra mayor novedad. No se requieren graves y largas disquisiciones para llegar a conclusiones que podemos encontrar con un mínimo de conocimiento de la historia. No sólo de la más reciente sino aun de la más antigua y clásica. Cuando el primer ejército profesional de la república romana adoptó la decisión de tomar el poder en el siglo II a. C., su conductor, Sila, iniciaba una experiencia que se iba a repetir indefinidamente, sólo con variantes secundarias. Lo primero que hizo fue dirigir la palabra en una concentración pública (*mass-media* de la época) para "lamentar la situación de la república, durante tanto tiempo en manos de demagogos", denominación tradicional entre los castrenses para calificar a los políticos. Añadió que "el ejército se había visto perentoriamente obligado a obrar como lo había hecho", e indicó los principios de autoridad, orden y jerarquía, simples en su enumeración y universales en su aplicación, que iban a guiar

a los nuevos dirigentes. Para concluir que una vez puestas en práctica las medidas que les llevaron a asumir la dirección de la república, no habría entre los romanos más discordias ni divisiones civiles.¹

El primer cuerpo armado que destruía los mecanismos constitucionales del naciente estado romano lo hacía con el pretexto precisamente de "restaurar la constitución republicana". Como decía bien elocuentemente el título que se dio el propio Sila: "*dictator rei publicae constituendae*". Naturalmente, ya en un terreno distinto del de los ideales, el nuevo régimen comenzaba

Fuerzas Armadas en Chile, 1973

<i>Ejército:</i> 32.000	y 5 C-47; 4 helicópteros "Jet Ranger"
5 divisiones incluyendo:	<i>Fuerza aérea:</i> 10.000
6 regimientos de caballería (2 armados, 4 montados)	41 aviones de combate
16 regimientos de infantería (incluyendo 10 motorizados)	1 escuadrón de bombarderos ligeros con 12 "Invaders" B-26
5 regimientos de artillería	2 escuadrones de combate con 18 cazas F-71 y 11 F-80C
varios destacamentos de combate antiaéreo y de apoyo	unos 90 aviones de transporte, incluyendo 20 C-45, 8 DHIC-6 "Twin Otter"
76 tanques medianos "Sherman" M-4; 10 tanques ligeros "Stuart" M-3; varios camiones blindados para el personal, <i>pack howitzers</i> modelo 56 105 mm, artillería antiaérea	9 Beechcraft 99 A, 25 C-47, 4 C-118, 4 DC-6, y 2 "Hercules" C-130E
	5 "Twin Bonanza", 10 Cessna 180, 4 Cessna 0-1 y 20 aviones de enlace T-6
<i>Armada:</i> 18.000	45 T-34, 10 T-37B, 8 T-33A, y 5 "Vampire" de instrucción
2 submarinos	30 helicópteros, incluyendo 7 Bell OH-13H, 2 Sikorsky UH-19
3 cruceros	16 Hiller OH-23G, y 2 Bell UH-1D
4 destructores	
3 destructores de escolta	<i>Carabineros:</i> 30.000 (fuerzas paramilitares)
4 botes torpederos a motor	
1 barco patrulla	
5 navíos de desembarcos	
1 Albatross HU016C	
5 aviones de transporte C-45	

1. M. Cary, *History of Rome*, Londres, 1954.

por declarar "fuera de la ley" a los principales partidarios del gobierno depuesto, en un número muy elevado para la época —1.700—, que eran pura y simplemente asesinados y sus bienes saqueados y repartidos entre la tropa.

Se podría presentar y describir el golpe militar de Pinochet en septiembre de 1973 en términos parecidos, cambiando el decorado y los nombres de los protagonistas. Como todo ejército en acción necesita justificar la existencia de un "enemigo", cuando no existe fuera de las fronteras se busca en el interior. Pero, eso sí, se le hace aparecer confabulado con los enemigos extranjeros. Para el ejército de Cromwell eran los "papistas". Después de 1917, este lugar suelen ocuparlo los "comunistas".

Por otra parte, es una constante bien conocida de la historia que la capacidad del ejército como factor político aumenta a medida que es mayor la inmadurez o inestabilidad de la estructura social y política en general. Y que las Fuerzas Armadas no pueden ser consideradas simples espectadores de la lucha de clases ni una simple adición de los distintos componentes sociales de una sociedad específica.

Los dirigentes de la izquierda chilena no tuvieron que esperar hasta marzo de 1972, cuando la prensa de Estados Unidos publicó algunos documentos confidenciales de la ITT, para saber que entre septiembre y octubre de 1970 hubo intereses norteamericanos y chilenos confabulados en impedir que la UP asumiera el gobierno. Esto lo vieron ante sus propios ojos, y lo sintieron en su propia carne a medida que las distintas fases del plan de intervención se desarrollaban. Y si no conocían con precisión la identidad de todos los protagonistas, sí sabían cuáles eran los conglomerados de fuerza alineados nacional e internacionalmente detrás o en contra de la candidatura de la izquierda unida.

A todos los chilenos se les ha enseñado en la escuela primaria que, en 1891, el interés del capital inglés por los yacimientos de salitre de Tarapacá y Antofagasta provocó una guerra civil que llevó al derrocamiento y suicidio del presidente constitucional de la república, José Manuel Balmaceda. El único jefe de estado muerto en forma trágica en la historia del país. Y el paralelismo entre estos acontecimientos y la intervención americana en relación con las minas de cobre estuvo presente en el debate público durante todo el período de 1970 a 1973.

Salvador Allende, por su parte, aludía con ironía a la sentencia atribuida a Mao Tse-tung según la cual "el imperialismo es un tigre de papel". Para él, era más bien una jauría con garras bien potentes, al acecho y atento a abalanzarse sobre su presa. La amenaza de derramamiento de sangre que la derecha hacía pesar sobre el país, la denunció públicamente el 12 de septiembre de 1970. Que la intervención norteamericana de ese año llevó a Chile al borde de un enfrentamiento violento, fue recordado en su primera alocución como presidente el 5 de noviembre de 1970, en presencia de Charles Meyer, subsecretario de Estado para América latina. Y lo repitió ante la asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre de 1972.

Mantener las condiciones de la paz civil fue una de las preocupaciones principales del gobierno. Y se convirtió en dominante en los últimos seis meses, mediatizando todas sus intenciones.

Sin embargo, el derramamiento de sangre se produjo. El gobierno fue derrocado. Más de treinta mil partidarios de la Unidad Popular, en un país de apenas diez millones de habitantes, fueron fríamente asesinados en los seis meses que siguieron, y más del doble encarcelados y torturados. Por primera vez en su historia, Chile conoció el exilio en masa. La represión económica y cultural se abatió sobre el conjunto de los trabajadores: más del 1.000 por cien aumentó la inflación en los 12 meses que siguieron al golpe militar, el desempleo aumentó del 3 por ciento a más del 15 por ciento, el poder adquisitivo de los asalariados disminuyó en un promedio superior al 60 por ciento, la moneda fue devaluada en casi un 4.000 por cien, en las universidades se expulsó entre el 25 y el 60 por ciento de alumnos y profesores, según los centros, etc. ¿Cómo explicar semejante catástrofe, cuando lo menos que puede decirse es que su posibilidad siempre estuvo presente en el ánimo del gobierno, y sus medios de instrumentación fueron reiteradamente denunciados? Algunos piensan que esto es una especie de *fatum* que sigue a todo intento de cambiar un régimen social. Dejemos de lado las explicaciones providencialistas y también las deterministas. Busquemos otros criterios de comprensión. Detrás de cada batalla perdida hay concepciones tácticas o estratégicas equivocadas.

"VÍA PACÍFICA" Y "VÍA NO ARMADA" AL SOCIALISMO

Aclaremos la ambigüedad que encierra el concepto de "vía no armada" hacia el socialismo. Contrapuesta al de "vía armada", contiene un equívoco no menor que el de "vía pacífica". Del mismo modo que este último no puede significar que deje de haber violencia, pues ésta es consubstancial a cualquier proceso social, el primero no puede dar a entender que las armas dejan de intervenir y participar activamente durante el proceso de transformaciones revolucionarias.

No hace falta que un régimen social llegue a una etapa de desintegración o transformación profunda para que se den manifestaciones de violencia. Ellas se encuentran presentes aun en los regímenes mejor consolidados y más estables. En la medida que existe una estructura de dominación social, de unas clases o capas sociales sobre otras, es inevitable que se den mecanismos de violencia en cualquiera de sus formas —económica, cultural, política, militar, etc.—. Lo que varía es el grado de su institucionalización y firmeza, en un *continuum* de mayor a menor en la medida que las estructuras del régimen social entran en crisis y pierden solidez. Cuando los controles sociales y económicos que mantienen un "orden" social devienen inoperantes o insuficientes para cumplir esta función, surgen manifestaciones nuevas, anormales y, por consiguiente, anómicas que buscan suplir o negar aquellos mecanismos de control. Podremos denominar "violencia reaccionaria" a las formas de expresión que intentan suplir las deficiencias de los controles tradicionales de dominación, y "violencia revolucionaria" a las que desean negar no sólo los controles sino las propias estructuras de dominación preexistentes. La denominación "vía pacífica" hacia el socialismo tiene sentido en la medida que se refiere a la permanencia de mecanismos de control social a lo largo del período de transformación de la estructura anterior de dominación, suficientemente poderosos para imponerse a las manifestaciones anómicas y "desordenadas". La presencia de controles sociales efectivos permite que exista una "autoridad", dotada de fuerza suficiente para imponer una dirección y organización en la sociedad aún en pleno proceso de transformación. Lo que no excluye las manifestaciones de violencia más que no lo hace un

régimen en su período de estabilidad consolidada. La revolución burguesa en Inglaterra contempló manifestaciones de violencia de amplitud equivalente a la francesa, por más que las crisis políticas y de autoridad fueron muy distintas en ambos países entre los siglos XVII y XIX.

En último extremo, si el concepto de "vía pacífica al socialismo" tiene alguna razón de ser, es la de no encontrar en el hundimiento brusco del poder ordenador y director de un aparato del estado el medio para invertir las relaciones entre las clases sociales y establecer un estado de carácter popular o proletario.

El concepto de "vía no armada hacia el socialismo" suele usarse como sinónimo o sustitutivo del de "vía pacífica". Lo que es lógico, en la medida que concretiza en las armas el principal vehículo de que se sirve la violencia para imponer una nueva realidad social o política. Pero, a su vez, sólo en la medida en que el aparato del estado cuyo contenido de clase se intenta cambiar no se derrumbe, será concebible que las instituciones armadas profesionales o irregulares no abran fuego para imponer la hegemonía de una clase sobre otra. En otras palabras, que la transición al socialismo se inicie tras una guerra civil o una acción militar victoriosa.

Pero aun en el supuesto de que el proceso revolucionario no se halle inmerso en una fase de confrontación armada, los aparatos armados están muy presentes en el conflicto social. Todavía más, están interviniendo en él, aun cuando para ello no necesitan disparar ni un solo tiro. Pues, finalmente, es del aparato coercitivo militar del estado de lo que se trata, inherente a toda organización estatal *per se*. Y este aparato militar está pesando y decidiendo en el sistema social de modo continuo —poder de disuasión— en la medida en que es el depositario de la capacidad legitimada y orgánica de violencia de una comunidad en su expresión máxima, la estatal. Lo discontinuo y excepcional es que abra fuego con carácter beligerante, como ocurre en coyunturas de crisis interna aguda —poder de ofensiva—.

Un movimiento popular que persigue conquistar la dirección del estado sin previa guerra civil o enfrentamiento armado requiere, en primer lugar, encontrarse con una forma de estado que no excluya el acceso al gobierno de las fuerzas populares. En caso contrario, la crisis y quiebra de semejante forma de

estado se interpone en el camino como paso intermedio, con todas las consecuencias que de ello pueden derivarse. En segundo lugar, el movimiento popular necesita adecuar sus tácticas de lucha de conquista del poder a las que el régimen político tiene institucionalizadas y legitimadas. La contradicción histórica surge, sin embargo, en la medida que semejante aparato del estado responde a las necesidades de una organización social en que el bloque social burgués es el dominante. Y éste no se dejará desalojar de las posiciones que ocupa sin oponer todo tipo de resistencia. Legal, mientras las leyes vigentes le den alguna ventaja. Ilegal, cuando no le basta o no puede ya hacer uso de la propia legitimidad estatal.

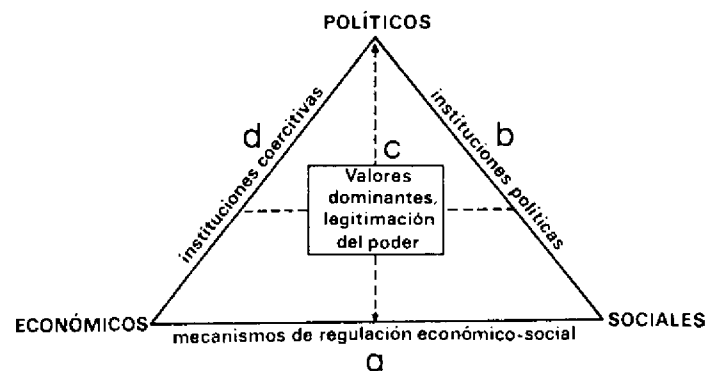
En un régimen democrático moderno, sólo en la medida que los mecanismos políticos institucionales estén funcionando regularmente puede el movimiento popular acceder y eventualmente dirigir los centros del poder político del estado —gobierno y Parlamento— cuya legitimidad radica formalmente en la “voluntad popular” libremente expresada. Sin embargo, es también inherente a los regímenes pluralistas en que varios partidos compiten por representar los intereses de sectores sociales distintos, que el aparato militar del estado se halle profesionalizado. En la medida que no se identifique con un partido político específico, podrán los demás aspirar razonablemente a detentar el poder civil. En un régimen de partido único o dominante, la politización de las Fuerzas Armadas en la ideología e intereses sociales que el partido representa es condición y garantía para la formación y mantenimiento de la forma de estado en que se insertan ambos. De ahí que en este último tipo de regímenes, el movimiento popular sólo puede alcanzar el poder político a través de la crisis del conjunto de las instituciones civiles y militares.

Sin embargo, siendo las anteriores condiciones necesarias para alcanzar la dirección del estado sin previa guerra civil, no bastan. Se requiere, además, que el movimiento popular anticapitalista haya logrado imbricarse en la estructura social de tal modo que su bloque social alcance una situación de predominio relativo. En otros términos, que las relaciones entre la clase obrera y los sectores sociales agrupados en torno de ella provean a esta alianza de fuerza bastante para pretender controlar al conjunto del sistema social.

Reunido este conjunto de circunstancias, se plantea en forma abierta el problema central: la pugna en torno de los mecanismos de control interno de la sociedad. Mantener o implantar la hegemonía de un bloque social requiere dominar los cuatro principales instrumentos de control: político, económico, cultural y coercitivo. Todo sistema social ha creado una estructura específica de relaciones interdependientes entre ellos, con el fin de conservar un orden. En la medida que su funcionamiento se desequilibra o entra en crisis, se desarrollan los procesos de reforma o revolución de las estructuras de dominación interna.

El control social está definido en función de las relaciones de clases que hacen de un bloque social el dominante. Éste es el factor central, original y autónomo, al que están supeditados los restantes. Pero este predominio o hegemonía social requiere imponerse a través de los controles instrumentales: económicos (relaciones de producción, de distribución y de intercambio), políticos (principalmente el aparato del estado) y culturales (generación, interpretación y conservación de valores). Por último, este conjunto de controles mantiene en función de sus necesidades unas instituciones específicamente coercitivas, que intervienen subsidiariamente en los supuestos de insuficiencia o inoperancia de los mecanismos sociales, económicos, políticos y culturales de regulación. Son los aparatos represivos propiamente tales (judicial, policial, militar).

GRÁFICO 10

Estructura de los controles internos de poder

Desde este punto de vista, en la conquista de los mecanismos de control de la sociedad por el bloque social anticapitalista podemos distinguir dos vías tácticas principales: la insurreccional y la político-institucional. La primera la han seguido las experiencias históricas que hasta la fecha han logrado implantar la dictadura del proletariado sin intervención militar extranjera directa. En cualquiera de sus modalidades principales —guerra popular (China), guerrilla (Yugoslavia), insurrección propiamente dicha (bolcheviques en Rusia)—, la vía insurreccional pasa por la guerra civil o el enfrentamiento armado. Su modo operativo requiere la perturbación previa de los mecanismos de control económico, político y cultural, de tal modo que el aparato coercitivo institucionalizado del bloque social dominante entre en crisis. Sólo cuando este último se halla descompuesto o semiparalizado, sin que un aparato militar extranjero esté en condiciones de reemplazarlo, el enfrentamiento armado puede ser favorable en su desenlace al movimiento revolucionario.

CUADRO 9

Indice del costo de la vida en Santiago
(%)

Variación		Variación		Variación	
1950	16,6	1953	56,1	1956	37,7
1951	23,2	1954	71,1	1957	17,3
1952	12,1	1955	83,8		

Los requisitos para el acceso del bloque social anticapitalista a la dirección política del estado por la vía político-institucional sin previa guerra civil, no existían en ninguno de los países en que la transición al socialismo se ha iniciado por la vía insurreccional. Pero los condicionamientos anteriores a la llegada del movimiento popular al gobierno influyen, a su vez, de modo determinante en las fases sucesivas. La táctica institucional requiere combinar los factores económicos, políticos y culturales de modo tal que los aparatos coercitivos burgueses no pueden

CUADRO 10
Indice de precios al consumidor
(%)

Variación		Variación		Variación	
1958	32,5	1963	45,4	1968	27,9
1959	33,3	1964	38,4	1969	29,3
1960	5,4	1965	25,9	1970	34,9
1961	9,6	1966	17,0		
1962	27,7	1967	21,9		

FUENTE: Servicio Nacional de Estadística.

interponerse en el acceso de los trabajadores al gobierno. Esto lo logró la Unidad Popular chilena en 1970, desbaratando el plan que hemos denominado a efectos distintivos ITT-Kissinger-Frei. Sin embargo, el desarrollo del proceso revolucionario en estas circunstancias requiere que el bloque social anticapitalista combine sus acciones en relación con los controles económicos, políticos y culturales de tal manera que el aparato coercitivo del sistema capitalista continúe neutralizado. ¿Cuánto tiempo? El necesario para que se consoliden los mecanismos de control propiamente populares sobre la sociedad, haciendo durante este tiempo inviable la insurrección armada de la burguesía. Esto será posible si el movimiento popular es capaz de reunir los medios suficientes de *disuasión*.

El diseño táctico contemplado en el programa básico de la UP chilena reposaba en los supuestos anteriores. En primer lugar, en lo que a los *controles sociales* se refiere, la alianza de clases en que se apoyaba el gobierno buscaba lograr el aislamiento de la burguesía directamente vinculada al poder del imperio americano. El *control y ordenamiento de las relaciones económicas* requería superar la situación de estagflación, crónica desde hacía décadas (cuadros 9 y 10) y contener a los factores interesados en desequilibrar sustancialmente el sistema económico. El plan económico a corto y mediano plazo del gobierno, elaborado en el último trimestre de 1970, perseguía ambos objetivos. El *control político y legitimación* del gobierno UP

exigían mantener el poder del estado al servicio de los intereses del bloque social anticapitalista y de su programa de transformaciones estructurales. Lo que implicaba evitar el desmoronamiento del aparato estatal existente mientras la clase obrera no hubiera acumulado fuerzas socioeconómicas suficientes para reemplazarlo por otro. En la medida que estas circunstancias estuvieron reunidas en la realidad concreta de Chile en los años 1970, 1971 y 1972, los aparatos coercitivos del sistema capitalista, en especial el militar, no pudieron ser activados por la burguesía y Estados Unidos contra el gobierno y el bloque social que lo sustentaba.

La política *militar* de Allende fue concebida e instrumentada en función y al servicio de los objetivos de control interno mencionados, de acuerdo con la correlación de fuerzas dentro y fuera de Chile. Desde antes de asumir el gobierno, Allende y sus colaboradores directos vieron claro que la derecha chilena y Estados Unidos deseaban provocar la solución estratégica del proceso revolucionario en el terreno militar, cuanto más pronto mejor. De ahí que la estrategia de Allende consistiera en operar sobre los factores sociales, económicos, políticos e ideológicos de regulación de la sociedad, de tal manera que no se creara a corto plazo la configuración propia del enfrentamiento armado: es decir, de pérdida por el gobierno y los trabajadores del control de los mecanismos de los que depende el desencadenamiento de la violencia armada.

Uno de los aportes más trascendentes de la experiencia chilena ha sido probar las condiciones de viabilidad de la táctica político-institucional. Durante todo el periodo de tiempo en que estuvieron reunidos los fundamentos sobre los que reposa esta última, el progreso del proceso de reemplazamiento de la estructura de dominación burguesa por la obrero-popular no pudo ser detenido. En términos globales, es la fase en que, entre septiembre de 1970 y mediados de 1972, tiene lugar la conquista del poder público por una clase que no lo había detentado nunca antes, con el objeto de imponer al conjunto de la colectividad un nuevo orden socioeconómico y un nuevo código de valores. En estos dos años se encuentran reunidos los factores que hacían posible el nacimiento y desarrollo de esta vía. De ahí la profundidad de sus realizaciones y las potencialidades que abrían para la transición al socialismo. Sin embargo,

la presión combinada de las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas y de ciertos errores tácticos de la UP, terminaron por alterar sustancialmente los sustentos de la estrategia originalmente diseñada y aplicada.

La segunda contribución mayor de esta experiencia es que entre 1970 y 1973 no logró crear los instrumentos necesarios para consolidarse y mantenerse en el poder. En esos mismos años se encuentran también los elementos que deben explicar por qué se produjo tan brusca interrupción del proceso revolucionario. Cuando en el transcurso de la segunda mitad de 1972 y primera de 1973 los fundamentos de la vía político-institucional quedaron destruidos, el proceso fue abocado a las condiciones que desde 1970 buscaba la contrarrevolución: la solución por la fuerza de las armas del conflicto entre los bloques sociales en pugna, en circunstancias que la desventaja objetiva del movimiento popular era abrumadora.

Contemplemos de cerca el comportamiento de estas opciones tácticas en la realidad de los hechos. Y aunque es un factor dependiente y subordinado, la evolución de la dimensión militar nos servirá de punto de concentración de las variables dominantes.

Comencemos por la realidad militar en 1970: unas Fuerzas Armadas profesionales en un sistema político altamente institucionalizado y pluralista, de legitimidad democrática, en el que el aparato de seguridad interior —policía— ha tenido un desarrollo correlativamente débil.

LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO UP Y UNAS FUERZAS ARMADAS PROFESIONALES

Un ejército profesional tiene como características específicas la posesión de conocimientos técnicos especiales y una estructura jerárquica técnico-profesional. En un régimen democrático pluralista, su subordinación al poder civil le exige cultivar una ética social profesional, al mismo tiempo que su existencia como organización diferenciada, con normas internas especiales, crea en su seno un cierto espíritu de cuerpo frente a "lo civil", y una relativa autonomía como institución respecto de las organizaciones propiamente "políticas".

CUADRO II

Fuerzas armadas profesionales y poder civil

Características constitutivas de las FF.AA.	Medios de control del poder civil sobre las FF.AA.	Factores invocados por las FF. AA. para intervenir políticamente	Formas o nivel de intervención política de las FF.AA.
1. Conocimientos técnicos altamente especializados	1.1. Directos (normas legales prescriptivas externas e internas)	— Personales o de grupos individuales	— Como grupo de presión
2. Estructura técnico-profesional	1.2. Indirectos (composición social y formación ideológico-valorativa concordante con las dominantes)	— Corporativos (de la institución como un todo)	— En coordinación con las autoridades políticas civiles (casos de crisis nacional o guerra)
3. Espíritu de cuerpo			
4. Ética social profesional neutralidad afectiva externa respecto de la vida política legal	2.1. Manipulación de la lucha política contingente	— Intereses sectoriales (region, etc.)	Así como el potencial del poder (la autoridad civil vulnera el carácter profesional de las FF.AA., o pierde la legitimidad para exigir su obediencia)
5. Autonomía institucional relativa	2.2. Encuadramiento y dirección por un partido político (régimenes de dictadura)	— Interés global de la nación.	
6. Valores sociales dominantes: unidad y eficacia <i>versus</i> conflicto y disgregación			

El poder civil controla a unas Fuerzas Armadas profesionales a través de dos medios principales. En primer lugar, mediante normas legales prescriptivas externas e internas a las instituciones armadas (control directo), al tiempo que se sirve de distintos mecanismos para que su composición social guarde correspondencia con el bloque hegemónico y sean interiorizados valores de la ideología dominante (control indirecto). En segundo lugar, marginándolas o aislándolas de las pugnas políticas aceptadas por el sistema, o bien —en los regímenes de dictadura, desde la proletaria a la burguesa— subordinándolas o dirigiéndolas a través del partido político que tiene en sus manos el poder del estado.

En términos genéricos, las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas profesionales podemos concentrarlas en torno de las categorías reductivas del cuadro 11.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, las Fuerzas Armadas nunca intervinieron explícitamente en sus decisiones políticas. Asumida la presidencia de la república y eliminados del alto mando los oficiales que aparecían comprometidos en el complot de septiembre-octubre 1970, Allende confió la comandancia en jefe de los institutos armados y la Dirección General de Carabineros a los cuatro generales de más alto rango que no estuvieron vinculados a la tentativa de golpe. Solamente uno, Ruiz Danyau, de la Fuerza Aérea, faltó a la confianza.

La primera razón que permitió retrasar en tres años la intervención militar fue el respeto del nuevo gobierno a la estructura jerárquica técnico-profesional de las Fuerzas Armadas. Cuando en julio-agosto de 1973, en plena insurrección burguesa, Allende se propuso eliminar del alto mando a los oficiales comprometidos, los golpistas utilizaron esta intención para incrementar la solidaridad corporativa de la oficialidad en torno de ellos. Un episodio no hecho público hasta la fecha ilustrará mejor este fenómeno.

El 26 de octubre de 1970, el presidente de la república, Frei, y el presidente electo, Allende, encabezan las ceremonias fúnebres del general Schneider. Terminadas éstas, Frei invita a Allende a reunirse con él en el palacio de gobierno. He aquí las partes sustanciales del diálogo:

FREI: —Tengo que nombrar a alguien para reemplazar al comandante en jefe. En 8 días más tú serás, Salvador, el pre-

sidente de la república. Va a ser tu primer comandante en jefe. Dime a quién deseas que nombre y yo lo hago. Tengo entendido que tienes interés por el comandante X, que es un hombre de izquierda.

ALLENDE: —¿Quién es el general que sigue en antigüedad a Schneider?

FREI: —El general Carlos Prats, jefe de Estado Mayor.

ALLENDE: —Entonces, quiero que Prats sea el nuevo comandante en jefe.

FREI: —¡Prats! Pero ¿cómo se te ocurre...?

Era ésta una hermosa trampa de Frei. A esas alturas, todavía no sabíamos que él mismo había propiciado el golpe militar abortado tras el asesinato del general Schneider. Y le proponía a Allende pasar a retiro a todos los generales del ejército —21— por razones estrictamente políticas, hasta encontrar a un simple comandante resueltamente prosocialista. Era una buena manera de provocar la sublevación militar tan ansiadamente buscada por el ala derecha del PDC, el P. Nacional y Estados Unidos. Era confirmar el principal mensaje de la propaganda derechista hacia los militares: la UP destruirá las Fuerzas Armadas profesionales para convertirlas en dócil instrumento político. La medida propuesta por Frei a Allende, antes que éste tuviera la legitimidad presidencial y cuando los militares comprometidos en el complot contra Schneider estaban todos en sus puestos de mando, era una burda provocación. Allende siempre estuvo convencido que de haber aceptado la afectuosa sugerencia de Frei, jamás hubiera asumido la presidencia. Por lo demás, aunque no le conocía personalmente sabía cuál era la personalidad profesional de Prats y que había respaldado a Schneider contra los conspiradores.

La segunda razón que contribuyó a aislar a los oficiales golpistas entre 1970 y 1972, fue la especial atención prestada al equipamiento técnico-profesional de las Fuerzas Armadas. A lo que no dejó de contribuir el precedente de 1969, cuando el general Viaux estuvo al borde de lograr arrastrar al ejército al derrocamiento del gobierno Frei invocando las insuficiencias para la defensa nacional, causadas según él por las magras inversiones militares del régimen demócrata-cristiano. De hecho, el putsch frustrado de 1969 marcó el primer intento serio de la derecha, en las proximidades de las elecciones de 1970, de aca-

bar con un sistema político cuya democratización ascendente le resultaba imposible contener. Entre 1970 y 1973, el argumento de la despreocupación gubernamental por las necesidades materiales de la defensa nacional, no pudo ser invocado por la oficialidad antisocialista.

Entre noviembre de 1970 y el 10 de septiembre de 1973, nunca las Fuerzas Armadas representaron al gobierno ningún planteamiento de tipo político o económico propio de la competencia de las autoridades civiles. Sólo a mediados de julio de 1973, dos meses después que el presidente propuso a los Estados Mayores la discusión de un programa socioeconómico, para recabar su apoyo y formar un gabinete cívico-militar que lo pusiera en práctica, sólo en un contexto en que la insurrección burguesa tenía ya en jaque el poder del gobierno, el sector de generales que dirigía el complot anti-UP aprovechó la oportunidad para elaborar un proyecto de contraproposiciones y someterlo a la consideración del presidente. Por intermedio del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, le solicitaron al ministro de Defensa —Clodomiro Almeyda— comunicárselo a Allende. Almeyda aceptó canalizar la solicitud. Pero cuando llegó al palacio de la Moneda acompañado de los tres comandantes en jefe, Allende les manifestó que era norma del gobierno y de las Fuerzas Armadas que estas últimas no fueran centro de iniciativas políticas. Y no aceptó que le fuera entregada la nota que traía consigo el general Ruiz Danyau. Éste sabía que el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, era del mismo parecer que el presidente. A partir de esta fecha la animadversión contra Prats aumentó considerablemente entre la oficialidad putschista.

Puede afirmarse que la primera petición política del Alto Mando al presidente Allende fue la del 11 de septiembre de 1973, conminándole a que entregara su autoridad a la insurrecta Junta Militar. La nota escrita de dos meses antes fue un caso aislado, sin precedentes ni continuación. Tan manifiesto era para los militares que Allende no toleraba que las Fuerzas Armadas fueran centro de decisiones independientes, que el 11 de septiembre no le presentaron sus exigencias ni verbalmente ni por escrito, sino por una proclama radiofónica. La ausencia de antecedentes les imposibilitó material y psicológicamente entablar una comunicación directa.

Todo esto no encierra mayor motivo de asombro si se considera que la actitud de Allende no era unilateral, sino que era compartida por las propias Fuerzas Armadas, que, en cuanto instituciones y haciendo abstracción de sus contrapuestos grupos internos, se asignaron durante el gobierno UP un papel profesional, netamente diferenciado de los centros de decisión política dentro del estado. Posición mantenida, en la forma continuada que antes hemos mencionado, por los comandantes en jefe de las tres armas de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros entre noviembre de 1970 y agosto de 1973, así como por gran parte de sus estados mayores.

El aparato militar del estado era, sin embargo, una realidad política con características propias, a las que el gobierno tuvo que adecuarse en la medida en que no le fue posible cambiarlas. Y si una de estas notas distintivas era el respeto por parte de los militares a la autoridad civil, la contrapartida para el gobierno significaba tener presente la personalidad de las instituciones armadas, sus márgenes de tolerancia y de flexibilidad, la correlación de fuerzas en su interior. Desde este ángulo, sin ser grupo de presión activo, sin necesidad de ser consultadas ni de hacerse escuchar, las Fuerzas Armadas actúan por simple presencia para “disuadir” o “incitar” a opciones políticas esenciales.

Por más que a estas alturas resulte sorprendente, yo puedo afirmar que nunca Salvador Allende censuró o recriminó en privado a las Fuerzas Armadas. Al contrario, se había hecho una idea propia de su naturaleza y buscó establecer una adecuación armónica entre ellas y la política general del gobierno. Sólo la relación entre ambos términos puede explicar el fracaso de los golpes militares que se intentaron antes de septiembre de 1973. Y que aun el 11 de ese mes, a las 8,40 de la mañana, Allende, tras escuchar por la radio el mensaje de los insurrectos que lo condenaba a la muerte, de pie en su despacho repiqueteaba los dedos de su mano derecha sobre su escritorio repitiendo con mirada distante y voz baja: “tres traidores, tres traidores”. Pensaba en los tres oficiales de jerarquía superior que tenían comprometida su lealtad y cuya traición privaba al gobierno de todo respaldo orgánico dentro de las instituciones armadas.

Quince minutos después le pregunté por qué no se dirigía

a través de la radio a las guarniciones de provincias, al tiempo que indicaba a los trabajadores de la capital que marcharan sobre el centro de Santiago y lo ocuparan: —“¿No cuenta usted con un solo regimiento?”. —“Ni un sólo regimiento”— me respondió. Al frente de la Junta se hallaba el comandante en jefe del arma decisiva para realizar o derrotar un *putsch*, el Ejército, de cuya disciplina y sentido de la jerarquía Allende siempre se había expresado con admiración. La presencia de Pinochet entre los sublevados le hizo pensar que la disciplina interna del Ejército jugaba esta vez en su contra, por primera vez en tres años. Y aunque se dirigió al país por radio cinco veces aquella mañana, nunca indicó a los trabajadores que combatieran contra las Fuerzas Armadas ni, por supuesto, que se dirigieran hacia el centro de la capital a defender el gobierno. ¿Por qué? Nuestro esquema había contemplado dos posibilidades tipo:

a) si la subversión dividía a las instituciones armadas y una parte de estas se sublevaba, la conjunción de Fuerzas Armadas leales y trabajadores permitía entablar combate, al menos en un primer momento;

b) si la subversión arrastraba al conjunto de las Fuerzas Armadas, llamar a los trabajadores a ofrecer resistencia era conducirlos a la masacre.

Cada una de estas posibilidades contenía distintas variantes. La situación militar que se creó en el transcurso de aquella mañana fue la peor para el gobierno. Cuando Allende tuvo esto claro, quiso reducir la envergadura de la represión que iba a desatarse no pidiendo a los trabajadores que se enfrentaran sin medios idóneos a unas Fuerzas Armadas con todo su poder orgánico desplegado para una acción de guerra.

Detrás de estas circunstancias están operando unas Fuerzas Armadas profesionales, cuyos rasgos constitutivos son equivalentes cuando no comunes a los que se dan entre las instituciones militares de los regímenes democráticos pluralistas de Europa occidental. Analicemos más de cerca su comportamiento en el proceso chileno, en donde el desenlace final no debe enmascarar una realidad mucho más compleja y sutil.

CRISIS DE HEGEMONÍA SOCIAL, CRISIS DEL ESTADO Y FUERZAS ARMADAS PROFESIONALES

En primer lugar, conviene reiterar que durante el conjunto del período de la UP las Fuerzas Armadas no se desempeñaron como un grupo de presión explícito. Muy al contrario. Eran uno de los supuestos fundamentales que condicionaban el proceso, como lo eran también la existencia de la Central Única de Trabajadores, de una Corte Suprema inamovible por el ejecutivo, de unos intereses capitalistas internos y foráneos que se resistían a perder sus privilegios, la presencia de unos *mass-media* mayoritariamente controlados por la oposición, etc. Estas eran realidades actuantes, cuya desaparición o alteración radical a corto plazo no estaba en la mano del movimiento popular ni del gobierno. Y a las que la acción transformadora de los agentes del cambio debía adecuar su proceder, al tiempo que procuraba influir sobre ellas del modo que le resultaba más favorable. El gobierno contaba con su propia fuerza social, que era impresionante, la del vasto movimiento de masas organizadas que lo respaldaba. Y mientras las instituciones civiles del estado fueron suficientemente sólidas para cumplir sus funciones en el sistema político, las militares estuvieron concentradas en sus funciones propias, subordinadas a las directrices del poder civil.

En segundo lugar, entre 1971 y 1973 el gobierno solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ocasiones, en situaciones de crisis de naturaleza y envergadura distinta pero todas ellas derivadas de los embates de que era objeto por la oposición, y que ponían en juego su autoridad y los fundamentos de su poder. Y el aparato militar actuó siempre en respaldo del gobierno, frustrando durante tres años sucesivos proyectos golpistas y supliendo las grandes carencias de que adolecía el aparato de seguridad interior —policía— del estado.

Allende no prestaba oído a quienes, desde la izquierda, le censuraban que hiciera intervenir a los militares en semejantes circunstancias en vez de a los trabajadores organizados. Estos últimos, en un estado de derecho, no pueden reemplazar a la fuerza pública y a las instituciones del aparato estatal en las tareas de mantener el orden público y hacer respetar la autoridad del gobierno. Llamar a los sindicatos obreros a que

impusieran el orden en la calle, o a que dejaran sin efecto las maniobras parlamentarias de la oposición, o a que intervinieran contra las decisiones de los tribunales jurisdiccionales —cuando la propia clase obrera dirigía el gobierno a través de la UP—, significaba precipitar la crisis inmediata del estado. Precisamente lo mismo que perseguía la resistencia capitalista. Crisis del poder del estado que conllevaba para el gobierno perder el respaldo del aparato armado profesional, el cual no sólo quedaba así desvinculado de su función subordinada al poder civil, sino que iba a tender a reemplazar el propio gobierno como centro de decisiones y a actuar de acuerdo con las características sociopolíticas predominantes dentro de las Fuerzas Armadas. Si éstas hubieran sido mayoritariamente proletarias, en semejantes circunstancias de crisis política hubieran contribuido con su poder a la instauración de un nuevo aparato del estado, de naturaleza *popular*. Pero como no era así, la irrupción militar sucesiva a la crisis de las instituciones del estado sólo tenía una alternativa: guerra civil, si las Fuerzas Armadas se dividían entre los dos bloques sociales en pugna, o masacre civil si se mantenían unidas detrás de la burguesía.

LA EVOLUCIÓN MILITAR EN SU RELACIÓN CON LA CRISIS DEL APARATO DEL ESTADO

Sinteticemos las condiciones militares en que se inicia el gobierno de la UP en 1970. En primer lugar, la mayoría de la oficialidad es contraria, desde el punto de vista *político*, a los partidos y al programa de la UP. Sin embargo, esa misma oficialidad está caracterizada por una acentuada praxis constitucionalista, y no ha intervenido nunca directamente en el proceso político. De lo que se derivan consecuencias como las siguientes:

- a) la oficialidad carece de preparación y experiencia para asumir el gobierno del país;
- b) el alto nivel de democratización de la sociedad y la amplitud de la movilización de los partidos populares —incluida aquí la DC—, significan que un eventual golpe de estado necesitará un alto costo inmediato y a corto plazo antes de imponerse;
- c) aun en el caso de que las Fuerzas Armadas dominen mi-

ltantemente el país, existe la mayor incertidumbre en torno de lo que sobrevendrá después.

En segundo lugar, el respeto por parte del gobierno del carácter profesional de las Fuerzas Armadas, evita que éstas se sientan “agraviadas” en su personalidad corporativa, lo que contribuye en un comienzo a que se mantenga su disciplina y lealtad al gobierno y a la dirección política del ejecutivo.

En tercer lugar, para que las Fuerzas Armadas permanecieran subordinadas al gobierno, hubo necesidad de crear un contexto socio-político-económico de características tales que impidiera el ingreso inmediato del proceso revolucionario en la fase militar. Para ello Allende sigue una política que busca asegurar a los trabajadores una base militar sólida antes de que la lucha social ingrese en la fase de solución *estratégica*. Es decir, aquella en que se decide directamente la hegemonía de un bloque social sobre el otro en términos excluyentes y absolutos. Para nosotros resultaba evidente que el centro de decisiones contrarrevolucionario, con apoyo norteamericano, ansiaba precipitar la resolución estratégica. Cuanto antes surgiera ésta, más imprecisa e inevitable era la sustitución de los medios *político-legales* de lucha por los estrictamente militares. El proyecto de la derecha necesitaba la crisis inmediata de las instituciones políticas democráticas. El de Allende implicaba mantener a toda costa la fortaleza de estas últimas, indispensables para llevar a cabo las transformaciones estructurales que debían permitir el control popular de los mecanismos políticos y económicos neoliberales del país. E indispensable también para contar con el respaldo de los sectores democráticos del aparato militar.

En cuarto lugar, el progreso del bloque social anticapitalista en reemplazar a la burguesía en los controles políticos y económicos, necesitaba ser simultáneo con el mantenimiento de la vinculación de las Fuerzas Armadas al gobierno. Lo que no sólo privaba a la burguesía de la libre utilización de éstas contra los trabajadores, sino que además el peso de la inercia profesional del aparato armado del estado operaba del lado del gobierno UP *en tanto* que titular de la legitimidad presidencial.

En quinto lugar, lo anterior no basta por sí mismo, sino que debe ir acompañado de la instrumentación coetánea de medidas de incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso general de transformaciones socioeconómicas. Por las razones ya in-

dicadas, ello no se puede hacer con argumentos exclusivamente político-partidarios en la medida que encuentra el rechazo inmediato de un cuerpo de concepciones ideológicas conservadoras. De ahí que se pusieran en acción medidas indirectas para reducir las distancias entre la oficialidad y los trabajadores, llevando a los primeros a conocer directamente las condiciones de vida de los segundos, sus necesidades y sus aspiraciones. Oficiales de las distintas armas fueron así designados en funciones administrativas y económicas en la administración pública y en empresas del área social, para que trabajaran en equipo junto a representantes del gobierno y de los trabajadores. En general, estos oficiales fueron los que terminaron más identificados con el proyecto socialista de la UP, aunque con excepciones notorias. Lamentablemente, semejante programa de incorporación indirecta estuvo prácticamente reducido a los rangos superiores de la oficialidad, sin apenas afectar a los intermedios. Y fue, a la postre, entre estos últimos donde germinó mejor la presión golpista. A lo largo de 1972 y 1973, fue la jerarquía del Alto Mando la que contuvo la marejada anti-UP de la oficialidad media, cada vez más vehemente, hasta la crisis final de julio-agosto de 1973. Lo que lleva a pensar que debió haberse procedido a una acción sistemática y temprana de incorporación de la oficialidad media e inferior a los programas socioeconómicos del gobierno.

¹ El diseño inicial de la política militar de Allende corresponde a su análisis de la correlación de fuerzas socioeconómicas y militares, dentro del país y sobre todo en su contorno internacional. En octubre de 1970, la fuerza militar propia del bloque social UP era prácticamente nula. Hubo necesidad de la extraordinaria concentración de fuerzas sociopolíticas que se produjo en esa época en torno de la solución *política* que encabezaban la UP y la DC, para que dentro de las Fuerzas Armadas el sector democrático e institucional que encabezaba el comandante en jefe del Ejército —Schneider—, evitara por disuasión el desenlace *armado* del conflicto, que era lo que impulsaban con energía tanto el presidente Frei como el asesor para asuntos de seguridad nacional del presidente Nixon, H. Kissinger.

Durante casi tres años, esta política militar resistió todos los embates, internos y externos a las Fuerzas Armadas, para

enfrentar al gobierno UP con el aparato militar del estado. Ello no fue una tarea fácil ni mucho menos una concesión de la derecha o Estados Unidos, dando un respiro o plazo de gracia para “probar la eficacia y el contenido del programa UP”. Ni mucho menos. Entre septiembre de 1970 y septiembre de 1973, no hubo un solo día en que la dirección política de la derecha chilena y los servicios competentes del gobierno de Estados Unidos dejaran de hacer lo que estaba a su alcance para derrocar a Allende.² Por esta razón es útil desentrañar qué factores postergaron durante tanto tiempo la consumación de este desdiseño. Así como por qué, por último, esos mismos factores terminaron por naufragar el 11 de septiembre de 1973. La respuesta es obviamente compleja. Y requiere el análisis pormenorizado de las opciones tácticas y estratégicas de la UP y Allende a lo largo de las sucesivas coyunturas. Intentemos una primera aproximación al problema.

En el capítulo anterior indicábamos que en un sistema político democrático moderno, el papel de las Fuerzas Armadas profesionales está determinado por dos factores principales: las relaciones de clase y la incidencia de éstas sobre el aparato del estado. Contemplar desde esta perspectiva la evolución del proceso revolucionario entre 1970 y 1973, nos aportará elementos complementarios para interpretar los problemas de fondo.

A efectos analíticos, las secuencias militares podemos diferenciarlas del modo siguiente: 1) del 4 de septiembre al 25 de octubre de 1970; 2) de noviembre de 1970 a marzo de 1972; 3) de abril a septiembre de 1972; 4) de octubre de 1972 a marzo de 1973; 5) de marzo a mayo de 1973; 6) de junio a septiembre de 1973.

² “A lo largo del período Allende, los Estados Unidos mantuvieron estrecho contacto con las Fuerzas Armadas chilenas, a través de la CIA y de los agregados militares americanos [...], para reunir información y detectar cualquier síntoma dentro de las Fuerzas Armadas a intervenir en contra del gobierno. Los representantes de Estados Unidos recibieron la orden de procurarse influencia entre los militares chilenos y de respaldar en general sus actividades [...]. Así, por ejemplo, en noviembre de 1971 la estación de la CIA en Santiago recibió la instrucción de situar al gobierno de Estados Unidos en situación de aprovechar en el futuro una solución política o militar del dilema chileno, de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos dentro del país y de sus repercusiones sobre los propios militares”, *Covert action in Chile, 1963-1973*, p. 28. En aquel mismo mes de noviembre de 1971, la estación de la CIA en Santiago informó a su puesto de mando que “el objetivo último del programa de penetración militar es un golpe militar” (*ibid.*, p. 38).

DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 1970

La UP ha ganado las elecciones presidenciales. Las empresas multinacionales instaladas en Chile, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos presidido por H. Kissinger, el presidente de Chile E. Frei, la burguesía indígena, conciben e instrumentan el plan contrarrevolucionario que a efectos de nomenclatura he denominado ITT-Kissinger-Frei. Las circunstancias objetivas del país en ese momento y la táctica observada por la UP, Allende y el ala izquierda del PDC logran frustrar aquel plan. El 22 de octubre de 1970 la resistencia del general Schneider desbarata el recurso último: el putsch militar. Tres días después, Allende desvirtúa la postrera estratagema de Frei para enfrentarle con el Alto Mando. El general Prats asume la comandancia en jefe del ejército y el 3 de noviembre siguiente Frei se ve obligado a entregar el gobierno a la UP. En el capítulo anterior hemos considerado en detalle el porqué y el cómo de semejante desenlace.

DE NOVIEMBRE DE 1970 A MARZO DE 1972

La táctica político-institucional como vía revolucionaria encuentra en estos dieciséis meses su pleno desarrollo. Los pilares sobre los que reposa están en pie y son firmes. La alta burguesía se encuentra aislada, los sectores medios representados por el PDC mantienen una relación de coexistencia no antagónica con el bloque social de la UP. Todas las empresas de importancia estratégica bajo control norteamericano son recuperadas por el país, y al igual que una parte considerable de los monopolios nacionales son puestos bajo control de sus trabajadores y del gobierno. Los medianos y pequeños empresarios toleran o están de acuerdo con estas medidas de nacionalización y, si disienten, no logran cohesionarse con los propietarios monopólicos antes de diciembre de 1971. En el Parlamento, durante este tiempo, el PDC desempeña el papel de oposición democrática al gobierno, rechazando las proposiciones del Partido Nacional de bloquear sistemáticamente al ejecutivo hasta provocar la crisis total de las instituciones representativas. La interacción ejecutivo-

legislativo es relativamente fluida, de acuerdo con los moldes habituales del sistema.

La actividad económica sale de la estagflación. La producción industrial aumenta en 1971 en un 14 por ciento, el PNB en un 8,5 por ciento. El paro forzoso disminuye de más del 8 por ciento a alrededor del 4. La participación de los asalariados en el ingreso nacional asciende del 53 al 61 por ciento. La inflación disminuye del 36 al 22 por ciento.

Todo ello tiene lugar mientras en Washington el Comité Cuarenta aprobaba el 13 de noviembre de 1970 una partida de 25.000 dólares para determinados personajes del PDC, seis días después otra de 725.000 dólares para un programa clandestino en Chile y, el 28 de enero de 1971, el mismo comité aprobaba un presupuesto de 1.240.000 dólares para que el ala derecha del PDC, el PN y otros partidos de oposición compraran emisoras de radio y periódicos, así como para financiar la campaña electoral de sus candidatos en las municipales de abril siguiente. El 22 de marzo, el PDC recibe una nueva subvención de 185.000 dólares.³

CUADRO 12

Gasto del producto geográfico bruto. Variación anual (%)

Año	Total	Por persona	Año	Total	Por persona
1961	6,2	3,6	1966	7,0	4,6
1962	5,0	2,4	1967	2,3	0,0
1963	4,7	2,1	1968	2,9	0,6
1964	4,2	1,6	1969	3,1	0,7
1965	5,0	2,4	1970	3,4	1,0

FUENTE: ODEPLAN.

No obstante lo cual, el respaldo político a la UP pasa del 36 por ciento en septiembre de 1970 al 50 por ciento en las elecciones municipales de abril de 1971. La Central Única de Trabajadores adquiere personalidad legal, incrementa el nú-

3. Ibid., p. 59.

CUADRO 13

Magnitud de la cesantía por actividad económica en el Gran Santiago entre diciembre de 1970 y diciembre de 1971
(Porcentaje de cesantes en fuerza de trabajo)

	1970		1971		
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
Agricultura	*	*	*	*	*
Minería	*	*	*	*	*
Industria	(6,7)	8,2	4,7	3,5	2,7
Construcción	(27,3)	26,2	15,2	12,8	9,7
Actividades productoras de bienes	10,8	11,4	6,9	5,3	4,1
Comercio	3,8	2,5	3,4	3,2	2,1
Serv. gobierno y financieros	1,4	1,3	1,1	2,3	0,5
Servicios personales	4,2	5,5	1,6	2,2	2,6
Resto de servicios	6,4	3,7	3,0	2,9	2,8
Actividades productoras de servicios	4,3	3,5	2,4	2,7	2,2
Transportes, almacenajes y comunicaciones	7,1	5,8	4,4	3,6	1,7
Cesantía total	6,6	6,2	4,0	3,6	2,8
Desocupación	8,3	8,2	5,2	4,8	3,8

FUENTE: Instituto de Economía y Planificación.

* Cifras no significativas.

mero de sus afiliados de 700.000 a cerca de un millón, lo que equivale a un tercio del total de la población activa. Las asambleas de las empresas del área social eligen directamente a la mitad de los miembros de sus consejos de administración, a medida que éstos se organizan. El gobierno central designa a la otra mitad, nombrando sobre todo a militantes de los partidos obreros. En los fundos agrícolas expropiados se organizan los consejos campesinos. El movimiento popular establece y desarrolla sus primeros controles sociales y económicos sobre el sistema económico del país, la combinación de la fuerza política

del gobierno y de la social de su base trabajadora conquista al poder burgués sucesivas posiciones neurálgicas.

Ante semejante proceso, ¿qué papel está desempeñando el aparato militar del estado? ¿En qué manera interviene? Tras la instalación de la UP en el gobierno, los agentes de Estados Unidos tuvieron que reconstruir su red de contactos dentro de las Fuerzas Armadas, lo que les llevó algún tiempo. Para septiembre de 1971, una nueva red de agentes había sido organizada y la CIA de Santiago estaba en condiciones de recibir casi diariamente informes sobre conspiraciones, para procurar un golpe militar.⁴ Sin embargo, más allá de los deseos de los golpistas, por más que a estas alturas pueda parecer paradójico, el significado explícito de la función de las Fuerzas Armadas en este período es el de respaldo armado a la política del gobierno UP. Junto a ello, una función latente de la mayor trascendencia para las fases subsiguientes: la disuasión a las acciones propias de la táctica insurreccional, tanto si son revolucionarias como contrarrevolucionarias. El equilibrio interno del aparato militar y su inserción dentro de las coordenadas de la política gubernamental, coartan severamente el margen de autonomía de los oficiales antisocialistas. La estructura jerárquica y la disciplina interna les obliga a someterse a una dinámica general que los arrastra. Y a la que necesitan adaptarse so pena de ser marginados de los cuerpos castrenses.

Nada más representativo para mostrar esta vertiente que el análisis de las cuatro coyunturas de crisis, a lo largo de este período de tiempo, en que las Fuerzas Armadas intervienen directamente: a) el asesinato del ex ministro democristiano Pérez Zujovic en junio de 1971; b) la reacción derechista a la presencia en Chile de Fidel Castro, a fines de noviembre y comienzos de diciembre siguiente; c) la primera destitución por el Parlamento de un ministro, en enero de 1972; d) el desenlace del putsch preparado por la CIA y las empresas norteamericanas, en marzo del mismo año.

El asesinato de un ex ministro democristiano

Esta acción, en la mañana del 8 de junio de 1971, en un país en que los magnicidios políticos durante siglo y medio se con-

4. *Ibid.*, p. 37.

taban con los dedos de una mano, afectaba a la izquierda en dos dimensiones sensibles: sus relaciones con el PDC, eje de los sectores medios y del Parlamento, y la necesidad de contener los designios de la derecha y Estados Unidos de imponer el desarrollo de la lucha social por medios violentos. El sector conservador del PDC, encabezado por el presidente del Senado, P. Aylwin, y los portavoces de la derecha, iniciaron de inmediato una intensísima campaña contra Allende, la UP, su programa y sus hombres. El disparo criminal, como el rayo que precede al desencadenamiento súbito de la tormenta en una atmósfera altamente cargada, puso todo el poder de propaganda de los *mass-media* de la oposición a trepidar sin contemplaciones pidiendo la cabeza del gobierno a cambio de la del dirigente muerto. Por el país corrió un escalofrío, pocos días después de que, en Washington, el Comité Cuarenta aprobara una partida de 77.000 dólares para el diario del PDC —el 10 de mayo—, otra de 100.000 dólares para una ayuda de emergencia a los demócrata-cristianos —20 de mayo—, y una nueva subvención de 150.000 dólares —el 26 de mayo— para el mismo partido de la Democracia Cristiana chilena.⁵

En Chuquicamata, donde yo me encontraba ese día, el general Pedro Palacios, designado por Allende su representante en el consejo de administración de la principal mina cuprífera —recién nacionalizada a la **Anaconda**—, convocó a una reunión esa misma tarde al coronel del regimiento de Calama. Me invitó a participar en ella, así como al gerente general, Ricardo Wilhem, y al gobernador de la provincia, E. Checura. Se adoptaron medidas especiales de protección de las instalaciones y de la documentación confidencial, con la colaboración de los sindicatos de trabajadores y de efectivos militares.⁶ Situaciones parecidas se repitieron en todas las empresas del sector social. En Santiago, mientras tanto, toda especie de rumores habían

5. *Ibid.*, p. 59.

6. El ingeniero Wilhelm, hombre de ideas socialistas no afiliado a ningún partido, después del golpe militar de 1973 renunció a sus funciones técnicas en la administración pública y tuvo que partir al exilio en marzo de 1975. El general P. Palacios continuó desempeñando el mismo cargo militar que tenía, director general de reclutamiento, hasta su llamada a retiro en 1975. Edmundo Checura, del Partido Radical, fue condenado a muerte sin ningún juicio previo en septiembre de 1973, pero la orden no fue ejecutada gracias a un simulacro del coronel del regimiento, destituido poco después.

creado una psicosis de intervención militar. Periodistas y enviados especiales se apostaban en las cercanías de los cuarteles en espera de la salida de las tropas. Un dirigente de izquierda, ansioso, llegó hasta la propia residencia del coronel Labbé, director de la Escuela Militar, a preguntarle si el ejército iba a tomar el poder. Labbé, que se encontraba comiendo en ese momento con el edecán militar del presidente, teniente coronel Mela, le contestó que si tal fuera el caso no le recibiría vestido de civil junto a una mesa bien servida...⁷

Es interesante considerar las alternativas contempladas por la izquierda ante la coyuntura más grave que se le presenta desde la asunción del gobierno. Alrededor del mediodía del mismo 8 de junio, el presidente de la república analiza la situación con el comité político de la UP. Los jefes de los partidos son unánimes en estimar que el crimen no es fortuito ni circunstancial, sino que busca provocar una reacción violenta de los medios DC contra el gobierno, con el apoyo de la derecha. Allende coincide con este enfoque y pide opiniones sobre las medidas políticas a adoptar, más allá de las estrictamente policiales de descubrir con urgencia a los responsables, que ya estaban en marcha.

Una clara disyuntiva surge en ese momento que, *mutatis mutandis*, estuvo presente a lo largo de todo el proceso. Los partidos de la coalición proponen la medida tradicional a la que recurren casi por rutina: organizar para esa misma tarde una vasta concentración popular, en repudio del crimen político y en respaldo al gobierno. Acción de masas al margen del aparato del estado. Allende replica que le parece inoportuna esa medida, pues ni siquiera tiene las pruebas concretas para identificar a los victimarios. Prefiere postergar la concentración para cuando tenga respuesta a este interrogante y, entre tanto, activar los recursos del estado para contener los desórdenes callejeros que la oposición proyectaba organizar. Es decir, articular la acción de masas con la del estado, pero diferenciándolas en cuanto a su función, sentido y oportunidad. Para ello propone declarar la provincia de Santiago en "estado de emergencia",

7. Un año después de esta escena, el mismo coronel Labbé fue retirado del servicio activo por sus manifiestas actividades contrarias al gobierno. En marzo de 1973 fue derrotado como candidato a senador del Partido Nacional.

lo que permitía restringir legalmente las posibilidades de alteración del orden público y poner la responsabilidad de éste bajo control militar ya que las fuerzas del orden público —policía— no tenían medios suficientes para enfrentar semejantes situaciones. Si la oposición resolvía llevar la agitación anti-gubernamental a las calles, tendría que vérselas con autoridades militares y no civiles de la UP. Uno tras otro, la totalidad de los partidos manifiestan su desacuerdo en confiar esta tarea a las autoridades militares. Tras escucharles, Allende prosigue su argumentación en favor de evitar el enfrentamiento directo de la UP con una DC lanzada a la calle y respaldada por el conjunto de la oposición, con motivo de un acto terrorista del que se desconoce a los autores materiales aunque no su significado político. Los enfrentamientos callejeros producirían más víctimas. Y termina diciendo: "por último, alguien tiene que asumir la responsabilidad por lo que aquí va a pasar". Escasos minutos después, Santiago se hallaba en estado de emergencia y las radios retransmitían los bandos militares prohibiendo manifestaciones públicas. Simultáneamente el director general de la policía civil, el médico socialista Eduardo Paredes, era convocado a la Moneda junto a los responsables de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, recibiendo instrucciones de actuar conjuntamente hasta descubrir a los asesinos.

Los hechos que siguieron son conocidos. Gracias, sobre todo, a la tenacidad de Eduardo Paredes⁸ y sus colaboradores antes de una semana el comando que atacó al dirigente democristiano era descubierto. Conminado a rendirse, abrió fuego. En los enfrentamientos que siguieron, hubo víctimas por ambos lados. Por último, todos los miembros del grupo terrorista fueron detenidos. El día 16, una concentración de masas reunió a más de 50.000 personas frente al palacio de la Moneda. El estado de emergencia había terminado.

El comportamiento de las Fuerzas Armadas se ajustó plenamente a su función normativa en circunstancias de esta natu-

8. El 11 de septiembre de 1973, Paredes acudió a la Moneda junto a Allende. Detenido tras la muerte de éste, fue llevado al cuartel del Regimiento Tacna en compañía de la mayor parte de los colaboradores personales del presidente —economistas, abogados, sociólogos, periodistas, médicos, etc.—. Dos días después, la mayor parte de ellos habían sido muertos torturados. Según testigos presenciales, el ensañamiento con Paredes fue espeluznante.

raleza. Su presencia disuadió a la oposición de llevar adelante las acciones de desbordamiento de las autoridades civiles que tenía proyectadas, debiendo limitar su ofensiva a las campañas de prensa y radio, que según la legislación vigente escapaban del control directo de las autoridades de la zona de emergencia. El sentido de la primera intervención militar detrás del gobierno de la UP queda bien reflejado en lo que le dijera a Allende, poco después del asesinato de Pérez Zujovic, el jefe de la guarnición de Santiago: "Presidente, el ejército responde del control de la situación. Y puede estar Ud. seguro de su disciplina. Al primer coronel que se mueva, yo mismo le pego un tiro". Quien así hablaba, en el momento que tenía el control directo de la provincia de Santiago, era el general Augusto Pinochet. La realidad interna del ejército y su emplazamiento en la situación nacional de junio de 1971, no le ofrecía alternativa.

La reacción a la visita de Fidel Castro

El 10 de noviembre de 1971, el primer ministro y secretario general del Partido Comunista de Cuba llega en visita oficial. Es su primer viaje a un país latinoamericano desde que Estados Unidos impuso el bloqueo a la isla, nueve años antes. Aunque la UP restableció plenas relaciones con Cuba en la semana que siguió a su instalación en el gobierno, Allende retrasó el viaje de su amigo personal Fidel Castro hasta que estimó consolidada la situación del gobierno dentro de Chile y garantizadas las buenas relaciones con los países latinoamericanos. En agosto y septiembre de ese año, Allende había viajado por los países del Pacto Andino —Colombia, Ecuador y Perú—, después de haber sostenido con el Presidente de Argentina, general Lanusse, un encuentro de amistad en Salta. Sólo entonces el movimiento popular chileno pudo expresar su solidaridad con la revolución cubana acogiendo en triunfo a su principal líder. La presencia de Castro en el país austral simbolizaba el comienzo del fin del "cordón sanitario" contra Cuba y el encuentro de los procesos revolucionarios más desarrollados del continente.

Durante tres semanas, Fidel Castro fue huésped de los trabajadores. De norte a sur, recorrió centros de producción, poblaciones obreras y universidades. En todas partes querían recibir al legendario personaje. Millones de personas se desplazaron para

verle y escucharle. Pero la derecha, que estando en el gobierno aceptó el bloqueo contra Cuba, asistía con irritación creciente a semejante movilización. Finalmente, su ira pudo estallar. El 1.º de diciembre la semiclandestina organización "poder femenino",⁹ había convocado una manifestación de mujeres. Miles de señoras de los barrios residenciales salieron a la calle con cacerolas vacías, que golpeaban al tiempo que desfilaban. Desde el 1.º de septiembre de 1970, era la primera manifestación de masas que la derecha lograba realizar. Sus patrocinadores nunca se identificaron. Los partidarios políticos de oposición, tanto la DC como el PN, no quisieron responsabilizarse de una marcha que sabían tenía por objeto provocar graves desórdenes en las calles del centro de Santiago. En cierto modo, puede decirse que la dirección de la operación permaneció en las sombras, mientras los *mass-media* antigubernamentales preparaban el clima propicio para los fines perseguidos y magnificaban sus consecuencias. Con anterioridad, la CIA había entregado a lo largo de 1971 no menos de 700.000 dólares al movimiento fascista chileno "Patria y Libertad". El 9 de septiembre, el Comité Cuarenta había asignado una subvención de 700.000 dólares al diario *El Mercurio* y el 5 de noviembre siguiente destinaba un presupuesto de 815.000 dólares para los partidos contrarios al gobierno de Allende y para provocar divisiones en el seno de la Unidad Popular.¹⁰

El derecho de manifestación está reconocido por la legislación chilena. El intendente de Santiago, del Partido Socialista, no podía sino autorizar una marcha que era presentada como "pacífica", so pena de ser destituido por el Parlamento por "infringir la Constitución". Para mantener el orden, eso sí, dispuso protección de Carabineros a lo largo del recorrido establecido. En un momento dado, sin embargo, grupos de activistas armados con instrumentos contundentes surgieron de entre las elegantes damas, quisieron desviar el curso del itinerario y se enfrentaron violentamente a los Carabineros. La respuesta de éstos provocó la situación buscada: golpes, cargas, bombas lacrimógenas, mujeres desvanecidas, etc. En pocos minutos, el centro de la capital era escenario de desórdenes, protagoniza-

9. Organización financiada y manipulada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

10. *Covert action in Chile...*, pp. 31 y 60.

dos por comandos masculinos derechistas en torno de las excitadas señoras de los barrios elegantes. Las calles de estos últimos al anochecer, estaban cortadas por fogatas y barricadas donde los adolescentes se libraban a la libre expansión de los estímulos que en sus familias habían provocado los incidentes de la tarde. Esa noche, las agencias periodísticas de todo el mundo occidental recibieron despachos que les permitían decir que la visita de Fidel Castro a Chile terminaba en "revuelta". Y que la gran agitación existente en el barrio alto de Santiago indicaba que los desórdenes iban a ir en aumento en las horas siguientes.

Lo más significativo de este momento no es el carácter de los incidentes, sino el contexto político en que se producen. Tras un año de gobierno UP, el Partido Demócrata Cristiano ha dejado de seguir las orientaciones de su sector popular-progresista y está siendo controlado por el burgués-conservador. Lo que reemplaza la *entente* UP-DC por la alianza DC-Partido Nacional. La burguesía ha dejado de estar aislada. De este modo, la mayoría en el Parlamento cambia de signo y el conflicto abierto con el ejecutivo encuentra vía franca en diciembre de 1971. Los incidentes de la "marcha de las cacerolas" sirven de pretexto para que, al día siguiente, la derecha del PDC imponga —por 10 votos contra 8— acusar a un ministro de infracción a la legislación, lo que le lleva a depositar en el Parlamento una moción contra el ministro del Interior, José Toha, pidiendo su destitución. Las instituciones políticas del estado estaban mostrando los primeros síntomas de crisis. No así las militares.

Ante semejante agudización de la resistencia conservadora, contemplemos cómo se articulaban dentro de la UP los recursos disuasivos y ofensivos cuando todavía no estaba clausurado el período propiamente político-institucional del proceso revolucionario. Regresemos para ello a los instantes en que los manifestantes ocupan las calles del centro de Santiago. De nuevo, surge la disyuntiva fundamental de junio anterior: a) responder a los desórdenes de la derecha con una acción directa de los trabajadores, o b) hacer intervenir a éstos sólo indirectamente, asignando al aparato coercitivo del estado la tarea de enfrentar las actuaciones subversivas.

El desfile de las mujeres del barrio residencial acababa de

empezar cuando varios dirigentes femeninos de la UP solicitan comunicarse urgentemente con Allende. Al frente de ellas se encuentra la senadora socialista María Elena Carrera. Le informan de que en las poblaciones obreras varios miles de mujeres se hallan concentradas, dispuestas a marchar sobre el centro de la ciudad y mostrar a las de la burguesía lo que significa para ellas "cacerolas vacías". El presidente responde que lo que la derecha ansía es, precisamente, provocar el enfrentamiento entre civiles, para legitimar ante las Fuerzas Armadas su invocación de que intervengan por su propia cuenta y "restablezcan el orden", contraponiéndolas al gobierno. Pues un choque entre decenas de miles de mujeres obreras y burguesas daría la impresión de que el gobierno se hallaba desbordado o de que, deliberadamente, se abstenía de cumplir con su función ordenadora. Por ello prohíbe terminantemente el desplazamiento de las mujeres trabajadoras. La tarea de contener los desórdenes que se van a producir corresponde para el presidente de la república, al aparato coercitivo de que dispone la UP a través del gobierno, mientras responda y esté en condiciones de cumplir su papel. Como era el caso. La policía y Carabineros recibieron la orden de proceder con moderación, como disponía siempre Allende, para evitar violencias contraproducentes o víctimas fatales.

Esa noche, el "barrio alto" desbordaba de ira porque las cachiporras de Carabineros habían caído sobre las espaldas de sus elegantes damas y de sus más resueltos jóvenes. Jamás en la historia del país se había visto algo igual. Los gases lacrimógenos habían provocado sensaciones de angustia a señoras que siempre habían visto a Carabineros cargar sobre los "rotos" o los agitadores "comunistas". El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica se hacía eco del estado de ánimo del barrio alto al declarar: "acusamos al gobierno de transformar el Cuerpo de Carabineros en un aliado impúdico de las fuerzas marxistas y de quitarles los más elementales valores en que han sido formados [...]. Por eso pedimos al Parlamento que [...] destituya al ministro del Interior".¹¹ A medianoche, todo Santiago esperaba que algo iba a ocurrir. El resto del país seguía expectante los acontecimientos. El canal nacio-

11. *El Mercurio* (4 diciembre 1971), p. 1.

nal de TV anunció una intervención del jefe del Estado. Pasadas las 2 de la madrugada, Allende hizo el balance de la jornada y estableció la posición del gobierno.

La derecha no podía aceptar semejante precedente. Se sentía humillada en su orgullo de clase históricamente dominante. En los días siguientes, las declaraciones se precipitaban: iba a saber ahora el gobierno lo que era una reacción de masas del barrio alto. Éste se autoproclamó prácticamente en rebelión. Los radios de la derecha suspendieron sus espacios habituales y los reemplazaron por llamadas a la movilización. La ofensiva psicológica era de tal envergadura, que el gobierno resolvió imponer un programa único a las radioemisoras. Aunque estaba facultado legalmente para adoptar esta medida, no obstante se la incorporó como cargo al libelo acusatorio contra el ministro del Interior. La prensa, cuya censura era legalmente imposible, continuaba la campaña propagandística. La derecha reivindicaba la "libertad" para la insurrección, y calificaba de "dictatorial" la aplicación de las medidas legales en preservación del orden público.

Horas después, en su discurso de despedida, Fidel Castro explicaba que partía del país tras haber visto confirmado un supuesto general de todo proceso revolucionario: la acción del fascismo. Lo había visto desfilar, desde su residencia había seguido los programas de agitación de los *mass-media* de la derecha. Al anoecer del día 1, Allende estaba estudiando la conveniencia de atajar la marea subversiva según el procedimiento que ensayó con motivo del asesinato de Pérez Zujovic: contraponer la contrarrevolución al dique de las fuerzas de orden del estado. Cuando Fidel Castro se enteró de que la capital iba a ser declarada en estado de emergencia y establecerse el toque de queda, se inquietó. Jaime Suárez, secretario general de gobierno, llegó al gabinete de Allende a transmitirle la preocupación del primer ministro de Cuba, contrario a semejantes medidas. Allende le respondió: "Dígale con suavidad a Fidel que aquí en Chile estas cosas soy yo quien las resuelve, de acuerdo con mi leal saber y entender".

Cuarenta y ocho horas después, Allende me había invitado a su residencia de Cañaveral. Fidel Castro y tres de sus colaboradores debían acudir allí a cenar. La residencia se encontraba unos 6 kilómetros fuera de Santiago. Castro celebraba antes

una conferencia de prensa, que terminó más tarde de lo previsto. Llegó alrededor de medianoche y la comida fue reemplazada por una sesión de trabajo. Pero al entrar en el salón donde le estábamos esperando, dijo al tiempo que saludaba: "¡Qué cosas tienes, chico! Declarar estado de emergencia y toque de queda. Antes de llegar aquí hemos sido detenidos por tres patrullas militares. Te aseguro que desde el *bogotazo* no había tenido que circular bajo toque de queda".¹²

Detrás de este intercambio de mensajes, arropados por el respeto y la amistad, se hallaban estructuras tácticas diferenciadas. Los procesos revolucionarios cubano y chileno se confrontaban en torno de la cuestión del aparato armado del estado. El fondo de la discrepancia era la interrelación entre el movimiento popular en fase revolucionaria, las Fuerzas Armadas profesionales y la contrarrevolución. Recordar este encuentro del comandante Fidel Castro y del presidente Allende lleva a reflexionar sobre las coincidencias simbólicas. Los otros personajes del diálogo, aunque ausentes, eran el prefecto de Carabineros de Santiago, cuyos subordinados se habían interpuesto en el camino de las señoras de las cacerolas, y el comandante de la guarnición de Santiago que obligaba a la burguesía a permanecer quieta en sus casas mientras los dos dirigentes revolucionarios conversaban tranquilamente: el general de Carabineros César Mendoza y el general del Ejército Augusto Pinochet. Los mismos que dos años después se ponían al frente de la insurrección y ordenaban a las tropas tomar por asalto simultáneamente el palacio de la Moneda, Cañaveral y la embajada de Cuba. Pero sólo *dos años* después. Importa retener esta diferencia en el tiempo, y entender lo que se produjo entre tanto.

Significativa coyuntura la de diciembre de 1971. Un experimentado comandante guerrillero al que su instinto le dice que está bajo control militar "incierto". Un gobernante chileno al que su ponderación de la realidad de su país le garantiza que el aparato armado del estado en esos momentos no puede hacer otra cosa sino cumplir las órdenes que ha impartido. Dos milita-

12. En Bogotá, el 9 de abril de 1948, el líder popular Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. La reacción fue explosiva. Masas de obreros ocuparon durante varios días la ciudad que fue declarada en estado de emergencia. Fidel Castro se encontraba en esos momentos allí, participando en un encuentro de estudiantes latinoamericanos.

res profesionales que se ven forzados a subordinar sus preferencias subjetivas ante la cohesión de la estructura en que están aprisionados.

LA POLÍTICA MILITAR DE UNA ESTRATEGIA INDIRECTA

La dimensión esencial que informa la política militar del gobierno UP gira en torno de su concepción estratégica del proceso revolucionario. Para alcanzar el gobierno en 1970, los partidos obreros han debido seguir durante décadas una estrategia indirecta. Instalado en la presidencia de la república, Salvador Allende está convencido de que, dada la realidad económica y militar interna del país y, en especial, el contorno internacional en que está sumergido, su permanencia en el gobierno y la aplicación de su programa de transformaciones estructurales dependen de la capacidad de la UP para imponer las condiciones que hagan viable la continuidad del proceso de acuerdo con la misma estrategia indirecta. Es decir, evitar que se desarrollen a corto plazo las circunstancias que exijan al movimiento popular una confrontación violenta con la burguesía y Estados Unidos, en la que éstos pudieran hacer uso de todo su poder económico y militar antes de que el bloque social anticapitalista hubiera consolidado su control sobre el conjunto de la sociedad.

El bloque social UP necesita el poder del estado para llevar a cabo su programa de transformaciones estructurales. Para ello el aparato militar del estado debe continuar subordinado al gobierno. La UP no tiene fuerza militar propia ni puede crearla en contra de las Fuerzas Armadas profesionales.

Evitar la contraposición Fuerzas Armadas-gobierno, exige que no haya contradicción social antagónica entre ellos ni conflicto de legitimidad. El gobierno necesita evitar la confrontación directa con los sectores medios —predominantes dentro de las Fuerzas Armadas—, así como con la estructura legal del estado —fundamento ideológico de la subordinación del aparato militar al gobierno UP—. A su vez, el gobierno necesita una base social superior a la de la contrarrevolución para que el aparato coercitivo actúe en contra de esta última.

La cohesión y la interdependencia armónica entre las instituciones político-representativas del estado es indispensable

para que el aparato armado de éste no pueda reemplazar a aquéllas. Para ello se requiere que el gobierno tenga mayoría en el Parlamento, propia o mediante pactos legislativos.

Mantener la subordinación del aparato armado al poder político-representativo exige evitar el resquebrajamiento de la unidad y disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, lo que requiere hacer respetar su carácter profesional e incorporarlas por medios indirectos al proyecto político general del gobierno. Las veleidades putschistas deben quedar reducidas a individuos o grupos marginales impotentes para aglutinar al conjunto de las Fuerzas Armadas, contrariando los planes norteamericanos de subversión de los que la "operación engaño" del otoño de 1971 es un ejemplo. Consistió en proporcionar a altos oficiales del ejército informes falsos —elaborados por la CIA— que debían probar la resolución del gobierno y de Allende para que la Policía de Investigaciones chilena procediera a reunir información perjudicial al Alto Mando del Ejército, con la participación de la Dirección General de Información de Cuba. En diciembre de 1971 se hizo llegar a un oficial chileno que se encontraba en el extranjero un paquete de documentos con material de esa naturaleza, incluida una carta falsificada.¹³

El poder gubernamental debe ser efectivo, de modo que le permita contener las actuaciones subversivas con los recursos idóneos, y evitar que lleguen a enfrentarse directamente grupos civiles contrarios. La subversión contrarrevolucionaria para progresar requiere que el aparato coercitivo del estado se halle paralizado o en crisis, reducido a la impotencia.

El bloque social que controla el gobierno debe enfrentar las tentativas insurreccionales adversas mediante una *táctica antiinsurreccional*, en cuya instrumentación necesita articular las instituciones estatales con las organizaciones populares. El aparato coercitivo del estado no es neutro, sino que debe estar respaldado y fortalecido en sus funciones por la fuerza social orgánica de la UP. Todo lo que debilite la unidad y cohesión del bloque social anticapitalista, contribuye también a debilitar la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno popular.

La suerte de la táctica antiinsurreccional depende del grado de control que se ejerza sobre los mecanismos de regulación

13. *Covert action in Chile...*, pp. 37-38.

social, económica y política. En este sentido, es fundamental que el aparato del estado no se desintegre o paralice si el movimiento popular no dispone de fuerza bastante para reemplazarlo. Los programas a corto y a medio plazo deben incrementar progresivamente el control popular sobre aquellos mecanismos, y evitar que la contrarrevolución los sabotee.

Éstos fueron algunos de los principios generales de la política militar puesta a prueba a partir del 4 de septiembre de 1970. A su activo podemos anotar que superó primero la difícil coyuntura de la instalación de la UP en el gobierno, y que respaldó después la ejecución de las realizaciones de mayor contenido revolucionario de todo el período, que tuvieron lugar entre noviembre de 1970 y la primera mitad de 1972. Durante todo el año 1971 no se registra ninguna manifestación que revele que la política militar es inadecuada. Todo lo contrario, su instrumentación hace inconmovible al gobierno frente a las tentativas de insurrección que se llevan a efecto. El fracaso del segundo plan de putsch lanzado por la ITT y el gobierno de Estados Unidos, en marzo de 1972, es una prueba de ello. El que en septiembre de 1973 se impongan las fuerzas putschistas no puede invalidar el hecho de que durante tres años acumularon fracaso tras fracaso;¹⁴ lo que en sí mismo encierra muchas enseñanzas valiosas que deben ser analizadas con tanta atención como las condiciones que necesitó crear la contrarrevolución para, por último, imponerse. ¿Era el diseño inicial de la política militar de Allende el que estaba equivocado? Si ello fuera así, ¿existía para la UP una política militar alternativa? ¿Tenía la Unidad Popular posibilidades de desarrollar una estrategia directa, y en qué condiciones? ¿Por qué triunfa militarmente la contrarrevolución tres años después de su fracaso en septiembre-octubre de 1970?

No es posible dar una respuesta a semejantes cuestiones circunscrita a lo estrictamente militar. Por la razón de que la política militar no es la esencia sino el instrumento de un proceso revolucionario, vinculado a otros factores que la condicio-

14. David A. Phillips, jefe de las operaciones de la CIA en América latina y supervisor directo de sus actividades en Chile, sostiene que durante el gobierno de Allende la CIA tuvo conocimiento de que se estaban preparando golpes de estado en unas treinta oportunidades. "Tuvimos información de que iba a tener lugar unas treinta veces antes de que tuviera realmente lugar" (*Washington Post*, 11 mayo 1975, p. 4).

nan decisivamente. Como indicábamos más arriba, estos son sociales, económicos y políticos. De ahí que el análisis de la política militar deba insertarse en el contexto general que la determina.

Para comprender la manera de ser y suerte de la política militar del gobierno UP, hoy contamos con el elemento explicativo más valioso de todos: el esquema estratégico y táctico que se imponía el 11 de septiembre de 1973. Lo que hoy es una certeza, antes de esa fecha era sólo una probabilidad cuyo desenlace no aparecía como fatal ni a la UP ni a los propios putschistas¹⁵ ni, con mayor motivo, al tercer protagonista principal de este drama, la Democracia Cristiana. Ese esquema es el de una política militar propia de una estrategia directa.

LA POLÍTICA MILITAR DE UNA ESTRATEGIA DIRECTA

La intervención política directa de las Fuerzas Armadas profesionales, o la asunción plena del poder por éstas, guarda relación con la crisis del aparato del estado. El instrumento principal para ello ha sido el conflicto durante casi dos años entre ejecutivo y legislativo.

Cuanto más aguda es la contradicción entre los sectores sociales predominantes dentro de las Fuerzas Armadas y los de las instituciones político-representativas, más factible es el conflicto. El éxito de una táctica insurreccional está en función del grado de descomposición del estado, en particular del aparato coercitivo y de su aislamiento del bloque social que dirige la política del gobierno. No basta con el conflicto entre las instituciones político-representativas, sino que se requiere también privar al gobierno del respaldo de las Fuerzas Armadas para que el plan insurreccional progrese.

A mayor desintegración de la disciplina y unidad interna del aparato militar, mayor facilidad para exacerbar el conflicto entre las instituciones representativas del estado y las armadas.

La táctica insurreccional es tanto más factible cuanto menor

15. Pinochet: "Habría bastado un departamento, una sola unidad que no hubiera cumplido las órdenes que emanaban desde Santiago, para que de inmediato este país hubiese [entrado] en una guerra civil [...]. Muchas veces pensamos que íbamos a tener alguna situación muy desagradable". (Declaración a Radio Agricultura de Santiago, 3 de septiembre de 1974.)

es el control del bloque social dominante sobre los mecanismos de regulación social, económica y política, en particular los de carácter estatal. De ahí la función de la crisis económico-social y política.

La comparación de las políticas vencedora y derrotada el 11 de septiembre de 1973 muestra que, a nivel estratégico, es la estrategia directa la que derrota a la UP más que la indirecta, y que los medios tácticos vencedores son la negación misma de los que informaban la táctica allendista. Constatación de tanta mayor importancia cuanto que a lo largo de los tres años de administración UP, la oposición ha utilizado también los recursos tácticos propios de la estrategia indirecta. En otras palabras, mientras el proceso revolucionario se ha desarrollado dentro de las coordenadas de la estrategia indirecta, el gobierno UP no ha podido ser detenido en su acción transformadora. Sí lo ha sido, en cambio, cuando la lucha de clases se ha resuelto en el terreno de la estrategia directa.

Que la derecha y Estados Unidos impulsaban la estrategia contrarrevolucionaria directa había sido comprobado en octubre de 1970. Había razones de mucho peso en favor de esta opción. En primer lugar, orientar el proceso iniciado en las elecciones de 1970 hacia el terreno de las armas, en cualquiera de sus variantes, desde el golpe de estado clásico a la guerra civil. Y, como ya hemos visto antes, en este terreno el movimiento popular se encontraba en una situación de desventaja absoluta. Todo el peso del sistema militar interamericano estuvo siempre listo para prestar apoyo logístico a la contrarrevolución, mientras que no ocurría lo mismo con el sistema militar de los países socialistas en relación con la clase obrera chilena. Para nosotros, en el Chile de 1970, resultaba claro que si el proceso revolucionario derivaba hacia la guerra civil a corto plazo, la fuerza militar vinculada a Estados Unidos se habría adueñado del territorio mucho antes de que ninguna hipotética ayuda militar extranjera favorable a la UP hubiera tenido tiempo de organizarse y llegar al país. Además de que dábamos por supuesto que en aquella coyuntura de las relaciones internacionales, ningún país del mundo hubiera respaldado militarmente a los trabajadores chilenos en un nivel suficiente para equilibrar la voluntad y los recursos bélicos que Estados Unidos entregaba a la contrarrevolución.

De ahí la obstinación en mantener las condiciones que hicieran viable el progreso del proceso revolucionario por un camino distinto del enfrentamiento armado. O el movimiento popular consolidaba su hegemonía social, económica y política impidiendo a la contrarrevolución abrir fuego, o entrábamos en el terreno objetivamente más desfavorable para la clase obrera.

En segundo lugar, el interés dominante de Estados Unidos en relación con el gobierno UP apareció siempre claro. Para que el efecto de propagación del proceso chileno no tuviera consecuencias desfavorables para la estrategia mundial norteamericana, debía ser obstruido de modo tal que su desenlace resultara lo más provechoso posible para los intereses de Estados Unidos. Dada la extrema dependencia de la economía chilena respecto del sistema capitalista internacional, la gran potencia norteamericana podía entretenerse en manipular los hilos de modo que Chile se convirtiera en una especie de terreno de experimentación. En donde lo más importante no era tanto el desenlace, caída del gobierno, sino la *manera* como ello acaecía. Dados los recursos de toda naturaleza con que contaba Estados Unidos, y la seguridad que tenía de que la Unión Soviética no compensaría al gobierno UP en todo aquello de que la presión capitalista lo privaba, Estados Unidos podía esperar hacer de Chile un escarmiento para otros pueblos.

No puede dejar de mencionarse la importancia que para la acción norteamericana significó la certidumbre de que la Unión Soviética no adoptaría medidas compensatorias equivalentes para asegurar la estabilidad del gobierno chileno. El propio ministro de Asuntos Exteriores de la URSS así se lo vino a confirmar al secretario de Estado de Estados Unidos, cuando éste le preguntó si la Unión Soviética tenía la intención de proporcionar a Chile un respaldo financiero semejante al dado a Cuba. El bloqueo financiero pudo, de este modo, aplicarse con un grado de eficacia y seguridad superior al que hubiera tenido de desconocer la eventual reacción de la URSS. Valga un ejemplo práctico: el de la reunión del 21 de octubre de 1971 del comité de empresas multinacionales que programaba la acción económica contra Chile en colaboración con el secretario de Estado. En un momento de la sesión, éste "indicó que había conversado con el ministro ruso de Exteriores sobre si Moscú iba a financiar a Chile como lo había hecho con Cuba. El ruso negó tener

tal propósito".¹⁶ Y así ocurrió en los hechos. Catorce meses después, en Moscú, el propio Brézhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, ratificó a Allende que no podía satisfacer la solicitud chilena de un préstamo de 500 millones de dólares para cubrir el déficit de la balanza de pagos para 1973.

A fines de 1972 se estimaba que la economía chilena necesitaba una ayuda de 500 millones de dólares en materias primas y productos alimenticios si quería enfrentar con éxito las dificultades que ofrecía el año 1973. El gobierno chileno solicitó al soviético la concesión de un crédito en mercancías o en divisas por un valor equivalente, apoyado en un programa de intercambio comercial en un comienzo deficitario pero que debía equilibrarse en el transcurso de los tres años siguientes. La Unión Soviética concedió en diciembre de 1972 sólo un crédito de 27 millones de dólares en materias primas y productos alimenticios pagaderos a medio plazo, y agregó otros 20 millones de dólares a un crédito por 80 millones anteriormente concedido.

Y si se daba semejante desequilibrio en provecho de la capacidad de intervención norteamericana en el terreno financiero, en el militar era incomparablemente mayor. América latina, con la excepción de Cuba, está lejos de ver manifestarse sobre ella el equilibrio compensatorio internacional entre países socialistas y capitalistas que, a fines de diciembre de 1974, hacía responder a Kissinger a la pregunta sobre si había sondeado la posición de la URSS en caso de que los países occidentales llevaran a cabo acciones militares contra los árabes productores de petróleo: "No. Y pienso que sería absolutamente insensato plantear esa pregunta".¹⁷

Teniendo en el pensamiento tanto a Europa occidental como al propio Chile, el gobierno norteamericano tenía interés en demostrar que la esencia del proyecto político de la UP, hacer compatible la transición al socialismo con el pluralismo político, era una simple estratagema oportunista. Y que, como sostendría con cinismo Kissinger ante el comité de Asuntos Exterio-

16. Véase el memorándum confidencial de la ITT sobre la reunión en el Departamento de Estado de la fecha indicada, *Hearings...*, cit., vol. II, p. 1.090.

17. Declaración de H. Kissinger a *Business Week*, primera semana de enero de 1975.

res del Senado, exteriorizando sus anhelos: "Allende, elegido por una minoría, intentó sistemáticamente establecer un sistema de partido único y eliminar todos los partidos y medios de información de la oposición."¹⁸ Si éste hubiera sido realmente el caso, la UP chilena hubiera servido para alimentar la lucha ideológica contra los partidos obreros de Europa occidental, en especial de Italia y Francia, y de otras regiones del mundo. Kissinger, como cualquier técnico político, podía calcular a fines de 1970 que a mayor presión interna y externa sobre el régimen UP, mayor necesidad tendría el gobierno Allende de abandonar su respeto a la legalidad y al pluralismo y recurrir a procedimientos autoritarios para mantenerse en el poder. Si el período de la guerra fría se benefició de la explotación del denominado a estos efectos "golpe de Praga" de 1947, al período de la distensión con la Unión Soviética y de fortalecimiento del dominio de Estados Unidos sobre Europa occidental, centro de gravedad de la política internacional Nixon-Kissinger, le hubiera venido muy bien nutrirse ideológicamente del ejemplo de un "golpe de Santiago". Con la ventaja adicional de que el intento comunista de "imponer su nefanda dictadura", como proclamaba Frei a mediados de 1971, estaba condenado al fracaso en Chile al no contar con el equivalente del ejército rojo estacionado en Checoslovaquia en 1947. En este sentido, empujar, constreñir al gobierno UP a que evitara ser derrocado mediante el intento de un golpe de fuerza para implantar "la dictadura del partido único" hubiera satisfecho los deseos del señor Kissinger y de todo el capitalismo internacional. Porque ello no sólo precipitaría el contragolpe, instaurando fácilmente una dictadura militar pronteamericana en Chile, sino que el "golpe comunista frustrado" serviría para legitimar durante años cualquier tipo de represión sobre la izquierda y la permanencia del régimen dictatorial por un tiempo ilimitado. Simultáneamente, semejante desenlace descubriría ante el resto del mundo occidental que las alianzas tipo Unidad Popular son una "maniobra de los comunistas para imponer la dictadura de su partido".

Lamentablemente para el designio de Kissinger, Allende y

18. Declaración del 19 de septiembre de 1974 (*Herald Tribune*, 20 septiembre 1974, p. 2).

sus colaboradores tuvieron siempre presente que en Washington se deseaba una evolución de esa naturaleza. Y, hasta donde yo entiendo, el Partido Comunista de Chile era también consciente de ello.

Para satisfacer los designios del gobierno de Estados Unidos y de la derecha chilena, la UP no podía contribuir de mejor manera que contraponiendo a la estrategia directa de la contrarrevolución otra estrategia directa. Si lo hubiera hecho en septiembre-octubre de 1970, el enfrentamiento violento se hubiera producido en ese momento. Y, con toda seguridad, la dictadura militar de la burguesía se hubiera instaurado en el país antes de que Allende hubiera alcanzado a asumir la presidencia. Después de noviembre de 1970, que el proceso revolucionario ingresara de inmediato en la fase armada dependía de la sola voluntad de la UP y del presidente Allende. En cualquier momento el enfrentamiento violento podía ser precipitado. Si se tomaban determinadas iniciativas, perfectamente al alcance de la dirección política de la UP y del gobierno, era absolutamente seguro que *en horas* el sistema político institucional estaba derrumbado y las armas de fuego reemplazaban a las armas políticas como vehículo principal de la lucha social.

Entre el 4 de septiembre de 1970 y el 10 de septiembre de 1973, un gobierno como el de la UP tiene en sus manos los medios de precipitar el enfrentamiento armado. Si estima que la correlación de fuerzas internas y externas le ofrece altas probabilidades de éxito, puede desencadenarlo en cualquier momento.

Lo que el gobierno UP no tenía bajo su total control era la capacidad de evitar el desencadenamiento del enfrentamiento armado. Y en esta diferencia en la capacidad ofensiva y defensiva estriba una de las claves del proceso chileno.

LA ENCRUCIJADA TÁCTICA DE ENERO DE 1972

En 1970, y en los años siguientes, la capacidad de *disuasión* del gobierno UP contra la acción directa de la contrarrevolución estaba en función de dos factores principales. En primer lugar, la cohesión y fortaleza propias del movimiento popular, de las que dependía la capacidad de iniciativa y de respuesta revolucionaria. En segundo lugar, de la estrategia del otro movimiento político-social del que dependía la estabilidad o el

derrumbe del aparato del estado —o si se prefiere, la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno—: la Democracia Cristiana. Si la UP hubiera tenido fuerza social suficiente para sostener el aparato del estado dentro del cual dirigía el gobierno, o para reemplazarlo por otro, la posición de la DC no hubiera resultado tan determinante. Pero como ése no era el caso, las relaciones entre la UP y la DC condicionaban el desarrollo del proceso revolucionario tanto por la vía indirecta como por la directa.

Un partido de concentración de sectores medios y populares como la DC, de ideología democrático-liberal, no puede sobrevivir sino en la medida que se dé una relación entre las clases sociales tal que ni la dictadura del proletariado ni la dictadura de la burguesía se impongan de modo absoluto sobre el sistema político. En 1970, frente a la UP con su estrategia indirecta, la DC tenía una disyuntiva: oponerse a la UP mediante la táctica político-institucional o a través de un enfrentamiento directo. La diferencia entre una y otra alternativa es fundamental. La primera implicaba reconocer al gobierno de Allende dentro del marco legal, pero ello daba a la DC los instrumentos de garantizar su propia continuidad como fuerza política y su influencia, en correspondencia con su ubicación en la estructura social del país y en el aparato del estado (tesis del sector Tomic). La segunda significaba desconocer el derecho de la UP a gobernar, pero a cambio de aceptar el riesgo de destruir el sistema político que legitimaba a Allende como presidente y a la DC como partido (posición del sector Frei). Pues no podía ocurrir otra cosa si se instauraba la dictadura armada por la burguesía como último recurso para someter al movimiento popular. Como esto sólo era posible previo aplastamiento militar de las organizaciones de la clase obrera, la DC tenía que contribuir a instaurar un régimen político autoritario que implicaba negarla a ella misma en su personalidad constitutiva, tanto social como política. La alternativa al gobierno UP era la desaparición de la DC, ya que ésta no podía reconvertirse de la noche a la mañana en un movimiento parafascista de sustentación de la dictadura de la burguesía.

Ambas opciones tuvieron partidarios dentro de la DC desde que perdieron el gobierno el 4 de septiembre de 1970. Las circunstancias anteriormente explicadas impusieron en un pri-

mo momento mantener una estrategia indirecta contra la UP, quedando la alternativa en estado de latencia.

Mientras la DC adoptó una estrategia de oposición indirecta —desde septiembre de 1970 a fines de 1971— el proceso revolucionario no pudo ser detenido ni obstruido. La democratización de las estructuras políticas y económicas del país avanzó a pasos rápidos y la fuerza ordenadora del aparato del estado permitió no sólo vencer la resistencia de la coalición burguesía nacional-capital norteamericano, sino llevar a cabo transformaciones estructurales de acuerdo con el programa y dirección de la UP.

Sin embargo, durante este mismo período de tiempo la UP incurrió en tres errores tácticos que lastraron el desarrollo posterior de su línea estratégica. En primer lugar, no haber medido en toda su trascendencia la necesidad de contribuir a que la DC continuara bajo la dirección del sector resuelto a adoptar frente a la UP una oposición *indirecta*, de modo tal que el sector propiamente antisocialista de este partido no lograra controlarlo. El segundo, no haber articulado la política económica con la estrategia general del poder, de modo que la UP hubiera alcanzado la mayoría en el Parlamento antes de que se produjera la bipolarización que terminaría por enfrentar *directamente* a la UP con toda la oposición antisocialista. En tercer lugar, no haber articulado a las organizaciones obreras con el aparato armado del estado, con vistas a incrementar el poder de *disuasión* contra las acciones insurreccionales de la contrarrevolución. Y, al mismo tiempo, si aun así resultaba imposible evitar que la oposición adoptara una estrategia *directa* contra la UP, facilitar la reconversión del movimiento popular, para hacer frente a las necesidades que exige esta nueva situación. En otros términos, aceptar en la práctica el principio de que la vía política institucional podía desembocar, aun contra la voluntad de la UP, en un enfrentamiento armado. Y estar preparados para resistirlo.

Analizaremos más adelante, con el detalle que ello merece, el porqué de estos errores. Por ahora, nos limitaremos a decir que 1971 terminaría con una innovación mayor: la DC se deslizaba hacia la oposición *total* al gobierno antes de que la UP tuviera una mayoría propia en el Parlamento y el control de los centros neurálgicos de poder económico y militar.

En diciembre de 1971, el proceso parlamentario contra el ministro del Interior demuestra que el PDC vuelve a estar controlado por su ala derecha. Y que todo el poder de masas y estatal de este partido —eje del sistema sociopolítico—, va a inclinarse del lado de la burguesía para formar un frente único de resistencia antisocialista. Desde el punto de vista político, ello significaba que estaba desmoronándose uno de los pilares básicos que permitieron un año antes el inicio del proceso revolucionario por la vía institucional.

Al estallido del conflicto con el Parlamento se agrega, en el mes de enero de 1972, un acontecimiento electoral de significado coincidente. El día 16, tienen lugar elecciones complementarias para elegir un senador en la provincia de Colchagua y un diputado en la provincia de Linares. Por primera vez en su historia, el PDC acepta no presentar candidato propio en esta última provincia y votar en favor de uno del Partido Nacional, a cambio del respaldo de éste al candidato DC en Colchagua. La evolución progresiva de la DC hacia la derecha es sometida, en esta oportunidad, al refrendo de los electores de dos provincias donde la UP ha sido siempre minoritaria —caso de Linares—, o donde apenas bordeaba el 50 por ciento en las municipales de abril de 1971 —caso de Colchagua—. La derrota, en esta oportunidad, de los candidatos de la UP sella la alianza DC-PN. Frente a la Unidad Popular como bloque social prosocialista, la alianza de las fuerzas antisocialistas está demostrando que es aceptada por el electorado popular de la DC, lo que era imposible entre 1967 y 1971, y que es capaz de cuestionar a la UP un respaldo político mayoritario. Para la oposición, el 50 por ciento que obtuvo la UP en las elecciones municipales de abril de 1971 queda, en lo sucesivo, desvirtuado.

La UP ha llegado a la presidencia gracias a un resultado electoral y a un voto mayoritario en el Parlamento en septiembre-octubre de 1970. Quince meses después, las mismas Cámaras le desconocen la facultad constitucional de dirigir la política del país destituyendo al ministro del Interior. Es una destitución que va dirigida contra el propio presidente, pero que tiene que detenerse en su ministro de mayor rango porque en el Senado la oposición no cuenta con los 2/3 indispensables para deponerle. Mientras que puede hacerlo con los ministros por simple mayoría de votos.

El régimen constitucional no es barrera suficiente para una oposición que se siente mayoritaria. El régimen de fuerte hegemonía presidencial que es el chileno impide, sin embargo, al Parlamento enjuiciar políticamente a los ministros. Éstos sólo pueden ser acusados por graves infracciones a las leyes o delitos de lesa patria. No es el caso de José Tohá, pero es destituido igualmente. Las facultades legales sólo se pueden hacer respetar mientras se tiene fuerza bastante para ello. La entente DC-PN hace perder al gobierno el apoyo de la mayoría parlamentaria y, en lo sucesivo, la Constitución presidencialista se ve para aquélla una estrecha camisa de fuerza de la que intentará desprenderse.

El peligro de derrumbe del régimen constitucional amenaza la legitimidad institucional de la UP para gobernar. Allende necesita hacer respetar el régimen jurídico si desea continuar siendo presidente. Cuenta para ello con más de los 2/3 de los trabajadores sindicalmente organizados, con un respaldo electoral que a nivel nacional es muy superior al promedio que históricamente han tenido sus predecesores en el gobierno. La fuerza de la razón jurídica está de su lado. Pero la mayoría del Parlamento quiere negarla. En estas circunstancias, ¿de qué lado está la razón de la fuerza, en otras palabras, el aparato armado de sustentación del estado?

Si el gobierno mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas es sólo en tanto que es legítimo. La burguesía en el Parlamento pretende negar el régimen legal. Alcanzado este nivel de contradicción entre las instituciones del estado, la continuidad de la estructura estatal depende de la posición de las Fuerzas Armadas. Si éstas no la respaldan, el proceso revolucionario por la vía legal ha llegado a su término.

El 6 de enero a medianoche la Cámara de Diputados termina de votar la acusación del ministro del Interior. Por 81 votos contra 59 es aceptada. Los antecedentes pasan al Senado, que debe resolver como jurado. Media hora después, varios miles de personas se congregan delante del palacio de la Moneda. A un sector de los trabajadores su sentido político les dice que el gobierno acaba de ser negado por la votación de la Cámara de Diputados. Hay mucho nerviosismo e indignación. Algunas voces lo traducen en la proposición "armas quiere el pueblo". El fondo del problema está planteado. Si el Parlamento está

quebrando el sistema político en que se inserta el gobierno, ¿qué corresponde hacer en estos momentos al movimiento popular?

¿Armas? Éstas las tienen las instituciones militares del estado, además de la técnica y la organización para su uso efectivo. Las Fuerzas Armadas están intactas en su disciplina interna. El sentido de la autoridad y la jerarquía no muestran fisuras. El sector militar antisocialista está aprisionado dentro de un molde, que el gobierno necesita mantener unido y jerarquizado para disuadir a los putschistas de interponerse en su camino. Las armas, o las encuentra la UP dentro de este aparato militar o no las tendrá. Así piensa Allende y, antes de que la Cámara de Diputados empezara a votar la acusación contra su ministro del Interior, había convocado a los comandantes en jefe a su gabinete.

Allende plantea el problema: "Señores comandantes, la oposición está negando mi facultad constitucional de designar secretarios de estado y de mantenerlos mientras cuenten con mi confianza. El nuestro no es un régimen parlamentario y yo voy a hacer respetar el régimen legal. Esta tarde la Cámara de Diputados suspenderá a José Tohá como ministro del Interior, por razones exclusivamente políticas y no legales, pues Tohá no ha incurrido en ningún delito. Estamos ante un juicio político ilegal. Pero aunque yo no puedo interferir en lo que resuelve el Congreso, sí deseo impedir que éste interfiera en mis prerrogativas. Por esta razón, sin esperar a que el Senado resuelva la suerte de la acusación, yo me propongo mantener a Tohá en el gabinete. Mi intención es designarlo mañana mismo ministro de Defensa Nacional. Como va a ser el superior inmediato de las Fuerzas Armadas, he querido comunicárselo a ustedes antes de hacerlo público".

El aparato militar del estado. Un Parlamento dispuesto a obstruir al gobierno por todos los medios, incluso desconociendo las limitaciones que le impone la Constitución, plantea la crisis del estado si el gobierno resiste. Si el gobierno cede al desconocimiento de sus competencias, el régimen político se convierte de hecho en parlamentario, por más que la Constitución diga lo contrario. El año 1971 termina en una coyuntura de presión burguesa para cambiar la forma de estado históricamente dominante en el país. O las Fuerzas Armadas continúan

respaldando al régimen legal, lo que era del interés de la UP, o aquél se altera. A estas alturas del proceso, la estrategia indirecta de la UP está poniendo a prueba la inercia de sustentación del aparato estatal. De tal manera que el respaldo del aparato armado a la forma de estado del que forma parte, significa en los hechos que las Fuerzas Armadas apoyan al gobierno dirigido por la Unidad Popular. Detrás del combate en torno de la legalidad lo que estaba materialmente en juego era si el bloque social prosocialista conservaba la dirección política del estado, o bien era reemplazado por el bloque procapitalista. En la crisis de enero de 1972, un cambio de tanta envergadura ya no podía hacerse sin la resistencia activa de los trabajadores. Con todas las eventuales consecuencias que de ello podían derivarse.

La reunión del presidente Allende con los tres comandantes en jefe era la concreción práctica de este problema teórico. Estaban presentes el general Carlos Prats, el general César Ruiz y el almirante Raúl Montero. Este último respondió el primero: "La designación del ministro de Defensa Nacional es facultad exclusiva del presidente de la república, y no es de nuestra competencia pronunciarnos sobre ella. Pero ya que usted ha tenido la deferencia de hacérselo saber antes, y si me lo permite, me gustaría manifestarle que su decisión me parece no sólo correcta sino también plenamente satisfactoria para las FF.AA. Nosotros sentimos aprecio por don José Tohá, cuyas cualidades personales hemos podido observar como ministro del Interior". Los otros dos generales ratificaron sus palabras. Esa noche, a los manifestantes que pedían armas Allende les respondió en términos afirmativos, pero dentro de su propia línea táctica:

¡Qué fácil es gritar "hay que armar el pueblo"! ¡Qué me costaría a mí decirlo, si acaso me dejara arrastrar! Pero, compañeros, mediten la historia, vean los ejemplos, piensen que las revoluciones no se hacen en función de un verbalismo que no tenga como arraigo la fuerza consciente, la voluntad disciplinada [...] ¿Qué vale más: gritar algo que no tiene asidero, lanzar una consigna que no se puede cumplir, o hacer que sea ministro otra vez, en el gabinete de un gobierno del pueblo, el ministro a quien la Cámara —a nuestro juicio sin base jurídica— ha suspendido de sus funciones de ministro del Interior?

Yo creo que no hay nadie en Chile —que no esté afebrado— que no entienda lo que eso significa y la proyección que tiene [...]. Nosotros tenemos un instrumento que debemos usar. Hasta que ese instrumento, que es la Carta Fundamental, nos dé la validez que nos permita decir: mañana será Tohá ministro de nuevo [...].

Sin embargo, muchos de los que pedían armas continuaron sin entender semejante transposición. Para ellos, “armar al pueblo” venía a significar clausurar el Parlamento, con las medidas complementarias indispensables. Es decir, quebrar el aparato del estado existente. Sin medir que tal propósito significaba enfrentar al gobierno y a los trabajadores con todo el aparato militar del estado. Frente al palacio de la Moneda, las estrategias directa e indirecta se hallaban una vez más contrapuestas.

A partir de enero de 1972, el proceso cambia de carácter. El movimiento popular por sí solo es incapaz de mantenerse en el gobierno con recursos exclusivamente políticos. La reacción contra el régimen legal obliga al bloque revolucionario a usar los recursos militares de aquél. En lo sucesivo, el gobierno UP estará en función del modo en que se articule su base social de sustentación con el aparato armado. Ello no es nuevo. Lo fue así desde el primer día, pero ahora es explícito, manifiesto. Las Fuerzas Armadas respaldaron en los meses anteriores al régimen político legal sin necesidad de manifestarse, prácticamente desde dentro de los cuarteles, con las solas excepciones de junio y diciembre de 1971, antes indicadas. A lo largo de 1972, esta defensa deberán hacerla no sólo dentro de los cuarteles —conteniendo a los oficiales putschistas—, sino también fuera.

En otras palabras, en ese momento estábamos asistiendo a la manifestación de una de las características recurrentes de los procesos revolucionarios: toda revolución tiene que poder defenderse también en el terreno de las armas. Lo que cambia de un proceso histórico a otro es la modalidad y la secuencia de tiempo de aparición de esta fase.

Sin embargo, nosotros entrábamos en ella en circunstancias desfavorables. Las insuficiencias tácticas de 1971 en relación con el PDC y el problema del Parlamento nos hacían ingresar en 1972 con la *entente* DC-UP seriamente deteriorada, sin

contar con mayoría propia en el órgano del estado indispensable para la continuidad de la estrategia UP. Y el hecho de no haberse instrumentado una política militar en correspondencia con la estrategia general que se estaba siguiendo, es decir, que articulara la base de masas del gobierno con el aparato armado del estado, según veremos más adelante, obliga al gobierno a apoyarse en un aparato armado cuya definición social tenía un centro de gravedad distinto del bloque UP.

En enero de 1972, la continuidad del proceso de transformaciones estructurales en curso requería que la UP conservara el gobierno. Es más, sólo evitando que lo recuperara el bloque conservador podían consolidarse las realizaciones de 1971. Sobre este punto existía unanimidad. Los problemas surgían en torno del modo de mantenerse en el gobierno.

La voluntad del ejecutivo de defender el régimen político legal representaba, también, la defensa de su *legitimidad para* ocupar el gobierno. En otras palabras, lograr que las Fuerzas Armadas no sólo no se enfrentaran a la UP sino que, además, acataran la autoridad de su gobierno. A partir de este mes de enero, la UP se encastilla dentro del régimen legal, se parapeta detrás de la Constitución, para concentrar en torno de su base social el peso del aparato del estado. Lo que obliga a la oposición a acrecentar su antagonismo con el régimen constitucional. A lo largo de 1972 y 1973, esta apropiación del régimen legal por el gobierno UP es tan considerable que la derecha no puede ya sólo limitarse a derrocar a este último. Necesita cada vez más destruir la forma de estado vigente para lograr su objetivo.

Pero, obviamente, en un régimen político institucionalizado y con sólidas raíces en la sociedad civil, es menos costoso reemplazar a un gobierno a través de los procedimientos normales que no hacerlo previa *destrucción* de las instituciones. Esto último requiere más tiempo, más fuerza y, además, plantea la problemática cuestión de crear nuevas estructuras políticas. La coalición DC-PN necesitó todo el año 1972 y gran parte de 1973 para destruir el régimen político y acabar con el gobierno UP. Pero, ¿y después qué? Según las estimaciones que en la presidencia de la república manejábamos a lo largo de todo este tiempo, una eventual alternativa al gobierno UP tendría que ajustarse a alguna variante de los dos modelos principales siguientes:

CUADRO 14

Índice de precios al consumidor en Santiago, referido a 1970
(Laspeyres, base diciembre 1969 = 100)

Fechas	Alimentación 41,73 (47,59)		Vivienda 22,21 (23,16)		Vestuario 14,33 (17,35)		Varios 21,23 (11,90)		Índice general			
	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	% variación		
										Mes	Año	12 meses
1966	50,41	22,5	50,51	20,6	46,54	20,3	38,49	31,9	48,01	—	—	17,0
1967	57,70	14,5	60,48	19,7	56,81	22,1	49,10	27,6	56,72	—	—	21,9
1968	72,41	25,5	75,30	24,5	71,34	25,8	66,50	35,4	71,83	—	—	27,9
1969	94,65	30,7	94,94	26,1	91,17	27,8	92,69	39,4	93,84	—	—	29,3
1970	128,12	35,4	119,41	25,8	116,45	27,7	127,63	37,7	124,35	—	—	34,9
1970												
Ene.	107,50	7,5	104,25	4,3	102,58	2,6	111,01	11,0	106,80	6,8	6,8	31,7
Feb.	113,26	5,4	106,78	4,3	103,24	0,6	120,01	8,1	112,21	5,1	12,2	31,2
Mar.	117,36	3,6	112,89	3,8	106,07	2,7	124,36	3,6	116,18	3,5	16,2	31,8
Abr.	120,19	2,4	117,21	3,8	108,55	2,5	125,70	1,1	115,97	2,4	19,0	30,9
May.	123,49	2,7	117,45	0,2	114,30	5,3	126,87	0,9	121,50	2,1	21,5	30,3
Jun.	127,63	3,4	118,01	0,5	117,23	2,6	127,28	0,3	123,88	2,0	23,9	29,8
Jul.	129,43	1,4	121,90	3,3	118,51	0,9	130,25	2,3	126,28	1,9	26,3	30,8
Ago.	135,88	5,0	123,12	1,0	119,04	0,6	130,91	0,5	129,49	2,5	29,5	32,0
Sep.	141,11	3,8	124,36	1,0	123,83	4,0	132,24	1,0	132,94	2,7	32,9	34,9
Oct.	140,17	-0,7	127,94	2,9	127,29	2,8	133,23	0,7	134,07	0,9	34,1	35,6
Nov.	141,00	0,6	128,36	0,3	128,26	0,8	134,60	1,0	134,94	0,6	34,9	35,3
Dic.	140,41	-0,4	128,67	0,2	128,72	0,4	135,10	0,4	134,94	0,0	34,9	34,9
1971												
Ene.	142,14	1,2	132,10	2,7	129,78	0,8	136,38	0,9	136,85	1,4	1,4	28,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Nota: Las cifras al pie de los índices parciales corresponden a su ponderación, la cual ha sido alterada a partir de enero de 1970; entre paréntesis, se anotan las ponderaciones que se emplearon hasta diciembre de 1969. Las variaciones anuales de los índices parciales corresponden a las del promedio de un año con respecto al promedio del año anterior.
Para reducir un índice general de precios al consumidor base 1958 = 100, al nuevo índice base diciembre de 1969 = 100, es necesario multiplicar aquél por el factor 0,07591862.

1. *La UP es derrotada dentro de la estrategia indirecta*

Ello requería aislar socialmente a la clase obrera y derrotarla por los medios políticos institucionalizados. En este caso, la alternativa lógica podría ser un gobierno de carácter capitalista pero compatible con el sistema democrático-liberal. Respaldado por una mayoría del electorado, hubiera reunido a amplias capas populares de la clase media y de la burguesía. Es decir, se fundamentaría en una coalición centrada en torno de la DC. La que, de llegar al gobierno después de la UP hubiera alterado, claro está, el sentido socialista de sus transformaciones. Pero sin verse obligada a destruirlas, las intentaría reconvertir según el modelo de un capitalismo de Estado avanzado. La DC con el apoyo de la burguesía chilena y de Estados Unidos, hubiera así podido quizás desarrollar el sistema capitalista más moderno y dinámico de América latina. Eliminadas las estructuras económicas oligárquicas y tradicionales por la UP, la DC se hubiera encontrado con instrumentos económicos idóneos para intentar consolidar el sistema capitalista en una fase más desarrollada y, de tener éxito, postergar por un largo plazo de tiempo el desarrollo del socialismo en Chile. El sistema democrático-burgués, con algunas modificaciones, le hubiera proporcionado las estructuras políticas correspondientes a su proyecto económico.

2. *La UP es derrotada por un golpe de fuerza*

En este caso, la caída del gobierno UP requeriría la destrucción del régimen institucional vigente. Por consiguiente, no podía sucederle ningún gobierno de carácter democrático-liberal al no contar con el marco estructural necesario. La DC quedaba, de este modo, inhabilitada para ser el centro político y social alternativo. Sólo la alta burguesía monopólica estaría en condiciones de dirigir un gobierno altamente represivo, en condiciones tales que las estructuras económicas creadas por la clase obrera necesitarían también ser destruidas, sin la posibilidad de ser reconvertidas según el modelo del capitalismo de estado. Por el contrario, la burguesía financiera monopólica —a diferencia del conglomerado social que está detrás del PDC—

es contraria a todo intervencionismo estatal en el “mercado”. Al estar la clase obrera brutalmente oprimida, y sus organizaciones representativas desarticuladas, el bloque social alternativo al de la UP tendería a rehacer un sistema capitalista clásico, de acumulación primitiva. Ello sólo podría lograrse mediante realizaciones económicas espectaculares que le aseguraran una base amplia de sustentación social, y creando un aparato del estado de carácter parafascista, pues el democrático-burgués resultaría necesariamente destruido en el caso de que el gobierno UP alcanzara a ser derrocado por una acción armada. Pero las estructuras políticas del régimen de reemplazo resultarían inhabilitadas para llevar a cabo una acción económica distinta de la de contracción del mercado, marginación del consumo de las grandes masas, desarticulación del sector público, restricción de las funciones esenciales del estado, alienación de las empresas más dinámicas al capital extranjero, etc. Todo ello, por su propia lógica interna, pronto debería encontrarse enfrentado con los intereses de la mayoría de la pequeña y mediana burguesía, además de con el bloque social de la UP y, a su vez, entorpecería y acabaría por frustrar la remodelación fascistizante del estado.

Desde nuestro punto de vista, el éxito económico inmediato de un régimen contrarrevolucionario de esta segunda naturaleza era altamente improbable. La burguesía chilena sólo podía lograr un crecimiento económico acelerado mediante un aporte masivo de capital extranjero durante un largo periodo de años, como ocurrió en los casos del Japón y Alemania después de la segunda guerra mundial. Pero a corto plazo ésta era una vía sin salida, ya que la estructura económica chilena es mucho más restringida en cuanto a capacidad de producción y demanda. Además, la política de Allende se preocupó de incidir desde un principio sobre las bases estructurales del fascismo, de tal modo que éste encontrara dificultades para convertirse en movimiento de masas y se viera reducido a núcleos marginales.¹⁹ Lo que si por un lado aumentaba la capacidad de resistencia del gobierno UP, en el supuesto de un derrocamiento

19. La política dirigida a impedir el desarrollo de una base social de masas fascista está contemplada en mi artículo “El espectro del fascismo asoma. Sus raíces”, de junio de 1972. Véase *El estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, Siglo XXI, México, 1973, cap. III.

CUADRO 15

Índice de precios al consumidor en Santiago, referido a 1971 •
(Laspeyres, base diciembre 1969 = 100)

Fechas	Alimentación 41,73 (47,59)		Vivienda 22,21 (23,16)		Vestuario 14,33 (17,33)		Varios 21,23 (11,90)		Índice general		
	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	Variación	Índice	% variación	
									Mes	Año 12 meses	
1966	50,41	22,5	50,51	20,6	46,54	20,3	38,49	31,9	48,01	—	17,0
1967	57,70	14,5	60,48	19,7	56,81	22,1	49,10	27,6	56,72	—	21,9
1968	72,41	25,5	75,30	24,5	71,34	25,6	66,50	35,4	71,83	—	27,9
1969	94,65	30,7	94,94	26,1	91,17	27,8	92,69	39,4	93,84	—	29,3
1970	128,12	35,4	119,41	25,8	116,45	27,7	127,63	37,7	124,35	—	34,9
1971	158,63	23,8	138,99	16,4	146,73	26,0	143,53	12,5	149,29	—	22,1
1971											
Ene.	142,14	1,2	132,10	2,7	129,78	0,8	136,38	0,9	136,85	1,4	1,4
Feb.	144,06	1,4	132,27	0,1	129,81	0,0	137,05	0,5	137,84	0,7	2,1
Mar.	146,15	1,4	132,31	0,2	132,02	0,7	139,27	1,9	139,50	1,7	5,4
Abr.	149,03	2,0	134,86	1,9	141,40	7,1	140,63	1,0	142,97	2,5	6,0
May.	155,11	4,1	136,05	0,9	147,80	4,5	141,90	0,9	146,99	2,8	8,9
Jun.	160,84	3,7	136,50	0,3	150,13	1,6	142,53	0,4	149,96	2,0	11,1
Jul.	159,30	-1,0	140,45	2,9	150,75	0,4	143,09	0,4	150,40	0,3	11,5
Ago.	162,21	1,8	140,65	0,1	151,68	0,6	144,11	0,7	152,02	1,1	12,7
Sep.	164,67	1,5	141,35	0,5	152,92	0,8	145,26	0,8	153,63	1,1	13,9
Oct.	167,29	1,0	145,91	3,2	155,44	1,6	145,68	0,3	156,20	1,7	15,8
Nov.	172,69	3,2	146,53	0,4	157,81	1,5	152,42	4,6	160,37	2,7	18,8
Dic.	180,04	4,3	148,87	1,6	161,18	2,1	154,06	1,1	164,80	2,8	22,1
1972											
Ene.	189,32	5,2	152,31	2,3	164,47	2,0	158,28	2,7	170,82	3,7	3,7

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.

• Véase nota de cuadro 14.

violento debía dificultar la movilización fascista posterior, necesaria para consolidar el régimen de reemplazo, encerrándolo así en un círculo vicioso tal que no pudiera estabilizarse ni en una forma fascista ni, tampoco, democrático-burguesa. Esto debía conducirlo, más bien pronto que tarde, al fracaso.

Las posibilidades de consolidación de cualquiera de las dos alternativas capitalistas principales guardaban una relación inversamente proporcional al grado de desarrollo que alcanzarían los factores objetivos y subjetivos del proceso revolucionario durante el gobierno UP. A mayor nivel de sustitución de las estructuras tradicionales y desarrollo de las de transición al socialismo, mayor dificultad para *reconstruir* el modo de producción capitalista. A mayor desarrollo de la conciencia de clase y de la capacidad de poder propio de las grandes masas obreras, campesinas y, en general, de todas las capas sociales explotadas, mayor dificultad para *legitimar* un eventual régimen político burgués de reemplazo.

En la crisis de diciembre de 1971 y enero de 1972, Allende optó por reforzar los pilares de sustentación de la vía político-institucional. No aceptar la mutación *de facto* del régimen presidencial era una medida en ese sentido que le permitía continuar en la presidencia. Nosotros considerábamos que esta opción era necesaria, pero insuficiente en sí misma, pues en último extremo significaba apoyarse en la vinculación entre aparato estatal y Fuerzas Armadas. Y éste era sólo uno de los pilares de la estrategia indirecta. Y no el más importante, ya que, a su vez, necesitaba de otras dos condiciones previas: respaldo nacional a la política del gobierno superior al de cualquier alternativa (mantener aislado al bloque burgués), y coordinación entre gobierno y Parlamento (evitar crisis política del estado).

El resultado adverso a la UP de las elecciones complementarias del 16 de enero de 1972, afectaba seriamente a la primera premisa. En previsión de que semejante situación se produjera, Allende se había apresurado a anticipar el desenlace de la crisis en torno al ministro Tohá la semana anterior, el día 6, apoyándose en las Fuerzas Armadas, de modo que cuando, el 22 de enero, el Senado aprobó la acusación de la Cámara y destituyó al ministro del Interior, los juegos estaban hechos y las prerrogativas presidenciales garantizadas. Tohá era ya ministro de Defensa. La oposición, exultante por el triunfo electoral, se

antió frustrada y tuvo que sacar su maniobra contra el régimen presidencial fuera del recinto parlamentario: apeló ante el Tribunal Constitucional contra la continuidad de Tohá en el gabinete. De ese modo hicieron posible que este organismo jurisdiccional ratificara con el voto favorable del presidente de la corte suprema la legalidad de la acción del presidente de la república. El sistema político continuaba defendiéndose por homeostasis. En febrero de 1972 apareció así claro que, dentro del régimen legal, la contrarrevolución no podía derrotar la estrategia de la UP.²⁰

Pero la legalidad reconocida por los tribunales y las Fuerzas Armadas creaba un equilibrio en favor de la continuidad del gobierno cuyos fundamentos eran otros. De ahí que, a la iniciativa de la derecha del PDC del 3 de diciembre de 1971 de provocar la crisis Parlamento-ejecutivo, Allende reaccionara invitando a Tomic a incorporar al gobierno el sector popular de la DC, en la forma que veremos a continuación. Y ante el resultado electoral adverso del 15 de enero, Allende reaccionó proponiendo de inmediato a la UP, en el transcurso de la semana siguiente, someter a referéndum las iniciativas político-económicas necesarias para consolidar el desarrollo del proceso revolucionario por el camino previsto por el programa común. PDC y referéndum. Parlamento y elecciones. Aislamiento de la burguesía o aislamiento de la clase obrera. Estrategia indirecta o estrategia directa. El proceso revolucionario se encontraba ante una encrucijada y debía, de nuevo, optar por el camino a seguir y las condiciones de hacerlo.

La continuidad de la política de transformaciones socioeconómicas anticapitalistas, exigía preservar el poder del gobierno. Mantener la capacidad de conducción de este último, presuponia que los trabajadores contaran con la capacidad de ordenación y la fuerza del estado, evitando su desintegración o bloqueo interno. Lo que, a su vez, requería que el sistema económico no experimentara desequilibrios productivos, de consumo o de distribución tales que agudizaran las contradicciones entre los sectores populares y medios. Pero el desajuste entre el plan económico a corto plazo puesto en práctica a partir de noviem-

20. La crisis política con que termina el año 1971 está descrita más extensamente en mi libro *Revolución, Congreso y Constitución. El caso Tohá*, Quimantú, Santiago de Chile, 1972.

CUADRO 16

Índice de precios al consumidor en Santiago, referido a 1972 •
(Laspeyres, base diciembre 1969 = 100)

Fechas	Alimentación 41,73 (47,59)		Vivienda 22,21 (23,16)		Vestuario 14,83 (17,35)		Varios 21,23 (11,90)		Índice general		
	Índice	Varia- ción	Índice	Varia- ción	Índice	Varia- ción	Índice	Varia- ción	Índice	% variación Mes Año 12 meses	
1967	57,70	14,5	60,18	19,7	56,81	22,1	40,10	27,6	56,72	—	18,1
1968	72,41	25,5	75,30	24,5	71,34	25,6	60,50	35,4	71,83	—	26,6
1969	94,65	30,7	94,94	26,1	91,17	27,8	92,69	30,4	93,84	—	30,7
1970	128,12	35,4	119,41	25,8	116,45	27,7	127,63	37,7	124,35	—	32,5
1971	158,63	23,8	138,99	16,4	146,73	26,0	143,53	12,5	149,29	—	20,1
1971											
Dic.	180,04	4,3	148,87	1,6	161,18	2,1	154,06	1,1	164,80	2,8	22,1
1972											
Ene.	189,32	5,2	152,31	2,3	164,47	2,0	158,28	2,7	170,82	3,7	24,8
Feb.	202,86	7,2	156,37	2,7	171,01	4,0	175,01	10,6	181,90	6,5	32,0
Mar.	208,07	2,6	158,85	1,6	177,30	3,7	181,22	3,5	186,87	2,7	16,4
Abr.	220,70	6,1	162,55	2,3	197,42	11,3	188,27	3,9	197,45	5,7	19,8
May.	233,97	6,0	164,80	1,4	204,55	3,6	194,42	3,3	205,85	4,3	24,9
Jun.	240,30	2,7	165,93	0,7	207,63	1,5	198,73	2,2	210,15	2,1	27,5
Jul.	258,66	7,6	169,58	2,2	208,84	0,6	202,19	1,7	219,50	4,4	33,2
Ago.	357,19	38,1	175,88	3,7	222,73	6,7	227,43	12,5	209,43	22,7	63,5
Sep.	465,77	30,4	183,70	4,4	265,59	19,2	257,79	13,3	329,27	22,2	99,8
Oct.	545,71	17,2	193,95	5,6	304,32	14,6	299,01	16,0	379,40	15,2	130,2
Nov.	556,68	2,0	214,62	10,7	335,06	10,1	334,68	11,9	400,70	5,6	148,9
Dic.	618,13	11,0	229,36	6,9	340,02	1,5	352,43	5,3	434,12	8,3	163,4

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.

* Véase nota de cuadro 14.

CUADRO 17

*Indice de precios al consumidor en Santiago, referido a 1973 **
(Laspeyres, base diciembre 1969 = 100)

Fechas	Alimentación 41,73 (47,59)		Vivienda 22,21 (23,16)		Vestuario 14,83 (17,35)		Varios 21,23 (11,90)		Indice general			
	Indice	Varia- ción	Indice	Varia- ción	Indice	Varia- ción	Indice	Varia- ción	Indice	Mes	% variación Año 12 meses	
1967	57,70	14,5	60,48	19,7	56,81	22,1	49,10	27,6	56,72	—	—	18,1
1968	72,41	25,5	75,30	24,5	71,34	25,6	66,50	35,4	71,83	—	—	26,6
1969	94,65	30,7	94,94	26,1	91,12	27,8	92,69	39,4	93,84	—	—	30,7
1970	128,12	35,4	119,41	25,8	116,45	27,7	127,63	37,7	124,35	—	—	32,5
1971	158,63	23,8	138,99	16,4	146,73	26,0	143,53	12,5	149,29	—	—	20,1
1972	341,45	115,2	177,33	27,6	233,24	59,0	230,79	60,8	265,46	—	—	77,8
1972												
Dic.	618,13	11,0	229,36	6,9	340,02	1,5	352,43	5,3	434,12	8,3	163,4	163,4
1973												
Ene.	677,97	9,7	243,10	6,0	386,17	13,6	395,53	13,2	475,84	10,3	10,3	150,3
Feb.	707,75	4,4	263,16	8,3	397,61	3,0	404,69	1,5	498,66	4,1	14,9	174,1
Mar.	729,08	3,0	275,65	4,7	495,64	24,7	426,42	5,4	529,49	6,2	22,0	183,3
Abr.	784,15	7,6	327,10	18,7	601,25	21,3	445,00	4,4	583,51	10,2	34,4	195,5
May.	956,27	21,9	367,98	12,5	777,31	29,3	474,17	6,6	696,72	19,4	60,5	238,5
Jun.	1.042,00	9,0	442,14	20,2	906,79	16,7	651,24	37,3	805,75	15,6	85,6	283,4
Jul.	1.194,58	14,6	507,96	14,9	1.128,74	24,5	708,00	8,7	929,02	15,3	114,0	328,2
Ago.	1.463,56	22,5	552,28	8,7	1.307,35	15,8	754,67	6,6	1.087,50	17,1	150,5	303,6
Sep.	1.787,26	22,1	585,58	6,0	1.461,53	11,8	840,57	11,4	1.271,07	16,9	192,8	286,0
Oct.	3.259,02	82,3	904,73	54,5	2.493,19	70,6	2.136,32	154,2	2.384,11	87,6	449,2	528,4
Nov.	3.373,54	3,5	1.110,59	22,8	2.518,33	1,0	2.318,43	8,5	2.520,11	5,7	480,5	528,9
Dic.	3.549,15	5,2	1.166,39	5,0	2.538,45	0,8	2.464,03	6,3	2.639,68	4,7	508,1	508,1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.

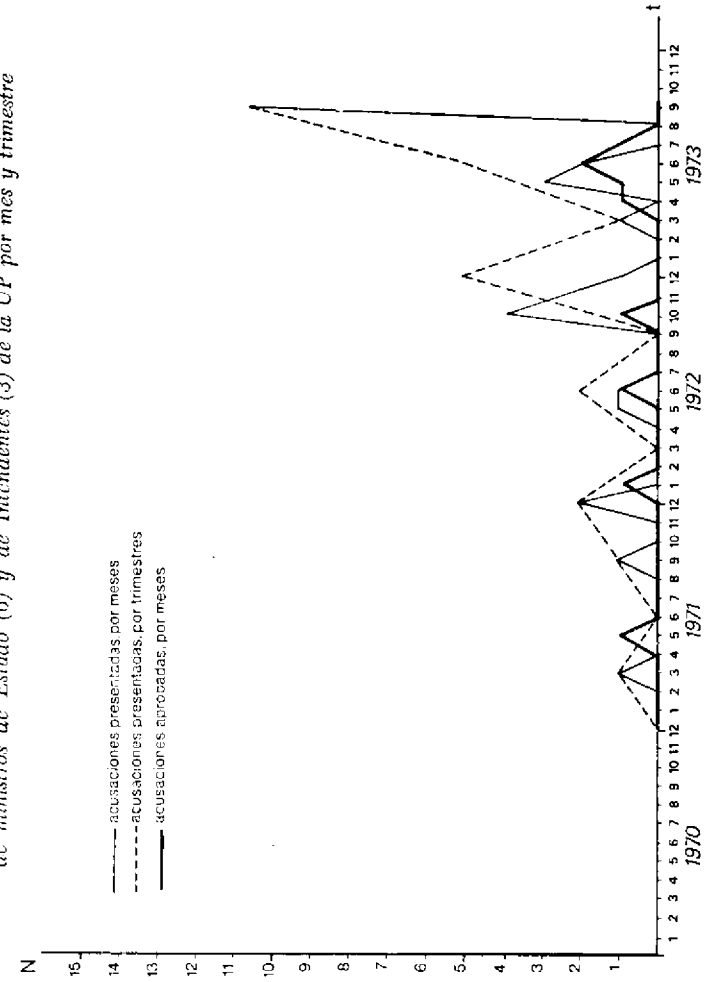
* Véase nota de cuadro 14.

bre de 1970 y el plan político que se impuso en aquel entonces, hizo que al término de 1971, cuando ya era evidente que el plan económico inicial estaba agotado y debía ser renovado, la dinámica conflictiva con los sectores medios y la consiguiente crisis del estado privaron al gobierno de los instrumentos sociopolíticos indispensables para renovar el plan económico.

La primera mitad de 1972 transcurrió en medio de un vivo debate en el seno de la UP. Mientras un sector proponía "avanzar sin transar", adoptando medidas socioeconómicas más allá de la capacidad legal (militar) y política del gobierno, otro impulsaba medidas para "consolidar avanzando" el proceso de transformaciones dentro del marco político-institucional en que se apoyaba el gobierno.²¹ La última opción terminó por imponerse —junio de 1972—, con el respaldo del Partido Comunista, del Partido Radical y del presidente Allende. De nuevo estábamos ante el dilema clásico: mientras la primera opción conducía en su lógica a que la UP procediera a quebrar a corto plazo el régimen sociopolítico —situación de enfrentamiento o guerra civil—, la segunda deseaba evitar tal desenlace y, en cualquier caso, desplazar hacia los sectores burgueses la responsabilidad de asumirlo, con las consecuencias históricas inherentes a ello.

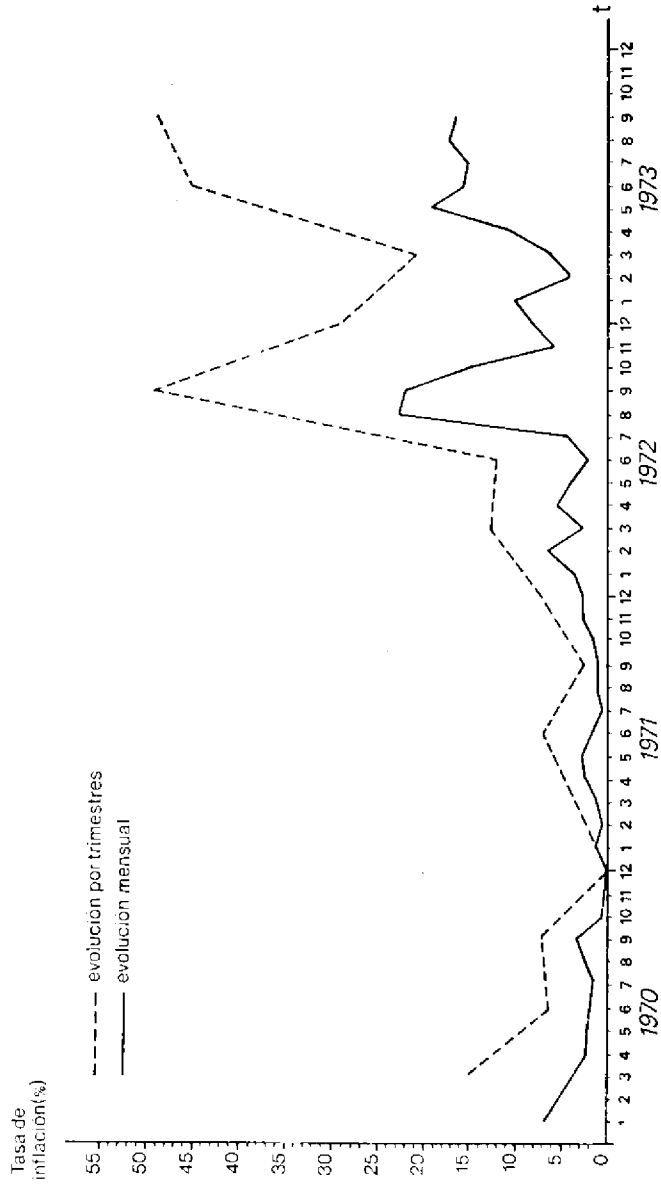
Sin embargo, si la primera opción resultó siempre inviable en términos absolutos, la segunda había sido concebida de modo incoherente y contradictorio desde 1970, pues siempre requirió mantener una dinámica de relaciones sociales que permitiera la coexistencia entre sectores medios y sectores populares, así como retener en manos de los trabajadores los instrumentos político-militares del estado. Los catorce meses que median entre las decisiones político-sociales de julio de 1972 y la crisis final de septiembre de 1973, son el tiempo que tardaron en degradarse totalmente los dos factores anteriores. La evolución del índice de la inflación, por un lado, y el de las acusaciones parlamentarias y destituciones de ministros, por otro lado, muestran la alta correlación existente entre las etapas principales de aquella degradación y las secuencias de aceleración de los desequi-

La crisis del estado. Evolución de las acusaciones (28) y de las destituciones por el parlamento (DC + PN) de ministros de Estado (6) y de Intendentes (3) de la UP por mes y trimestre



21. La reafirmación de esta línea política informa los mensajes de Allende al país del 21 de mayo y 10 y 24 de julio de 1972.

GRÁFICO 12
 El desequilibrio económico. Evolución de la tasa de inflación, por meses y por trimestres (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Índice de los precios de consumo en Santiago.

libros económicos y de la crisis del aparato del estado, con sus efectos multiplicadores derivados. Aunque ambos fenómenos se producen casi simultáneamente, no deja de ser significativo que los puntos culminantes de la crisis del estado se hallan siempre precedidos en el tiempo por la agravación de los niveles de inflación (gráficos 11 y 12).

V EL DILEMA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

El fenómeno más importante en todo el proceso que estamos considerando, es la presencia de un bloque sociopolítico aglutinado en torno de la clase obrera y con capacidad de surgir como alternativa de poder al bloque burgués. Semejante configuración genera una dinámica de bipolarización creciente de las fuerzas político-sociales en torno de los núcleos antagónicos, lo cual reduce progresivamente el campo de acción y la autonomía de las fuerzas intermedias que se ven condenadas a descomponerse, a reagruparse o metamorfosearse en torno de los polos principales. El centro es paulatina e inevitablemente inhabilitado, primero como factor de equilibrio y, después, como alternativa potencial a alguno de los dos bloques en pugna. Sin embargo, la secuencia temporal y las circunstancias en que se suceden las etapas de semejante polarización no son mecánicas, sino que pueden ser retardadas o aceleradas.

El surgimiento de un polo derechista frente a la izquierda unida fue una de las causas principales de que, en las elecciones presidenciales de 1970, el candidato de la DC llegara en tercera posición. Algo semejante a lo que ocurrió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 1974, el 5 de mayo, cuando el portavoz de la Unión Popular, F. Mitterrand, obtuvo el 43,3 por ciento de los sufragios, V. Giscard d'Estaing el 32,9 por ciento y el candidato del movimiento gaullista, diferenciado de la derecha más conservadora y emplazado contra su voluntad entre los dos bloques principales, se vio reducido a la tercera posición con un 14,5 por ciento.

Apenas llevaba la UP chilena ocho meses en el gobierno, cuando tuvo lugar la primera convulsión de las fuerzas centristas de la DC y del Partido Radical. Dentro del PDC, con-

dujo al desprendimiento de un sector de su ala izquierda que, en julio de 1971, se constituyó en Movimiento de Izquierda Cristiana y posteriormente solicitó su incorporación a la Unidad Popular.¹ Dentro de esta última, fue un sector pequeñoburgués el que experimentó el mismo proceso en sentido opuesto. El mismo mes de julio de 1971, el Partido Radical se dividía y su ala más moderada se organizaba en partido autónomo bajo la denominación de Partido de Izquierda Radical.² Aunque continuaba dentro de la UP, la evolución de los radicales refleja el proceso implacable de polarización. Diez meses después, en abril de 1972, el PIR se retiró del gobierno y, en junio de 1972, se incorporaba plenamente a la oposición, agrupada tras la denominada Confederación Democrática (CODE). En 1973, los radicales del PIR, antiguos fundadores de la Unidad Popular, se mostraban entre sus más acérrimos adversarios, sumándose plenamente a la insurrección y adhiriéndose, después, a la Junta Militar de Pinochet. Mientras tanto, la Izquierda Cristiana se fundió cada vez más con la suerte de la UP, siendo perseguida después del 11 de septiembre con la misma saña que los partidos que la fundaron originalmente.

Los desplazamientos de fuerzas dentro de los dos partidos del centro, en julio de 1971, se precipitaron antes de que la UP hubiera resuelto el problema del poder del estado. En la medida que afectaban las delicadas relaciones de equilibrio de la UP con los sectores medios y la DC, amenazaban con alterar sustancialmente los supuestos en que reposaba la estrategia de la izquierda. En la presidencia de la república la reacción inmediata fue de honda preocupación, en contraste con lo que acaeció en otros medios, que vieron en la escisión del Partido Radical el desprendimiento de un lastre para la revolución, y en la del PDC el comienzo de la división de este movimiento entre su corriente popular y la burguesa. Los sectores de la izquierda chilena partidarios de acelerar la bipolarización política del país contaron siempre con un poderoso aliado: el gobierno de Estados Unidos, quien no desaprovechó ninguna

1. El desplazamiento hacia la UP del ala izquierda del PDC afectó, sobre todo, a representantes en el Parlamento (seis diputados DC, de un total de 55, se constituyeron en Izquierda Cristiana), y a los dirigentes de la juventud.

2. La escisión del PIR tuvo lugar durante el congreso del Partido Radical, encabezada por 7 senadores y 5 diputados.

oportunidad para estimular o provocar el marginamiento de la UP de los sectores centristas, para enfrentarlos en una segunda etapa con los partidos obreros. Éstos eran los objetivos que buscaba alcanzar H. Kissinger cuando hizo aprobar el 5 de noviembre de 1971 un presupuesto de 815.000 dólares para financiar la operación.³ Fortalecer el ala conservadora del PDC y separar los movimientos representativos de los sectores medios de la Unidad Popular.

La escisión de algunos dirigentes del ala izquierda de la Democracia Cristiana sigue a una de las opciones tácticas más importantes de la UP: estimular las contradicciones internas del PDC, favoreciendo la división entre sus sectores populares y burgueses, más bien que contribuir a que su ala izquierda se mantuviera en la dirección del conjunto del partido. En términos prácticos, semejante opción conducía a acelerar el proceso de bipolarización en reemplazo del esquema tripolar de 1970, pero antes de que el bloque popular consolidara su control sobre las estructuras económicas y políticas fundamentales. En la medida que la UP continuara en minoría en el Parlamento y en los sectores medios, la neutralización de éstos pasaba, a corto plazo, por la contraposición entre el conglomerado pluriclasista del PDC y la burguesía del Partido Nacional. Al menos hasta que la UP encontrara la manera de asegurarse una mayoría política y social que garantizara a su bloque social los medios para continuar llevando adelante su programa de gobierno. Sin embargo, para ello se requería lo contrario de lo que se hizo. Se debía evitar que el ala izquierda del PDC se debilitara en provecho del sector conservador, facilitando así a éste último recuperar el control del partido antes de que la UP hubiera alcanzado los objetivos intermedios mencionados.

La concepción táctica de dividir el PDC se materializó en todos los frentes. Voy a limitarme aquí a entresacar un solo ejemplo, en el terreno del enfrentamiento político-electoral: El 18 de julio de 1971 debían celebrarse en la provincia de Valparaíso elecciones complementarias para reemplazar a un diputado DC, recientemente fallecido. Habiendo obtenido la UP tres meses antes en esa provincia, con motivo de las elec-

3. *Covert action in Chile...*, p. 60.

ciones municipales, cerca del 49 por ciento de los sufragios, era obvio que si la oposición presentaba dos candidatos, el de la UP alcanzaría una holgada primera mayoría. Por esta razón, el Partido Nacional prefirió abstenerse de postular un candidato propio y prefirió respaldar al de la DC, siempre que éste fuera de su ala conservadora. Con lo cual sumaba sus fuerzas para que la DC se enfrentara directamente con la UP. Es decir, la derecha buscaba romper la *entente* entre el PDC y la UP, que en septiembre-octubre de 1970 la había reducido al aislamiento.

En previsión de que semejante innovación se produjera, Allende pidió en junio de 1971 a la dirección nacional de la UP que considerara las siguientes razones: 1) La UP había alcanzado una gran victoria en las elecciones generales de abril, y no convenía ponerla en juego tres meses después en una elección parcial cuyo desenlace nada cambiaba en la correlación dentro de la Cámara de Diputados. 2) Al contrario, si el candidato de la izquierda era derrotado en una provincia, la oposición intentaría contrarrestar con ello el efecto de las elecciones nacionales de abril. 3) La UP debía evitar que los intentos del Partido Nacional de formar un frente común con el PDC en contra de la UP se vieran facilitados por esta elección complementaria. 4) La UP debía procurar conservar su entendimiento con el PDC, de modo que la suma de ambas fuerzas sociales redujera a la impotencia a la derecha. En consecuencia, propuso que la UP ofreciera a la DC no presentar candidato propio para cubrir la vacante dejada por el diputado democristiano desaparecido, a cambio de que la DC postulara a un dirigente de su ala popular. Y citó, como ejemplo, al presidente de la juventud DC, Luis Badilla. La dirección del PDC estaba, en principio, predispuesta a buscar un acuerdo en este sentido.

El sentido de este esquema era claro. Sólo el apoyo de la UP al ala izquierda del PDC podía permitir a esta última contrarrestar el interés del sector freísta de aliarse con el Partido Nacional. Pero si la UP se enfrentaba directamente con el conjunto del PDC, éste se vería empujado a buscar el respaldo del PN para no verse abocado fatalmente a la derrota. Giro a la derecha de la DC que era lo que desde el 4 de septiembre de 1970 venían deseando tanto el PN como el ala

conservadora de la propia DC. Si la UP, que por sí sola bordeaba en Valparaíso el 50 por ciento de los sufragios, presentaba su propio candidato, la DC tenía que solicitar el apoyo del PN si quería continuar siendo una alternativa electoral a la UP. No pactar con el PN equivalía para la DC a capitular ante la izquierda unida y correr el riesgo de desintegrarse, ya que la izquierda del PDC se incorporaría de uno u otro modo a la UP y la derecha al PN. Suicidio del PDC imposible de esperar mientras tuviera esperanzas de ser una alternativa de poder tanto respecto del bloque UP como respecto del bloque derechista. Pero de producirse, a pesar de todo, la desarticulación del PDC, ello significaba también la polarización del país en torno de los dos bloques sociales antagónicos. Con las consecuencias que de ello se seguirían ineludiblemente.

No obstante, la dirección de la UP pensó de modo distinto que Allende, y resolvió presentar a un dirigente del Partido Socialista como candidato a la complementaria de Valparaíso. El PN, realista, no postuló e hizo campaña en contra del gobierno detrás de la candidatura democristiana. La campaña electoral fue dura. Indistintamente de cuál fuera su desenlace, por primera vez desde 1964 la vanguardia del movimiento popular aparecía enfrentada al conjunto de la oposición unida. La opción táctica de la propia dirección política de la izquierda había precipitado la quiebra de la tripolarización que, entre 1967 y 1970, había permitido que la UP accediera al gobierno. Opción de la dirección de la izquierda que ofreció una nueva oportunidad al gobierno de Estados Unidos para impulsar su plan de enfrentar a la Unidad Popular con el conjunto de todo el resto de la sociedad nacional. Debió de ser con gran satisfacción como el Comité Cuarenta aprobó en Washington, el 6 de julio de 1971, una subvención clandestina de 150.000 dólares al candidato demócrata cristiano de Valparaíso para garantizar la eficacia de su campaña.⁴

La noche del 18 de julio de 1971, cuando los escrutinios mostraron derrotado al candidato de la UP, la zona residencial de Santiago se inundó de una multitud radiante. Hasta altas horas de la madrugada las calles del barrio de Providencia

4. Ibid., p. 28.

vivieron una *kermesse* espontánea. Por primera vez desde 1964, la derecha tuvo conciencia de celebrar una gran victoria propia.⁵

A la misma hora, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende se encontraba solo con algunos miembros de su familia y conmigo. Con preocupación, medía el impacto que la modificación táctica que se acababa de producir iba a tener. Esto le llevó a la conclusión de que debía poner en juego la decisión principal de que disponía en el orden estratégico: el referéndum. Esa misma noche resolvió comunicar a la dirección de la UP la conveniencia de buscar en elecciones generales el respaldo político necesario a las medidas transformadoras que la continuidad del proceso requería. Veremos más adelante la suerte de esta proposición.

Durante la campaña de la elección parcial de Valparaíso me entretuve estudiando el comportamiento del ala izquierda del PDC. Era manifiesto su desagrado por la alianza con el Partido Nacional y no lo disimulaba. De haber perdido la elección, me parecía obvio que tomarían pie de ello para suscitar un amplio debate interno. La victoria, por el contrario, fortaleció a los partidarios de formar un frente común con el PN, debilitando a quienes se oponían hasta el punto de llevarlos a desesperar de poder contrarrestar la fuerza de la corriente anti-UP. Yo me temía una escisión inminente. Allende, por el contrario, tenía una opinión distinta. Entendía que el éxito electoral del PDC en Valparaíso disuadiría a su ala izquierda de marginarse. Cuando saltó la noticia de la renuncia de ocho diputados democristianos, en rebelión contra la "derechización" del partido, la sorpresa de Allende fue mayor que la mía. Sin embargo, a la larga su apreciación demostró ser correcta: la gran masa del electorado popular democristiano y sus líderes más representativos continuaron dentro del PDC.

La escisión del ala más dinámica de los dirigentes prosocialistas del PDC, nos hizo temer que facilitaría la tarea de recuperación de la dirección del partido por su sector más conservador. Así se lo expresé pocas horas después a quien sería secretario general de la Izquierda Cristiana, Bosco Parra. Su res-

5. Efecto político derivado de la consumación de la alianza DC-PN más que del sentido del escrutinio mismo. En abril de 1971, la UP en Valparaíso obtuvo el 48,3 por ciento. En julio, el 48,6.

puesta fue, en substancia: "Es una resolución que nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Pero no podíamos hacer otra cosa. Dentro del PDC está todo perdido, no se puede hacer nada por el socialismo".

Cierto, la DC nunca ha sido un partido socialista. Pero en su base se aglutinaba una gran masa de asalariados —obreros, campesinos, pobladores, empleados, profesionales—, y de trabajadores por cuenta propia y de pequeños propietarios, cuya oscilación del lado del bloque burgués o del bloque popular era decisiva para la continuidad del proceso revolucionario. Que la base del PDC no era decididamente prosocialista era una evidencia. Pero también lo era que su rechazo de las proposiciones capitalistas tradicionales del PN permitió a la UP llegar al gobierno en 1970. Y, después, poder gobernar durante más de dos años.

En las horas que siguieron al surgimiento de la Izquierda Cristiana, insistí ante el presidente Allende sobre la conveniencia de no incorporarla de inmediato a la UP ni al gobierno. Ello equivaldría a impedir que numerosos democristianos contrarios a alianzas con la derecha tradicional, pero igualmente de sensibles sentimientos críticos hacia la UP y sus partidos, se identificaran con el movimiento que acababa de surgir. Si se quería que éste se convirtiera en el vertedero hacia la izquierda de aquellos sectores de la base popular democristiana conscientes de que estaban siendo instrumentados al servicio de la contrarrevolución, la IC debía mantenerse durante un largo tiempo en una posición crítica hacia la DC, pero desde fuera de la gran rival histórica de esta última, que era la UP. En mi opinión, el ingreso de la Izquierda Cristiana en la UP significaba asfixiarla en el momento mismo de nacer, ya que se aislaba de su campo natural de expansión: la base popular del PDC.

Esta perspectiva no era compartida prácticamente por nadie en la dirección de la UP, donde se insistió reiteradamente en el ingreso pleno de la Izquierda Cristiana. La vacilación entre ambas opciones duró cuatro meses. En las últimas semanas de 1971 la IC ingresaba formalmente en la Unidad Popular. Lamentablemente, nuestros temores iniciales se revelaron a la postre certeros. La capacidad de absorción por la IC de la masa popular DC resultó irrelevante en estas condiciones.

Es en julio de 1971, pues, cuando hacen crisis dos de los

puntos de apoyo del gobierno de la Unidad Popular. Por un lado, la división interna del Partido Radical afectaba a la alianza de la clase obrera con la pequeña burguesía *dentro* de la propia Unidad Popular. Durante semanas enteras Allende intentó rehacer la unidad del PR, y mantuvo al grupo escindido dentro del gabinete, atribuyéndole dos ministerios a pesar de la incompreensión y protestas de algunos sectores de la UP. Por otro lado, el debilitamiento del ala izquierda del PDC amenazaba la sobrevivencia del polo intermedio entre la derecha y la Unidad Popular.

EL ENCUENTRO ALLENDE-TOMIC DE DICIEMBRE DE 1971

Teniendo en cuenta el sentido de estos antecedentes, no es mayor motivo de sorpresa que, seis meses después de las elecciones de Valparaíso, la derecha del PDC estuviera en condiciones de imponer la primera crisis contra la estabilidad del aparato del estado. Allende, que no era secretario general de ningún partido sino representante del conjunto de la coalición, en el terreno de las elecciones está a merced de lo que aquéllos resuelvan, pues son los partidos y no él quienes controlan directamente las organizaciones indispensables para toda movilización electoral. Pero en lo que concierne a la esfera de competencias del gobierno propiamente dicho, su margen de autonomía personal es muy superior. Si en junio de 1971 tuvo que limitarse a proponer a los dirigentes de la UP que evitaran la pugna directa con el PDC en Valparaíso, en diciembre siguiente asume él mismo la iniciativa personal de discutir con la izquierda democristiana las condiciones para evitarlo.

La noche del 17 de diciembre de 1971, después de cenar, Allende me invitó a conversar en su gabinete de trabajo en Tomás Moro. Para mi sorpresa, cuando entramos en él vi que nos estaba esperando Radomiro Tomić. Es la única vez que me he encontrado con el dirigente demócrata-cristiano que postuló a la presidencia de la república en las elecciones de 1970. La conversación de esa noche encierra, mirándola a distancia, la explicación de algunos fenómenos de interés para comprender la experiencia chilena. Por eso me voy a permitir reproducirla parcialmente.

El objeto de haber invitado a Tomic a esta reunión, comenzó explicando Allende, era considerar las consecuencias que iban a derivarse de la resolución adoptada pocos días antes por el PDC de destituir al ministro del Interior mediante el procedimiento del *impeachment* parlamentario:

—Deseo que analicemos las dimensiones jurídicas y políticas de semejante decisión. Yo entiendo que es anticonstitucional y estoy dispuesto a defender las prerrogativas del ejecutivo frente a esta maniobra.

—Es muy posible —dijo Tomic— que tengas razón desde el punto de vista jurídico. Pero cualquiera que sea el desenlace en esta cuestión, lo que a mí me preocupa es que el problema no va a quedar resuelto para el futuro. Y se va a ir agravando. Porque la UP está en el gobierno y tiene el respaldo electoral de alrededor de la mitad del país. Pero estáis en minoría dentro de las instituciones del estado. Y para llevar a cabo vuestro programa necesitáis una mayoría institucional. De otro modo iremos de crisis en crisis, cada vez más grande.

—Por eso mismo —añadió Allende— te he invitado a conversar esta noche. El PDC viene adoptando una posición de creciente intransigencia hacia el gobierno, y ello puede entrañar consecuencias serias para vosotros, para nosotros y para el país entero. Busquemos el modo de interrumpir semejante evolución.

—Habéis cometido una profunda equivocación —añadió Tomic—. La UP ha atacado sin tregua, con sectarismo y falta de visión, a la DC. En las fábricas, en el campo y las oficinas, los militantes de la UP no quieren nada con los nuestros, los discriminan o, si pueden, los persiguen. Mientras, a nosotros, a los que desde un comienzo hemos buscado y deseado una colaboración entre la DC y la UP, nos habéis dejado “colgados de la brocha”, aislados y cada vez más débiles. La salida de mi partido del equipo de dirigentes que más activamente había sostenido mi campaña electoral, tenía que redundar en provecho de vuestros más conspicuos adversarios dentro del PDC, solicitados por la derecha. No olvidéis que la oposición une, mientras que el gobierno divide.

Yo hice una precisión:

—Usted no puede dejar de tener presente que desde 1964 a 1970, mientras la DC estuvo en el gobierno, las bases de ueste-

des y las de la UP estuvieron en rivalidad permanente. Que durante los seis años, los militantes de izquierda se sintieron discriminados y perseguidos por la DC. Es muy difícil que, de la noche a la mañana, rivales tradicionales confraternicen. Por lo demás, la dirección del PDC a cada iniciativa de orientación socialista del gobierno, responde con proposiciones sustancialmente contrarias. Por ejemplo, al proyecto de creación del Área de Propiedad Social contraponen otro que yo denomino de “asentamientos industriales”, adaptación al sector secundario del esquema aplicado por la DC para su reforma agraria. Con lo que para preservar las estructuras capitalistas actuales, propone como alternativa en el terreno de la propiedad industrial un proyecto inviable.

—El caso es que contigo —manifestó Allende— yo puedo discutir y buscar un punto de acuerdo. No tengo ningún inconveniente en incorporaros al gobierno. Pero no me pidas que haga lo mismo con Carmona, o con Frei, que tú sabes mejor que yo que fueron tus enemigos principales durante la campaña electoral. No lo fui tanto yo, que la gané, como el ala derecha de tu propio partido. Por lo demás, ni la UP ni yo podemos aceptar la incorporación al gobierno del sector del PDC militantemente antisocialista, cuando la DC por sí sola tiene tanto respaldo electoral como el PS y el PC juntos. Ello provocaría la división de la UP y convertiría al PDC en la principal fuerza del gobierno. Y yo he sido nombrado candidato a la presidencia por la UP, no por la DC.

—Yo conozco a mi partido —respondió Tomic—. No es la primera vez que sigue una línea conservadora. Y, sin embargo, en otras ocasiones hemos logrado modificarla en sentido contrario. Como en 1968. Llegará el momento de que cambie, de nuevo, de orientación.

A estas alturas de la conversación, señalé a Tomic que semejante cambio de línea del conjunto del PDC no iba a ser posible estando la UP en el gobierno. El desarrollo del proceso revolucionario tendía a polarizar cada vez más las fuerzas políticas, alejándonos de la coyuntura de tripolarización de 1970. Lo que en el futuro favorecería más los propósitos del sector Frei de aliarse con el PN que no los del ala izquierda por impedirlo. Poco después me excusé y salí de la reunión. Cuando media

hora después retorné, ya había terminado. Allende se hallaba solo. Le pregunté si Tomic se atrevía a dar el paso de encabezar al sector popular del PDC para buscar un acuerdo con el gobierno. La respuesta fue negativa.

¿Por qué extrañarse? Entre noviembre de 1970 y julio de 1971, la UP no había buscado precisamente una alianza con la izquierda del PDC, ayudándola a mantener la dirección del partido. Se produjo el fenómeno contrario: abandonarla en medio del fuego cruzado del sector freísta y el de la propia UP. Mientras, el gobierno de EE. UU. subvencionaba al ala derecha de la DC, para asegurarle influencia en las decisiones del momento y permitirle, con el tiempo, desplazar de la dirección del partido al sector progresista. Los dólares enviados clandestinamente desde Washington llegan directamente a hombres de la confianza de Eduardo Frei, no a la dirección nacional del PDC. Si el 22 de marzo de 1971 el Comité Cuarenta de H. Kissinger aprueba una subvención de 185.000 dólares, el 10 de mayo sigue otra de 77.000, el 20 de mayo se aprueba una tercera de 150.000 dólares, y otra por la misma cantidad fue enviada el 6 de julio siguiente. El 5 de noviembre del mismo año son 815.000 dólares los que parten de Washington para fortalecer el sector anti-UP de la oposición y dividir la coalición que sostiene el gobierno popular.⁶ Cuando en diciembre de 1971 Allende busca modificar el curso de los acontecimientos y llegar a un acuerdo directo con la izquierda del PDC, es demasiado tarde. Este partido se encuentra ya, en los hechos, bajo control de su ala conservadora. Cuando en mayo de 1972 de nuevo Allende toma la iniciativa de forzar un acuerdo, esta vez no con su ala izquierda, sino con la dirección nacional del partido en pleno, tampoco lo logra. Porque si bien se llega a un punto de coincidencia, en estas fechas el sector freísta se siente ya lo suficientemente fuerte para rebelarse contra la propia dirección del partido y hacer fracasar lo convenido con el gobierno. Y cuando, por último, en julio de 1973 Allende hace un nuevo esfuerzo para establecer un acuerdo legislativo con el partido que controla el Congreso, esta vez la dirección nacional del PDC está ya íntegramente en manos del sector freísta, que exige

6. *Ibid.*, pp. 28, 59 y 60. El valor del dólar en el mercado negro chileno era hasta cuatro veces superior al oficial.

al gobierno la capitulación total y, simultáneamente, pide en voz alta lo que durante años ha tenido que disimular: un golpe militar.

El problema de fondo en las relaciones entre el PDC y el gobierno era que éste necesitaba superar la obstrucción creciente de aquél en el Parlamento y en otras instituciones representativas de sectores medios y populares. Es decir, estaba en juego la cuestión central del poder, en especial la dirección del estado. Pero debe tenerse bien presente que cada iniciativa de Allende para lograr el acuerdo legislativo con el PDC no es sino la alternativa a la que se encuentra abocado tras el rechazo por el comité político de la UP de lo que él considera el recurso más idóneo para resolver el problema: pedir al país que, mediante un referéndum, se pronuncie expresamente sobre los medios que necesita el gobierno para continuar aplicando el programa común de la UP.

La conversación Allende-Tomic de diciembre de 1971 está precedida del rechazo por la UP de las proposiciones de referéndum hechas por el presidente de la república en junio, julio y agosto de ese mismo año. Las negociaciones con el presidente del PDC, R. Fuentealba, en mayo de 1972, están precedidas por el rechazo de la propuesta de referéndum que hace Allende a la UP tras perder las elecciones parciales en Colchagua y O'Higgins, en el mes de enero de ese mismo año. Las conversaciones con el PDC de julio-agosto de 1973, son solicitadas por el presidente Allende después que, en junio, la totalidad de los partidos de la coalición gubernamental ha rechazado que el principal conflicto con el Parlamento, la nacionalización de empresas, sea sometido a consulta general.

Cuanto más avanzaba el proceso revolucionario sin que la UP tuviera mayoría propia en el Parlamento, más se incrementaba el papel de árbitro de la DC en circunstancias cada vez menos favorables para los partidos obreros. Pues, por un lado, el peso dentro de la DC de los sectores propiamente burgueses la lleva a rechazar la hegemonía política de la clase obrera mientras exista una alternativa a esta última. Prefiriendo incluso facilitar la instalación de una dictadura fascista antes que la del proletariado. En segundo lugar, el sector popular DC, cuando encuentra a su izquierda un bloque tan poderoso como el de la UP, no se atreve a marginarse del partido pluriclasista por te-

mor a quedar "satelizado" por el partido o los partidos propiamente obreros. Prefiriendo continuar dentro del PDC con la esperanza de que, algún día, recuperará la dirección del conjunto del partido.

Por estas razones, tras instalarse en el gobierno la UP no podía encontrar en la DC sino una fuerza de apoyo secundaria, nunca principal, so pena de quedar a merced de un movimiento político-social de esencia fundamentalmente no socialista. Pero si esta última apreciación era comúnmente compartida por el conjunto de los partidos integrantes de la UP, en la práctica no fueron encontrados los medios instrumentales para hacerla efectiva. Lo que nos conduce a considerar el recurso principal de la táctica político institucional de conquista del estado: la expresión de la voluntad popular a través de los mecanismos políticos existentes a este efecto.

VI EL RECURSO A ELECCIONES Y EL PROBLEMA DEL PODER EN LA TACTICA POLITICO-INSTITUCIONAL

Así pues, en diciembre de 1971 Allende intenta, sin éxito, una alianza con la izquierda del PDC que amplíe la base de sustentación del gobierno. Durante la segunda semana del mes de enero siguiente, se producen los dos acontecimientos que la iniciativa de diciembre procuraba frustrar: en dos elecciones parciales el candidato de la UP es derrotado, y en el Parlamento la alianza DC-PN destituye arbitrariamente al ministro del Interior.

La novedad de las mencionadas elecciones parciales radica, sobre todo, en el hecho de que si en julio de 1971 el PN apoya a un candidato DC por primera vez desde 1964, en enero de 1972 es la DC quien por primera vez en su historia apoya a un candidato PN —en la provincia de Linares—, mientras que el PN respalda al candidato demócrata en la circunscripción de O'Higgins-Colchagua. La unión de toda la oposición contra el gobierno UP queda, así, definitivamente consagrada y financiada por una nueva remesa clandestina del gobierno de Estados Unidos de 160.000 dólares, aprobada por el Comité Cuarenta el 15 de diciembre de 1971,¹ apenas unas horas antes de que Allende intentara pactar un entendimiento con el sector progresista de la Democracia Cristiana a través de Radomiro Tomic.

El presidente Allende considera que al no contar con el res-

1. *Covert action in Chile...*, pp. 29 y 60.

paldo del Congreso mediante un acuerdo legislativo o de otra especie con el PDC, y con las elecciones parciales poniendo en duda el apoyo de la mayoría del país a su política, la UP debe proceder a una consulta electoral nacional sobre las opciones fundamentales del momento. Para ello dispone del balance positivo de las grandes realizaciones efectuadas durante 1971 y, además, con una base electoral propia del 48 por ciento, que es la estimación que nosotros hacíamos de la proyección a nivel nacional de los resultados parciales en las provincias que acababan de votar.² Es decir, se dispone de los elementos mínimos para emprender una vasta campaña de movilización donde los proyectos de futuro del gobierno, formulados de modo coherente y concreto, serían confrontados con los contradictorios entre sí del PN y la DC.

En los días que siguen a las elecciones complementarias, el comité político de la UP debate la proposición de un referéndum. La respuesta es: "No al referéndum". El Partido Comunista, en particular, estima que estaba condenado a la derrota. Su secretario general, Luis Corvalán, argumenta en este sentido, y lo sintetiza en una frase bien popular: "Perdemos de aquí a Penco".

La decisión tiene la mayor trascendencia. Es en este período cuando la UP, tras catorce meses de gobierno, pierde definitivamente la iniciativa. A partir de enero de 1972, la oposición unida arremete con violencia creciente, pidiendo lo que la UP está negando: un referéndum, elecciones nacionales. La UP se sitúa a la defensiva, protegida detrás del régimen constitucional que confía la iniciativa de convocar a referéndum a la libre iniciativa del presidente de la república, y que garantiza a éste los medios de gobernar aun sin tener mayoría en el Parlamento. El régimen político es de hegemonía presidencial, al estilo del de Estados Unidos.

La negativa de la UP de plantear directamente ante el país las opciones fundamentales del gobierno, retarda hasta las elecciones legislativas de marzo de 1973 la definición sobre qué bloque social debe dirigir completamente el poder del estado. Sin embargo, la derecha siente que el rechazo a la definición

2. Este análisis de las elecciones parciales de enero de 1972 fue publicado, posteriormente, en la revista *Vía Chilena*, Odeplan, II (1972).

en las urnas es una demostración de debilidad política de la UP. Entre febrero y agosto de 1972, la oposición centra su campaña en contraponer una supuesta voluntad popular mayoritaria anti-UP y la acción de un gobierno al que denuncia de ser electoralmente minoritario. Es el período en que *El Mercurio* recibe una subvención de 965.000 dólares del gobierno de Estados Unidos, el 11 de abril.³

Pero como el gobierno está protegido por el régimen legal —son excepción en la historia de Chile los gobiernos que han contado con una mayoría en el Parlamento—, la derecha tiene necesidad de destruir el aparato del estado para poder acabar con el gobierno que se encuentra atrincherado dentro de él. Es lo que intenta en septiembre-octubre de 1972, mediante una insurrección general que fracasa ante el alto nivel de movilización de la clase obrera detrás del gobierno, así como de otros sectores sociales que desobedecen la consigna de huelga general. En esta oportunidad las Fuerzas Armadas, ante la disyuntiva de plegarse a los intereses de la burguesía o mantener las instituciones estatales con las que están práctica e ideológicamente identificadas, se inclinan por la segunda opción, privando así a la huelga general insurreccional del indispensable apoyo armado.

En la insurrección de octubre de 1972, el complejo equilibrio interno de las Fuerzas Armadas entre los sectores prioritariamente antisocialistas —partidarios del derrocamiento inmediato del gobierno—, y los prioritariamente constitucionales —resueltos a sostener el régimen estatal vigente—, se resuelve en favor de los segundos en virtud de la combinación de tres factores principales. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de los trabajadores del país demuestra con los hechos que no siguen a la derecha en su consigna de derrocar al gobierno. En segundo lugar, porque el gobierno de Allende garantiza la preservación del régimen estatal hasta el punto de incorporar a las propias Fuerzas Armadas al gabinete con este objeto. Y, en tercer lugar, porque a muy corto plazo, cinco meses después, tienen lugar las elecciones legislativas que permitirán al país pronunciarse en favor o en contra del gobierno UP. Una parte

3. *Covert action in Chile...*, p. 60.

de la oposición está convencida de que, en estas elecciones, la UP sufrirá una derrota de tal envergadura que le hará perder el tercio de parlamentarios con que cuenta en el Senado, franqueando así la vía a la destitución del presidente de la república en el Parlamento. De lograr esto, la oposición podría acabar con el gobierno UP a través de los mecanismos institucionalizados del sistema político, sin verse obligada a asumir el riesgo que comportaba la destrucción del aparato del estado. Posición ésta favorecida por la DC, contra la presión del PN.

Si hubiera faltado en octubre de 1972 cualquiera de estas tres condiciones, la asociación heterogénea trabajadores-gobierno UP-Fuerzas Armadas del estado no hubiera tenido lugar. Hubiera sido reemplazada por la de burguesía insurrecta-Fuerzas Armadas *versus* trabajadores-gobierno UP, con un desenlace semejante en lo sustantivo al de septiembre de 1973, con alguna variante en la medida altamente improbable de que las Fuerzas Armadas hubieran llegado a dividirse y hubieran proporcionado a los trabajadores el respaldo de una parte del aparato militar.

El sufragio universal expresado a través de elecciones constituía la legitimación principal del gobierno UP y, también, el recurso táctico superior de la vía político-institucional. Desde el primer día estuvo presente en las consideraciones del gobierno y de los partidos políticos. Sin embargo, los análisis que predominaron en torno de su naturaleza y función son de importancia para comprender la evolución y desenlace del proceso vivido entre 1970 y 1973.

Antes de explicar con detenimiento este punto, es necesario hacer una precisión técnico-jurídica. Contrariamente a lo que ocurre en muchos regímenes constitucionales modernos, el referéndum es una institución prácticamente desconocida en el chileno. Antes de 1970 sólo estaba considerado como un procedimiento sustitutivo en el supuesto de reforma del texto de la Constitución, en circunstancias tan complejas y restrictivas, que, desde la aprobación de la Carta Fundamental de 1925, nunca pudo ser aplicado. Por otro lado, el gobierno no tiene en Chile la facultad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. Éstas se celebran en fecha fija, cada cuatro años. De tal manera que, antes de 1970, un conflicto abierto entre el ejecutivo y el Parlamento no encontraba ninguna ins-

tancia de arbitraje especial, aun en medio de la crisis más aguda. O el ejecutivo cedía o lo hacía el Parlamento; pero ni el primero ni el segundo podían apelar a la mediación inmediata del electorado.

Obviamente, semejante sistema no podía funcionar si uno de los dos órganos políticos legitimados por el sufragio universal y directo no tenía asegurada la primacía sobre el otro. Desde 1925, la estructura política formal y real encontró en la supremacía del presidente de la república el medio de asegurar al país gobiernos estables frente a un Parlamento reducido a funciones esencialmente de crítica y control, pero sin poder efectivo aun cuando el gobierno se hallara en minoría, como era generalmente el caso. Ésta es una característica dominante en los 45 años que preceden la llegada al gobierno de la Unidad Popular.

Sin embargo, durante la administración demócrata de Eduardo Frei, la primacía del ejecutivo se incrementa atribuyéndole la facultad de recurrir al referéndum mediante una vía indirecta: cuando alguna de las Cámaras del Parlamento rechazara un proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el presidente de la república. La innovación entró en vigor justamente al comienzo del gobierno UP. Por ello se hizo tantas veces cuestión del recurso al referéndum entre 1970 y 1973.

Pero conviene hacer notar que el procedimiento de referéndum continuaba siendo muy complejo. No sólo el ejecutivo tenía que iniciarlo necesariamente en un proyecto de reforma de la Constitución, sino que el Parlamento durante su discusión —que podía prolongarse durante un período de hasta nueve meses—, tenía la posibilidad de modificar sustancialmente el texto de la propuesta inicial. De modo tal que no sólo la iniciativa original del presidente podía llegar al electorado muchos meses después de lo deseado por aquél, sino también con un contenido distinto del que consideraba como óptimo someter a consideración de la nación. Y es bien sabido cuánta importancia tiene en materia de referéndum quién determina su fecha y los términos precisos del texto.

En razón del número de meses que la oposición parlamentaria podía demorar los trámites sucesivos del proyecto de reforma constitucional, la iniciativa de un eventual referéndum para resolver las diferencias entre Parlamento y gobierno debía

tomarse antes del segundo trimestre de 1972, pues después se entraba ya dentro del período de las elecciones legislativas ordinarias de marzo de 1973, que iban a cumplir esa función. De ahí que el rechazo por el comité político de la UP de la proposición de Allende de fines de enero de 1972 de efectuar un referéndum, significara en la práctica postergar hasta marzo de 1973 la definición electoral de la obstrucción del Parlamento.

LA OPCIÓN INICIAL DE NOVIEMBRE DE 1970

La importancia del problema de las relaciones entre Parlamento y ejecutivo merece que lo consideremos desde sus primeros antecedentes. En noviembre de 1970, el gobierno que acababa de instalarse en la Moneda es consciente de que ninguno de sus propósitos de alcance revolucionario puede ser llevado a la práctica mientras la oposición pueda detenerlos en el Parlamento. Desde un primer momento se contempló y analizó la conveniencia de evitar este obstáculo sometiendo directamente al país los grandes proyectos de transformación necesarios para realizar el programa de la UP. Era ésta una opción táctica de la mayor envergadura, cuyos efectos se dejarían sentir a lo largo de todo el período gubernamental.

El 14 de octubre de 1970, Allende encomendó a sus asesores políticos personales la articulación de un plan a medio plazo que, según sus directrices, imbricara la dinámica de las relaciones de clase de ese momento con una movilización política generalizada en torno de las medidas de importancia estratégica del programa común. Uno de los resultados de este trabajo fue un conjunto de proposiciones a plantear ante el Parlamento y el país entero mediante la vía del referéndum, es decir, a través de la reforma de la Constitución, centrados en torno a cuatro puntos principales:

- 1) nacionalización de las grandes minas de cobre y otros recursos naturales enumerados en el programa de gobierno;
- 2) nacionalización de las empresas neurálgicas de los sectores secundario y terciario indispensables, de acuerdo con el mismo programa, para formar el Área de Propiedad Social;
- 3) instauración de la participación directa de los trabajadores en los órganos de decisión de los centros de trabajo (en

particular, en las empresas), en los centros de residencia (comunidades) y en los órganos de decisión económico-social del ejecutivo (en especial, en los organismos de planificación central);

4) atribución al presidente de la república de la facultad de disolver el Parlamento y convocar elecciones una vez durante su período gubernamental.

Se trataba, en otras palabras, de dotar al gobierno UP de los medios instrumentales indispensables para evitar con anticipación el desarrollo de los factores que podían facilitar la insurrección cívico-militar de las fuerzas antisocialistas. Para ello, el movimiento popular que se acababa de instalar al frente del estado necesitaba disponer de los controles que le garantizaran un nivel mínimo de orden económico, de coordinación entre las instituciones del estado, de orden público y de legitimidad constitucional para aplicar con eficacia el programa común.⁴

En el proyecto se instrumentaban las medidas económicas, sociales y políticas del programa de gobierno de la UP, indispensables para realizar las transformaciones estructurales anunciadas al país. Nada era ajeno a aquel programa, excepto la posibilidad de disolver el Parlamento, incluida con el objeto de ampliar el margen de negociación del ejecutivo durante el debate en las Cámaras. Excepción, no obstante, significativa, ya que trataba de cubrir la laguna que en el programa común existía sobre las relaciones entre el presidente de la república y el Parlamento. Vacío programático que, por sí mismo, muestra hasta qué punto el problema del estado se hallaba por resolver en el seno de la UP.

La fundamentación central de este plan radicaba en el hecho de que en las circunstancias de división entre la DC y el PN existentes en 1970, era posible abordar la transformación de la

4. El 5 de noviembre de 1970, en su primera alocución como presidente, Allende se refería a este plan inicial cuando anunciaba: "[...] así como los monopolios serán expropiados, por la misma razón aseguramos totales garantías para las empresas medianas y pequeñas, que contarán con la íntegra colaboración del estado para el buen desarrollo de sus actividades. El gobierno popular tiene ya elaborados los proyectos de ley que permitirán el cumplimiento del programa. Los trabajadores —obreros, empleados, técnicos, profesionales e intelectuales— tendrán la dirección económica del país, y también la dirección política". Algunas de las tesis que informaban el proyecto en cuestión están desarrolladas en mi artículo "Estado burgués y gobierno popular", en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Santiago de Chile, 1972.

infraestructura en que reposaba el poder de la gran burguesía y del capital norteamericano. Pero se consideraba que la diferenciación entre el bloque propiamente burgués (PN) y el centrado en torno de la alianza de la pequeña burguesía con sectores populares (DC), que permitió la instalación de la UP en el gobierno, era coyuntural y tendería a ser reemplazada por la reunificación a medida que el programa de la UP fuera puesto en práctica.⁵ De ahí que nosotros estimáramos que las reformas socioeconómicas y políticas indispensables para la acción del nuevo gobierno debían ser planteadas de inmediato, en forma coherente y sistemática. Si la izquierda del PDC no era capaz de proporcionar en el Parlamento la mayoría necesaria para su aprobación, lo esencial del proyecto gubernamental eventualmente rechazado por la oposición podía ser sometido a referéndum antes de julio de 1971.

En otros términos, se trataba de que desde el momento mismo de su instalación en la Moneda, la UP planteara ante el país su proyecto económico-social básico y solicitara los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. Al coincidir ello con los meses que precedían a las elecciones municipales de abril de 1971, se nos ofrecía la oportunidad adicional de centrar la temática de la campaña en torno de las medidas presentadas ante el Parlamento. Convertidas así en vehículo de movilización, el resultado del mes de abril serviría de *test* para que el país tomara posición ante los planes concretos del gobierno, e influiría por sí mismo en el curso de las deliberaciones dentro de las Cámaras, tanto antes como después de las elecciones de abril.

Obviamente, el plan original de Allende partía de la hipótesis de que, dadas las relaciones entre sectores sociales a fines de 1970, la nacionalización de las bases estructurales de la burguesía monopólica nacional y del capital extranjero, contaría con el apoyo de la mayoría del electorado.⁶ Pero si en el transcurso de los meses subsiguientes se revelaba que ello no era

5. A esta conclusión me llevó el análisis de las campañas electorales de Tomic, Alessandri y Allende, realizado en julio-agosto de 1970 y publicado en el libro *1970. La pugna política por la presidencia de Chile*, Ed. Universitaria, Santiago, 1971.

6. Véase la fundamentación sociopolítica de esta hipótesis en el estudio sobre la elección presidencial de 1970, citado en la nota anterior.

así, consideráramos que la situación general del país permitiría rectificar el proyecto original, conformándolo mejor a la real correlación de fuerzas y posibilidades contingentes de éxito.

Dada la necesidad urgente de reducir la capacidad de perturbación de los mecanismos socioeconómicos del país por parte de la derecha y de Estados Unidos, se requería consolidar con urgencia el control popular de los centros económicos y políticos neurálgicos. En noviembre de 1970 no aparecía como algo evidente el considerable impacto negativo que el incremento de la inflación internacional y la recesión industrial en Europa del oeste en 1971 y 1972 iban a tener sobre la economía chilena, con una estructura hipersensible a las fluctuaciones coyunturales del sistema capitalista europeo-americano. Pero no cabe duda que, de haber podido asegurar la UP en el transcurso de 1971 el respaldo de la mayoría del electorado —a través o no del Parlamento— a un plan a corto y medio plazo de medidas *precisas*, el gobierno hubiera podido contar con instrumentos económicos y sociales indispensables para reducir el efecto desestabilizador de semejantes fenómenos económicos externos y aleatorios, así como el sabotaje y la subversión deliberados de las fuerzas capitalistas.

Siendo el de la UP un gobierno dirigido por los partidos obreros y estableciendo el programa común que su tarea fundamental era “terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”, nosotros pensábamos en aquellas primeras horas que la experiencia histórica del siglo xx había confirmado en múltiples ocasiones cierta reflexión de Marx a fines del siglo pasado:

Un gobierno socialista no puede ponerse a la cabeza de un país si no existen las condiciones suficientes para que pueda adoptar de inmediato las medidas deseadas y atemorizar a la burguesía, de modo que gane los primeros requisitos para una política consecuente.⁷

En términos equivalentes presentamos a Allende, el 25 de octubre de 1970, el plan político que estamos mencionando. Su acogida fue favorable, y tras algunas modificaciones menores,

7. Carta de K. Marx a Domela Nieuwenhuys (22 de febrero de 1881).

resolvió plantearlo a los jefes de los partidos de la Unidad Popular. Decisiones de tanta envergadura sólo podían ser adoptadas con el acuerdo de las fuerzas en que se sustentaba el gobierno.

Ante la opción fundamental de evitar o provocar de modo programado y consciente la crisis económica y la del estado, las fuerzas predominantes dentro de la UP estaban resueltamente en favor de evitarla. Pero hallándose el gobierno en minoría en el Parlamento, la crisis sólo podía salvarse mediante los dos procedimientos ya considerados: o acuerdo legislativo con un PDC dirigido por su ala izquierda, o apelación al sufragio universal para que ratificara los proyectos gubernamentales. Desde nuestro punto de vista, debía privilegiarse la intervención directa del electorado por sobre los eventuales acuerdos con el PDC. Pero mientras ambas posibilidades aparecían como compatibles a fines de 1970 y comienzos de 1971, nuestro análisis nos indicaba que después serían cada vez más excluyentes entre sí. Y lo que había que salvar a tiempo era la parálisis de las instituciones en que se apoyaba la fuerza político-legal del gobierno. En esas semanas iniciales, los cálculos que hacíamos en la presidencia de la república eran de esta naturaleza:

Imaginemos por un momento que la mayoría de la oposición que controla el Parlamento hubiera adoptado una postura absolutamente obstruccionista a las iniciativas del ejecutivo, como algunos parlamentarios derechistas solicitaron públicamente. El conflicto de poderes no hubiera tardado en ser insoluble. El ejecutivo, aislado institucionalmente de ese modo, al no poder contar con el respaldo irrestricto y comprometido de las Fuerzas Armadas, se hubiera enfrentado a una situación de aislamiento y bloqueo institucional que lo hubiera asfixiado. Demasiado débil para adoptar medidas de fuerza hasta sus últimas consecuencias, el gobierno de Salvador Allende hubiera sido reducido a la impotencia. El desenlace no es difícil intuirlo.⁸

La suerte de nuestro plan político original fue desafortunada. A pesar de que el propio Allende asumió la responsabilidad de proponerlo a la consideración de los jefes de los par-

tidos de la UP, en el transcurso de la tercera semana de noviembre de 1970 fue totalmente desestimado. No obstante, Allende no lo abandonó tan rápidamente. El poco interés mostrado por la dirección de los partidos para extender la mirada más allá de lo inmediato y proyectarse hasta marzo de 1973, le inquietó. Ese fin de semana me convocó a una discusión con sus dos principales asesores económicos, Pedro Vuskovic y Gonzalo Martner. La reunión se inició antes de mediodía en Santiago, y terminó cerca de las ocho de la noche en la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde nos trasladamos en helicóptero. Martner, que compartía mis puntos de vista, se quedó en la capital.

Sería arbitrario hacer recaer en la sola persona del ministro de Economía la responsabilidad de las opciones finalmente retenidas, de competencia de la dirección de los partidos políticos y del presidente de la república. Pero dado que sus planteamientos reflejaban la opinión predominante en ese entonces entre los dirigentes de la UP, los voy a sintetizar a título de ilustración.

Pedro Vuskovic era contrario al proyecto de reforma amplia de la Constitución, con apelación eventual al referéndum. Las dos razones principales para ello fueron las siguientes:

a) Las elecciones municipales de abril siguiente mostrarían que la UP no podía alcanzar el 50 por ciento de los sufragios. La acción del gobierno debía ajustarse a este supuesto, o ir preparando el terreno para disminuir la importancia de los comicios en cuestión. Por consiguiente, Vuskovic estimaba un error asociar a estos últimos la movilización en torno de reformas tan fundamentales como las propuestas en nuestro proyecto, así como confiarlas al desenlace de un referéndum, dada la minoría electoral que se atribuía a la UP como hipótesis de trabajo.

b) Llevar ante el Parlamento y, eventualmente, a plebiscito la definición de los criterios de nacionalización de las empresas destinadas al Área de Propiedad Social, aceleraría el surgimiento de un frente común de los monopolios afectados, lo que se traduciría en favor de una mayor aproximación entre la DC y el PN. Siendo así —agregaba el ministro de Economía— que el ejecutivo disponía de facultades administrativas discrecionales para ir poniendo las empresas estratégicas bajo su control y el de los trabajadores en forma gradual, lo que debiera man-

8. Véase 1970. *La pugna política por la presidencia...*, pp. 69-70.

tener dividido al sector privado al no sentirse amenazado de modo directo e inmediato.

Cuando Vuskovic terminó de exponer sus objeciones, yo insistí durante cerca de cuatro horas en que semejante visión no tenía bastante en cuenta las causas reales de la dinámica de polarización progresiva que se iba a desencadenar, y que podía precipitarse antes de que el movimiento popular hubiera consolidado sus mecanismos de control político, económico y social sobre los centros estratégicos. Yo era de la opinión que pedir al país en esos momentos que aprobara un plan a corto y medio plazo que permitiera al gobierno aplicar ordenada y coherentemente su programa, contribuiría a retardar la bipolarización *social*, ya que la decisión electoral intervendría antes de que la contrarrevolución tuviera tiempo de provocar la perturbación de los mecanismos socioeconómicos y políticos sobre los que reposaba el acceso de la UP a la jefatura del estado, y cuando la sería contradicción entre los proyectos de futuro del PDC y del PN les impedía ofrecer una alternativa positiva a las proposiciones del nuevo gobierno. Por lo demás, la eventual polarización *política* que se derivaría de la obstrucción parlamentaria haría desembocar el debate en el referéndum, y nuestro análisis nos indicaba que éste —antes de mediados de 1971— tendría lugar en circunstancias tales que el centro de gravedad *social* del país —el grueso de los sectores obreros, populares y medios, tanto simpatizantes con la UP como ajenos a ella—, debería manifestarse sensible a las proposiciones del presidente Allende.

Por el contrario, agregaba yo, resignarse a que la UP tuviera una votación menor que la de la oposición el 4 de abril siguiente equivalía a aceptar una derrota política de consecuencias muy graves. A evitarlo contribuiría, precisamente, la formulación clara de las medidas que debían ponerse en ejecución para alcanzar los objetivos establecidos en el programa común. Yo partía del hecho que la UP necesitaba un mandato político mayoritario y explícito para lograr los instrumentos de ejecución de sus propósitos. El ministro de Economía, como la mayoría de la UP, contaba con alcanzarlos partiendo del supuesto de que el gobierno era minoritario en el Parlamento y en el electorado en general, y adecuaba su plan de acción a corto plazo a la aceptación de ello, sin innovar de inmediato en las bases

político-institucionales existentes. Yo entendía que las facultades administrativas del ejecutivo debían ser utilizadas plenamente, pero dentro de un marco de vasta movilización popular según las características compatibles con la táctica político-institucional, es decir culminando en una definición de la voluntad nacional. Pero Allende estaba solo. Por más que con toda su ascendencia de presidente se esforzara en defender nuestro análisis prospectivo inicial, no podía imponerlo contra la voluntad del conjunto de los partidos de la coalición y del ministro responsable del plan económico a corto plazo ya aprobado por el comité político de la UP. De ahí que Allende pusiera término a la discusión de tan contrapuestos planteamientos desviando la conversación hacia el terreno militar: "Debemos postergar la bipolarización y ganar tiempo para fortalecer nuestro apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, donde estamos en una situación precaria". Su preocupación, entonces como siempre, era lograr que los trabajadores pudieran contar con el respaldo de una parte de las Fuerzas Armadas, cualquiera que fuere el desarrollo de los acontecimientos.

Nuestro plan político inicial fue dejado en suspenso, en espera de coyuntura más propicia. A lo largo de 1971 y 1972 volvió a emerger en varias oportunidades, total o parcialmente, con no mejor acogida como tendremos ocasión de ver. Aunque algunas de sus proposiciones se lograron poner en práctica aisladamente y de manera discontinua. Todavía el 1.º de mayo de 1972, Allende decía en un discurso a los trabajadores:

[...] este año tenemos por delante posiblemente un plebiscito, [...] por ejemplo, para defender el área social de la economía, la participación, dirección y capacidad de resolución de los trabajadores, mandando un proyecto de ley disolviendo el Congreso [...].

El plan político a medio plazo que en los hechos aplicó la UP a partir de noviembre de 1970, quedó en gran manera a merced de la posibilidad de asegurar un alto nivel de *expansión y crecimiento* de la actividad económica. Ciertamente, si éste hubiera sido el caso, el plan puesto en ejecución hubiera tenido muchas más posibilidades de éxito, ya que la contrarrevolución encontró un campo propicio para sus designios sólo en

la medida en que la inflación se aceleró y la recesión reemplazó a la expansión a lo largo de 1972. Desde este punto de vista, la opción inicial que escogió la UP no se adecuó suficientemente a la capacidad de los obstáculos —deliberados o incidentales— que podían entorpecer la dinámica de la actividad económica. La confianza excesiva en la posibilidad de asegurar el crecimiento en este último terreno sin la inmediata consolidación del control de los trabajadores sobre los centros de decisión del estado y de la estructura económica, deberá por consiguiente retenerse como uno de los factores determinantes para explicar la evolución de los acontecimientos a lo largo de 1972, el año en que se resolvió la suerte final de la estrategia de la UP.

En el plan a corto plazo que terminó por imponerse en noviembre de 1970, posteriormente tuvimos ocasión de comprobar que se había incurrido en contradicciones y errores de apreciación que, con el tiempo, fueron agravándose. En último análisis, ello se debió especialmente a las condiciones insuficientes de unidad táctico-estratégica que lastraron la capacidad de conducción de la UP, cuyas incoherencias iban a perturbar sensiblemente el desarrollo de la línea estratégica del programa común y, finalmente, interrumpirlo.

A lo largo del período 1970-1973, nunca los partidos de la Unidad Popular se propusieron crear un sentimiento de confianza, respeto y disciplina en relación con el comité político conjunto de la UP, ni hacia el gobierno como institución compartida, ni hacia Allende como representante común. Cada partido político, en un grado mayor o menor, se preocupó de su propio sector, de su propia jerarquía interna, sustrayéndola de las del conjunto de la coalición, es decir, del comité político de la UP, del gobierno y del presidente de la república. Al no contar el movimiento popular con una estructura orgánica dotada de dirección unitaria, ni el comité político de la UP ni el gobierno podían impartir órdenes efectivas para que las organizaciones de masas —y aun la administración pública— actuaran cohesionadamente, según unas orientaciones coincidentes y complementarias, desarrollando una línea común que las adecuara para los cambios tácticos que la evolución del proceso imponía.

El plan inicial de Allende, rechazado en noviembre de 1970, fue totalmente reajustado, y se le restringió a las nacionalizaciones de empresas. Adaptándolo a las tesis dominantes, se

resolvió seguir la vía administrativa y no la parlamentaria-referéndum, a cuyos efectos el Ministerio de Economía se responsabilizó de elaborar un calendario de incorporación de los centros productivos neurálgicos al Área de Propiedad Social, de tal modo que ésta se hallara prácticamente constituida antes de junio de 1971. De nuestro proyecto original permanecía sólo la secuencia temporal.

De regreso a Santiago, en el helicóptero, le comenté al Ministro de Economía: "En esta discusión se acaba de decidir la suerte del Gobierno. Ojalá, Pedro, no tengas nunca que arrepentirte de tu posición". Vuskovic guardó silencio. Ambos estábamos preocupados. La sesión había tensa. Me preguntó qué pensaba Martner. Cuando le dije que estaba de acuerdo con mis planteamientos, continuó en silencio otro largo rato. De pronto me hizo una pregunta directa: "¿En qué consisten los estudios de ciencia política?" Se me ocurrió que la respuesta más idónea en aquel contexto era decir que en el análisis e interpretación de las experiencias históricas.

En la semana siguiente, una comisión especial integrada por Oscar Garretón, subsecretario de Economía, Carlos Matus, Alberto Martínez —director de la Dirección de Industria y Comercio—, Jacobo Schatan —director de la Distribuidora Nacional—, presidida por Vuskovic, y en la que yo participaba en nombre del presidente de la república, seleccionó las empresas privadas de importancia estratégica en todos los sectores de la economía, desde el financiero al de la distribución y comercialización de productos de primera necesidad. Y estableció las medidas y el programa a seguir para su incorporación sucesiva al Área de Propiedad Social, dentro del período comprendido entre diciembre de 1970 y junio de 1971. El tiempo se encargaría de demostrar que esto no era posible al margen de una resolución de amplitud nacional, ya fuera en el Parlamento o mediante el sufragio directo. La mayor parte de estas empresas no fueron puestas bajo control de los trabajadores y del gobierno sino después de junio de 1971, muchas durante 1972 y todavía en septiembre de 1973 algunas continuaban en manos privadas. Pero a lo largo de los años 1971 y 1972, como era de esperar, la oposición capitalista concentró en este terreno lo esencial de su actividad obstruccionista, lo cual obligó al gobierno, y a los partidos y sindicatos obreros, a consagrar una parte muy considerable de sus energías a la conformación de este sector social, indispensable para el progreso del proceso de transformación de la estructura económica.

Toda la vida política del país, en particular las relaciones entre el ejecutivo y el Parlamento y los organismos jurisdiccionales, se vio de esta

forma progresivamente perturbada por el problema de la "definición del Área de Propiedad Social". Y los medianos y pequeños propietarios, en un comienzo expectantes y no adversarios de la nacionalización de los monopolios, a fines de 1971 ya hacían causa común con ellos. Así fue como la contrarrevolución logró uno de sus objetivos principales: organizar a todo el sector privado como un solo bloque. Una vez logrado esto, el propósito de la UP de limitarse a nacionalizar las empresas estratégicas, sin afectar a las medianas y pequeñas, quedó sensiblemente alterado. Y, por último, inoperante respecto de los fines políticos y sociales que lo inspiraban. En 1972 y 1973, la mayoría de los medianos y pequeños propietarios vio en la socialización de cada monopolio un ataque directo hacia sus intereses inmediatos. Situación, conviene insistir, que no se daba a comienzos de 1971. Por ello es posible sostener que la ausencia de una política precisa y realista de la UP para crear en los primeros meses que siguieron a su instalación en el gobierno un Área de Propiedad Social de contornos y funciones bien delimitados, contribuyó decisivamente a configurar la situación económica, política y social de 1973.

CUADRO 18

Resumen de las 90 empresas destinadas al Área Social¹

Sector	Número de empresas	% del capital total del sector ²	% de la producción total del sector	% del empleo total del sector	% participación de los diez accionistas principales del sector
Industria	74	42,4	14,6	9,9	59,7
Comercio	6	15,5	8,6	1,1	52,5
Transporte y Comunicaciones	6	75,7	3	3	81,8
Electricidad, Gas y Agua	4	8,0	3	3	26,4

FUENTE: ODEPLAN.

1. Según el programa previsto en septiembre de 1971.
2. Datos de 1969.
3. Sin datos confiables.

La formación del Área Social, punto de convergencia de la necesidad de crear las fuerzas y relaciones de producción de la futura transición al socialismo, requiere un poder político, social y económico sobre la burguesía que sólo lo puede dar la

alianza entre clase obrera, sectores populares y pequeña burguesía. Alianza ineludible para el desarrollo de los factores motores de superación del capitalismo: las fuerzas y relaciones de producción.

Para el recién instaurado gobierno UP, el desarrollo de los medios de producción era de necesidad vital, a fin de satisfacer las necesidades y los intereses de los vastos sectores populares que acababan de acceder a la dirección del estado y las necesidades nuevas, cuantitativas y cualitativas, que el proceso de movilización social creciente iba a desencadenar, con la consiguiente modificación de la estructura de las necesidades. Ello requería el progreso simultáneo en cuatro frentes de acción:

- a) modificación cualitativa de la estructura productiva del país;
- b) cambios en las relaciones de producción;
- c) aumento de la producción;
- d) incremento de la productividad.

La decisión de acelerar la reforma agraria y de instaurar rápidamente el Área de Propiedad Social perseguía los objetivos a) y b). La implantación de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas nacionalizadas y el aumento de las inversiones productivas, debía facilitar el incremento de la producción y de la productividad. Pero ello se llevó a cabo con decisión y presteza desigual. La opción que predominó en noviembre de 1970 impidió insertar todo lo anterior dentro de un sistema de planificación efectiva que hubiera debido, además, asociar al sector privado no monopolístico, incorporándolo al proceso de desarrollo de los medios de producción a través del acuerdo de las organizaciones obreras, de técnicos y empleados, de pequeños y medianos propietarios.

Según la letra y el espíritu del programa común de la izquierda, los nuevos modos de producción y de intercambio, las nuevas relaciones de producción, debían englobar a todo este último conglomerado social, integrándolo de manera vinculada a la clase obrera, contraponiendo así los intereses del conjunto de los trabajadores y de la nación, por un lado, y los de la burguesía y Estados Unidos del otro.

Se trataba, en suma, de desarrollar un nuevo sistema económico, cuya viabilidad dependía de la transformación de las re-

laciones de producción, desarrollando una estructura social superior que fuera más productiva y eficaz económicamente.

En noviembre de 1970, el desarrollo de las fuerzas productivas y el cambio de la estructura de las relaciones de producción, eran necesarias para incrementar la producción global del país. El aumento de la producción y de la productividad es indispensable para satisfacer las nuevas necesidades e intereses de las masas trabajadoras en vías de liberación y ascenso al poder, y para satisfacer las necesidades de los asalariados del sector terciario —base principal de los sectores medios—, cuya alianza, o por lo menos coexistencia, es indispensable al bloque obrero y popular para consolidar su poder económico y político. Mantener el entendimiento entre el bloque popular y los sectores medios, no sólo es indispensable para la conquista del poder por los trabajadores por la vía político-institucional, sino que es también la mejor manera de evitar el desarrollo de las fuerzas contrarrevolucionarias, al aislarlas y privarlas de base social de implantación y expansión. Bloque popular y sectores medios, entre ambos representan el centro de gravedad de la estructura social y de las instituciones del aparato del estado, incluidas las armadas.

Obviamente, de proceder según estos principios, aquellas instituciones de decisión política y económica del estado dirigidas por la UP debían probar en los hechos la voluntad de acuerdo o coexistencia con los sectores medios —tanto productivos como de servicios—, estableciendo alguna modalidad de participación de sus organizaciones representativas. Semejante supuesto estaba presente en el convenio CUT-gobierno de julio de 1971, que sentó las bases de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Pero, lamentablemente, faltó comprensión generalizada de su sentido, y no dejaron de producirse e incluso de estimularse manifestaciones de "obrerismo" por algunos núcleos dentro de la UP. Lo que a poco andar agudizó artificialmente las contradicciones entre los obreros, por un lado, y los técnicos y profesionales por otro. La actividad productiva se resintió de ello, así como el clima político general del país.

Sin embargo, si hubo casos de incomprensión en este terreno en las empresas, contrariando disposiciones expresas de la dirección de la UP, de la CUT y del gobierno, mucho más grave

fue lo que ocurrió en las relaciones de los medianos y pequeños propietarios con las instituciones gubernamentales. De nuevo, el principio orientador era correctamente formulado, pero su aplicación práctica lo negaba a menudo. Valga un ejemplo: A comienzos de 1971 el gobierno creó los Consejos Provinciales de Desarrollo y el Consejo Nacional de Desarrollo, con la misión de coordinar las iniciativas e intereses de los sectores sociales cuya representación asumía la UP o que eran contemplados como aliados en la perspectiva táctico-estratégica del programa común. El Consejo Nacional de Desarrollo fue convocado una vez en 1971, con la participación de todas las organizaciones socioeconómicas, públicas y privadas, que lo componían. Nunca hubo una segunda reunión. Los Consejos Provinciales de Desarrollo, por su parte, quedaron mayoritariamente en el papel, sin funcionar.

Al sector privado de la producción no monopólica no se le articuló en los hechos, orgánicamente, con las instituciones de decisión gubernamental, a pesar de hallarse implícito en el programa común y ser impulsado una y otra vez desde el gobierno. Al contrario, un amplio sector de la izquierda, instalada en la propia administración pública, se comportaba hacia los medianos y pequeños propietarios, hacia las organizaciones más representativas de los sectores medios, como si no existiera el propósito de asociar los intereses de estos últimos a los objetivos globales del gobierno UP. En la realidad, semejante propósito no era compartido por grupos importantes de la izquierda.

El problema teórico-práctico que informaba estas contradicciones internas de la UP es de envergadura: ¿en el proceso de transición hacia el socialismo, pueden o deben coexistir las formas de propiedad capitalista —sector privado— y de orientación socialista —área social—? Para el programa común, la respuesta era afirmativa. Para un sector importante de la izquierda, tal coexistencia no debía ser entendida sino como una concesión temporal a los sectores medios, únicamente durante el tiempo mínimamente indispensable en que el proletariado acumulaba los medios suficientes para someter por la fuerza a los medianos y pequeños propietarios. Evidentemente, cuando estos últimos percibieron semejante propósito, su reacción no se hizo esperar, haciendo causa común con el capital monopólico nacional y el de las compañías multinacionales extranjeras, creán-

dose así uno de los supuestos necesarios para la insurrección contrarrevolucionaria o la guerra civil.

Sólo a costa de una guerra civil y de la consolidación de una férrea dictadura puede el proletariado pretender desconocer a los medianos y pequeños propietarios su supervivencia durante el período de formación del sector dominante de la economía según criterios socialistas.

La asociación de la clase obrera y otros sectores populares con los medios, debía haber convenido un programa a mediano plazo y haber creado las instituciones representativas para llevarlo a ejecución cuando las circunstancias objetivas y subjetivas lo hacían posible, más por la esperanza compartida en el futuro que no por el temor de la compulsión. Es decir, cuando las contradicciones entre estos sectores eran secundarias respecto de los intereses comunes frente a la gran burguesía y el capitalismo norteamericano. Ello fue así en el transcurso de los ocho o diez meses que siguieron a la instalación del gobierno UP. La oportunidad fue desaprovechada por ausencia de claridad sobre su razón de ser y modo de proceder. Para un sector de la izquierda, la coexistencia entre proletariado y sectores medios era contradictoria con el esquema táctico insurreccional que, al margen del programa común y de compromisos formales, era considerado como la única línea correcta de acción. Aquí, como en otros terrenos, la disparidad de tácticas retardaba la instrumentación de medidas necesarias en el momento oportuno. A partir de fines de 1971, no sólo persistió la misma confusión dentro de la izquierda, sino que además el conflicto UP-sectores medios había entrado en una dinámica autoalimentada. Las circunstancias económicas y políticas pusieron cada vez más contra la corriente a quienes en la UP y en el gobierno deseaban corregir el curso de los acontecimientos. La necesidad del recurso a la compulsión frente a la mayoría de los sectores medios había reemplazado a la compatibilización de intereses libremente convenida. Uno de los objetivos del plan de desestabilización de la CIA en Chile había sido alcanzado.

En los hechos, emprender desde el primer día de gobierno la tarea de organizar la planificación de la producción económica, cambiar la estructura económica, desarrollar las fuerzas de producción y modificar las relaciones de producción, exige contar con un instrumento indispensable: un centro de decisión,

dirección, coordinación y ejecución. Ese instrumento necesita un aparato estatal. De ahí que instaurar los fundamentos de la planificación en los primeros meses de gobierno popular requiriera una condición previa: la voluntad de utilizar lo que la estructura estatal existente ofrecía de útil a este fin, al tiempo que se llevaba adelante su reemplazo por la vía táctica establecida en el programa común. No ocurrió así. Un sector del Partido Socialista y del MAPU entendió que primero había que *destruir* ese aparato del estado, conquistar el poder total para el proletariado y, *después*, instaurar los mecanismos de planificación.

El estado del que la UP tenía la jefatura suprema, el gobierno, la dirección jerárquica de la administración pública, de la policía y de las instituciones armadas, el 42 por ciento de los escaños parlamentarios y prácticamente la mitad de los municipios, era calificado pura y simplemente de "burgués". En consecuencia, según la clásica doctrina de un buen sector de la UP, había que

1.º [...] derribar el poder del estado burgués y construir desde sí mismo [el pueblo] un poder nuevo. Sin la destrucción del carácter burgués del estado y sin la edificación desde las masas de un estado proletario, es imposible comenzar siquiera a marchar por una senda socialista [...]

2.º Las condiciones objetivas, la correlación general de fuerzas, tienden hoy a favorecer dentro de la UP a las posiciones centristas, que buscan consolidar una democracia avanzada sobre la base del entendimiento con la DC, con las Fuerzas Armadas y, en general, con las fuerzas sociales políticas e institucionales de centro. Apoyándose fundamentalmente en los aparatos burocráticos, estas posiciones subordinan toda acción de masas a la defensa y estabilidad del gobierno, en vez de apoyarse en las masas para usar el gobierno como arma de destrucción del estado burgués [...] [Para el MAPU] por el contrario la defensa y estabilidad del gobierno están subordinadas al grado en que éste sea un instrumento de lucha por la destrucción del viejo poder estatal y la construcción del poder popular nuevo, nacido desde las masas y su organización [...]

Las Fuerzas Armadas, según este enfoque, necesitan ser desvinculadas de su imbricación con el estado vigente para, me-

dian te un voluntarismo malabarista, reconvertirlas en Fuerzas Armadas del proletariado:

3.º Estamos por la integración de nuestras Fuerzas Armadas a las tareas de desarrollo de la economía y por la estrecha colaboración entre ellas y el pueblo. Estamos por su participación en el poder popular naciente por su estrecha fusión con la acción del proletariado y del pueblo.

Sin embargo, dado que son las Fuerzas Armadas del estado y éste debe ser destruido, se concluye en la disociación disyuntiva siguiente:

Pero creemos que no es en el aparato de las Fuerzas Armadas, sino en las masas, donde debe buscarse el eje de sustentación del gobierno [...]

tras lo cual, en términos de desarrollo lógico, no puede sino vislumbrarse la guerra civil como vehículo natural de solución de la lucha de clases,

4.º La ruptura revolucionaria, marcada por el reemplazo del carácter de clase del estado, implica un agudización tal de la lucha de clases, una polarización del país en bandos de tal modo inconciliables, una quiebra tan violenta de toda la normalidad institucional, de todos los aspectos de la vida ciudadana, que envuelve siempre la posibilidad concreta de un enfrentamiento armado [...] Por todo esto, nosotros no hacemos del deseo de evitar la lucha armada o la guerra ningún requisito estratégico de nuestra política.⁹

Esta acumulación de circunstancias condujo a que el gobierno de la UP careciera de fuerza bastante para imponer un mínimo de planificación. Aunque su necesidad se encuentra proclamada en los discursos, a efectos prácticos apenas se fue más lejos.

La ausencia de voluntad de planificar orgánicamente la acción gubernamental no sólo se debe a que un sector de la

9. Resolución aprobada por el II Congreso Nacional del MAPU, celebrado en Santiago en diciembre de 1972. Véase en *Le Chili est proche*, Maspero, París, 1974, pp. 41-49, extractos de dicha resolución.

UP tuviera una posición respecto del aparato del estado incompatible con ella, sino también a la influencia de la concepción predominante acerca del papel del *partido obrero* dentro de la UP. El principio clásico es conocido: el aparato del partido de la clase obrera debía asumir la tarea de dirigir la elaboración, discusión y ejecución de la planificación. Principio nacido históricamente de las experiencias en que el partido del proletariado ha tomado el poder previa destrucción del aparato estatal preexistente. En Chile, en 1970, como ni el estado se hallaba destruido ni tampoco existía un partido único del proletariado, los sectores contrarios a la táctica político-institucional veían la solución del problema de la función del partido en la creación de una realidad que correspondiera al modelo teórico: había que buscar las condiciones que permitieran la repetición, también en Chile, del asalto armado al poder. Cuando esto se produjera, el problema anterior se resolvería automáticamente.

El Partido Comunista no actuaba según este esquema; prefería llevar la teoría hacia la realidad, pero se encontró no sólo con que el aparato del estado preexistente no podía destruirlo por la fuerza, sino que, además, la UP no contaba con la estructura propia de un partido único, ni el mismo PC tenía los medios ni la voluntad de instaurarlo a corto plazo. De ahí que, al no contar con el aparato partidario idóneo para sobreponerse al del estado, la planificación según el modelo socialista clásico no pudiera ser construida, ni siquiera iniciada. La contradicción entre esta constatación y la necesidad objetiva de crear un sistema de planificación para ordenar la acción transformadora de las masas y del gobierno, el movimiento obrero chileno no alcanzó a resolverla teórica y prácticamente en 1971, ni en 1972. Sólo en este año, y en general en el transcurso de 1973, el Partido Comunista decidió sobreponerse a los manifiestos efectos negativos que la ausencia de planificación había venido acumulando, y llevó adelante una intensa actividad para crear los medios que permitieran planificar efectivamente el año 1974. El PC animó esta campaña ajustándose a la realidad estatal concreta en que se hallaba el gobierno de la UP, resolviéndose a iniciar un camino nuevo. Pero la iniciativa llegaba demasiado tarde.

LAS OPCIONES DE 1971 SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Y EL ESTADO

En noviembre de 1970, el comité político de la UP resolvió limitar el contenido del proyecto de reforma constitucional, y el eventual recurso al referéndum, exclusivamente a la nacionalización de las grandes empresas del cobre en manos norteamericanas. El 21 de diciembre se presentaba en el Parlamento una proposición del ejecutivo en ese sentido.

El 4 de abril de 1971, las elecciones municipales arrojaron el resultado siguiente: UP: 50,2 por ciento, DC: 27 por ciento, PN: 20 por ciento. Las estimaciones de quienes cinco meses antes consideraban que la UP no llegaría al 50 por ciento, se vieron desmentidas. Como ocurriría tantas veces a lo largo de los dos años siguientes, cada vez que a las grandes masas se les ofrecía la oportunidad de expresarse directamente sobre el gobierno popular, lo hicieron con un entusiasmo y una amplitud que sorprendió a muchos dirigentes de los propios partidos de izquierda. Aun en los momentos más difíciles, cuando los efectos negativos de la situación económica de que era víctima el país repercutían sobre ellos, los trabajadores mostraron claramente que sentían que ése era "su gobierno".

Ante esta realidad, era natural que la oposición no quisiera hacer gracia de un referéndum sobre la nacionalización del cobre, regalando al gobierno una fácil victoria política. Por eso el 11 de julio siguiente el Congreso aprobó por unanimidad la reforma constitucional y las grandes empresas del cobre fueron recuperadas por el país.

En otras palabras, se estaba desarrollando uno de los supuestos en que reposaba el plan político a medio plazo del proyecto original de reforma amplia de la Constitución que quedó archivado. ¿Hubiera sido otra la evolución si en diciembre hubiera llegado al Parlamento este proyecto, asociando el problema del cobre (imperialismo norteamericano) con el de las empresas monopólicas (gran burguesía nacional), contraponiendo todo ello al control popular de los resortes básicos del poder dentro del país (poder popular) y enfrentando a la mayoría del Parlamento con un eventual referéndum (disolución de las Cámaras y nuevas elecciones)? En noviembre de 1970, yo pensaba

que no. El presidente Allende compartió este análisis. La dirección de los partidos de la izquierda tuvo una opinión distinta, que es la que prevaleció.

El enfrentamiento con el principal adversario extranjero, el capital norteamericano, se produjo en el mismo momento en que el Parlamento nacionalizaba las minas de cobre deduciendo de la indemnización a las compañías la rentabilidad que éstas habían percibido por encima del 14 por ciento anual desde 1955 a 1970. Dedución con efectos retroactivos que buscaba compensar parcialmente el expolio de que había sido víctima el país desde comienzo de siglo, pero que era un ejemplo amenazador para el conjunto de las inversiones de Estados Unidos en los países dependientes. Nunca hubiera podido Estados Unidos reconocer de buen grado este precedente, por más que estuviera respaldado por todo el régimen institucional chileno. La "doctrina Allende" sobre nacionalizaciones no fue aceptada por los norteamericanos, que llegaron hasta impulsar la destrucción de las instituciones sociopolíticas chilenas para dejarla sin efecto. La Junta Militar de Pinochet se apresuró a entregar a la Anaconda, Braden y Kennecott cuantos millones le exigieron.

El resultado de la opción táctica inicial de la UP en noviembre de 1970 era que el enfrentamiento directo con el capitalismo norteamericano se producía *antes* de que la clase obrera chilena hubiera consolidado su poder dentro del país. En términos más concretos, antes de que controlara el conjunto del aparato estatal (en especial el Parlamento) y el sector dominante del sistema económico (Área de Propiedad Social). En estas circunstancias, como era de esperar, Estados Unidos se hizo fuerte en estas dos cabezas de puente para invalidar el ataque contra sus intereses y hacer un escarmiento con el movimiento que se había atrevido a tanto. Y, en efecto, las acciones del gobierno de Estados Unidos para ahogar económica y políticamente al gobierno chileno se incrementan en las semanas que siguen a la nacionalización del cobre. El primer acto de terrorismo importante, el **asesinato del ex ministro democristiano Pérez Zujovic**, tiene lugar diez días después de su aprobación por el Parlamento, y el primer acto público de bloqueo financiero —el rechazo de un préstamo de 21 millones de dólares por el Export-Import Bank—, interviene apenas un mes después de la pro-

mulgación por el presidente Allende de la reforma constitucional que nacionalizara las grandes minas de cobre (15 de julio de 1971).

En noviembre de 1970, con Allende considerábamos que si la UP quería resistir el embate que iba a venir desde Estados Unidos, sólo tenía dos caminos: *a*) pactar con la burguesía nacional para hacer un frente común contra la agresión externa, o *b*) consolidar de inmediato su control sobre los resortes neurálgicos de la nación.

La primera opción era incompatible con el programa de la UP y con la naturaleza de los partidos obreros chilenos. Personalmente, nunca percibí en ningún partido de la UP que ésta fuera su intención explícita. Pues su instrumentación pasaba por la alianza con el ala derecha del PDC, eventualmente por su incorporación al gobierno. La que, en cualquier caso, exigía la destrucción previa de la alianza socialista-comunista, es decir, de la Unidad Popular, pues la coalición fue siempre resueltamente contraria a que la UP hiciera desde el gobierno una política neocapitalista, puesto que la razón de ser social y programática de la UP era oponerse a esta última, propuesta claramente por Radomiro Tomic y la DC en la campaña de 1970. Seguir la opción democristiana significaba enfrentarse al sentido concreto de la evolución de la clase obrera chilena durante los años cincuenta y sesenta; en otros términos, a la alianza socialista-comunista. Allende siempre se negó a actuar de acuerdo con este modelo, que implicaba negarse a sí mismo al dar la espalda al proyecto político que durante treinta años había animado a los trabajadores y por el que éstos le habían elegido presidente de la república. En sus negociaciones sucesivas con la DC, siempre discutió sobre los términos de reemplazo de las estructuras capitalistas, nunca sobre la forma de mantenerlas. De ahí que pudiera dialogar con el sector progresista de este partido, el no vinculado a las empresas multinacionales o a los monopolios, mientras que el sector Frei siempre propuso "o capitulación o guerra abierta, nunca conciliación". El pacto con la burguesía nacional contra el capitalismo norteamericano pasaba, en 1970, por el apoyo de los partidos obreros a la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, proyecto que este último denominaba "unidad del pueblo". Y no al proyecto alternativo socialista-comunista, con Salvador Allende a la cabeza.

Es cierto que, a fines de 1969, el candidato común para la UP promovido por el Partido Comunista no era Allende, sino una personalidad del MAPU que hasta nueve meses antes militaba en el PDC, del que había sido fundador: Rafael Agustín Gumucio. Todavía a comienzos de enero de 1970, en una reunión con los senadores Luis Corvalán, Volodia Teitelboim y Jorge Montes, miembros de la comisión política del PC, realizada en casa del primero, tuvo lugar la siguiente conversación, que transcribo tal como Salvador Allende me contó en varias oportunidades:

ALLENDE: — El Partido Socialista me ha propuesto a mí como candidato común de la UP a la presidencia de la república. Quisiera que analizáramos esta cuestión.

TEILELBOIM: — No tenemos nada en contra de tu persona, pero el Partido Comunista no desea que seas el candidato común.

ALLENDE: — Ésta no es tanto una decisión sobre personas sino una cuestión política... Si ustedes piensan que un ex dirigente de la DC como portavoz de la UP tiene más posibilidades de ganar la presidencia, están profundamente equivocados. En primer lugar, jamás el electorado del Partido Socialista aceptará votar como presidente de la república a un antiguo demócrata-cristiano. Y, en segundo lugar, el electorado democristiano tampoco votará por él teniendo como tiene un candidato propio como es Radomiro Tomic. Si Uds. quieren que la UP tenga alguna posibilidad de ganar la elección, el candidato común tiene que ser del Partido Socialista. Digo esto no en función de mi persona sino del problema de fondo. Yo estoy dispuesto a renunciar de inmediato a la postulación en nombre del PS si ustedes prefieren a otro candidato socialista. Díganme un nombre ahora y en 15 minutos más yo presento mi dimisión ante el comité central de mi partido, que está reunido esperándome, en favor de cualquier socialista que Uds. elijan. ¿Prefieren a Aniceto Rodríguez, nuestro secretario general, a Carlos Altamirano, o a Clodomiro Almeyda...?

SENADORES COMUNISTAS: — No, nosotros pensamos que el candidato común no debe ser un hombre del Partido Socialista.

Sólo días después, ante la negativa del PS a aceptar un candidato de la UP que no fuera de su propio partido, el PC aceptó a Salvador Allende.

¿Estos proyectos de 1969 del PC de aproximar hacia la DC el centro de gravedad de la Unidad Popular fueron mantenidos, consciente o inconscientemente, entre 1970 y 1973? Los miembros de la comisión política del PC que preferían un candidato distinto de Allende han sobrevivido todos a las masacres posteriores a septiembre de 1973. Y podrán dar una explicación más autorizada que la mía, necesaria para esclarecer las causas profundas del drama del pueblo chileno. Personalmente, siempre estuve convencido de que el comportamiento del PC en 1970-1973 era el que se desprendía de una clara voluntad de identificación con la unidad de la clase obrera —es decir, alianza PS-PC—, con el programa común y con la suerte del gobierno elegido para llevarlo a la práctica. Por la razón fundamental de que la alianza del conjunto de la DC con el gobierno UP en torno de un proyecto político de capitalismo de estado socialmente avanzado —exigencia *sine qua non* del sector dominante dentro del PDC—, hubiera requerido la marginación de un Partido Socialista opuesto a la colaboración de clase —es decir, la destrucción de la propia UP— y, por supuesto, la sustitución de Salvador Allende, identificado con su partido, la UP y el programa común. En otras palabras, la destrucción del gobierno nacido en 1970 y de los fundamentos sociopolíticos que lo hicieron posible, obra en gran parte del propio Partido Comunista.

Estos antecedentes contribuyen a explicar que el pacto entre la clase obrera y la burguesía chilena frente a Estados Unidos no tuviera lugar ni antes ni después de la nacionalización de las grandes minas de cobre. Lo que no era incompatible con que tanto el PC como Allende y la mayoría de la UP buscaran desde el primer día al último la manera de *coexistir* con el conglomerado social DC, sin entrar en conflicto antagónico con él.

El segundo camino para contener la agresión de Estados Unidos requería colocar a la clase obrera chilena y a sus aliados en una posición de predominio dentro del país. Desde mi punto de vista, fue posible lograrlo en 1971, lo que no sólo hubiera confirmado las vastas transformaciones estructurales realizadas ese año, sino que hubiera consolidado la estrategia general de la UP, permitiendo que en 1972 y 1973 los acontecimientos siguieran un curso muy diferente del que tuvo lugar. Y no es

esta una simple especulación *a posteriori*, sino el fruto de la reconsideración de las opciones tácticas *reales* que estuvieron al alcance del gobierno y de la UP antes de diciembre de 1971. Ya he mencionado el sentido de las opciones principales que se consideraron el primer mes de gobierno. Voy a escoger ahora otras ulteriores.

En junio de 1971, cuando las Cámaras aprueban por unanimidad el proyecto de reforma constitucional de nacionalización de la gran minería del cobre, habían transcurrido siete meses sin que la UP hubiera planteado la necesidad de contar con una mayoría en el Parlamento para llevar adelante su programa, y sin que la delimitación del Área de Propiedad Social, especificando la identidad de las empresas que debían integrarla, hubiera sido expuesta ni ante el país ni ante el Parlamento. Se seguían métodos indirectos, apoyados en las facultades administrativas del gobierno, para sustraer aquellas empresas al control del capitalismo nacional o extranjero.

Fueron siete meses preciosos pero, con todo, la oportunidad para plantear directamente y resolver este problema crucial no había pasado definitivamente. En la segunda mitad de junio, en la presidencia de la república se impuso el criterio de que, aprobada la recuperación de las grandes minas de cobre con la colaboración de los representantes políticos de la burguesía, había llegado el momento de encarar sin más dilación el problema del poder político del estado y el de los medios neurálgicos de producción. Ello debía hacerse por la vía que nos parecía a nosotros ineludible: pidiendo al país que diera un respaldo mayoritario —claro y explícito— a los proyectos esenciales del gobierno y de realización inmediata. El plan original de nacionalizaciones de Vuskovic, que yo denominaba "Fabiano" —una empresa ahora, otra después, una aquí otra allá, pero no un conglomerado preciso y globalmente delimitado, para no asustar— ya en junio era evidente que había fracasado. Sólo una cuarta parte de las empresas cuyo control debía estar en manos de los trabajadores y del estado antes de junio, lo estaba realmente. De nuevo, ahora, nos pareció que el camino más favorable para franquear estas encrucijadas continuaba siendo el referéndum. Y en este preciso momento teníamos la puerta franca para ello. La oposición, al votar el proyecto de reforma a la Constitución nacionalizando la

gran minería del cobre había rechazado varios vetos parciales interpuestos por el ejecutivo. De acuerdo con la Carta Fundamental, el rechazo de estos últimos ofrecía al presidente de la república la posibilidad de convocar un referéndum en torno de ellos dentro del plazo de sesenta días. He aquí la oportunidad, nos dijimos en la Moneda, de someter a juicio popular en unas semanas a la mayoría opositora del Parlamento. En términos tales que, si el gobierno perdía el referéndum, la nacionalización del cobre no quedaba cuestionada, pues no eran los artículos ya aprobados los que se sometían a la consideración del electorado, sino los vetos parciales que afectaban a disposiciones poco relevantes para ella.¹⁰

De acuerdo con nuestras estimaciones, habiendo obtenido la UP más del 50 por ciento de los votos el 4 de abril de 1971, cuando las elecciones eran simplemente municipales y no giraban en torno de ninguna proposición precisa, tres meses después podíamos esperar encontrar un respaldo mayoritario también. Que este cálculo era correcto quedó demostrado el 18 de julio, en la elección parcial de Valparaíso, donde la UP obtuvo una votación superior a la de abril.

Había otra razón en nuestro ánimo para llevar a elecciones generales el articulado de una eventual reforma constitucional rechazada por el Parlamento: legitimar la necesidad de solicitar al país que concediera al presidente la facultad de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones legislativas en el transcurso de ese mismo año. A este fin, derrotar a la oposición en el referéndum sobre los vetos permitía contraponer la voluntad popular mayoritaria en el país a la mayoría existente en el Parlamento, de signo contrario. Pero esto último resultaba menos evidente si entre el ejecutivo y las Cámaras había una aparente armonía, sin discrepancias mayores. ¿La nacionalización del cobre por la *unanimidad* del Parlamento no daba, acaso, esta impresión? ¿Por qué desear cambiar la mayoría del Parlamento si ésta “colaboraba desinteresadamente en las iniciativas transformadoras del gobierno”?

En los primeros días de julio, el presidente Allende hizo una

10. Las diferencias entre el proyecto original enviado por el gobierno y el aprobado por el Parlamento están explicadas en el estudio de Eduardo Novoa, *La batalla del cobre. Comentarios y documentos*, Ed. Quimantú, Santiago, 1972, en particular pp. 147 y 148.

extensa exposición ante los jefes de los partidos de la UP, explicando en términos equivalentes a los mencionados por qué debía someter a referéndum los vetos rechazados por el Parlamento. La alternativa era promulgar de inmediato el texto aprobado de nacionalización de la gran minería del cobre, aceptando la exclusión de los artículos considerados en los vetos. Allende pidió a los miembros del comité político de la UP que miraran más allá de la conjuntura del momento, y que vieran la necesidad de preparar el terreno para plantear elecciones al Parlamento en los meses inmediatos, sin esperar veinte meses más —marzo de 1973—.

Unos tras otros, todos los partidos de la coalición gubernamental manifestaron su posición al respecto. El Partido Socialista se mostró sensible a la sugerencia, más porque creía que contribuiría a contraponer los intereses de la nación chilena con los de Estados Unidos que por sus consecuencias específicas en relación con el problema del Parlamento. Sin embargo, el Partido Comunista se declaró absolutamente en contra de postergar la promulgación inmediata del texto de nacionalización de las minas, rechazando de plano la convocatoria de un referéndum. Esta última fue la posición prácticamente unánime a la que llegó la deliberación entre los dirigentes de los partidos políticos. Ante semejante consenso, Allende, solo, renunció a su propósito y el día 15 promulgó la reforma de la Constitución que devolvía al país la propiedad de la gran minería del cobre.

A pesar de ello, en la presidencia de la república no abandonábamos nuestro proyecto de plantear la cuestión del Parlamento, establecer la delimitación y conformación del Área de Propiedad Social y organizar la participación de los trabajadores en los niveles de dirección de los centros de trabajo, en las comunas y en la planificación nacional. Durante los meses de julio y agosto siguientes, una y otra vez Allende volvió a insistir sobre la necesidad de organizar un referéndum. Nuestro anteproyecto de reforma constitucional amplia, ya discutido en noviembre de 1970, fue reactualizado y animó durante estas semanas las deliberaciones del presidente con los jefes de los partidos. En la segunda semana de agosto, yo pensé que el acuerdo era inminente, hasta tal punto veía a Allende resuelto a llevar a cabo su decisión. El día 15, en la residencia de

Cañaveral, hice espontáneamente un brindis por el buen éxito del referéndum.

Pero los hechos siguieron de nuevo un camino bien diferente. En la dirección de la UP se produjo una seria división de planteamientos. Por un lado, el Partido Socialista era partidario de convocar un referéndum, pero proponía que fuera sobre el reemplazo del Parlamento bicameral por otro unicameral. En la presidencia de la república considerábamos que era un error plantear directamente una modificación de la superestructura política de esa naturaleza, ya que iba a permitir a la derecha centrar el debate sobre la existencia de un legislativo con una o dos Cámaras. Nosotros estimábamos más conveniente concentrarlo en torno del control de la infraestructura —medios de producción estratégicos, instauración de los organismos de planificación nacional y participación directa de los trabajadores en los niveles de decisión— de modo tal que la burguesía tuviera que oponerse necesariamente a semejantes proposiciones que beneficiaban directamente a la inmensa mayoría del país, y quedara aislada. Dábamos por descontado que el Parlamento rechazaría la proposición del gobierno, lo cual daría pie a solicitar al país la facultad de disolver las Cámaras para convocar nuevas elecciones, de manera que la UP pudiera ser mayoritaria en el Parlamento sin haberse trabado en la cuestión adjetiva de si debía tener una o dos Cámaras.

En otros términos, el Partido Socialista proponía promover un referéndum en torno y a partir de la supraestructura política, mientras que en la presidencia entendíamos que debía plantearse semejante cambio a partir de la necesidad de transformar la infraestructura. En una exposición que hice ante el comité político de la UP, aduje como motivo complementario para ello que para la derecha resultaba en ese momento más fácil deformar en términos ideológicos cualquier intento de alteración de las instituciones del estado por parte de la UP, que la democratización de las instituciones económicas y sociales básicas. Las propias Fuerzas Armadas, agregaba, eran más suspicaces entonces al reemplazo del Parlamento bicameral por una Cámara única, que no a la incorporación al Área de Propiedad Social de los medios de producción de importancia estratégica para regular las actividades económicas.

Pero el MAPU era partidario de algo distinto: que el pro-

yecto de reforma constitucional contuviera la relación nominativa de las empresas que debían ser incorporadas al Área de Propiedad Social, mientras que otros partidos eran opuestos a especificar exactamente cuántas y cuáles empresas privadas debían ser nacionalizadas. Sólo en febrero de 1972 hizo pública el Ministerio de Economía esta relación. Demasiado tarde. Los grandes empresarios ya habían constituido un frente común con los medianos y pequeños.

Por su parte, el Partido Comunista era resueltamente contrario a cualquier forma de referéndum.

Semejante discrepancia de criterios desembocó en fórmulas de transacción que, a la postre, harían inviable la apelación directa al electorado. A fines de septiembre de 1971, el comité político de la UP se puso de acuerdo en enviar al Parlamento un proyecto de ley ordinaria sobre las tres áreas de propiedad de la economía y la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Demasiado tarde. Esta proposición llegaba días después que la DC hubiera presentado un proyecto de reforma constitucional sobre el mismo tema; pero, claro está, de sentido contrario. Para la DC se trataba de conservar la estructura capitalista. No obstante, a diferencia de la UP, planteaba el problema a nivel de la Constitución, con la intención de salvar las objeciones del ejecutivo a su proyecto e invocar el arbitraje del sufragio universal, mientras que la UP renunciaba desde un comienzo a esta última perspectiva. Error que, seis meses después, se reveló costosísimo para el gobierno, al no poder desmentir en los hechos la imputación central de la oposición: la mayoría del país era contraria a la creación del Área de Propiedad Social. De este modo, en cuestión de meses, la UP perdió la posibilidad de mantener la iniciativa en este frente neurálgico y se vio reducida a la defensiva.

El problema del Parlamento fue contemplado por los partidos políticos en el sentido que proponía el PS. El 14 de noviembre de 1971, el ejecutivo presentó un proyecto de reforma de la Constitución para establecer la Cámara única. Los temores que entre julio y septiembre yo había expuesto sobre la fortuna de semejante opción se revelaron correctos, lamentablemente. Dos semanas después de enviada a las Cámaras esta proposición, la UP encontró que estaba en una vía ciega. El camino finalmente retenido para poder llegar hasta el referéndum,

llevaba a un callejón sin salida. En pocos días, la oposición desvirtuó el sentido de la iniciativa, asociando Cámara única con "totalitarismo marxista", "partido único", etc. Cuando a fines de 1971 se hizo imperioso salvar el conflicto abierto con el Parlamento que acababa de estallar, se descubrió que el proyecto de Cámara única era un mal caballo de batalla para solicitar el arbitraje del electorado. Y los propios partidos políticos solicitaron al presidente que retirara el trámite de urgencia para su debate en el Parlamento, lo que se hizo el 1.º de diciembre de ese mismo año. De este modo quedó inmovilizado, en medio de las decenas de otras iniciativas que esperaban un momento más propicio para ser debatidas. El 11 de septiembre de 1973, este proyecto de Cámara única continuaba durmiendo en las oficinas del poder legislativo.

Así se produjo la cruel paradoja, tan temida en la presidencia desde el primer día, de que el año 1971 terminara no sólo sin que la UP hubiera resuelto cuestiones tan esenciales para la "cuestión del poder" como las que estamos considerando, sino que la vía del referéndum en torno de los medios de producción era la propia burguesía la que la había abierto, en los términos que más le convenían, mientras que la UP se la había cerrado a sí misma y, en cambio, la había abierto con desacierto para una cuestión puramente supraestructural como era el número de Cámaras del Parlamento. Y así fue como a lo largo de 1972, cuando la contrarrevolución comenzaba a lograr provocar la perturbación de los sistemas económicos y políticos, la oposición se hizo fuerte en la invocación del arbitraje del electorado para resolver el problema de la propiedad de los medios de producción, mientras que la UP se vio forzada a rechazarlo, no pudiendo hacer una proposición alternativa ni tampoco reemplazarlo por una resolución sobre las instituciones básicas del estado.

LAS OPCIONES DE 1972 Y LA CRISIS DE LA SUPRAESTRUCTURA ESTATAL

En la segunda mitad de enero de 1972, como se indicaba más arriba, la UP rechazó la proposición de Allende de replantearse de inmediato la búsqueda de una resolución electoral del conflicto con el Parlamento. Las crisis políticas dentro del

estado que se sucedieron en los meses subsiguientes, el bloqueo total del ejecutivo por el Parlamento que se había instaurado, llevaron a la presidencia de la república a considerar que era el conjunto del aparato del estado el que estaba ya en crisis. Y que si el movimiento popular deseaba contener la fuerza ascendente de la contrarrevolución, se requería reemplazarlo a corto plazo por otro que asegurara la hegemonía política de los trabajadores.

El 18 de abril de 1972, ante una concentración de más de medio millón de personas, Allende planteó por primera vez en público el agotamiento de una forma de estado. A fines de julio siguiente designó una comisión de alto nivel, integrada por destacados miembros de todos los partidos de la UP, para que estudiara el reemplazo de las estructuras del estado por otras de carácter popular. Formaban parte de ella el ministro de Justicia, Jorge Tapia, del Partido Radical, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa, el subsecretario general de gobierno Sergio Inzunza, del Partido Comunista, Waldo Fortín, del Partido Socialista, el diputado Luis Maira, de la Izquierda Cristiana y yo mismo en representación del presidente de la república.

Se crearon seis comisiones especializadas dependientes de la anterior, en las que participaron alrededor de 50 personalidades del conjunto de la UP. Durante todo el mes de agosto se trabajó en este proyecto en forma intensiva. El resultado fue positivo. En los últimos días de ese mes, se sometió a la consideración de Salvador Allende un proyecto amplio de transformación de las estructuras socioeconómicas y políticas fundamentales del país. De acuerdo con la realidad del momento y las necesidades futuras del proceso revolucionario, se estimó necesario reemplazar a corto plazo la forma de estado vigente por otra que permitiera el desarrollo del programa del movimiento popular.¹¹

El 5 de septiembre siguiente, en un acto público, Allende evocó ante el gobierno en pleno y varios miles de cuadros

11. La fundamentación del planteamiento de la cuestión del estado a mediados de 1972 está contenida en mi artículo "Las elecciones de marzo de 1973 y la definición de clase del poder político del estado", escrito en agosto-septiembre de ese año y publicado en mi libro *El estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, Siglo XXI, México, 1973, pp. 187-200.

dirigentes de la UP la necesidad de reemplazar las instituciones del estado y del régimen jurídico-constitucional. Pidió la organización de un amplio debate sobre el particular a nivel nacional, de modo que éste fuera el principal tema de movilización a lo largo de los meses que precedían a las elecciones legislativas de marzo de 1973, para que el país comprendiera las razones de la crisis política y económica que se estaba desarrollando y, al mismo tiempo, se pronunciara sobre las proposiciones de solución planteadas por la UP y el gobierno. Para facilitar y encauzar semejante debate sobre el problema del poder y del estado, Allende entregó a los jefes de los partidos de la UP el resultado del trabajo de las comisiones gubernamentales durante el mes de agosto, bajo la forma de un anteproyecto de nueva Constitución.

Posteriormente, ante el comité político de la UP, Allende expuso que debía entenderse el proyecto que les entregaba como una primera proposición, a ser modificada en función del resultado del debate que se seguiría en los partidos, en el seno de los trabajadores y en todas las instituciones representativas del país. Los dirigentes de mayor rango de la Central Única de Trabajadores ya habían manifestado en agosto su conformidad con el proyecto y con las proposiciones esenciales de la nueva Constitución.

La reacción de los partidos de la Unidad Popular fue interesante. Sólo el MAPU y la Izquierda Cristiana, los más pequeños, manifestaron por escrito que aprobaban la iniciativa y el contenido del proyecto de reemplazar las estructuras del estado. El resto nunca se pronunció de modo explícito y categórico. No aprobaron el proyecto ni lo rechazaron. Tampoco lo reemplazaron por otro. Pero quedó ahogado dentro del comité político. Se rechazó su discusión pública, y también en el seno del comité político, tras dos reuniones iniciales. Se archivaron los documentos y nunca más se habló de ellos. Allende, solo, continuó planteando en sus discursos lo esencial de esta iniciativa táctica, indispensable a nuestro juicio para salvar la línea estratégica. Todavía ocho meses después, en su III Mensaje al Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1973, se refirió a la necesidad de plantear el cambio de las instituciones del estado:

La decisión del gobierno de lograr que el estado sirva a los trabajadores y a la gran mayoría del país y cumpla sus funciones, se ve poderosamente contrarrestada por la rigidez de nuestra estructura legal y administrativa. Cada día resulta más manifiesta su inadecuación a las necesidades urgentes de la vida económica y política [...] Sólo si el aparato estatal adquiere un carácter popular, podrá evitarse su progresiva inadecuación al Chile real, desajuste que está estimulando muchos de los conflictos políticos y económicos. Un año después, no cabe sino reiterar con mayor apremio lo que manifestara al iniciarse la anterior legislatura: "Todo un sistema normativo debe ser modificado y un conjunto de medidas administrativas ser puesto en práctica para ordenar las nuevas necesidades. El sistema bancario, el financiero, el régimen laboral, el de seguridad social, los sistemas de planificación, la misma estructura administrativa del estado, la propia Constitución Política, no se corresponden ya con las exigencias que los cambios instaurados están planteando". Este programa, que interesa y pertenece al pueblo, debe ser discutido por él, para luego adquirir validez jurídica.

La simple lectura de estas reflexiones muestra que nos encontrábamos dentro de la situación tan temida desde el primer día de gobierno: la crisis abierta del aparato del estado sin que el movimiento popular contara con los instrumentos adecuados para imponer el de reemplazo. La modalidad táctica de resolver el problema del poder dentro de una vía político-institucional, debió encontrarse en los primeros doce meses de gobierno. No lo fue. Dos años después, se estaban viviendo las consecuencias de las opciones iniciales, pero sin los recursos idóneos para superarlas. La dirección política de la UP y del gobierno, como conjunto, no tuvieron visión política suficiente para ello, ni la unidad táctica y estratégica indispensables para abrirse una vía de salida. Y si Allende propuso las sucesivas iniciativas que se han mencionado a título de ilustración, y otras que resultaría prolijo enumerar, coherentes con la estrategia general del programa común, por una u otra razón el grueso de la dirección de los partidos populares no las compartió. Lo que en sí mismo no es tan grave como el hecho de que la dirección de la UP no elaborara y propusiera un proyecto común alternativo.

La contrarrevolución encontró, de este modo, una brecha

por donde penetrar en su acción perturbadora, hasta agrandarla en forma tal que derrumbó todo el andamiaje donde reposaba la fuerza de las organizaciones populares y del gobierno.

Así se llegó a la primera semana de junio de 1973, días después del III Mensaje al Congreso, en que el gobierno tuvo que optar entre:

a) Promulgar la reforma constitucional de la DC sobre las Áreas de Propiedad de la Economía —lo que equivalía a deshacer todo lo andado desde 1971 en la transformación de la estructura económica— y abrir la puerta para el cambio de régimen político según la voluntad del Partido Nacional y la DC. Para la UP, como para los sindicatos, la masa obrera y el gobierno, ello resultaba imposible.

b) Someter a referéndum los vetos del ejecutivo rechazados por el Parlamento en la tramitación del proyecto sobre las Áreas de Propiedad de la Economía de la DC. Allende de nuevo pidió recurrir al arbitraje electoral, al tiempo que proponía poner en acción un plan de emergencia económico, militar y social para contener la inminente insurrección conservadora. Veremos con más detenimiento este plan más adelante; pero en esta oportunidad también fue rechazado y la totalidad de los partidos de la UP se negó a respaldar un referéndum.

c) No promulgar la reforma constitucional aprobada por el Parlamento ni recurrir al referéndum. Aunque el gobierno estaba legalmente facultado para adoptar esta resolución, ello implicaba bloquear aún más la máquina del estado. El comité político de la UP se pronunció en favor de esta última solución, y la crisis final estalló violentamente unos días más tarde.

VII LA POLÍTICA MILITAR ANTIINSURRECCIONAL Y LAS TÁCTICAS POLÍTICAS

Una vez instalada en el gobierno, la coalición de la Unidad Popular procedió, según las opciones iniciales que hemos referido más arriba, a ejecutar un vasto programa de medidas económicas y políticas dirigidas a situar bajo control interno los centros neurálgicos de la actividad económica. Propuso y entabló negociaciones con las compañías extranjeras que explotaban los sectores más dinámicos de la actividad productiva, con el fin de pactar la transferencia de algunas empresas al sector público o establecer nuevos términos de asociación —empresas de capital mixto, público chileno y privado extranjero—.

Únicamente en el caso de los yacimientos de cobre, que afectaban a las empresas Kennecott, Anaconda y Braden, se siguió un camino distinto del de la negociación y acuerdo directo. La importancia de este sector (80 por ciento del valor de las exportaciones), y los desmesurados beneficios obtenidos por los consorcios cupríferos en las cinco décadas anteriores, llevó a nacionalizarlas mediante la reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso el 11 de julio de 1971, deduciendo del monto de las indemnizaciones las utilidades superiores al 14 por ciento anual obtenidas después de 1955.

EL PUTSCH DE MARZO DE 1972

En pleno desarrollo de este programa, en octubre de 1971, una de las empresas con las que el gobierno estaba negociando el monto de la indemnización toma de nuevo la iniciativa de

promover un golpe de estado.¹ La ITT solicita formalmente la colaboración del gobierno de Nixon para provocar la caída de Allende antes de seis meses.

Los mecanismos que se activan desde Estados Unidos para derrocar al gobierno chileno están descritos en el plan de acción del 28 de septiembre de 1971, presentado por la ITT al gobierno norteamericano:

ITT al gobierno de Estados Unidos.

Plan de 18 puntos para derrocar a Allende antes de abril de 1972:

1. Continuar con las restricciones de préstamos en los bancos internacionales, tal como ya lo ha hecho el Export/Import Bank.
2. Silenciosamente, hacer que un gran número de bancos privados norteamericanos hagan lo mismo.
3. Conversar con fuentes extranjeras, con el mismo propósito.
4. Aplazar compras en Chile dentro de los próximos seis meses. Usar el stock de cobre norteamericano en vez de comprarlo en Chile.
5. Provocar una escasez de dólares en Chile.
6. Discutir con la CIA cómo puede ella cooperar en este apretón de seis meses.
7. Tomar contacto con buenas fuentes entre los militares chilenos. Retrasar la entrega de combustible a la Marina y de gasolina a la Fuerza Aérea. (Esto tendría que ser manejado cuidadosamente, de otra forma podría ser peligroso. No obstante, un falso retraso puede ayudar a construir su plan de disconformidad en contra de Allende, y así, motivar la necesidad de su cambio.)
8. Probablemente será necesario dar ayuda en dólares a los medios de comunicación que están paralizados, porque este factor se está ahogando rápidamente y *El Mercurio*, un franco oponente, podría ser desplazado de un momento a otro.

1. El gobierno chileno ofrecía comprar por 92 millones de dólares la participación mayoritaria de la ITT en la Compañía de Teléfonos, mientras que la ITT pedía por su activo cerca de 120 millones. Para arbitrar, en febrero de 1972 el gobierno propuso la valoración de los activos a nacionalizar por Price Waterhouse. Sólo en marzo siguiente se llegaron a saber en Santiago las iniciativas golpistas de la ITT, gracias a los documentos publicados en Estados Unidos.

9. Ayudar a quebrar los planes de Allende sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
10. [...]Algunos gobiernos extranjeros están discriminados en contra de las inversiones privadas norteamericanas mientras simultáneamente están pidiendo trato preferencial en nuestros mercados, y pidiendo préstamos ventajosos a bancos financiados por Estados Unidos.
11. El estatuto del BID (Sec. 2-a-iii) estipula que los préstamos deben ser hechos como "suplemento a inversiones privadas". Lo contrario está teniendo lugar: los préstamos del BID están *desplazando* las inversiones privadas.
12. Las manufacturas americanas deben parar o retrasar envíos de armas cortas y municiones a Chile.
13. Las recientes restricciones de viajes a Chile son perjudiciales para el comercio norteamericano. Los chilenos son conocidos como unos de los mejores viajeros de Latinoamérica. Podrían imponerse algunas represalias.
14. La acción chilena contra la UPI debe ser seriamente reprochada por la Asociación Interamericana de Prensa y por la prensa norteamericana en general. (El *Washington Post* incluso ha criticado la dura política norteamericana en Chile. Deben hacerles comer su editorial ahora que la UPI ha sido cerrada.) *El Mercurio* de Santiago todavía sigue con vida y continúa su crítica a Allende. Alguna ayuda debe ser considerada para este diario.
15. En una reunión con el ayudante del secretario de Estado Charles A. Meyer y su equipo hace algunos días —el 28 de septiembre—, fuimos informados que ¡hasta un millón de dólares norteamericanos están entrando en Chile *cada mes* procedentes de fondos que se encuentran en los "canales de ayuda"! Creemos que este dinero del contribuyente norteamericano al gobierno marxista debe terminar.
16. También fuimos informados de que los fondos de varias "cañerías del BID", no previamente utilizados, eran reasignados en un llamado fondo para emergencia de terremotos y puesto a disposición de Chile. Considerando la fuerte contribución norteamericana al BID, y la falta de una verdadera emergencia, tal acción no debería haber sido permitida y, si es posible, ahora debe ser anulada.
17. El mayor número posible de mercados norteamericanos deben ser cerrados para Chile. De la misma manera, cual-

quier exportación norteamericana de especial importancia para Allende debe ser retrasada o detenida.

18. Estados Unidos debe consultar con otros gobiernos cuyos súbditos están sufriendo a causa de los marxistas chilenos. Esto debe incluir a los países a quienes Chile debe dinero. Las reservas monetarias de Allende están bajando rápidamente y ha propuesto ya una renegociación de los pagos de la deuda exterior.

El mismo documento menciona algunos de los agentes principales sobre los que debe apoyarse la subversión interna, apoyada desde el exterior del modo que estamos viendo:

Hay un comienzo de preocupación por parte de los militares. Ven el escenario chileno derrumbándose lentamente y se dan cuenta de que, antes que el caos económico tenga lugar, las Fuerzas Armadas tendrán que dar el paso y restablecer el orden. También hay signos de ansiedad dentro de la Armada chilena, que tradicionalmente ha sido un verdadero grupo de élite.

Las posibles fuerzas disuasivas que pueden frustrar los planes de Allende y que siguen intactas son:

- 1) los militares;
- 2) el aparato judicial;
- 3) la administración pública;
- 4) unos *mass-media* paralizados;
- 5) un fragmento del poder legislativo.

Durante el período crucial, estas fuerzas deben ser utilizadas para ganar lo que sea en contra de la continuación del éxito de Allende.

Este plan de 18 puntos fue llevado a la práctica en toda su amplitud. E incluso fue desbordado, agregándole nuevas presiones en otros sectores. Basta con releer la prensa de ese período para ver los efectos derivados de su ejecución, que fueron utilizados por la oposición para animar violentas campañas contra la "incompetencia" y "desorganización" de la administración de la UP. Así, por ejemplo, fue particularmente subrayada la denuncia de que en el puerto de Valparaíso se habían pro-

ducido discontinuidades en el suministro de gasolina.² Por la misma época sobrevinieron, también, dificultades para regular el abastecimiento de gasolina a la Fuerza Aérea.

Se observa fácilmente que la subversión norteamericana contra el gobierno de Chile tiene como punto central de apoyo el frente económico. Pero el interés principal de esta insistencia residía en la necesidad de perturbar la singular relación entre las clases sociales que había permitido, en 1970, que la UP lograra aislar a la derecha tradicional, privando de respaldo de masas al intento de insurrección de esta última. Si la alianza de clases en que se apoyaba el gobierno UP y la coexistencia con sectores medios se mantenían, la subversión interna y externa aparecían condenadas a la impotencia.

Esto era muy claro para el *staff* operativo central en Washington. En las primeras semanas del gobierno Allende, el equipo de Kissinger —en ese momento asesor del presidente Nixon para la Seguridad Nacional—, elaboró una estrategia de acción *indirecta* de Estados Unidos contra el gobierno chileno, que debía alimentar la acción *directa* de la derecha contra la UP. Las circunstancias internas del país austral, por un lado, y el desprestigio en que la acción *directa* contra Cuba se encontraba, influyeron para que no se siguiera con Chile el modelo de intervención aplicado a Fidel Castro, no tanto por consideraciones morales o de pulcritud democrática, sino porque la agresión contra el régimen cubano no había alcanzado sus objetivos. Y, además, por coincidir con el período en que la opinión pública norteamericana estaba presionando por el término de la intervención directa de Estados Unidos en Vietnam, desalentando la repetición de este tipo de ofensivas contra gobiernos discrepantes o adversos.

La evaluación norteamericana de la aplicación de acciones directas contra Chile aparece reflejada en la posición de A. Nachmanoff, asesor principal de Kissinger para asuntos relacionados con Chile. Interrogado por un agente de la Anaconda, a fines de enero de 1971, sobre la política que el gobierno de Estados Unidos había elaborado ante la reciente llegada de la UP al gobierno chileno, la describió del siguiente modo:³

2. Véase "Sin bencina Valparaíso", *El Mercurio* (23 febrero 1972), p. 1.

3. *Hearings...*, cit., pp. 1.009-1.010.

1) Es importante evitar una provocación abierta a Allende que tendría el efecto, desde el punto de vista de la Administración, de fortalecerlo [...]

[Es preferible presionar a Chile de modo tal que su gobierno aparezca provocando a Estados Unidos, legitimando así acciones directas.]

Básicamente, Nachmanoff describe la política norteamericana actual como silenciosa pero poderosa, no haciendo nada para provocar a Allende. No obstante, si Allende atacara a Estados Unidos, entonces nuestro gobierno replicaría a su vez.

2) El capital extranjero evitará ese país y Allende va a sentir el apretón. El cree que la mejor manera de agarrar a Allende es a través de su economía.

Adoptada por Estados Unidos una estrategia indirecta contra Chile, pocos fenómenos podían ser más favorables para su buen éxito que la parte más débil en el enfrentamiento adoptara una estrategia *directa*. Prestándose así a la más fácil, expedita y brillante victoria de la contrarrevolución. E inversamente, pocas cosas podían irritar más al *staff* central de la subversión como la de que el gobierno chileno se mantuviera también dentro de una estrategia *indirecta*, concentrando sus fuerzas y sorteando la batalla en campo abierto a la que se deseaba arrastrarle. La desarticulación de la economía chilena buscaba provocar las condiciones sociales que hicieran inviable la línea de conducción de Allende, llevándole a un enfrentamiento *directo* con sus adversarios principales y secundarios, dentro y fuera del país. Es de apreciar la claridad de esta observación de la ITT, el 13 de diciembre de 1971: ⁴

Allende está siendo forzado hasta el punto que luego tendrá que decidir si va a insistir en socializar Chile mediante procedimientos democráticos o va a caer del lado de la extrema izquierda, que hace tiempo viene gritando que el único camino es el de la violencia. *El deterioro de las condiciones favorece la última opción* [...] Estas son indicaciones claras de que el experimento socialista en Chile ha entrado ahora en su más difícil —si no decisiva— etapa. *La polarización de los marxistas y no marxistas es notoria en casi todos los niveles* [...] Hasta los más cautos observadores prevén un serio enfrentamiento para antes

4. Ibid., pp. 995-996. El subrayado es nuestro.

de la mitad de 1972. *Muchos observadores de Chile prevén una caída para marzo de 1972.*

En este sentido, era ineludible romper con la coexistencia entre la izquierda unida y la oposición de centro (DC), a fin de permitir la polarización necesaria para provocar la crisis del sistema institucional. A ello contribuye el Comité Cuarenta del gobierno norteamericano al aprobar, el 5 de noviembre de 1971, una subvención de 815.000 dólares a los partidos chilenos de oposición, una parte de la cual debía ser usada para provocar divisiones en el seno de la propia Unidad Popular.⁵

FREI PIDE LA AYUDA DE LAS COMPAÑÍAS MULTINACIONALES. LA ACUMULACIÓN DE FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS

Para los dirigentes contrarrevolucionarios chilenos, aparecía evidente que detener y derrotar al gobierno popular exigía alterar los fundamentos socioeconómicos y políticos que permitieron su gestación. Así lo manifestaba el propio E. Frei al vicepresidente de la ITT, el 10 de diciembre de 1971: ⁶

Eduardo Frei manifestó su opinión de que actualmente la única manera de derrotar al gobierno de Allende era, para los partidos de oposición, unirse más en sus actuaciones y en cada posibilidad electoral [...] Se requirieron con apremio fondos para todos los partidos de oposición, y nos urgió a que ayudáramos si es posible. Su petición no era una súplica para su propio partido o para su candidatura personal, sino para el conjunto de los partidos de oposición.

Esta línea de acción tenía como condicionante la realidad militar chilena. El ex presidente de la república disponía de elementos de juicio más que suficientes para no llamarse a engaño sobre lo que en esos momentos podían esperar de los militares la reacción chilena y Estados Unidos. Poco antes, en noviembre

5. *Covert Action in Chile*, p. 28.

6. Resumen del almuerzo de Frei con J. W. Guifoyle (*Hearings...*, cit., pp. 993-994). Los datos contenidos en esta nota sobre el viaje a Estados Unidos del interlocutor chileno en 1971, su condición de parlamentario electo en marzo de 1973, el propio contenido de las afirmaciones políticas, me llevan a la conclusión de que se trata realmente del que fuera presidente de la república entre 1964 y 1970.

del mismo año 1971, la estación de la CIA en Santiago confirmaba a Washington "que el objetivo último del programa de penetración militar es un golpe militar".⁷

Eduardo Frei estuvo totalmente reservado sobre la posibilidad de una intervención por parte de las Fuerzas Armadas, indicando no solamente el papel tradicional e histórico de las instituciones militares en Chile sino el hecho, que él cree que es aún más importante, que los militares no tienen ningún entrenamiento o formación para la administración pública, a diferencia de los militares de otros países de Sudamérica, y son muy conscientes de ello.

Su conocimiento de la realidad política de su país y de la propia personalidad de Allende permitían a Frei descartar la ilusión de los norteamericanos de ver al gobierno chileno adoptando una estrategia directa:

En lo que concierne el futuro del gobierno de Allende, si éste va a permanecer en su actual curso, o si será arrastrado por la extrema izquierda a una política de violencia y dictadura, Eduardo Frei no quiso hacer pronósticos. Pero comentó que la única fuerza política fuerte y disciplinada del país era el Partido Comunista, y aunque los partidos de oposición ahora tendían a unificarse, no pueden compararse en cuanto a disciplina interna a los comunistas. Además, que Allende no estaría dispuesto a abandonar un grupo tan sólido.

En coordinación con las medidas tomadas en Estados Unidos, los mismos sectores conservadores nacionales que en 1970 intentaron el golpe militar promueven acciones tendentes a crear situaciones de desorden político y de impugnación de la legitimidad del gobierno. Las primeras buscan dar la impresión de que en el país existe un profundo malestar, colocando a las autoridades ante el dilema de imponer el orden público —lo que permitirá entonces acusarlo de represivo y totalitario— o de dejar hacer —lo que permite denunciar el "caos", la "anarquía" y "vacío de poder"—. Como el gobierno optó por hacer respetar el orden público, se siguieron las consecuencias de la primera variante, como hemos indicado al considerar la desti-

7. *Ibid.*, p. 38.

tución por el Parlamento del ministro del Interior, José Tohá (enero de 1972). Con ello se entraba en uno de los terrenos más sensibles: la contraposición del gobierno con el régimen legal. En la medida que se lograra disociar ambos términos, se contribuía a aislar y enfrentar al ejecutivo con los otros órganos del estado —legislativo (Parlamento) y jurisdiccional (tribunales y Contraloría General)—, lo cual debía provocar una crisis del aparato civil del estado, de suficiente envergadura para permitir la irrupción de sus instituciones armadas.

La dinámica insurreccional de la derecha chilena

Respuestas límite optativas del Gobierno	Reacciones de la oposición	Meta
Firme mantenimiento del orden, de acuerdo con el régimen legal (ejercicio del poder de coerción del estado).	Campaña contra el designio "totalitario" de la UP. Parlamento condena al gobierno por "violación de las garantías constitucionales".	Crisis de legitimidad del gobierno. FF. AA. no deben obedecerle. Vía franca a la insurrección "en defensa de la libertad, la democracia y la legalidad".
Tolerancia de las acciones anónimas (no uso del poder coercitivo del estado).	Incremento de la subversión. Campaña contra "anarquía" y "vacío del poder". Parlamento condena al gobierno por "atentar contra el orden y seguridad de la Nación".	Crisis de autoridad del gobierno. FF. AA. deben "restablecer el orden y la ley".

El contenido de la acción insurreccional está reflejado en los medios de comunicación de masas destinados a la propaganda. Tomemos, a título de ejemplo, *El Mercurio*, principal periódico del país y el favorito de los financieros norteamerica-

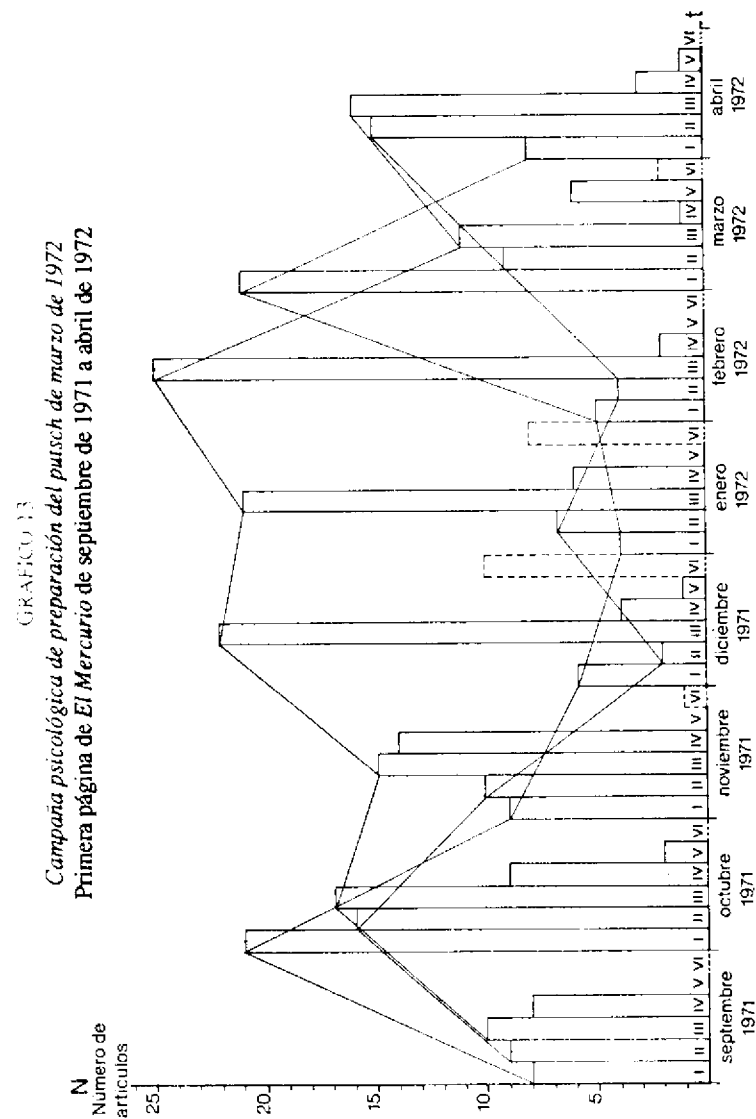
nos interesados en Chile.⁸ El plan de 18 puntos de la ITT-Casa Blanca, se extiende entre los meses de octubre de 1971 y febrero de 1972, para culminar en el putsch del 25 de marzo siguiente. Si queremos tomar una muestra y procedemos a analizar el contenido de la primera página del primer y tercer cuerpo de este periódico durante el período en cuestión, encontramos que sus artículos guardan una perfecta correspondencia con el diseño del plan de subversión.

Limitándonos a la primera página, entre octubre y marzo, se destina un total de 111 artículos a crear la imagen de “desorden económico y social” y 66 a glosar actuaciones de la extrema izquierda que permitieran mostrar al gobierno como “desbordado por su base”; otros 50 comentarios denuncian pretendidos “atentados contra la legalidad” por parte de la izquierda, y 36 se destinan a supuestas manifestaciones de “desorden público”. En el momento culminante, en marzo, una campaña estridente inventa una supuesta “infiltración comunista” dentro de las Fuerzas Armadas. La ofensiva psicológico-propagandística, mantenida sistemáticamente por la mayoría de los *mass-media* del país —propiedad de la oposición—, estaba orientada a contribuir a legitimar el putsch previsto para el 25 de marzo. El 11 de abril siguiente, el gobierno de Estados Unidos retribuyó este trabajo con 965.000 dólares, subvención decidida por el Comité Cuarenta bajo la presidencia de H. Kissinger, en favor de *El Mercurio*.⁹

8. En septiembre de 1974, el presidente Ford, H. Kissinger y el director de la CIA, Colby, reconocieron públicamente que el gobierno de Estados Unidos financió directamente a los *mass-media* opuestos al gobierno chileno.

Una buena sistematización de las técnicas propagandísticas utilizadas por Estados Unidos en sus operaciones de intervención en otros países puede verse en trabajos como los siguientes: J. M. Dodson, W. W. Chenault, M. D. Havron, *The role of psychological operations in naval missions: an appraisal and recommendations*, McLean, Va., Human Sciences Research, Inc., junio 1968; P. G. Nordlie, “The role of values in psychological operations”, *Human Social Research Conference on Psychological operations and communications with foreign nationals*, McLean, Va., Human Sciences Research, Inc., 1968; M. D. Havron, W. W. Chenault, J. M. Dodson, A. T. Rambo, *Constabulary Capabilities for low-level conflict*, McLean, Va., Human Sciences Research, Inc., abril 1969; *Planned Social Change*, McLean, Va., Human Sciences Research, Inc., 1969.

9. *Covert action in Chile...*, p. 8.



EL FRACASO DEL PUTSCH MILITAR EN MARZO DE 1972

Entre septiembre de 1971 y marzo de 1972, una ofensiva articulada se desencadena sobre Chile. Estados Unidos activa sus recursos de presión económica y de subversión. Herbert Klein, director de Comunicaciones de la Casa Blanca y Robert Finch, funcionario del gobierno norteamericano, ambos en gira diplomática por América latina, ven las cosas tan claras que no vacilan en declarar que el gobierno de Allende tenía los días contados.¹⁰

Simultáneamente, las fuerzas capitalistas locales juegan su parte en el drama. La línea de acción indirecta propiciada por el sector de E. Frei alcanza sus principales objetivos en esta época: el enfrentamiento abierto entre el Congreso y el gobierno, por un lado, y la alianza política entre el PDC y el Partido Nacional, por el otro. Objetivos auspiciados, por supuesto, por el gobierno norteamericano. Como indica el informe del Senado de Estados Unidos, "a lo largo de los años de Allende, la CIA trabajó para forjar la unidad de la oposición".¹¹

La instrumentación del frente parlamentario de lucha se sirve del manejo fraudulento del régimen legal. En enero de 1971, la derecha desconoce la Constitución al pretender expulsar del gabinete al ministro del Interior, José Tohá. No lo consigue porque el Tribunal Constitucional la desautoriza. Pero la destitución del ministro del Interior es todo un símbolo, pues José Tohá personalizaba la voluntad de coexistencia y entendimiento con la oposición, era la negación del "extremismo violentista" con el que tanto interés tenía la derecha de mezclar al gobierno. Su eliminación política era una manera de mostrar que deseaba acabar con toda posibilidad de diálogo entre el gobierno UP y los partidos de oposición. Mientras Allende pudiera mantener las condiciones de la "vía política", no tendrían el campo franco, la bipolarización antagónica, el enfrentamiento y la violencia contrarrevolucionarias.

El 19 de febrero de 1972, la nueva coalición DC-PN aprueba en el Congreso el texto destinado a preservar la estructura

10. Véase el artículo de Tad Szulc en el *New York Times* (1 diciembre 1971).

11. *Covert action in Chile...*, p. 10.

capitalista del país: la reforma de la Constitución sobre las Áreas de Propiedad Económica. El 2 de marzo, un manifiesto de todos los parlamentarios de oposición amenazaba con el derramamiento de sangre si el ejecutivo no la promulgaba.

El mes previsto por la ITT y la Casa Blanca para derrocar al gobierno de Chile se iniciaba en medio de un clima político muy agitado. Pero, con todo, el putsch del 25 de marzo fracasó. ¿Por qué? La respuesta a este interrogante nos permitirá volver a encontrar los factores internos sobre los que reposa la fortaleza de un proceso revolucionario de las condiciones del chileno.

Dos de las condiciones que, en 1970, hicieron fracasar el plan ITT-Kissinger-Frei han experimentado sensibles alteraciones en 1972. En primer lugar, el entendimiento entre la UP y la izquierda democristiana (que dirigía el PDC), ha sido reemplazado por la alianza del Partido Nacional con la derecha democristiana, que ha ganado posiciones en la dirección del PDC sin llegar a dominarlo del todo.¹² En consecuencia, la interrelación armónica entre el Congreso y el gobierno ha sido progresivamente reemplazada por la conflictiva. Merece destacarse que sólo *después* de producirse este conflicto entre UP y DC se intenta desencadenar el primer golpe militar, organizado con antelación suficiente y método.

En segundo lugar, sin embargo, la legitimación del gobierno de la UP se ha consolidado durante el año 1971. No sólo las elecciones municipales de abril han elevado su respaldo electoral al 50 por ciento, sino que en el ejercicio de la dirección del estado ha demostrado fehacientemente su respeto por el régimen democrático, en perjuicio de los propósitos de la contrarrevolución de verlo adoptar una línea diferente. El Tribunal Constitucional fue requerido en cinco oportunidades, entre diciembre de 1971 y junio de 1972, para arbitrar entre el legislativo y el ejecutivo, pero de los cinco pronunciamientos judiciales, cuatro fueron favorables al gobierno.

El poder popular, por su parte, había multiplicado su fortaleza. Todos los indicadores sociales, económicos y políticos lo

12. El control pleno del PDC por su ala conservadora sólo se consuma en mayo de 1973, cuando P. Aylwin derrota a R. Fuentealba en las elecciones internas para la presidencia nacional del partido.

mostraban sin excepción.¹³ Al dinamismo tradicional de las organizaciones obreras se había sumado el hecho decisivo de que por primera vez el gobierno dejaba de ser freno para su expansión y usaba del poder del estado para favorecerla.

Económicamente, el año 1971 había terminado con un fuerte incremento de la producción (el PNB aumentó un 8,5 por ciento), así como de la redistribución del ingreso, ya que los asalariados habían pasado a participar del 63 por ciento del ingreso nacional (contra un 51 por ciento en 1970), y con una cesantía reducida al 4 por ciento. Los efectos negativos sobre la producción derivados del bloqueo financiero norteamericano todavía no se habían manifestado plenamente. La escasez de algunos productos provenía más del desmesurado incremento de la demanda interna que de la disminución del ritmo de crecimiento de la producción. La inflación se hallaba contenida dentro de los niveles constantes durante las décadas pasadas. Los sectores medios de oposición se manifestaban a través de los canales institucionalizados por el sistema político, pero sin alcanzar a ponerlos en cuestión abiertamente. Sin embargo, la conspiración seguía su marcha.

En los últimos días de febrero de 1972, el gobierno se instalaba en la ciudad de Antofagasta, 1.370 km al norte de Santiago. Varias decenas de miles de personas se reunieron frente a la Intendencia para recibir al presidente. En su alocución Allende analizó distintos aspectos de la coyuntura, deteniéndose particularmente en un tema: el gobierno se hallaba enfrentado a todas las limitaciones y frenos inherentes al sistema capitalista, sin poder contar con ninguno de los mecanismos de acción de un régimen socialista. El movimiento popular impulsaba las transformaciones de las estructuras capitalistas —necesidad objetiva—, contando con la energía social y política de los trabajadores organizados, pero al no ser éstos la clase dominante, los instrumentos políticos, económicos y militares que tenían a su disposición no eran los específicos de las fuerzas prosocialistas sino los heredados de un sistema donde la burguesía era dominante. En otras palabras, el proceso revolucionario todavía

13. Véase una visión de conjunto del proceso de incremento acelerado del poder popular en el segundo mensaje del presidente Allende al Congreso, el 21 de mayo de 1972.

venía avanzando sin los medios de acción con que puede contar el movimiento popular cuando ha impuesto su hegemonía.

En esos días, el Servicio de Investigaciones (policía civil) y el de Inteligencia de las Fuerzas Armadas habían descubierto un plan de atentado contra la vida de Allende durante su visita a Antofagasta. Aparecía protagonizado por un grupo de extrema derecha. El hecho no se hizo público, y las pesquisas prosiguieron. El 3 de marzo, el presidente visitaba el mineral de cobre de Chuquicamata y celebraba reuniones de trabajo con los mineros. Después de cenar, se encontraba, según su costumbre, jugando al ajedrez con uno de sus colaboradores cuando, pasada la medianoche, apareció el edecán naval, comandante Araya, acompañado del coronel Washington Carrasco, del Ejército.¹⁴ Ambos llegaban directamente desde Santiago y solicitaban entrevistarse de inmediato con el presidente. La reunión fue prolongada. A primera hora de la mañana siguiente, el coronel y el edecán naval retornaban a Santiago en un avión especial de la Fuerza Aérea.

El coronel Washington Carrasco, del Servicio de Inteligencia, había sido enviado por el Alto Mando del Ejército. Dos semanas después, eran arrestados varios oficiales de grado medio y también varios civiles del movimiento derechista Patria y Libertad. La conspiración militar había sido descubierta y fue desarticulada. Actuaban coordinadamente el Servicio de Investigaciones del gobierno y el de Inteligencia Militar. Fue el primero quien, al interrogar a agentes civiles, hizo un hallazgo mayor: en el proyecto de putsch aparecía comprometido el general Alfredo Canales. Lo que produjo asombro dentro del Alto Mando.

Así fue abortado el plan de golpe militar puesto en marcha seis meses antes desde Estados Unidos. Analicemos más de cerca este desenlace.

Es el propio Alto Mando del Ejército quien descubre y revela a Allende los preparativos de sedición. He aquí un condicionante mayor, pues los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas son de carácter corporativo. Están vinculados al co-

14. Washington Carrasco fue ascendido meses después a general y se le confió la jefatura de la III División del Ejército con base en Concepción, la zona de mayor densidad proletaria del país. El 11 de septiembre de 1973 se reveló identificado con el putsch de Pinochet, quien le promovió a jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional en enero de 1976.

mandante en jefe y, a través de este último, al gobierno (ministro de Defensa y presidente de la república). Esto supone que el conocimiento por estos últimos de lo que acaece en el seno de las Fuerzas Armadas está subordinado a la voluntad de cooperación de las propias autoridades militares. Situación fruto de la naturaleza "institucional, profesional" del aparato militar, no inmerso en la organización política de un partido determinado. Los partidos políticos detentadores del gobierno se alternan con el tiempo, mientras que la subordinación del aparato armado al poder civil tiene lugar a través de la "institución" permanente que es el presidente de la república, no del partido político de turno. Ésta era la realidad antes y después de 1970, al igual que en otros países de régimen político pluralista institucionalizado en los que la vida política acepta a la oposición y su acceso al gobierno mediante elecciones (Francia, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, etc.). Lamentablemente, en el caso de Chile el presidente de la república no estaba comunicado directamente con los Servicios de Inteligencia Militar, lo que con el tiempo se reveló costosísimo, ya que impedía percibir la evolución del proceso conspirativo en cuanto el propio comandante en jefe se sumaba a él, como acaeció con la Fuerza Aérea a fines de 1972, y con la Marina y el Ejército en agosto de 1973. Los oficiales comprometidos con el complot lograron una implantación progresiva en los Servicios de Inteligencia de las FF.AA., a través de modalidades que el propio comandante en jefe del Ejército, general Prats, no pudo atajar. Ello tuvo efectos tanto más graves en la medida que el gobierno no disponía de servicios de información propios, bajo su directa autoridad. La DC y el PN, desde el Parlamento, bloquearon toda iniciativa legal del gobierno dirigida a fortalecer y dotar de medios adecuados a las instituciones de la seguridad interior —Carabineros e Investigaciones—.

El papel de los Servicios Militares de Inteligencia es crucial. Organismos que por sus funciones específicas disponen de un nivel ideológico y de politización superior, son un instrumento indispensable en las maniobras conspirativas y de control político dentro de las instituciones armadas. Y así son utilizados en la mayor parte de los países. Con su colaboración pueden montarse los más fantásticos y sofisticados complots, capaces de desorientar y desfigurar el origen real y los engranajes de la

subversión mientras ésta crea las condiciones de su éxito. El sistema internacional de coordinación político-militar que tiene su centro en Washington concede a la infiltración y manejo de los servicios de inteligencia la mayor de las prioridades. Detrás de cada intervención militar en defensa de la cohesión interna del sistema internacional norteamericano están las redes de comunicación de los Servicios de Inteligencia.

El movimiento popular está en condiciones de desventaja manifiesta para evitar esta situación. Ante unas Fuerzas Armadas de composición mayoritariamente conservadora, establecer contactos y canales políticos de comunicación hacia su interior encuentra la reacción de un cuerpo refractario a los controles de partidos. La "infiltración de las Fuerzas Armadas" es el tipo con que los códigos militares sancionan semejantes intentos de búsqueda de información. Por el contrario, la clase dominante puede tener la posibilidad de hacerlo mediante otros procedimientos menos arriesgados: la comunicación a través de la abigarrada red de relaciones personales, familiares y de intereses múltiples que la unen con el *establishment* militar. Mientras un militante de un partido obrero normalmente tiene que "organizar" el encuentro con el oficial simpatizante que puede hablarle de cuestiones internas del aparato militar, el político conservador se "encontrará" con oficiales favorables a su ideología o amigos personales en recepciones, cocktails, encuentros familiares o profesionales, etc. Después del 11 de septiembre de 1973, muchos oficiales y hombres políticos de izquierda encontraron en la tortura, la cárcel y la muerte la represalia por haber mantenido conversaciones entre ellos durante el gobierno de la Unidad Popular. La infiltración de la derecha civil dentro del cuerpo de oficiales tiene lugar de modo *implícito*, por la coincidencia de intereses materiales e ideológicos existente entre ambas partes, mientras que los representantes del movimiento obrero tienen que buscar semejante forma de control sobre el aparato militar mediante mecanismos *explícitos*.

Pero en marzo de 1972 el Servicio de Inteligencia del Ejército respondía a un Alto Mando que representaba a una estructura militar profesionalizada, resuelta a respaldar al gobierno.

No obstante, la correlación de fuerzas internas del Ejército en nuestro caso es tal que, mientras se arresta y pasa a retiro a los oficiales conspiradores de graduación intermedia, el des-

cubrimiento de sus vinculaciones con un general no se ve acompañado de las mismas medidas. Alfredo Canales se siente con fuerza suficiente en marzo de 1972 para manifestar: "A mí no me sacan así no más. Yo no soy Viaux; yo arrastro conmigo a la mitad del Ejército". Y, en efecto, más bien que provocar una crisis militar inmediata con la expulsión del general Canales, el sector del Alto Mando leal al gobierno prefirió postergar esta decisión y desplazarlo a un puesto secundario, al tiempo que presta atención a sus movimientos. Descubierta seis meses después *in fraganti* organizando la subversión, el comandante en jefe del Ejército, general Prats, lo pasa a retiro forzoso, aunque no sin problemas internos y la agresiva resistencia del afectado.¹⁵

Y ésta es la razón última de que el plan de 18 puntos de la ITT, instrumentado por el gobierno norteamericano y la derecha chilena, desemboque en un golpe militar abortado. La correlación de fuerzas dentro del Ejército en 1972 está equilibrada en forma tal que la resultante es el inmovilismo transitorio. El sector golpista no arrastra tras de sí al grueso de la institución, pero el democrático no tiene tampoco una supremacía que le permita proceder con resolución en contra del primero.

El respeto que Allende y Prats mostraron hasta el último momento por la personalidad profesional e institucional de las Fuerzas Armadas, se reveló oportuna y valiosa como actitud de principio. Pero ello entrañaba el riesgo inherente al mantenimiento en activo, incluso en puestos de comando importantes, de oficiales políticamente adversos a la UP, mientras no infringieran los reglamentos profesionales de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo, esto facilitó el desarrollo de la conspiración, hasta el punto de derribar a los propios garantes de la disciplina. Sin embargo, conviene insistir, semejante fenómeno no puede analizarse —ni juzgarse— en términos exclusivamente de política militar ni en función de consideraciones sólo castrenses. La crisis de la política militar de Allende y Prats no obedeció tanto a causas internas a las Fuerzas Armadas como a los efectos sobre estas últimas de la subversión de la estructura social y política del país, que creó las condiciones para la supremacía

15. Tras el golpe de estado, la Junta Militar lo envió al Líbano como embajador.

de la contrarrevolución. Sólo entonces el sector conservador de las Fuerzas Armadas logró imponer también su hegemonía dentro de ellas y arrastrarlas al golpe de estado.

LA POLÍTICA MILITAR ANTIINSURRECCIONAL. LAGUNAS Y CONTRADICCIONES

Es en los primeros meses de la administración UP cuando se resolvieron las opciones tácticas que podían consolidar o debilitar la estrategia contemplada en el programa de gobierno. Los dos factores principales que, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, inmovilizaron después del 4 de septiembre de 1970 a quienes intentaban un golpe militar, hemos visto que eran:

- a) La alianza del bloque social UP con los sectores medios o, al menos, la coexistencia con la mayoría de ellos, dominantes dentro de las Fuerzas Armadas.
- b) Reconocimiento de la estructura legal del estado y de la función específica que en él corresponde a las Fuerzas Armadas profesionales.

El propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido, ante las comisiones de encuesta del Senado, que varios millones de dólares fueron destinados por el Comité Cuarenta a financiar las operaciones clandestinas que debían provocar el golpe de estado en Chile en 1970. Es familiar en América latina la expresión: "No hay general que resista un cañonazo de cien mil dólares". Sin embargo, la situación social y política interna de Chile en aquella coyuntura, fue más eficaz que los "cañonazos de dólares".

La política militar del gobierno UP se elaboró en función de la realidad social y política de 1970, en la que el papel de las Fuerzas Armadas era el que se desprende de la simple lectura de los apuntes personales del general Schneider, expuestos en las reuniones del cuerpo de generales que se celebraron en la Academia de Guerra, el 10 de septiembre de este año, y en las Academias Politécnicas del Ejército, el 15 de octubre siguiente:¹⁶

16. Véase *El caso Schneider*, Ed. Quimantú, Santiago, 1972, pp. 185-192.

*General Schneider. Reunión en la Academia de Guerra.
10 septiembre 1970*

[...]

II. Planteamiento a la institución. Dos aspectos diferentes: desarrollo del proceso eleccionario y futuro de la Institución [militar].

III. Proceso eleccionario. — Tuvimos un planteamiento anterior muy claro: vía legal, respetar el veredicto. Lo ocurrido: normal, no hay cambios, ser consecuente, línea zigzagante. El proceso debe seguir, apoyaremos a quien se elija. Ambiente en los cincuenta días próximos:

- a) En lo económico y financiero: fuga [de capitales] real y ficticia, crear el caos con dos finalidades, golpe y ambiente caótico que impida segunda fase [elección por el Congreso];
- b) para esto estamos siendo requeridos: para apoyar a Alessandri, para defender a Allende, para otras posturas; existen adherentes para todos. ¿Cuál es nuestra actitud?: la única, la legal. Las otras, nos dividen, nos echan contra el pueblo.

Los resultados son de nuestra responsabilidad. La solución es política —el Congreso (elegirá presidente a uno de los dos candidatos que han obtenido mayoría relativa en el sufragio directo)— no armada, no a la guerra civil.

IV. Nuestro futuro. — Inquietante e inseguro. Nos hemos ya preocupado, por varias vías. Asegurar nuestra institucionalidad. Difícil sí, no imposible. Requieren apoyo para gobernar [tanto Allende como Alessandri]. Hay detalles precisos para negación de este apoyo, el Congreso. Unidos y cohesionados seremos capaces.

[...]

*General Schneider. Reunión en las Academias Politécnicas.
15 octubre 1970*

[...]

III. Ambiente institucional actual [del Ejército]. — Demostración de tranquilidad profesional. Reconozco inquietud de personas, dudas en el futuro, angustia profesional, yo la tengo. Esto no puede cambiar nuestra actitud profesional. Lo he dicho muchas veces, es lo único que nos une. Requeri-

mientos (que se nos hacen). Infiltración múltiple, general Viaux, políticos diversos, cartas, teléfono, conversaciones. Objetivo, quebrar la unión [...]

[...]

VI. Política que se está siguiendo [en el Ejército]. — Mantenimiento de la posición legal. Preservaciones del contacto. [...] Apoyo a lo que resuelva el Congreso. Mantener la unión institucional. Parar golpes. Información oportuna. Preparación para actuar, planes, análisis de cada circunstancia.

VII. Política futura. — Garantías constitucionales. Nuestro principal resguardo: nuestra inalterable posición, doctrina clara y precisa, unión institucional (dentro del Ejército) e interinstitucional (con Marina y Aviación). Planteamiento al futuro gobierno: política de Defensa Nacional, política institucional (del Ejército). Planificación sexenal: definirnos, objetivos, clasificación, programar nuestra evolución. No detener la evolución y los cambios: debemos aceptarlos, encauzar, no caer en extremos, los que no desean golpes de Estado —militar o civil—, organizaciones civiles de múltiples objetivos, campaña del terror [contra la candidatura de Allende]. El éxodo [de ciudadanos fuera del país]: posición incomprensible, ¿qué defienden?: lo propio, no el país. Panorama económico: grave, acción psicológica, duda, confusión, miedo; [ello está] provocado, estimulado (por la derecha). Pensar con mentalidad chilena. Lo peor es el pesimismo o la pérdida de la fe.

Durante tres años, estos planteamientos del general Schneider fueron mantenidos por el general Prats tras el asesinato del primero. En ellos se puede subrayar los rasgos siguientes:

1) Voluntad de evitar al país una situación de guerra civil, para lo que se requiere preservar la unidad interna de las Fuerzas Armadas.

2) La única posición que tiene fuerza suficiente en ese momento para mantener unidas a las Fuerzas Armadas es el respaldo al régimen legal, a la forma de estado de legitimidad democrática, sea quien sea el que resulte elegido presidente de la república.

3) Tanto si es la derecha como la izquierda quien asume la dirección del estado, sólo pueden gobernar si cuentan con apoyo bastante para ello, que se manifiesta a través de las instituciones políticas existentes, en especial en el Parlamento.

4) El ejército no debe detener la evolución democrática del

país y los cambios socioeconómicos que éste quiere darse, y debe rechazar las incitaciones de los sectores privilegiados para reprimir al pueblo.

5) El ejército es el garante del desarrollo del proceso de cambios por los cauces democráticos de expresión ciudadana, y tiene la última palabra al respecto —no los partidos políticos—.

Es ésta una doctrina militar que asigna a las Fuerzas Armadas el papel de *impedir* la guerra civil mediante el respaldo de los mecanismos político-sociales que encauzan y regulan la sociedad civil, la dinámica de transformaciones socioeconómicas y la pugna entre los distintos intereses de clase. Doctrina que se contrapone nítidamente a otras dos:

a) La norteamericana (del Pentágono), que concibe a los ejércitos vinculados al sistema militar internacional de Estados Unidos como instrumentos privilegiados de sojuzgamiento y represión de las fuerzas sociales anti-Imperio, consideradas como el "enemigo interior". El ejército es preparado ideológica y técnicamente para la guerra interna, para la guerra civil contra las fuerzas populares. Acción de contención "hacia dentro" complementaria de la que asumen directamente las Fuerzas Armadas norteamericanas contra el "enemigo externo": los países socialistas, en especial la Unión Soviética.

b) La de los movimientos revolucionarios que siguen una táctica insurreccional para conquistar el poder, que exige la desarticulación previa del aparato militar del estado burgués y pasa necesariamente por la guerra civil *armada* contra la clase dominante. Dentro de Chile, era la vía preconizada por el MIR y, dentro de la UP, por un sector importante del Partido Socialista y del MAPU.

La táctica político-institucional de Allende, dominante dentro de la UP gracias al respaldo que encontraba en el Partido Comunista, en el Partido Radical y en amplios sectores del Partido Socialista y del MAPU, pudo ponerse en práctica sólo y en la medida que la praxis tradicional del ejército continuó siendo dominante en el interior de éste, resistiendo la presión sin tregua proveniente de Estados Unidos y la derecha local. Por eso el gobierno de Allende está enmarcado entre el asesinato de dos comandantes en jefe del Ejército, los únicos muertos violentamente en la historia del país. El general Schneider, exponente

de esta doctrina militar en 1970, fue asesinado por un comando a las órdenes del general Viaux en la tercera semana de octubre de ese año. El general Prats, su sucesor, fue eliminado del ejército en la tercera semana de agosto de 1973, y asesinado el 30 de septiembre de 1974. La derrota de este último marcó la hegemonía de la doctrina militar del Pentágono y de las fuerzas pronorteamericanas dentro del ejército de Chile. Proceso que el propio Prats explicaba en su carta-renuncia al presidente Allende el 23 de agosto de 1973:

[Al asumir la comandancia en jefe del Ejército en octubre de 1970] comprendí que el ejército ya había dejado de ser un compartimento estanco de la comunidad nacional y que las presiones, tensiones y resistencias —propias de un proceso de cambios profundos que debían realizarse dentro de las normas constitucionales y legales vigentes— inevitablemente iban a perturbar cada vez más intensamente la tradicional marginación del ejército del quehacer político contingente [...] Me tracé, entonces, como objetivos fundamentales de mi acción de mando, luchar, por una parte, por afianzar la cohesión institucional y garantizar la verticalidad del mando, para encauzar la marcha del ejército en los moldes doctrinarios profesionalistas, que se desprenden del rol constitucional asignado a la fuerza pública. Por otra parte, concentré mis esfuerzos en la planificación y ejecución de un plan de desarrollo institucional que constituía un imperativo inaplazable, para acrecentar la eficiencia operativa de las grandes unidades que articulan el despliegue institucional [...] Al apreciar, en estos últimos días, que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del estado de derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional.

Mientras subsistieron los fundamentos sociales y políticos sobre los que reposaba la política militar Schneider-Allende-Prats, la contrarrevolución estuvo sofocada. El poder de disuasión existente en la interacción UP-gobierno institucional-aparato represivo del estado, protegió al movimiento obrero contra todas las tentativas contrarias a su estrategia revolucionaria. Ni el soborno, ni el crimen, ni el terrorismo, ni la sub-

versión, etc., privaron al movimiento popular y a su gobierno de los instrumentos adecuados para contener las fuerzas sedientas de violencia y represión antiobrera. Es el período que transcurre entre octubre de 1970 y comienzos de 1972, precisamente aquel en que el proceso revolucionario hizo avances cualitativos más espectaculares. No fueron estos últimos los que entraban en conflicto ni se veían frenados por la política militar.

Es en este período inicial, sin embargo, cuando la acción combinada de la presión contrarrevolucionaria y las contradicciones internas del movimiento popular producen los fenómenos que, a lo largo de 1972 y 1973, demostrarán ser costosísimos y de remedio cada vez más difícil. En 1971, la UP nunca se puso de acuerdo sobre la política militar a seguir a medio y largo plazo. Ni siquiera discutió el tema con franqueza y rigor. Cada cual cuidaba y velaba por sus criterios propios. Así, un sector importante, en especial en el Partido Socialista, siempre consideró que la situación en que terminó la elección presidencial de 1970 era artificial, antinatural, y que más bien pronto que tarde el proceso se encauzaría por el camino "normal": la insurrección armada de los trabajadores. Este sector, que antes de septiembre de 1970 negaba la posibilidad de que la UP llegara al gobierno sin recurso a la guerra civil, vio sucederse los acontecimientos de 1970 y 1971 sin entender su razón de ser. Y mantuvo siempre el ánimo de propiciar la conquista del "poder total" a corto plazo por las armas, para lo cual requería de las condiciones sociopolíticas que invalidaran el funcionamiento del aparato del estado vigente. Pero, grave inconsecuencia, esto último era defendido y puesto en ejecución sin poder preparar a las masas obreras, y ni siquiera a los propios militantes del PS, con los instrumentos organizativos y técnicos que la vía insurreccional exige para tener mínimas posibilidades de éxito y que no son exclusivamente las *armas*, ni mucho menos.

Por otra parte, las fuerzas dominantes dentro de la UP, particularmente el Partido Comunista, el Radical y un sector del Socialista y del MAPU, hacían un análisis totalmente distinto de la situación militar y de su eventual evolución. Para estos últimos se trataba de evitar, o en caso contrario de retrasar al máximo, un enfrentamiento armado, al tiempo que se desarrollaba el proceso de transformaciones anticapitalistas por un camino distinto del de la guerra civil.

La táctica insurreccional propiciada por un sector de la izquierda fue siempre inviable en la práctica. Las condiciones objetivas internas del país y el contorno internacional la condenaban irremediablemente al fracaso inmediato. Basta con releer las notas personales del general Schneider para ver cuán fácil le era reorientar su argumentación y legitimar que el ejército reprimiera un eventual levantamiento obrero. Y lo mismo ocurría con el general Prats. Los dos comandantes en jefe que fueron asesinados por resistirse a abrir fuego contra los trabajadores, lo hubieran hecho sin vacilación si un sector de estos últimos hubiera ensayado la insurrección para instaurar alguna variante de dictadura del proletariado. Ahí se encuentran las barreras de fuego de la política militar del gobierno UP entre 1970 y 1973.

Sin embargo, aun siendo la única que respondía a un análisis realista de las circunstancias concretas del país, la línea militar observada por el gobierno y la mayoría de la UP adoleció en sí misma —al margen de la evolución del contorno estructural no militar— de limitaciones en su instrumentación práctica que, con el transcurso del tiempo, se revelaron importantes. Es el caso, en particular, de la insuficiente claridad teórica en torno del alcance y contenido de una política militar *antiinsurreccional* que se apoyara no sólo en el aparato armado del estado sino también en las organizaciones populares y obreras. De tal modo que el sector democrático de las Fuerzas Armadas, que demostró en varias oportunidades su decisión de defender al gobierno UP frente a las maniobras sucesivas de la reacción, pudiera ser articulado en cualquier momento, y en formas variadas, con fuerzas civiles dotadas de la organización material y de la preparación teórico-ideológica indispensables para ofrecer una resistencia operacional de masas a la subversión burguesa. Claridad en torno de la acción militar general que hubiera permitido dirigir una orientación política coherente hacia el interior de las propias Fuerzas Armadas profesionales, facilitando su comprensión del proyecto nacional del gobierno UP y su incorporación subjetiva u objetiva a él. La ausencia de definición clara de los partidos de la UP impidió elaborar un mensaje único. De este modo, los esfuerzos que se hicieron en este terreno fueron insuficientes y contradictorios. Ello fue así porque nunca, dentro de la UP, se resolvió el problema, ni siquiera

se discutió con rigor, si el proceso revolucionario debía orientarse hacia situaciones de insurrección obrera a corto plazo o a prevenir la insurrección burguesa. La discusión del problema militar en su relación con la evolución de la dinámica revolucionaria, daba la impresión de que era considerada como "tabú". Más allá de la reafirmación pública de algunos principios básicos, como el de la lealtad de las Fuerzas Armadas a su función legal profesional, el respeto de los trabajadores y del gobierno a ésta, así como el rechazo de la guerra civil, poco se dijo y menos se hizo. Pero si la discusión pública era evitada para que no afloraran las contradicciones entre los miembros de la UP, facilitando su explotación por la propaganda adversaria, tampoco en privado la UP buscó clarificar y coordinar sus posiciones. Por eso es posible afirmar que la UP, como conjunto, llegó al gobierno sin tener prevista una política militar adecuada a la línea táctica del programa común. Y tras su instalación en el gobierno, la UP tampoco pudo construir una política militar coherente y sistemática, porque los partidos políticos tenían tácticas contrapuestas para aplicar el propio programa común. Para paliar esta gravísima laguna, Allende tuvo que concentrar en sus manos prácticamente todo lo que se refería a las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, a fin de lograr la indispensable unidad de conducción política y militar del estado. El desarrollo de la crisis de este último marca las etapas de la crisis de la política militar del gobierno. Cuando esto se produjo, emergieron a la superficie las discrepancias, apenas compatibles, de las líneas militares de los distintos partidos de la UP.

Mientras la guerra la promueven sectores civiles contrarrevolucionarios y la correlación interna de las Fuerzas Armadas es desfavorable a esta solución, es obvio que el movimiento popular puede continuar evolucionando sin necesidad de que las armas abran fuego. Pero en la medida que semejante actitud dentro de las Fuerzas Armadas reposa en factores conocidos cuyo control por parte de la UP no es absoluto, y durante 1972 ello se comprobó repetidas veces, la dirección del movimiento popular debe conceder la prioridad debida a preparar la vanguardia de los trabajadores para disuadir el desencadenamiento de la violencia contrarrevolucionaria y, si ello no basta, resistirla. Cuestión tanto más compleja y delicada cuanto que no

se trata de la formación de *milicias populares*, contrapuestas a las Fuerzas Armadas del estado, propias de la vía insurreccional pero incompatibles con la político-institucional.

Si la preparación de las organizaciones obreras para la insurrección estuvo siempre cerrada en las condiciones internas e internacionales del país, para la *antiinsurrección* ello no era así. La articulación Fuerzas Armadas-organizaciones populares era posible concebirla y ponerla en práctica, a partir de 1970, siempre y cuando estuviera delimitada dentro de las coordenadas en que se movía el sector antigolpista dentro de las Fuerzas Armadas: evitar la guerra civil mediante la defensa y fortalecimiento de las instituciones político-sociales basadas en los principios democráticos que permiten la expresión libre de la voluntad popular. Plantear esta necesidad era posible, porque estaba legitimado en las responsabilidades legales que incumbían al gobierno y en el programa de la UP, además de que existían las disposiciones legales para ello. Baste con referirse a la Ley de Defensa Civil, de 1945, que prevé la coordinación entre sindicatos obreros y otras organizaciones civiles, por una parte, y Carabineros y Fuerzas Armadas por otra, para prevenir o atender situaciones de emergencia o que encierran peligro para la nación. Defensa civil encomendada a la dirección del Ministerio del Interior y sus representantes territoriales, es decir, a la conducción estrictamente *política* del gobierno, no a la militar.

Los Estados Unidos y la clase dominante de muchos países latinoamericanos, de África, Asia y aun Europa han aprovechado este mecanismo de la Defensa Civil para organizar, durante la década de los años sesenta, la acción cívico-militar contra las acciones de insurrección. La Unidad Popular chilena no concibió poner en acción un procedimiento similar. Sólo en agosto de 1973, cuando ya la insurrección cívico-militar burguesa estaba en su fase final, se empezó a estudiar en la presidencia de la república la aplicación de la Ley de Defensa Civil para articular, a lo largo de todo el territorio nacional, a Carabineros con las organizaciones populares, en especial la Central Única de Trabajadores. Era demasiado tarde. ¿Por qué no organizó el movimiento popular, en cuanto asumió el gobierno, los mecanismos de una acción cívico-militar susceptibles de apoyar una política antiinsurreccional? ¿Por qué no planteó abierta-

mente remodelar las estructuras y concepciones tradicionales de la Defensa Nacional, para vincularlas con las organizaciones civiles y evitar la compartimentación de las Fuerzas Armadas respecto de la sociedad civil? La UP contaba con la legitimidad de ser titular del gobierno, y con la resolución del sector coyunturalmente predominante dentro de Carabineros y el Ejército de defender las instituciones democráticas contra la subversión y el sabotaje. Contaba con sindicatos organizados en todos los puntos del país, y con los instrumentos legales para montar a tiempo una red, tan sofisticada y vasta como se deseaba, para prevenir las acciones de subversión y sabotaje que, a lo largo de tres años, fueron el vehículo principal de la contrarrevolución para perturbar los mecanismos socioeconómicos de integración y equilibrio de la sociedad.

Más allá de cualquier otra consideración circunstancial, pienso que la razón principal de esta "laguna" hay que buscarla en las estrategias revolucionarias que coexistían dentro de la UP. Un sector de la UP buscaba el enfrentamiento armado, y el que lo rechazaba a pesar de ser mayoritario no aplicó con la antelación suficiente y la prioridad que merece una política dirigida a evitar la crisis de las instituciones políticas representativas del estado. Deficiencias o errores tácticos que, si por un lado entrechocaban en términos contradictorios dentro de la UP, su acumulación en el tiempo terminó por destruir las bases de la estrategia del programa común e hicieron posible la insurrección contrarrevolucionaria.

Sin embargo, si las posibilidades de coordinar a los sindicatos con las instituciones armadas profesionales, dentro del marco de la Ley de Defensa Civil, fueron tardíamente consideradas en medio de la insurrección última de agosto de 1973, la necesidad de preparar el movimiento obrero para disuadir o resistir una insurrección burguesa fue ya planteada durante las primeras semanas del gobierno. La contrapartida a nivel de masas de la política en relación con las Fuerzas Armadas fue objeto de varias iniciativas del presidente Allende a partir de febrero de 1971; no sólo privadas, como su intervención en el pleno del comité central del PC de junio de ese año, a puerta cerrada, sino también públicas. El 29 de febrero de ese mismo año, en Punta Arenas, donde había llegado en compañía de los tres comandantes en jefe para reconocer las bases militares de aquella

región, en su discurso en el estadio Techado, difundido por cadenas de radio y reproducido parcialmente en la prensa, Allende proclamó la necesidad de organizar a las masas populares para dotar a la política militar de disuasión de la UP de una base social propia. Reconsideremos hoy los supuestos en que se planteó esta dimensión indispensable para la estrategia indirecta.

En primer lugar, se partía de la consideración que la acción legal y democrática de la UP inhabilitaría progresivamente a la reacción para servirse de las instituciones democráticas con el fin de derrotar a la UP, dada la naturaleza del régimen político del país.

En segundo lugar, en la medida que lo anterior se fuera produciendo, la contrarrevolución se vería progresivamente abocada a ensayar prácticas insurreccionales si quería detener el proceso revolucionario.

En tercer lugar, la clase obrera y el conjunto del movimiento popular no contaban con la adecuación *orgánica* para disuadir primero y, eventualmente, responder a las acciones preparatorias de la insurrección burguesa. La organización del movimiento popular para una coyuntura semejante es distinta de la organización *electoral*, que es la que la UP había montado y puesto a prueba durante años. Complementar la organización tradicional con las nuevas formas que exigía la preparación de los trabajadores para la nueva situación que se había creado, exigía trabajo y esfuerzo. Era, por consiguiente, una tarea que debían asumir de inmediato los partidos obreros.

En cuarto lugar, readecuar la organización del movimiento popular en los términos mencionados requería mucho más tiempo que enseñar a manipular una pistola, un fusil o una ametralladora. Los cambios de organización de los trabajadores en función de eventuales acciones de carácter militar en coordinación con las instituciones armadas profesionales podían hacerse sin necesidad de distribuir previamente armas ni formar milicias obreras. Esto último era imposible por incompatibilidad con la naturaleza de las Fuerzas Armadas y porque entraba en conflicto con los supuestos básicos en que reposaba la UP y el gobierno. Pero si las bases y los militantes de los partidos obreros hubieran contado con las nuevas formas operativas, que era lo más difícil, si las circunstancias llegaban a imponer la dis-

tribución de armas, ello se haría, pues estaba implícitamente previsto en los planteamientos del gobierno, como el propio presidente Allende lo manifestó públicamente el 29 de junio de 1973. Pero ello requería previamente la preparación de la ciudadanía a nuevas formas de combate, distintas de las simplemente electorales.

En quinto lugar, la sola existencia de una masa de trabajadores dotada de semejante capacidad orgánica para hacer frente a eventuales tentativas insurreccionales sería, ante todo, un factor de disuasión de sediciones y sabotajes. Pero si ello no era suficiente, las nuevas formas de organización debían proporcionar a los partidos populares y al gobierno un margen amplio de opciones para atender las situaciones distintas que pudieran presentarse. Dentro de estas opciones, en caso extremo, estaba comprendido el apoyo de los trabajadores armados a las unidades militares profesionales que enfrentarían una insurrección antigubernamental. Pero entre la insurrección civil y la militar caben distintos grados y combinaciones intermedias, que los trabajadores debían poder enfrentar en colaboración con las instituciones de que disponía el gobierno, y para lo que no siempre es absolutamente preciso que de antemano los ciudadanos cuenten con armamento. La distribución de armas a los trabajadores en 1970 era concebida como posible sólo en el supuesto de que la subversión contrarrevolucionaria alcanzara a quebrar todo el marco general en que se desarrollaba la vida social y política del país, y que, efectivamente, sólo se presentó más de dos años después, en 1973. La creación y adiestramiento de cualquier fuerza organizada precede a su uso. En 1973, los trabajadores no contaban con ellas. Y cuando tardíamente empezó a quererse cubrir semejante flanco, las circunstancias eran tales que contribuyeron a facilitar la movilización antipopular dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Estos son, en síntesis, los planteamientos centrales que informaban el discurso del presidente Allende de 29 de febrero de 1971. En las semanas que siguieron, fueron llevados de modo distinto a la mesa de discusiones con la dirección de los partidos obreros. Pero no fueron compartidos. Quedaba así abierto un flanco en la capacidad de defensa y de maniobra del movimiento popular que se demostró decisivo cuando la derecha ingresó en la fase propiamente insurreccional, es decir, a lo

largo de 1972. Aún el 5 de junio de 1973, entre las recomendaciones de Allende al comité político de la UP se puede leer: "1. Frente de masas: organización popular para resistir el enfrentamiento a partir de tres-cuatro meses".¹⁷

Todavía a estas alturas no se había hecho semejante innovación de modo estructurado, planificado y jerarquizado. Y nos encontrábamos ya en junio, precisamente el mes que Estados Unidos y la dirección local de la insurrección tenían previsto para el asalto final. Pero tampoco se hizo después del 29 de junio, cuando los blindados rodearon y dispararon por primera vez contra el palacio de la Moneda. A pesar de que en la base obrera brotan espontáneamente intentos de organizarse para la avalancha contrarrevolucionaria que se avecina, los partidos obreros no cuentan con formas de organización idóneas para la coyuntura que estaba atravesando el país. Cuando el 11 de septiembre de 1973 se resuelve por último la suerte de la insurrección burguesa, no es tanto las armas lo que faltaba a los trabajadores sino algo mucho más importante: la organización, estructuras y dirección para semejante eventualidad. A lo largo de todo el país, como en la misma capital, millones de trabajadores se encontraron sin ninguna directiva, sin instrucciones, sin comunicaciones, sin capacidad orgánica para actuar, incluso aquellos que tenían armas, o que se las hubieran podido procurar si hubieran sabido qué hacer y en coordinación con quién.

Y en estas circunstancias, ¡oh cruel contraste! a lo largo de 1971 y 1972 toda la prensa de izquierda se entretuvo en denunciar que la derecha se estaba organizando paramilitarmente, que sus zonas urbanas residenciales estaban preparadas para acciones civiles centralmente dirigidas y coordinadas, que hacían ejercicios de alerta y de adecuación psicológica, etc. Y durante más de dos años la izquierda conoció y describió públicamente, con todo detalle y amplia información, las organizaciones civiles preparatorias de la insurrección burguesa. Pero los barrios obreros, las fábricas, los estados mayores de los par-

17. Esta es la primera recomendación del "Plan de acción en siete puntos" que Allende expuso, el 5 de junio de 1973, ante el comité político de la UP. Después del golpe de estado, la Junta Militar hizo mención de aquel plan de emergencia en el libelo *Libro blanco* del cambio de gobierno en Chile (Santiago, 1973, p. 94), reproduciendo unas notas manuscritas mías sobre el particular.

tidos obreros, no organizaron nada equivalente... *en defensa de* las libertades democráticas, del gobierno legalmente constituido y, por último, de su propia razón de ser, de los intereses de la clase obrera.

El movimiento popular chileno, que ni antes ni después de 1970 podía seguir la vía insurreccional porque llegó al gobierno por la vía institucional, no supo resolver el complejo problema teórico y práctico de elaborar una táctica *antiinsurreccional* en defensa de su línea estratégica. Ésta es una de las contribuciones más relevantes del proceso revolucionario chileno para el futuro del movimiento obrero internacional.

JUNIO DE 1973: ES AISLADO EL SECTOR DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

El primer antecedente en el tiempo que da Pinochet de la evolución del complot es descrito en los términos siguientes:

El 13 de abril de 1972, en el Estado Mayor del Ejército hemos analizado las posibilidades, y ese día hemos llegado a la conclusión de que el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no tenía una solución constitucional [...] ¹⁸

En junio de 1972, Allende toma la iniciativa de proponer al PDC un acuerdo legislativo. Las negociaciones conducen a varios proyectos de acuerdo, cuya culminación debía significar la cooperación entre las dos fuerzas político-sociales dominantes del país, reduciendo de nuevo al aislamiento a la derecha conservadora que, por esas fechas, promovía la federación de la DC y del PN. Pero la resolución de la directiva nacional del PDC de convenir un acuerdo legislativo con el gobierno ya hemos visto que fue sabotada en el último instante por el sector freísta, quien impuso su desconocimiento. Esto permitió, días después, el nacimiento de la Confederación Democrática (CODE), que agrupaba por primera vez a la totalidad de los partidos de oposición. La tripolarización electoral de 1970-1971 estaba reemplazada por la bipolarización UP-CODE, en las mismas fechas en que el Comité Cuarenta de Estados Unidos

18. Entrevista de Pinochet con un periodista de Reuter, en *Los Angeles Times* (29 diciembre 1973).

aprobaba una prima de 46.500 dólares para consolidar el actuar común de los partidos de oposición al gobierno (16 de junio de 1972).¹⁹

Es entonces, en el mes siguiente al fracaso de las negociaciones entre la DC y la UP, cuando por primera vez el sector conservador del ejército entrevió la *posibilidad* de intervenir políticamente. En efecto, a fines de julio y comienzos de agosto de 1972 se produce otra crisis política seria, en la que es destituido por el Parlamento el ministro del Interior que reemplazó a José Tohá. Casi de forma simultánea, como animada por el mismo impulso, la máquina militar avanza un nuevo paso:

Mire —dijo Pinochet—, aquí hay un memorándum de agosto de 1972. Aquí hay otro fechado en julio, que ya planteaba la posibilidad de tomar el control de la nación. En 1972 nosotros hemos empezado a preparar unidades para enfrentar a grupos extremistas alrededor de la capital.²⁰

La dirección de la insurrección coordina los frentes civiles y militares. Estaba planificado hacer coincidir en septiembre de 1972 una serie de acciones conjuntas, que fueron de nuevo frustradas por el sector militar constitucionalista. Descubierta el complot, los generales Canales e Hiriart y otros oficiales fueron llamados a retiro en la segunda mitad del mismo mes de septiembre. Ello obligó al sector civil a retrasar en un mes su participación en el plan. Y a Estados Unidos a reforzar a sus agentes en Chile con una nueva subvención de 24.000 dólares a una organización empresarial chilena aprobada el 21 de septiembre por el Comité Cuarenta de Washington.²¹

Cuando las Fuerzas Armadas asumen directamente la totalidad del poder en septiembre de 1973, lo hacen como *organización*, invocando el "interés nacional". No pueden hacerlo detrás de una personalidad individual, porque el *caudillismo* es un fenómeno anómalo en la orgánica e institucionalizada sociedad chilena. Tampoco pueden hacerlo por razones corporativas. No osan darlas, contrariamente a lo que hizo el general Viaux contra Frei en 1969, porque el gobierno UP ha prestado aten-

19. *Covert action in Chile...*, p. 60.

20. Entrevista de Pinochet con un periodista de Reuter, en *Los Angeles Times* (29 diciembre 1973).

21. *Covert action in Chile...*, p. 60.

ción especial a sus necesidades como cuerpo profesional. Y, en efecto, en las proclamas que siguieron al golpe están ausentes las referencias a una dimensión tan común en la historia de las intervenciones militares.

Cuando el aparato del estado entra en crisis en medio de la lucha de los dos bloques sociales por conservar su hegemonía o conquistarla —transcurso de 1972—, tanto un bloque como el otro necesitan de apoyo militar para prevalecer. Pero así como mientras el estado conserva su solidez este respaldo militar actúa de acuerdo con su función institucional, en ocasiones de modo latente, en las coyunturas de crisis los aparatos armados se manifiestan explícitamente —fase propiamente *armada* de la lucha política—. En octubre de 1972 logra la oposición llevar a cabo la primera insurrección civil general de los sectores conservadores. Durante tres semanas se aplicó contra el gobierno de la UP el modelo de acción de la “huelga nacional”, apoyada en las organizaciones representativas de los empresarios —grandes, medianos y pequeños— y de los trabajadores independientes o asalariados de la mediana y pequeña burguesía —médicos, ingenieros, abogados, etc.—. En ese momento, mientras el Partido Nacional pidió formal y públicamente a la DC que apoyara con sus votos la destitución del presidente por el Congreso, las organizaciones corporativas que dirigían la huelga solicitaron a las Fuerzas Armadas el derrocamiento del gobierno, mientras el Comité Cuarenta de EE.UU. inyectaba 1.427.666 dólares adicionales en los partidos políticos y asociaciones empresariales y profesionales de oposición —el 26 de octubre—.²² No obstante lo cual, el sector progresista del PDC se negó a respaldar la quiebra del aparato del estado y logró en aquella oportunidad sustraer a la DC del engranaje del golpe militar.

La respuesta de la UP a la insurrección fue la movilización general de los trabajadores para mantener las actividades del país, al tiempo que Allende ordenaba a las instituciones armadas del estado el mantenimiento del orden público a lo largo de todo el territorio nacional, declarado en “estado de emergencia” con excepción de las provincias norteñas. Tres semanas después, el apoyo militar y obrero al gobierno quedó simboliza-

22. *Ibid.*, p. 30. Un monto de 100.000 dólares fueron entregados a la Sociedad de Fomento Fabril, al Frente Nacional del Área Privada y a la asociación de medianos y pequeños empresarios que dirigían la huelga.

do en su incorporación al gabinete, donde las Fuerzas Armadas asumieron tres carteras ministeriales (Interior, Transportes y Minería), y la CUT dos (Trabajo y Agricultura). Consolidada de esta forma la autoridad del estado, la huelga general cesó de inmediato.²³

En una coyuntura de crisis nacional —o de guerra—, el mayor motivo de preocupación para unas Fuerzas Armadas profesionales radica en evaluar el sentido de su acción rectificadora, su duración, el desenlace buscado y la importancia política y militar de éste. Necesitan identificar y calibrar cuál es la principal amenaza que pesa sobre su concepción de “seguridad” y la amplitud de su actuación preventiva. En octubre de 1972, la identificación del gobierno UP con las instituciones democráticas y legales del estado dentro del cual se insertaban, objetiva y subjetivamente, los cuerpos armados, y su respeto a los valores dominantes en el país, abocaron a la resistencia capitalista a impulsar la “aventura”, a tener que destruir todo el sistema político en sus fundamentos materiales e ideológicos para acabar con el gobierno popular. En semejantes circunstancias, sin contar con un proyecto político alternativo idóneo a su disposición, el grueso del aparato militar aceptó cumplir con su función de respaldo del estado, personalizado en su institución central, el presidente de la república.

Es así como en la primera manifestación de crisis general contrarrevolucionaria, la correlación de fuerzas entre los movimientos políticos organizados y la existente en el seno del aparato militar no permite a los sectores conservadores imponer el desconocimiento del gobierno.

23. El 27 de marzo de 1973, al poner término al gabinete UP-CUT-Fuerzas Armadas, Allende declaraba: “Dentro de las atribuciones que la Carta Fundamental me acuerda, resolví organizar un gabinete en que estuvieran representadas las Fuerzas Armadas como institución, los trabajadores y los partidos populares. Así nació este gabinete que hoy termina sus funciones. Al nominarlo [...] traté las tareas que debía cumplir. Primero, hacer respetar las normas legales y la autoridad, asegurar el orden económico, lo cual significaba poner término al paro. Asegurar el orden público, amenazado por la subversión. Garantizar el desarrollo democrático en todas las actividades nacionales y, básicamente, asegurar que se realizarían las elecciones (de marzo de 1973) con la más absoluta prescindencia del gobierno. Además, impusimos como tarea a este gabinete asegurar la continuidad del proceso de transformaciones revolucionarias del país, de acuerdo con el proyecto político del gobierno, en democracia, pluralismo y libertad”.

Pero, a partir de ese momento, el país aparece claramente polarizado en dos bloques sociales cuyas contradicciones son crecientemente antagónicas y excluyentes, y reconocer o mantener la autoridad del gobierno conlleva una identificación de *clase e ideológica* muy precisa: respaldo al proyecto de sociedad de la UP (socialista), frente al de la oposición (capitalista). En semejante contexto, el sector militantemente antisocialista dentro de las Fuerzas Armadas se rehúsa a dar un apoyo explícito (político) al gobierno, y estimula, por el contrario, la crisis del estado y su desintegración. Para alcanzar este propósito, una organización secreta lleva adelante una campaña psicológica en torno de la idea según la cual los militares deberían concentrarse en sus funciones específicamente profesionales y, como instituciones presuntamente "apolíticas", sostiene que las Fuerzas Armadas no deben participar en el gabinete.

No había transcurrido apenas un mes después que el peso del sector "constitucionalista" había llevado al conjunto de las Fuerzas Armadas a respaldar la autoridad y funciones del estado, cuando un grupo secreto de cinco generales del Ejército, cinco de la Aviación y otros cinco de la Marina comenzaron a prepararse, a fines de 1972, para la eventualidad de una sublevación militar contra Allende. Pero, agrega uno de sus componentes: "si la gente piensa que fue cosa fácil tomar la decisión de actuar, están en un grave error. Fue algo extremadamente difícil, extremadamente difícil, nos costó mucho, créame".²⁴

Ello ocurría mientras Allende se encontraba en visita oficial a las Naciones Unidas y la Unión Soviética, y la vicepresidencia de la nación se hallaba confiada precisamente al general Prats, comandante en jefe del Ejército y representante del sector militar partidario de respaldar a las instituciones político-representativas. Así se manifestaba en aquel momento la división en el interior del aparato armado.

En enero de 1973, se produce la primera exteriorización del trabajo conspirativo subterráneo. El almirante Huerta presenta su renuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, la iniciativa no tiene los efectos buscados. Para el 4 de marzo deben tener lugar las elecciones parlamentarias, en las

24. Declaraciones del general Arellano Starck, *Miami Herald* (18 febrero 1974).

que la oposición confía lograr los 2/3 del Senado necesarios para destituir al presidente de la república. Era la solución menos costosa para la Democracia Cristiana. Incluso el grueso de los conspiradores prefirió esperar, "todos nosotros preferíamos una salida democrática".²⁵ Y el almirante dimisionario fue reemplazado por otro almirante. Por su parte, en Washington, el Comité Cuarenta aprobaba el 12 de febrero de 1973 una nueva subvención de 200.000 dólares para los partidos conservadores de oposición.²⁶

Pero el 4 de marzo de 1973 la UP obtiene el 44 por ciento de los sufragios, ante la sorpresa de la oposición que apenas le daba un 30 por ciento. Su error de cálculo había sido grande de nuevo, la esperanza del golpe parlamentario se esfumaba. La UP aumenta su representación en el Senado y el *impeachment* contra el presidente de la república se hace imposible. El sistema político representativo y la legalidad se confirmaba que habían dejado de ser instrumentos de protección de los intereses capitalistas.

La campaña dentro de las Fuerzas Armadas en torno de su profesionalismo y apoliticismo se incrementa a partir del 4 de marzo de 1973. Para Allende, mantener su representación en el gabinete encerraba el peligro de favorecer la acción disolvente de su sector conservador en favor de quebrar la disciplina interna y dejar aislado al sector constitucionalista. Ante esta perspectiva, después de varios días de reflexión, tras sopesar los pros y los contras y cambiar varias veces de parecer, Allende prefiere que el general Prats se libere del Ministerio del Interior y reasuma la comandancia en jefe del Ejército, en cuya función le había estado subrogando Augusto Pinochet durante los cuatro meses anteriores. La reincorporación de Prats al mando efectivo del ejército fue una decisión destinada a lograr los siguientes objetivos:

a) Mantener la unidad interna del aparato militar en torno del Alto Mando constitucionalista, privando a los oficiales conservadores de la posibilidad de atacarlo so pretexto de que había comprometido a las Fuerzas Armadas en funciones políticas contingentes.

25. *Ibid.*

26. *Covert action in Chile...*, p. 60.

b) Fortalecer el sector militar resueltamente partidario de no negar su apoyo al gobierno, reponiendo al frente del Ejército a su principal exponente.

c) Hacer del general Prats, que acababa de desempeñar las funciones de ministro del Interior y vicepresidente de la república, el hombre políticamente fuerte dentro de las Fuerzas Armadas.

d) Aumentar la unidad interna de la UP, uno de cuyos sectores se oponía a la permanencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

e) Sustentar al gobierno popular en sus propias fuerzas sociales.

El 22 de marzo, Allende resuelve formar un gabinete exclusivamente civil. Sin que nosotros nos apercibiéramos en ese momento del hecho, esta decisión comportaba además que la conspiración militar perdía el puesto clave de la comandancia en jefe del Ejército. Aunque Pinochet asumía la jefatura del Estado Mayor, el sector putschista tuvo que proceder en lo sucesivo con renovadas dificultades y en un contorno en que se hallaba en minoría:

[...] el 20 de marzo se firmó un documento donde llegábamos a la conclusión de que era imposible una solución constitucional. Todo se mantuvo en secreto. Porque si no, no estaríamos aquí. Fuimos ocho los oficiales que planificamos y obedecimos la planificación.²⁷

De los veinticinco generales del Ejército, cinco complotaban en secreto.

Para hacer posible una insurrección, hay que inmovilizar o incorporar previamente al aparato coercitivo del estado. La crisis general del sistema político puede culminar en la medida que el aparato coercitivo del estado no respalda al gobierno. En marzo de 1973, los oficiales conspiradores no tienen la fuerza física ni disponen de un proyecto político bastante convincente para imponer la toma del poder por el conjunto del aparato militar. Pero aprovechan la componente sociopolítica en él dominante para dejar de apoyar activamente al gobierno,

27. Declaración de A. Pinochet a *Los Angeles Times* (29 diciembre 1973).

abandonándolo a su sola fuerza de clase, la del bloque popular, en medio de la insurrección de la burguesía.

Después de las elecciones legislativas de marzo de 1973, la movilización política dentro de las Fuerzas Armadas se incrementa. En mayo-junio tiene lugar una vasta campaña preparatoria de un nuevo golpe militar, y que logra frustrar el intento de Allende de incorporar a las Fuerzas Armadas a la realización de un programa de medidas socioeconómicas. Sin un respaldo militar explícito, el gobierno no tiene ya bastante fuerza en ese período para imponer su autoridad frente a la subversión que se manifiesta en todos los terrenos (económico, social, político, terrorismo, etc.).

El sector derechista de las Fuerzas Armadas adopta el 25 de mayo la decisión de dar un golpe de estado²⁸ precisamente en los días que Prats se encuentra en Europa y Pinochet le reemplaza en la comandancia en jefe del Ejército, y en el momento en que el conflicto intraestatal ha llegado a su punto culminante: el 30 de mayo el Tribunal Constitucional se declara incompetente para arbitrar en el enfrentamiento Congreso-ejecutivo sobre las empresas nacionalizadas. Dos semanas antes, por otro lado, la dirección nacional del PDC favorable al entendimiento con la UP, ha sido derrotada y reemplazada por la intransigente de Aylwin, y los gremios conservadores están organizando un ensayo de huelga general. A fines de mayo el transporte privado en Santiago está semiparalizado durante varios días por una huelga. Y aunque sin éxito, la oposición intenta que entre en huelga también el transporte por carretera.

No deja de ser ilustrador recordar que cuando el 26 de mayo el ministro de Defensa y del Interior, José Tohá, solicita protección militar para los autobuses que no siguen la orden de paro y continúan prestando servicio, los generales Pinochet y Brady²⁹ alegan que ello sería muy peligroso, ya que los soldados podrían verse obligados a disparar si los huelguistas los provocaban. El gobierno no deseaba el derramamiento de san-

28. Ibid.

29. El 26 de mayo de 1973 Pinochet reemplazaba provisionalmente a Prats al frente del Ejército, ya que éste se hallaba en viaje oficial por Europa. Brady era el interventor responsabilizado de resolver el conflicto del transporte. En esa misma fecha, también Allende se encontraba en el extranjero, en Buenos Aires, asistiendo a la toma de posesión de la presidencia de la república argentina por el peronista H. Cámpora.

gre, Pinochet lo sabía y simulando compartir el mismo sentimiento invocaba este argumento para evitar que la disuasión militar entorpeciera los preparativos del golpe.

Es en el curso de la última semana del mismo mes de mayo cuando una indiscreción del abogado Miranda Carrington, de Patria y Libertad, nos hace saber que estaba siendo organizado un golpe de estado para el 27 de junio. Apoyado especialmente por la I, III, y IV Divisiones del Ejército, es decir, desde las provincias, el plan preveía presionar sobre la II División —la de Santiago, considerada la mejor controlada por la oficialidad constitucionalista—, y obligarla a plegarse al pronunciamiento militar. Sectores importantes de la Marina y la Aviación tenían comprometida su adhesión al levantamiento,³⁰ así como otro dentro de Carabineros.³¹ Semejante correlación de fuerzas debía permitir la fácil eliminación de los oficiales leales al gobierno, según Miranda Carrington y la dirección del complot.

Pero el plan previsto para el 27 de junio volvió a fracasar en la medida que el sector democrático del ejército contó en esos días con un comandante en jefe dispuesto a hacer respetar la disciplina. Al tener conocimiento el general Prats de ciertas informaciones proporcionadas por el Servicio de Inteligencia Militar, procedió a arrestar los días 25 y 26 a varios oficiales, lo que desarticuló algunas ramificaciones del complot y confundió al resto. No obstante, todavía el viernes 29 el Regimiento de Blindados número dos de Santiago se insubordina y ataca el palacio de la Moneda. Carlos Prats abandona su oficina y se pone al frente de las tropas que avanzan sobre el centro de la capital, obteniendo personalmente la rendición de los insurrectos.

El nivel de perturbación de los mecanismos sociopolíticos de la sociedad es suficientemente alto para que la *organización* corporativa que son las Fuerzas Armadas perciba que los dos bloques sociales en pugna necesitan, objetiva y subjetivamente,

30. Ello ha sido reconocido posteriormente. Véanse, entre otras, las declaraciones de los generales Arellano (Ejército) y Stuardo (Aviación) reproducidas por *Le Monde* (15 marzo 1974).

31. Al frente de Carabineros se encontraba, el 27 de junio, el general Viveros, reemplazando al general Sepúlveda Galindo por encontrarse en viaje oficial fuera del país. La actitud de Viveros fue tan vacilante que Allende lo pasó a retiro en los primeros días de julio. En diciembre de 1975, la Junta Militar lo nombró embajador en Egipto.

fuerza militar, y que la están buscando. Caben dos posibilidades en este momento: o encuentran este respaldo militar dentro de las instituciones profesionales del estado, o lo buscan fuera de ellas. La burguesía intenta el primer camino a través de sus múltiples conexiones de clase e ideológicas con la oficialidad. Los trabajadores, a través del camino que tienen legalmente abierto: el gobierno. Pero esta situación dura sólo hasta el 29 de junio de 1973. El putsch de ese día, aunque abortado, despierta en las masas obreras un reflejo de autodefensa. De modo instintivo se produce un fenómeno colectivo, que no requiere, ni espera, las directrices de los partidos políticos o del gobierno. Altamente movilizados, los trabajadores perciben que sus conquistas sociales y el camino de futuro que se han abierto, se encuentran gravemente amenazados por una contrarrevolución que han visto organizarse día tras día en todos los frentes de la vida civil. Y que por primera vez acaba de sacar los tanques a la calle y ha matado a pacíficos ciudadanos. A partir de ese instante, algunos sectores de la clase obrera buscan crear una fuerza militar propia en defensa de sus intereses de clase.

En este contexto, el sentimiento corporativo de las Fuerzas Armadas se convierte por primera vez en una motivación aglutinante para la intervención militar. La *organización* tradicional se siente amenazada en su existencia presente y en su futuro. La lucha de clases se da también dentro de los cuarteles, y su desarrollo puede conducir a la división y enfrentamiento interno de las instituciones armadas. Por otra parte, aun si esto no llega a producirse, aparece como evidente que los trabajadores al cabo de un cierto tiempo pueden haberse organizado militarmente, con todas las consecuencias que ello conlleva para el equilibrio interno de las Fuerzas Armadas profesionales y la derrota de los conspiradores al encontrarse con una resistencia armada. En cualquiera de las hipótesis, el riesgo de guerra civil es real y percibido por todos. Está en el ambiente, en la calle, en las fábricas, en la prensa, etc.

Unas Fuerzas Armadas que se mantienen unidas en estas circunstancias, sólo tienen dos caminos para evitar el enfrentamiento armado y mantener sus instituciones corporativas:

- a) Sostener al jefe del estado en sus esfuerzos por preservar la paz civil y las instituciones democráticas.
- b) Asumir directamente el poder total.

Sólo mientras Allende logró identificar con su gobierno y su persona la posibilidad de paz civil y mantenimiento de las instituciones políticas del estado, el aparato armado profesional le respaldó, reduciendo a la impotencia a los núcleos partidarios de su derrocamiento. Pero en 1973, enfrentrar las contradicciones socioeconómicas alineándose detrás de Allende significaba para las Fuerzas Armadas contribuir a instaurar una forma de estado popular, que consolidara la hegemonía política de la clase obrera. Como las características sociopolíticas dominantes entre los militares lo hacían imposible, su centro de gravedad resuelve tomar la *iniciativa* de una acción militar protagonizada por ellos mismos —fines de mayo—.

Sin embargo, los propios putschistas estimaban que el poder orgánico de masas de la UP era considerablemente alto, y la legitimidad institucional del gobierno de Allende tan importante, que la insurrección del conjunto del aparato militar sólo pueden lograrla en la medida en que se reúnan dos factores opuestos: *a)* un respaldo social de masas a la intervención militar, y *b)* un deterioro manifiesto de la autoridad del gobierno sobre el conjunto de la sociedad y de su legitimidad política para exigir obediencia a los militares.

La insurrección civil que se inicia en los últimos días de julio de 1973, y que arrastra a lo largo de agosto al conjunto de las fuerzas sociales conservadoras, será el fenómeno decisivo. Allende nombra al general Prats ministro de Defensa Nacional. El gobierno, ante lo grave de la situación, necesita que las Fuerzas Armadas actúen como instrumento de orden y autoridad. No lo logra. La situación sociopolítica en que el país se encuentra se convierte en la principal aliada de quienes desde hace años intentan subvertir la función militar. Una gran parte del aparato armado profesional se niega esta vez a reprimir a la insurrección de su propia clase social —primera mitad de agosto—. La incorporación de los comandantes en jefe al gobierno —8 de agosto—, plenamente conforme con las facultades legales que le son reconocidas al presidente en los textos vigentes, es denunciada por la oposición como un intento de “politizar” a instituciones presentadas como “apolíticas”. La oposición se apoya en una apariencia formal para lograr lo substancial: que las Fuerzas Armadas aparezcan siendo utilizadas por el gobierno UP como fuerza de policía.

Pero mientras a los ojos de los capitalistas esta función está legitimada cuando se trata de imponer el “orden” sobre los trabajadores, presentando al ejército como institución pacificadora al servicio del régimen legal, la misma actuación es condenada cuando opera en contra de la burguesía.

En julio y agosto de 1973, la agitación en el seno de la oficialidad sube de nivel. Es algo que trasciende fuera de los cuarteles. El gobierno conoce a algunas de las cabezas del movimiento y pretende hacer uso de sus facultades legales para imponerse sobre la sedición. Cuando intenta llamar a retiro a los generales y almirantes implicados directamente —segunda mitad de agosto—, el espíritu de cuerpo de la institución ya no tolera la eliminación de aquellos miembros que representan el sentir, si no la voluntad, de la mayoría dentro de las Fuerzas Armadas.

El 20 de agosto, en Washington, el Comité Cuarenta del gobierno norteamericano aprueba la entrega clandestina de un millón de dólares a los partidos y organizaciones privadas chilenas decididas a derrocar al gobierno constitucional de su propio país.³²

El 22 de agosto, la Democracia Cristiana hace aprobar en la Cámara de Diputados una resolución ilegal declarando la “ilegitimidad” del gobierno. Una institución política del estado desconoce a la otra. El desenlace es cuestión de días o de horas. Ese mismo día 22, el general Prats es empujado por la mayoría del Alto Mando a dimitir de sus cargos de ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército. El sector militar democrático ha quedado en minoría y es derrotado. Pinochet asume la comandancia en jefe.

La mayoría de los mandos sólo aceptaba sumarse a un golpe de estado “obedeciendo” órdenes de la superioridad, no sólo porque ello les garantizaba seguridad e impunidad, sino también porque proporcionaba la indispensable “legitimidad” a la insurrección. El alto nivel de burocratización de la oficialidad exigía que el Alto Mando la dirigiera. De ahí la importancia esencial que para los conspiradores tenía eliminar a Carlos Prats de la comandancia en jefe. Sólo así el engranaje de la disciplina y jerarquía podía comenzar a jugar en contra del

32. *Covert action in Chile...*, p. 61.

gobierno. Por otro lado, "obedecer órdenes" del comandante en jefe implicaba, también, que las diferencias políticas en el seno de las Fuerzas Armadas sobre el sentido y futuro de su intervención estaban aparentemente resueltas.

Hasta la tercera semana de agosto de 1973, el Alto Mando del Ejército se hallaba dividido en torno a tres corrientes principales. La primera, agrupada alrededor del general Prats, exigía el respeto de la institucionalidad democrática y, por consiguiente, el acatamiento a la autoridad política del presidente de la república. La dimisión de Prats, seguida de la del general Sepúlveda —jefe de la II División— y de la del general Pickering —jefe de los institutos militares de Santiago—, entre el 22 y el 25 de agosto, privó a este sector del poder real. En él se alineaban, además, los generales Urbina —inspector general del Ejército—, González, Brady y Pinochet.

Un segundo grupo de generales, minoritario hasta ese entonces, de características ideológicas próximas a la extrema derecha, exigía el derrocamiento violento del gobierno. En él se encontraban los generales Baeza y Palacios, del Ejército, Leigh, de la Aviación, y varios almirantes.

Un tercer grupo, mayoritario, deseaba obligar a Allende a entregar el poder real a las Fuerzas Armadas. Se manejaban, al respecto, dos procedimientos principales: por un lado se presionaba para que Allende formara un gabinete íntegramente militar —es decir, alejar del poder a la UP—, que cumpliera un papel equivalente al del presidente Bordaberry en Uruguay, aceptando legitimar un golpe militar a cambio de continuar figurando como presidente. Por otro lado, se consideraba manifestar a Allende que las Fuerzas Armadas dejaban de obedecerle y que no podía continuar al frente del país, debiendo dimitir para dejar franco el paso a un gobierno de reemplazo, representativo de la oposición. Esta última era la operación en que la Democracia Cristiana tenía depositadas sus esperanzas. Tras el derrocamiento del gobierno UP, invocado por la derecha DC "en nombre y defensa de la Constitución", calculaban que la dirección del estado sería confiada —siempre "según dispone la Constitución"— al presidente del Senado, don Eduardo Frei. No sospechaba tan solícito alguacil que iba a terminar alguacilado...

Sólo en los últimos días de agosto y comienzos de septiem-

bre se produce el encuentro y coordinación entre los tres sectores, al poner Pinochet al servicio de la insurrección la autoridad de la comandancia en jefe del Ejército, que Allende le había confiado en tanto que miembro del sector "constitucionalista". Los cuerpos armados profesionales son puestos en marcha. Las disposiciones que esta vez recibirán desde su cabeza jerárquica dejarán estupefactos a muchos oficiales, y paralizados a otros. Pero la máquina bélica, disciplinada, obedece y arrasa con las instituciones civiles, asumiendo todo el poder. Cualquier manifestación de resistencia es enfrentada según las normas de guerra. Las fuerzas sociales conservadoras implantan su dictadura, desembarazadas de las limitaciones de un estado de derecho y de un sistema político que había dejado de servirles.

VIII LAS TÁCTICAS DIRECTA E INDIRECTA EN LA LUCHA POR EL PODER DEL ESTADO

Un gobierno popular en un estado de derecho requiere proceder de modo tal que:

- a) evite la crisis del aparato del estado, en la medida que perjudica al propio gobierno;
- b) impida la obstrucción de los mecanismos económicos de producción, distribución y consumo;
- c) esté en condiciones de disuadir y sancionar las manifestaciones de violencia, desde el sabotaje al terrorismo.

Si los dos primeros supuestos se dan, la violencia contrarrevolucionaria se encuentra considerablemente frenada, al no disponer de un respaldo de masas. En este contexto, el aparato coercitivo del estado puede responder al gobierno de una u otra forma, como ocurrió a lo largo de 1971 en Chile. Pero el movimiento popular no puede garantizar de antemano que estará siempre en condiciones de disuadir a sus adversarios de recurrir a la violencia. Por ello necesita contar con los medios necesarios para un eventual cambio de situación. De otro modo, está a merced de la iniciativa estratégica de las fuerzas antisocialistas.

Entre 1970 y 1973, ante cada embestida económica, social o política de la derecha o Estados Unidos, el gobierno, la Unidad Popular y los trabajadores respondieron con una intensidad variable. Una limitación mayor para reaccionar la constituía el aparato coercitivo del estado, cuyo respaldo al gobierno UP hemos visto bajo qué condiciones tenía lugar y que, por otro lado, no toleraba ser reemplazado por milicias populares

en sus funciones específicas de "fuerzas de orden". Pero cuando la contrarrevolución alcanza un nivel militar, todo el sistema orgánico de los trabajadores se hunde si no cuenta con un aparato armado en condiciones de defenderlo.

Cuando los dos bloques sociales antagónicos se encuentran en una coyuntura de equilibrio mutuo, sin que ninguno de ambos pueda imponer su hegemonía sobre el otro, las circunstancias son propicias a la parálisis del estado y a la perturbación de los mecanismos reguladores del sistema económico. Síndrome que favorece directamente la resolución *militar* del equilibrio, en favor de uno u otro de los bloques en pugna.

En tales circunstancias, tanto del lado burgués como del proletario se impone la intervención militar. Es la situación de Chile después de marzo de 1973. Pero la resolución armada del conflicto social no podía ser "bonapartista", ni para los trabajadores ni para la burguesía. Del lado popular, una personalidad como la del general Prats, por ejemplo, hubiera podido encabezar una acción militar, pero tendría que haber estado necesariamente subordinada al movimiento popular, en virtud tanto de la sólida organización y conciencia propia de éste como de la función central de Allende, punto de convergencia del respaldo institucional del ejército al gobierno y de la unidad de las fuerzas populares.

Como el mismo fenómeno de clase social organizada se daba del lado de la burguesía, el golpe militar anti-UP necesariamente tenía que ser absorbido por la burguesía para implantar su propia dictadura armada, con una base social y un programa semejantes a los de la candidatura Alessandri durante las elecciones presidenciales de 1970. Aunque lo quisiera, la Junta Militar de Pinochet no podía surgir bajo la apariencia formal de estar *au-dessus de la mêlée* en relación con el antagonismo clase obrera-burguesía, y gran capital *versus* clase obrera. La polarización existente en 1973 en el país, y la amplitud del bloque de alianzas sociales conformado alrededor de la clase obrera dentro de la Unidad Popular, imposibilitaba cualquier variante de bonapartismo.

La táctica y estrategia dominantes en las formas de lucha social dependen, en último extremo, más del movimiento de masas que de los Estados Mayores. Es decir, del carácter de los antagonismos sociales, del nivel y naturaleza de las

contradicciones entre las clases sociales, del grado de conciencia de sus intereses específicos, de las modalidades organizativas y de los recursos técnicos con que cuentan.

En el terreno específicamente militar, la táctica insurreccional es eminentemente ofensiva, busca ocupar el terreno del adversario y utiliza los recursos de la sorpresa que proporciona el disponer de la iniciativa. Mientras que la táctica antiinsurreccional es en primer lugar defensiva, procura atraer al adversario al propio terreno y requiere un amplio apoyo popular para mantener la defensa en múltiples frentes.

La táctica de la UP se hallaba determinada por la imposibilidad de enfrentar directamente al adversario en el terreno militar, a corto plazo. Necesitaba neutralizar el aparato armado del estado y el del sistema interamericano, mientras subordinaba política y económicamente a la burguesía nacional. El punto crítico de este enfoque lo constituía, desde el ángulo social, la pequeña burguesía, dominante dentro de las Fuerzas Armadas. Se debía evitar el conflicto con aquélla, para privar de apoyo de masas a la intervención armada contra el bloque social anti-capitalista.

En la vía insurreccional, la clase obrera impone su hegemonía sobre la pequeña burguesía sin requerir su libre aceptación, y si ésta se le enfrenta, ve negado el derecho de hacer oposición política. En la vía político-institucional la clase obrera necesita la alianza libremente consentida e intencionada de la pequeña burguesía, para lo que necesita reconocerle derechos políticos en general e, incluso, el de ser oposición.

Pero una vez roto el marco en que reposa la táctica político-institucional, la incorporación e incluso la continuidad de la neutralización de la pequeña burguesía conservadora resulta cada vez más incompatible con el progreso del proceso revolucionario y la consolidación del poder de los trabajadores.

Es conocida la proposición según la cual sólo se logra la destrucción de las fuerzas militares del adversario mediante el enfrentamiento. Sin embargo, la realización de este efecto admite dos modos principales:

a) Mediante las consecuencias mismas del enfrentamiento efectivamente realizado. Instrumentar esta estrategia requiere desarrollar una táctica dirigida especialmente a preparar el enfrentamiento militar, para tomar la iniciativa de él y precipitar-

lo. Era la línea defendida por el sector predominante del Partido Socialista y del MAPU en el seno de la UP, así como por el MIR fuera de ésta.

b) Mediante el enfrentamiento propuesto y no realizado. La estrategia indirecta de Allende reposaba en las condiciones necesarias para neutralizar los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas y postergar el enfrentamiento, mientras la UP acumulaba los elementos de distinta naturaleza que le permitieran tener hegemonía también en el terreno militar. De modo que la burguesía se viera permanentemente obligada a rechazar el enfrentamiento armado o a aventurarse a perderlo todo, incluidos sus derechos políticos, si lo provocaba. Efecto militar éste que requiere de medios indirectos, especialmente el aislamiento social y el desarme económico-político de la burguesía. El predominio popular en este terreno debe disuadir a la burguesía del conflicto armado o condenarla a la derrota si lo desencadena. Ello presupone que se hallen reunidas las condiciones militares necesarias para semejante oportunidad.

Para la estrategia dominante de la UP existían trincheras cuya ocupación por los trabajadores, antes de que su poder estuviera consolidado, producía más desventajas que provecho. Eran las de sus sectores sociales aliados, o que sin serlo necesitaba coexistir con ellos para que no se incorporaran al bloque propiamente capitalista. Era el caso, por ejemplo, de la pequeña burguesía agrícola, industrial, comercial, artesanal, de servicios, de técnicos y profesionales. E incluso algunas empresas medias de capital europeo y también norteamericano, cuya ocupación ilegal contribuía a provocar un conflicto directo —político o económico— con Estados Unidos y Europa occidental, de repercusiones internas incontrolables para el bloque popular.

Con anterioridad a 1973, la insurrección obrera hubiera exigido la desarticulación y descomposición de las Fuerzas Armadas del estado. Ello era imposible sin la previa división de éstas. De producirse dicha división, hipótesis en sí misma altamente improbable, se hubiera producido fatalmente el desencañamiento del conflicto armado en forma de guerra civil.

En las circunstancias del mundo contemporáneo, una verdadera guerra civil revolucionaria es inviable para los trabajadores si no se internacionaliza. Para el gobierno UP, la guerra civil era prácticamente imposible de internacionalizar en el te-

rreno propiamente logístico, dada la situación geopolítica del país. Rodeado de ejércitos militantemente anticomunistas, dentro de una región dominada política y económicamente por Estados Unidos, separado por miles de kilómetros del estado socialista más próximo, el gobierno se encontraba ante una clara disyuntiva. O sofocaba de inmediato un brote de guerra civil, con lo que ésta no llegaba realmente a consolidarse, o la desproporción del respaldo militar internacional le condenaba a perderla, con todas sus profundas y prolongadas consecuencias.

LOS LÍMITES DE LA TÁCTICA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

El proyecto del programa común de la UP de establecer la hegemonía social de los trabajadores en un sistema político pluralista, basado en la voluntad popular expresada a través del sufragio universal, encontró sus mayores obstáculos en la crisis político-económica que surgió del modo descrito en los capítulos precedentes.

La necesidad de la UP de contemplar la posibilidad de insurrección contrarrevolucionaria, no se reduce a las circunstancias de 1973. Si el bloqueo total del ejecutivo hubiera tenido lugar en 1971, como proponía el Partido Nacional, ya en ese entonces se hubiera presentado la ocasión para ello. Desde 1970, a partir del momento en que la burguesía pierde la dirección del estado en una confrontación política como son las elecciones, era manifiesto que intentaba recurrir a las armas para defender sus intereses.

Mientras el gobierno contó con el respaldo de un sector del aparato armado del estado, es decir hasta agosto de 1973, la insurrección estuvo sofocada aunque en estado de latencia permanente. Por esta razón, aunque la coyuntura política para el golpe de estado surge en junio de 1973 —aislamiento total del gobierno dentro del aparato estatal—, la insurrección no encuentra su punto óptimo hasta septiembre siguiente.

El 29 de junio de 1973, cuando tiene lugar la primera acción de insubordinación militar y es frustrada por el sector democrático del ejército, ese mediodía la dirección golpista resuelve postergar la insurrección general en espera de un momento más

propicio. Decisión que, considerada desde la perspectiva del 11 de septiembre siguiente, resultó acertada.

Ese día, 29 de junio, debemos poner énfasis en el hecho de que la UP no pudo aprovechar su éxito circunstancial y atacar las bases mismas de la insurrección y desarmar a sus adversarios. Apenas dos semanas después, Allende se lamentaba en privado de no haberse encontrado el 29 de junio en la Moneda y haber obligado a disparar sobre la unidad insurrecta, así como de no haber nombrado de inmediato al general Prats ministro de Defensa y haber expulsado de las Fuerzas Armadas a los oficiales golpistas, empezando por el jefe de la Fuerza Aérea, general Ruiz. Este último, requerido aquella mañana de usar la aviación contra los tanques que rodeaban la Moneda, alegó que ello causaría graves daños en los bloques de edificios que rodeaban al palacio del gobierno. El 11 de septiembre, cuando los aviones bombardearon con precisión blancos específicos de la Moneda, Allende tuvo ocasión de comprobar la falacia de dos meses y medio antes.

Consideremos el por qué de la situación producida el 29 de junio. Desde el punto de vista político, en el gobierno pesó más la voluntad de evitar el riesgo de guerra civil inmediata si se adoptaban medidas de depuración dentro de las Fuerzas Armadas, pues todavía se creía en la posibilidad de utilizar recursos tácticos propios de la vía político-institucional. Concretamente, convenir un acuerdo político-legislativo con el PDC o convocar un referéndum para resolver las grandes opciones nacionales. Aquella noche, Allende explicaba al país:

Voy a decirles algo que a algunos no les va a gustar, pero tengo el deber de hacerlo, porque siempre les he hablado claro a los trabajadores: no voy a cerrar el Congreso. Sería absurdo. Hemos dicho que cumpliremos el programa y llevaremos adelante este proceso, dentro de los cauces de la Constitución y de la Ley, y así lo haremos. Y, si es necesario, llamaré al pueblo, de acuerdo con mis atribuciones, para que se pronuncie mediante un plebiscito [...]

Desde el punto de vista militar, se continuaba teniendo confianza en la capacidad defensiva del gobierno y de los trabajadores, mientras que se evaluaba como débil la capacidad ofensiva. Razones para ello había, y muchas. El conocimiento

de la situación militar que tenía el general Prats le llevaba a estimar que la iniciativa de la responsabilidad de abrir fuego la tenía el adversario. La misma noche del 29 de junio comentaba en la Moneda: "Aunque el acto de insubordinación ha sido controlado, estoy muy preocupado por los coletazos en las próximas horas".

El comandante en jefe del ejército buscaba también ganar tiempo para restablecer el equilibrio dentro de las Fuerzas Armadas e impedir el desencadenamiento del conflicto armado. Todavía el 22 de agosto siguiente, le decía a Allende: "Nosotros sólo podemos preparar el contragolpe". A lo que el presidente respondía: "General, ¿todo depende de la fuerza con que nos propinen el primer golpe!...". ¿Se equivocaba Prats profundamente? ¿Debió tomar en aquellos momentos la iniciativa de invalidar a todo un sector de la oficialidad, aun a riesgo de que estallara la guerra civil? Gravísima responsabilidad la que recaía en su persona, de la que no se podía liberar dadas su jerarquía y responsabilidades.

Sería injusto hacer recaer todo el peso de opción tan trascendente sobre la sola persona del general Prats. La dirección política del proceso revolucionario no la ejercía él, ni en aquel momento ni antes. En esta coyuntura, la dirección política de la UP se encontró de nuevo dividida. El Partido Socialista, el MAPU y la Izquierda Cristiana eran partidarios de que el gobierno adoptara medidas ofensivas, asumiendo plenamente el riesgo del enfrentamiento armado. Mientras que el análisis de las circunstancias y la opción política del Partido Comunista eran muy distintos: procurando siempre evitar la guerra civil, miró hacia la Democracia Cristiana y buscó unir en el Parlamento los votos de ésta a los de la UP para declarar el "estado de sitio". Lo que significaba conceder al gobierno poderes extraordinarios durante un período de seis meses para hacer frente a la insurrección.

Pero ya a esas alturas el PDC había ingresado a su vez en la acción insurreccional, resuelto a acabar con el gobierno UP fuera como fuera. La mañana del 29 de junio, mientras los tanques disparaban contra la Moneda, la dirección del PDC observó la evolución de los acontecimientos y guardó cauto silencio. En las radioemisoras, algunos de sus dirigentes se anticiparon a responsabilizar del putsch al gobierno. Sólo a mediodía,

cuando el golpe militar estaba sofocado, recibimos en la residencia presidencial de Tomás Moro la llamada telefónica de Patricio Aylwin, jefe máximo de la DC, para manifestarle a Allende que su partido, de "insobornable voluntad democrática y probada tradición de respeto al régimen legal, condena toda intentona golpista, venga de donde venga". Allende le contestó que si ello era así, el PDC debía dar su conformidad en el Parlamento a la proclamación del estado de sitio. Aylwin replicó que para ello el gobierno debía comprometerse a promulgar la reforma constitucional sobre las Áreas de Propiedad Económica. A lo que Allende respondió que cuando el centro de Santiago todavía olía a pólvora y varias decenas de cadáveres de víctimas inocentes estaban siendo retirados, el PDC no podía chantajearle de esa forma; lo que correspondía era detener la conspiración antidemocrática si querían poder continuar discutiendo un acuerdo sobre las Áreas de Propiedad Económica. Aylwin terminó accediendo.

Cuál no sería mi sorpresa cuando siete horas después, en el gabinete del presidente en la Moneda, me encuentro con que el ministro de Justicia, Sergio Insunza (PC), presenta a la firma de Allende un proyecto de ley declarando el estado de sitio por tres meses. "¿Cómo, pregunto yo al ministro, la DC ya ha reducido a la mitad lo que prometía este mediodía? ¿Y habéis aceptado? Mira, Sergio, como no aprovechemos al máximo estos minutos preciosos, el éxito militar de la mañana se nos va a escurrir como el agua entre los dedos." La respuesta del ministro fue pedirme que no usara mi influencia para convencer al presidente de continuar exigiendo al PDC todas las facultades legales, sin restricción, que la Constitución contemplaba para atender la emergencia que el putsch acababa de crear. Preocupación innecesaria. Setenta horas después, el PDC decía que ni siquiera tres meses, que no concedía al gobierno ninguna facultad extraordinaria ante la subversión.

Por mi parte, yo le manifesté a Allende que la disciplina interna y la unidad de las Fuerzas Armadas, que nosotros habíamos necesitado fortalecer durante dos años y medio para poder contener al sector antisocialista de la oficialidad, estaba manifestamente quebrada. Y que así como en octubre de 1972 el régimen institucional no se derrumbó arrastrando a la UP con él, porque el gobierno se apoyó directamente sobre la mo-

vilización organizada de los trabajadores, del mismo modo yo entendía que se necesitaba articular las instituciones militares del estado con las organizaciones obreras para imponerse sobre las putschistas.

La respuesta de Allende, en la noche del 30 de junio, fue: "Tememos el levantamiento, en las próximas horas, de los regimientos de Antofagasta, Linares, Temuco, Valdivia, Osorno y Concepción, así como de la Marina. La Aviación tiene la mayoría de los Hawker-Hunter en Concepción y está expectante. Hemos enviado al general Urbina, inspector general del Ejército, a que visite las guarniciones del Sur. En estos momentos está en Concepción. En Antofagasta, si el ejército se mueve contamos que la reacción de las organizaciones obreras podrá contenerlo en un primer momento. En cuanto a la Marina, si se subleva cabe esperar que la suboficialidad y la marinería se amotinen".

En otras palabras, nos hallábamos al borde de la guerra civil. La situación que tan afanosamente el gobierno y la dirección dominante de la UP habían deseado retrasar, con la esperanza de evitarla, podía estallar de un minuto a otro. Ambos ejércitos sociales se miraban fijamente. ¿Quién debía y podía dar el primer paso?

Si Allende y la dirección de la clase obrera tomaban algunas iniciativas, como por ejemplo la depuración en ese instante de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, el riesgo de guerra era casi absoluto. A su vez, si la dirección de la insurrección no aplazaba el momento del encuentro armado general, el respaldo al gobierno que habían demostrado esa mañana las tropas de la guarnición de Santiago, dirigidas por los generales Prats, Sepúlveda y Pickering, indicaba que Allende no caería sin una batalla previa entre cuerpos armados profesionales.

Ante esta disyuntiva, Allende, Prats y la mayoría de la UP, incluido el PC, resolvieron continuar explorando las posibilidades de evitar el enfrentamiento armado de acuerdo con los criterios tácticos de la vía político-institucional. Y la reacción resolvió postergar su ofensiva general e intentar privar al gobierno del apoyo militar con que todavía contaba.

Así se presentaban las principales opciones el 29 de junio de 1973. ¿Por qué extrañarse de que la CIA escogiera semejante coyuntura para distribuir centenares de miles de dólares, en

una inversión suplementaria, a fin de financiar la nueva fase de la insurrección? Cuatro semanas después, el 25 de julio, las huelgas generales se desencadenaban de nuevo.¹ El transporte privado terrestre paralizaba sus actividades, recibiendo los propietarios de camiones una subvención diaria superior a las ganancias normales de una jornada de trabajo. El terrorismo redoblaba y elevaba su intensidad. El día 26 de ese mes era asesinado el capitán de navío Arturo Araya, edecán del presidente, y toda la prensa de oposición montó una campaña psicológica de gran envergadura para convencer a la opinión pública, y a las Fuerzas Armadas, de que el asesino era nada menos que... ¡el jefe de la seguridad personal de Allende! Esa misma semana, el PDC rechazaba públicamente todo acuerdo con la UP que no fuera la claudicación y renuncia a lo obrado en los tres años anteriores.

Prats (FF.AA.) y Allende (UP) siguen una estrategia defensiva. La desaparición de Prats, la traición y el *blitzkrieg* de Pinochet, eliminan del binomio al sector militar democrático. Pero las limitaciones de esta estrategia hay que buscarlas, con todo, mucho antes de julio o agosto de 1973. Y parten del principio de que cuando uno de los dos bloques sociales antagónicos en conflicto se prepara para la guerra civil, el otro no sólo debe evitar que consiga los instrumentos necesarios para ello, sino que además debe también estar bien preparado para enfrentarla en el caso de que la disuasión no resulte suficiente.

El 31 de agosto, Allende me decía: "En este encuentro, donde todos juegan con cartas tapadas, también yo tengo cartas tapadas". Su drama fue que quien le aseguraba estas últimas en el campo militar era sólo el equipo de oficiales encabezado por Prats, sin ninguna articulación con las organizaciones obreras.

1. "El documento de 1973 mostraba [...] que a la altura del 25 de julio de 1973 la CIA ha recomendado al Comité Cuarenta que \$ 200.000 sean entregados clandestinamente al Partido Nacional de Chile, grupo conservador que había afirmado un mes antes [de hecho, más de un año antes] que el gobierno del presidente Allende «ya no era legítimo». El Partido había apremiado también a los chilenos para que rechazaran —con violencia incluso— a la administración Allende en cuanto «ilegítima» e «inconstitucional». [...] William Colby, director de la CIA, dijo a un subcomité sobre Inteligencia de la Cámara hace un tiempo, este mismo año, que un millón de dólares fue autorizado en agosto de 1973 para ser usado en Chile" (*New York Times*, 21 octubre 1974). El documento se refiere a la nota hecha pública por L. Eagleburger, ayudante ejecutivo del secretario de Estado H. Kissinger.

En las circunstancias de esos días, bastó que el nuevo comandante en jefe del Ejército se diera vuelta y pusiera sus cartas del lado de la insurrección para que el gobierno y la UP se quedaran sin protección militar alguna. Lo que, en último análisis, le era facilitado a Pinochet porque podía darse vuelta *sin necesitar* para ello ningún tipo de desvinculación previa de las organizaciones obreras, que se encontraban aisladas del aparato militar del estado.

Para desencadenar la guerra, la derecha venía alimentando desde 1970 una campaña psicológica de odio contra la izquierda, su programa, sus realizaciones y su gobierno. En 1972 logró crear los instrumentos sociopolíticos y militares indispensables para la adopción de la táctica insurreccional. Sólo le restaba insistir una y otra vez hasta que surgiera la oportunidad de abrir fuego.

La estrategia dominante de la UP buscaba el desgaste del adversario mediante dos acciones principales: reducir su poder físico y su voluntad de lucha. Ambas son simultáneas e interdependientes, y mostraron fehacientemente su viabilidad a lo largo de 1970 y 1971. Pero semejante estrategia fue entrando en crisis a medida que surgían condiciones que reducían la capacidad coercitiva (represiva) del gobierno frente a la subversión. Y la primera manifestación explícita de ello acaeció con motivo de la huelga general de octubre de 1972, cuando la UP no estuvo en condiciones de exigir ninguna contraprestación a los dirigentes y organizaciones que mantuvieron al país semiparalizado durante tres semanas, al tiempo que pedían el derrocamiento del gobierno.

La principal fuerza de oposición política a la UP, la Democracia Cristiana, mantuvo respecto de la UP la misma estrategia de desgaste, hasta mayo de 1973, buscando la erosión del gobierno mediante el estímulo de una crisis político-económica y la descomposición de la unidad interna del bloque prosocialista. Durante este tiempo, los sectores partidarios de una estrategia de ataque frontal y directo representaron una fuerza de importancia secundaria, lo que no significa que fuera reducida. Era el caso de las alas dominantes del Partido Socialista, en la izquierda, y del Partido Nacional, en la derecha.

Para tener éxito, la estrategia de desgaste de la UP requería, como complemento simétrico, que el PDC estuviera imposibili-

tado de hacer oposición de carácter insurreccional, es decir en la línea de la lucha armada. Para ello, sin embargo, se necesitaba que las fuerzas predominantes en los dos bloques antagónicos encontraran algún punto de acuerdo sobre el alcance de las transformaciones en curso, de modo tal que se garantizaran las normas mínimas de coexistencia político-social.

Pero ya en octubre de 1970 la derecha del PDC mostró a la luz del día su voluntad de recurrir a las armas para detener a la UP. Nadie podía, por consiguiente, llamarse a engaño sobre su predisposición a hacerlo de nuevo en cuanto las circunstancias se lo permitieran.

Evitar al país y al movimiento popular los horrores de una guerra civil requiere también tener presente aquello que dijera Clausewitz:

El riesgo de estos medios [evitar el enfrentamiento armado] reside en el hecho de que, mientras mayor sea la eficacia que busquemos, si fracasamos se vuelve contra nosotros y nos conduce a las consecuencias más desastrosas. [...] [Estos] medios son, por lo tanto, menos costosos cuando determinan un buen éxito y menos arriesgados cuando conducen a un fracaso; pero esto involucra necesariamente la condición de que deben estarles opuestos otros semejantes, es decir, que el enemigo emplee los mismos métodos; porque si el enemigo se resolviera por el método de una gran decisión por las armas, *bastaría ese solo hecho para que debiéramos cambiar* nuestro propio método, contra nuestra voluntad, por uno similar.²

Sin embargo, conviene insistir en que una estrategia dirigida a evitar que los sectores conservadores puedan sublevarse contra el gobierno de los trabajadores *no* implica que éstos se estén preparando también para la insurrección. La táctica anti-insurreccional no puede simultanearse con la insurreccional. En nuestro caso, la primera era la que de modo consecuente y organizado hubieran debido instrumentar los partidos obreros que integraban el gobierno UP. Pero mientras el sector dominante dentro de la UP no desarrolló en su plenitud las exigencias que requería evitar el estallido de la guerra civil, el sector minoritario actuaba según la lógica de la insurrección obrera.

2. K. V. Clausewitz, *De la guerra*, Ed. Mateu, Barcelona, 1972, p. 76.

Es decir, en las circunstancias concretas del país, contribuía a precipitar la guerra civil. Evitar o contribuir a esta última, son objetivos diferentes que se excluyen entre sí, las acciones tendientes a alcanzar uno de ellos no sirven al mismo tiempo para el otro:

En la resistencia pura falta la intención positiva (provocar la guerra) y, por lo tanto, en este caso nuestras fuerzas no pueden ser dirigidas hacia otros objetivos, sino que deben limitarse tan sólo a hacer fracasar las intenciones del enemigo.³

Esto último, sin embargo, tiene un límite, perfectamente establecido en la praxis leninista, que en mayo-junio de 1973 el movimiento popular no estaba en condiciones de observar, ni objetiva ni subjetivamente.

Sería un gran error en los principios fundamentales suponer que la consecuencia del esfuerzo negativo (preservar las propias fuerzas y desbaratar el desencadenamiento de la guerra por el adversario), debe ser el que estemos impedidos de elegir como nuestro objetivo la destrucción de las fuerzas del enemigo, sino que debemos preferir una solución incruenta. Es indudable que la preponderancia del esfuerzo negativo puede conducir a esto, pero solamente a riesgo de que no sea el método más conveniente, cuestión ésta que depende de condiciones totalmente diferentes, que reposan no en nosotros mismos, sino en nuestro oponente. Este otro camino, el incruento, no puede, por lo tanto, ser considerado de ningún modo como el medio natural de satisfacer la creciente ansiedad de conservar nuestras propias fuerzas. Por el contrario, en los casos en que ese cambio no fuera adecuado a las circunstancias, sería mucho más probable que condujera a una ruina total. [...] Si ha llegado el momento en que ya no es posible seguir haciendo esto sin una abrumadora desventaja, debe considerarse que la ventaja del esfuerzo negativo ha terminado, y entonces surge inalterado el esfuerzo para la destrucción de las fuerzas del enemigo, reservado como contrapeso, pero que nunca fue descartado.⁴

En el hecho de que no fuera materialmente posible llevar a la práctica este principio táctico, a pesar de inspirar la acción y

3. *Ibid.*, p. 77.

4. *Ibid.*, p. 78.

la teoría de la UP como conjunto y la del propio Allende, radica uno de los problemas que más profundamente merecen ser estudiados. Y cuya proyección afecta directamente a la teoría de la conquista del poder por la clase obrera y la transición al socialismo en los países capitalistas después de la revolución bolchevique de 1917. Y, en especial, después de la segunda guerra mundial.

Por otro lado, desde mi punto de vista, la última oportunidad importante con que contó la UP para hacer compatibles sus dos objetivos tácticos dominantes —la acción político-institucional y la antiinsurreccional— con los estratégicos, fue en la primera semana de junio de 1973. El día 5, Allende sometió a la consideración del comité político de la Unidad Popular un plan de acción inmediata en siete puntos, a cuya elaboración yo había contribuido muy directamente. Su diseño era, en síntesis, el siguiente:⁵

1. *Frente de masas*. Reorganizar el movimiento popular de modo que esté en condiciones de resistir un eventual enfrentamiento antes de tres o cuatro meses [septiembre de 1973].
2. *Aparato del Estado*. Introducir modificaciones en el proceder de la Administración Pública. Renovar el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y Carabineros, fortaleciendo la capacidad directiva y operativa del sector constitucionalista de la oficialidad.
3. *Frente económico*. Adoptar medidas drásticas que aseguren el abastecimiento y distribución regular de los bienes objeto de acaparamiento y mercado negro.
4. Poner en práctica medidas financieras rígidamente anti-inflacionistas.
5. *Frente político*. Asumir una actitud intransigente, siempre dentro del límite de la legalidad, contra las agresiones por parte del Parlamento y la Corte Suprema.
6. Reprimir con energía toda manifestación de fascismo y acción directa. Asegurar el mantenimiento del orden público y del ejercicio de la autoridad.
7. *Abrir una vía de salida político-institucional* a las más apremiantes contradicciones presentes. Evitar la crisis inmediata

5. *El Mercurio* del 17 de octubre de 1973 reprodujo mi versión manuscrita de este plan de emergencia, que se conservaba en el archivo personal del presidente.

de legitimidad del gobierno mediante la convocatoria de un referéndum, el miércoles, día 6 de junio, sobre la reforma constitucional relativa a las áreas de propiedad económica. Debe estudiarse el retiro de la Contraloría del Decreto destinado a promulgar el texto de la mencionada reforma sin recurso a un referéndum previo.

El punto central de este plan era la convocatoria del referéndum, cuyo plazo legal vencía precisamente el 6 de junio. Se trataba, de nuevo, de plantear al país la posibilidad de resolver en las urnas el principal tema de divergencia entre el Parlamento y el ejecutivo, lo que, dada la regulación del recurso al referéndum existente en Chile, tendría lugar no antes de tres o cuatro meses. Abrir semejante cauce de resolución de la crisis política, debía conceder al gobierno la legitimación suplementaria indispensable para adoptar las otras medidas de emergencia contempladas en el plan. Y que iban dirigidas a fortalecer los puntos de importancia estratégica para *contener* la insurrección burguesa y, si ello era por último insuficiente, poderla enfrentar con medios orgánicos y materiales mínimamente adecuados.

Sin embargo, el 5 de junio, el comité político de la UP rechazó por unanimidad la idea de convocar un referéndum. Tras lo cual, el presidente no dispuso de bastante poder legitimado para expulsar de las Fuerzas Armadas a los altos oficiales que se sabía estaban conspirando, pues ello hubiera implicado la "depuración política" de la oficialidad en plena crisis del aparato del estado, de la legitimidad institucional del gobierno UP y de rechazo vehemente de éste por el conjunto de la oposición, *sin que* el gobierno pudiera abrir simultáneamente ante el país una vía de salida de la situación distinta de la que le había conducido al aislamiento en que se hallaba. En otros términos, la depuración de las Fuerzas Armadas en tal contexto entrañaba introducir el factor adicional que podía provocar la explosión de las instituciones militares en tanto que "corporación".

Esta opción se dilucidaba en circunstancias que el incremento de la agitación y resistencia antigubernamentales a lo largo de abril y mayo de 1973, había llevado a Allende a reconsiderar la decisión del mes de marzo de formar un gabinete exclusivamente civil, y de nuevo estimaba necesario incorporar a él a

las Fuerzas Armadas, pero esta vez con el compromiso de poner en ejecución un programa socioeconómico de emergencia. Las conversaciones en este sentido se habían iniciado en el mes de mayo, y estaban en curso a comienzos de junio. Pero la necesidad objetiva de incrementar así el poder del gobierno frente a la dinámica insurreccional, se encontraba con la limitante mayor que significaba no contar con un apoyo orgánico idóneo en el seno de las propias masas trabajadoras, quedando reducida la organización antiinsurreccional casi exclusivamente a las instituciones del estado —gobierno y Fuerzas Armadas y de orden—.

En otras palabras, frente a las dos vías que la oposición estaba siguiendo contra el gobierno —la acción política y la de subversión militar—, Allende proyectaba contraponer los tres recursos que estaban a su alcance en una y otra vía: el referéndum, la reorganización de las bases del movimiento obrero para la fase en que había entrado el conflicto de clases, y la formación de un gabinete cívico-militar. Pero en la dirección de la UP no había acuerdo en torno de ninguno de los tres recursos, mostrándose profundamente dividida al respecto y sin proponer tampoco ninguna otra opción que hiciera la unanimidad. Mientras tanto, la derecha continuaba preparando las condiciones para la insurrección militar.

De este modo nos es posible observar, en el período que transcurre entre mayo y septiembre de 1973, la contraposición de dos tácticas principales. La preparatoria de la insurrección armada, impulsada por la burguesía, y la de la resistencia pura, mantenida por la mayoría del movimiento popular. La dirección de éste se hallaba especialmente persuadida de que la necesidad de preservar sus propias fuerzas le impedía, en las circunstancias concretas del país en esos momentos, intentar la destrucción armada de las fuerzas adversas. Para evitar una solución bélica del conflicto de intereses y mantener las organizaciones y conquistas obreras, la dirección predominante de la UP y Allende dijeron "no a la guerra civil", y se aplicaron a desarticular las bases sobre las que la derecha y Estados Unidos podían desencadenarla. Todas las iniciativas del gobierno, a partir de abril-mayo de 1973, están orientadas a este fin.

Y en esto sigo pensando que se estaba en lo correcto. Pero el propósito de evitar la guerra civil fue frustrado por un hecho material muy específico: el poder de disuasión militar con que

a esas alturas contaba el gobierno —el de las Fuerzas Armadas— se hallaba social y políticamente desvinculado del movimiento obrero, dados el aislamiento de éste respecto de los sectores medios y la crisis del aparato del estado subsiguiente. Ello permitió que la derecha se dedicara a cercar y desmoralizar al sector Prats del Ejército, y que tras su caída la simple traición de Pinochet dejara a los trabajadores desarmados frente al conjunto de las Fuerzas Armadas.

De este modo, cuando se llega a la segunda mitad de agosto de 1973, un amplio sector de la UP todavía no percibe hasta qué punto es inminente la insurrección armada de la burguesía, y el otro sector no mide en su real magnitud la desfavorable capacidad del movimiento popular para enfrentarla. Como tampoco lo percibió en el mes de junio anterior. De ahí que el secretario general del PC, Luis Corvalán, se pronuncie desfavorablemente el 21 y 23 de agosto cuando Allende le comunica su intención de llamar a retiro esa misma semana a los seis generales del Ejército que se sabía estaban encabezando la insubordinación: Bonilla, Nuño, Baeza, Arellano, Javier Palacios y Torres de la Cruz. Mientras Corvalán es partidario de que no se lleve a efecto tal medida, por temor a la reacción que pudiera provocar dentro de las Fuerzas Armadas, Allende cree que o se impone el gobierno o lo derroca un golpe militar, y ha ordenado llamar a retiro a los generales mencionados. Pero tampoco el presidente sospechaba hasta qué punto era ya demasiado tarde, pues desconocía el doble juego y la villanía con que procedía Augusto Pinochet, quien se las ingeniaba para postergar bajo diversos pretextos la ejecución de las disposiciones presidenciales.

El gobierno percibe una situación militar de contornos difusos, que le tiene al borde de un peligro cuya real magnitud le resulta difícil evaluar. Duda, vacila, teme que una decisión errónea en esas circunstancias precipite una tragedia. Nadie conoce cabalmente en la dirección de la izquierda lo que está acaeciendo dentro de las Fuerzas Armadas, la magnitud de la movilización contra el gobierno. El ala insurreccional de la UP habla abiertamente del enfrentamiento armado como necesidad inmediata para los trabajadores, y hace alarde de auspiciarlo y desearlo.

Después de las elecciones legislativas de marzo de 1973, la

táctica político-institucional del gobierno UP continuó reposando en tres acciones:

- 1) propiciar el acuerdo con el PDC,
- 2) abrir la vía al referéndum y
- 3) privar de respaldo militar a la derecha mediante la consecución de un acuerdo gobierno-Fuerzas Armadas, al tiempo que se pasaba a retiro a los oficiales directamente comprometidos en conspiraciones.

Sin embargo, esta línea dejó de ser viable en la primera mitad de mayo siguiente, cuando el sector Aylwin-Frei se apoderó de la dirección total del PDC —derrotando al sector Leighton-Fuentealba—, y alineó a este partido detrás de la táctica insurreccional del Partido Nacional y Patria y Libertad. En ese momento se quiebra definitivamente el equilibrio de fuerzas sociopolíticas en desventaja de la UP. Es la coyuntura en que Pinochet dice: “El 28 de mayo se dictó una directiva de seguridad interior donde se cambiaban las bases. De la defensa pasábamos a la agresión”.⁶ “La decisión definitiva [...] fue adoptada el 28 de mayo de 1973.”⁷

Sin embargo, después de mayo, la dirección del PDC continuó hablando públicamente de su disposición de buscar un acuerdo con el gobierno al tiempo que, subterráneamente, iba creando las condiciones del golpe de estado. Doble juego también éste, que tuvo su importancia para acabar de desorientar a Allende y al PC, haciéndoles pensar que la Democracia Cristiana se hallaba más lejos de lo que realmente estaba de respaldar un golpe militar de la naturaleza del de 11 de septiembre. ¿Pero lo sabía la propia DC, desbordada y sumergida en las profundas contradicciones propias de un movimiento populista-pequeño burgués inmerso en medio de una crisis contrarrevolucionaria?

En los momentos en que la burguesía y Estados Unidos están logrando imponer la lucha armada para resolver el diferendo estratégico, el movimiento popular se encuentra privado de los elementos tácticos y de la perspectiva estratégica idóneos

6. Declaración de Pinochet reproducida por la revista VEA, Santiago (22 septiembre 1974), p. 2.

7. Crónica de José Zúñiga, de la agencia Reuter, en *Los Angeles Times* (29 diciembre 1973).

para hacerle frente. En 1970 y 1971, la estrategia indirecta de la UP contaba con los instrumentos para su progreso sin que abrieran las armas fuego a discreción. A partir de marzo-mayo de 1973, los recursos tácticos anteriores ya no son operantes en relación con el objetivo estratégico, y no pueden crearse los de reemplazo.

IX DESAJUSTES TACTICOS Y DERROTA ESTRATEGICA

Para Allende y el sector dominante de la UP, la guerra civil como forma de lucha era objeto de un rechazo estratégico. Porque implicaba la destrucción del sistema político-social en que la UP había surgido y llegado al gobierno, siendo así que el programa común de la izquierda diseñaba una línea de acción social, económica y política que no presuponia su realización a través de un enfrentamiento armado. Y porque se deseaba evitar el enorme costo social y económico que para los trabajadores, y el país entero, encierra semejante nivel de violencia. No existía, además, dentro de las Fuerzas Armadas un sector susceptible de alinearse resueltamente tras la clase obrera en caso de enfrentamiento, y en el contorno militar internacional no era posible encontrar un apoyo equivalente al que el sistema militar interamericano podía brindar a la derecha.

En semejantes circunstancias, poner en práctica una acción que no estuviera dirigida a imposibilitar la guerra civil ofrecía una incertidumbre muy alta sobre la posibilidad de evitar la masacre obrera, en medio de una derrota total que inmovilizara a los trabajadores durante décadas. Pero aun si no era éste el desenlace del conflicto, en el contexto sociopolítico del país aparecía muy problemática la consolidación de un régimen de dictadura del proletariado nacido de un enfrentamiento armado. Chile tiene más kilómetros de costa que la isla de Cuba, además de 2.000 kilómetros de frontera con Argentina, Bolivia y Perú, países con una clase dominante militantemente antisocialista. Vulnerabilidad de Chile a las presiones contrarrevolucionarias que no podía ser contrarrestada, a comienzos

de la década de los setenta, por la resolución de ninguna potencia socialista de sostener al pequeño país austral a cualquier costo, incluido, claro está, el militar. La retirada de los misiles soviéticos de Cuba por presión de Estados Unidos, en medio de una crisis soviético-norteamericana que tuvo al mundo al borde de la conflagración atómica, mostró fehacientemente en 1962 el precio que los Estados Unidos estaban dispuestos a imponer para limitar la presencia militar en América latina de su adversario principal.¹

La cuestión central planteada giraba en torno de cuál era la vía más favorable a cada bloque social para resolver las pugnas sucesivas en lo referente a la hegemonía de uno sobre el otro.

Conservar la flexibilidad y coherencia del aparato del estado era para la UP un prerrequisito si deseaba evitar las condiciones económicas, sociales y políticas que provocaran una acción militar en su contra. Por esta razón, en 1973, a medida que se aceleraba la crisis contrarrevolucionaria y, también, la revolucionaria, las posibilidades de resolver el conflicto de intereses de clase a través de los mecanismos no armados (referéndum, acuerdo legislativo, dimisión del presidente) iban disminuyendo considerablemente.

En las circunstancias que siguieron a marzo de 1973, el enfrentamiento armado se fue convirtiendo en una eventualidad cada vez más posible. Fenómeno éste indispensable, por otro lado, para entender la razón de que los partidos de la UP rechazaran el 6 de junio de ese año la proposición de Allende de convocar un referéndum. Temían que una gran masa de trabajadores, reducidos a una situación de minoría político-electoral, no aceptara someter al resultado de unos comicios la pérdida de lo más sustancial de las posiciones de poder que detentaba; del mismo modo que en 1970 la burguesía no se resignó a ceder el gobierno sin resistencia por el solo hecho de que el candidato de la UP hubiera ganado las elecciones a la presidencia de la república. El desarrollo de la táctica político-institucional

1. Véase J. H. Kahan-A. K. Long, "The Cuban Missile Crisis: A study of its Strategic Context", *Political Science Quarterly*, LXXXVII, 4 (dic. 1972), pp. 564-590; R. Carrere, "Réflexions polémologiques sur la crise nucléaire de Cuba, 1962", *Études Polémologiques*, 3 (1967), pp. 25-43.

en un régimen de fundamentos democráticos requiere que la clase obrera mantenga unas relaciones de alianza y coexistencia con los restantes sectores sociales que le aseguren una posición política y socialmente mayoritaria. Si esta situación deja de darse, como ocurrió en Chile después del bienio 1970-1971, la vía electoral no es capaz de resolver un conflicto de clases en medio de una situación de crisis revolucionaria o contrarrevolucionaria, como lo muestra la simple fecha del golpe de estado de septiembre de 1973. Previsto por los oficiales conspiradores para el día 14, fue adelantado en tres días por Pinochet para evitar que Allende hiciera pública el día 11 su resolución de convocar un referéndum que, desde el punto de vista de los intereses antagónicos en presencia, a esas alturas no resolvía lo esencial del conflicto planteado. Cualquiera que hubiera sido el desenlace de la elección, lo que estaba en juego en ese momento —la supremacía definitiva de una clase sobre otra— en las condiciones existentes sólo tenía posibilidad de imponerse con el respaldo activo de las armas.

En 1971, por el contrario, las posibilidades materiales para hacer respetar un referéndum favorable a la UP eran superiores, desde todos los puntos de vista; de haber tenido lugar, hubiera proporcionado instrumentos más eficaces para evitar la crisis del aparato estatal antes de contar con los medios de superarla, y para enfrentar mejor a los factores que impulsaban la crisis económica. Y si nos situamos en la hipótesis de que un referéndum en torno de los centros neurálgicos del poder hubiera sido adverso en 1971 para la izquierda, las relaciones entre el bloque social UP y los sectores populares y medios de oposición permitían buscar un acuerdo con el PDC —a la sazón dirigido por su ala centroizquierda— o, en su defecto, renunciar al gobierno sin que ello significara automáticamente el enfrentamiento violento y el baño de sangre, sino nuevas coaliciones político-sociales y el recurso a elecciones. Éstas hubieran tenido un desarrollo potencial quizás problemático, pero en cualquier caso muy distante del que se produjo en septiembre de 1973. El peligro de una acción militar conservadora en las condiciones de 1971 siempre existió, pero con carácter sectorial y no generalizada, ya que el grueso de las Fuerzas Armadas no se hallaba en contradicción antagónica con el movimiento popular.

EN LA ESTRATEGIA, LA DECISIÓN PRINCIPAL TIENE LUGAR
AL COMIENZO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL.

El 9 de septiembre de 1973, cuando Allende consigue por fin que el Partido Comunista acepte la convocatoria de un referéndum, ello coincide con el momento en que no puede retardar más la desarticulación del comando golpista dentro de las Fuerzas Armadas. Tiene que adoptar las medidas extremas a su alcance para debilitar militarmente a la derecha en los mismos instantes en que ésta se halla en plena movilización insurreccional. Todavía en junio de ese año, semejantes medidas políticas —recurso al sufragio universal— y militares —depuración de las Fuerzas Armadas— tenían algunas posibilidades de ser llevadas a efecto, como lo prueban el alejamiento forzoso de las filas en julio siguiente de los generales Stuardo de la Cruz y Rodríguez, de la Fuerza Aérea, y Viveros, subdirector general de Carabineros. Aún el 17 de agosto Allende contaba con suficiente apoyo militar dentro del Ejército para imponer la destitución del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Ruiz Danyau. Pero a partir del 23 de agosto —dimisión de Prats—, la iniciativa política y militar estaba completamente en manos de los insurrectos.

En la insurrección de octubre de 1972, Allende se propuso utilizar todas las fuerzas disponibles para desplazar la decisión principal planteada —caída o mantenimiento del gobierno— hacia el instrumento estratégico de que disponía en ese momento: las elecciones parlamentarias de marzo siguiente (recurso al sufragio universal). Y lo logró. Después de marzo de 1973, el PC intentó algo semejante poniendo énfasis en las elecciones presidenciales de septiembre de 1976. Pero ya los factores sobre los que reposaba la táctica político-institucional se encontraban excesivamente resquebrajados. El rechazo de un referéndum el 5 de junio de 1973 por el comité político de la Unidad Popular, y de las medidas complementarias que de aquél dependían, adquiere así el valor de símbolo de la confusión existente en la dirección de la izquierda entre planos tácticos y estratégicos.

“En la estrategia, la ley del uso simultáneo de las fuerzas deja que la decisión principal (que no necesita ser la decisión

final) tenga lugar casi siempre al principio de la acción principal.”² En nuestro caso, podemos considerar que existía una profunda interacción entre las decisiones tácticas principales, como el recurso al referéndum, y la acción principal del gobierno UP: preparar las condiciones de la batalla final con la burguesía por una vía distinta de la guerra civil. Ello exigía que desde el comienzo la dirección de la Unidad Popular actuara en función de semejante perspectiva, adaptando la política general del gobierno al hecho de que en marzo de 1973 debían tener lugar elecciones generales, o en una fecha anterior si se estimaba preferible promover un referéndum. Semejante concepción, sin embargo, no existió. Y aunque fue superada la recesión económica de 1970 en medio de la cual la izquierda llegó al gobierno, se dejó transcurrir el período de mayor expansión político-económica para la UP —el año 1971— sin resolver problemas de tanta envergadura como el del Parlamento y la organización del Área Social de la actividad económica. Medidas indispensables para instaurar los instrumentos de planificación capaces de contrarrestar a tiempo el sabotaje y la subversión impulsados por Estados Unidos y la derecha criolla. En realidad, la obtención de aquellos objetivos neurálgicos resultó desplazada a 1973, cuando ya el país se hallaba sumergido en una nueva recesión y en una espiral inflacionista incontrolable en la medida que se habían desequilibrado las relaciones entre clases y sectores sociales sobre los que debía reposar la superioridad de las organizaciones obreras sobre las organizaciones de la burguesía.

El origen de estas insuficiencias y desaciertos tácticos se encuentra, también, en el nivel estratégico, es decir, en el desacuerdo que existía en el seno de la izquierda entre quienes deseaban alcanzar la hegemonía social de los trabajadores evitando que la burguesía pudiera contar con los instrumentos necesarios para recurrir a la guerra civil, y quienes actuaban consciente o inconscientemente según la estrategia revolucionaria que pasa obligadamente por el enfrentamiento armado.

2. Klausewitz, *op. cit.*, p. 254.

LOS MEDIOS DE LA TÁCTICA NO SON LOS MISMOS CUANDO SE ALTERAN LAS CONDICIONES DE LA ESTRATEGIA

El desacuerdo entre los partidos hizo que, después de marzo de 1973, las reservas con que contaba la táctica político-institucional para atender disposiciones imprevistas de parte del adversario, incluida la de subsanar las que nunca pueden ser previstas (o sea, el resultado del encuentro, en caso de ser desafortunado), estuvieron invalidadas en el momento de la solución estratégica del conflicto en la medida que ésta se impuso a través del enfrentamiento directo entre los bloques sociales antagónicos. El movimiento popular no pudo crear los instrumentos idóneos para el enfrentamiento directo, pues la resolución estratégica del conflicto por la vía de la guerra civil estuvo siempre cerrada para la izquierda en las circunstancias internas e internacionales de Chile entre 1970 y 1973. Desde el punto de vista de la estrategia, lo grave en la experiencia de la Unidad Popular chilena no fue tanto el desenlace del 11 de septiembre.—previsible en cuanto que era una manifestación particular de guerra civil—, como el hecho de que la UP no hubiera conseguido evitar las condiciones que en 1973 impusieron el enfrentamiento directo de la clase obrera con la burguesía en una situación de desventaja sociopolítica y militar.

El enfrentamiento electoral del 4 de marzo de 1973 resultó desafortunado para la izquierda en relación con la conquista del control político pleno del estado, que era lo que se hallaba en juego a esas alturas. Pero aquel enfrentamiento era táctico, no ponía en cuestión en términos absolutos el fin principal de cada uno de los dos bloques antagónicos. En marzo de 1973 aún era posible usar de las reservas tácticas de la estrategia indirecta propiciada por el programa común, a saber: formalizar un acuerdo mínimo con el PDC antes de que se sumara de lleno a la insurrección, o recurrir a un referéndum cuando todavía su desenlace podía hacerse acatar y, en todo caso, introducir a tiempo cambios organizativos en el aparato armado del estado y en el movimiento obrero para hacer frente de otro modo, si llegaba el caso, a la insurrección burguesa en desarrollo.

Estos recursos tácticos fueron quedando inutilizados a medida que se ingresaba en la fase de resolución estratégica del

conflicto. A partir de junio de 1973 era la propia estrategia la que se hallaba en juego, y frente a la insurrección armada de la burguesía las reservas tácticas político-institucionales no funcionaron.

Reconsideremos a continuación la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en el período en que la estrategia indirecta estaba invalidada, y cómo la contrarrevolución fue imponiendo las formas de lucha propias de la estrategia directa.

El sector minoritario dentro de la izquierda, que operaba de acuerdo con el modelo insurreccional —quiebra del estado y desencadenamiento de la lucha armada—, se encontró con que la apertura de esta vía se hallaba impedida por el sistema en que se hallaba inmerso, tanto en el conjunto del país como en el seno del propio movimiento popular. De ahí que durante 1971 y 1972 este sector de la izquierda permaneciera sin capacidad de decisión principal, aunque sí de interferencia sobre la línea general del gobierno y de la UP. Su hora llegó después de marzo-junio de 1973, cuando se habían creado las circunstancias propicias para su concepción estratégica. Pero entonces se encontró con que no disponía de los medios instrumentales de semejanza política, ni dentro ni fuera del país.

Allende, por su parte, piensa que la acción gubernamental ha llegado al límite de su flexibilidad y que, si quiere evitar un choque armado en condiciones desfavorables para los trabajadores, debe apuntalar los cimientos en que se sustenta su línea política. En mayo-junio de 1973, el presidente busca el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas al sistema político y, por ende, al gobierno, así como que la UP acepte un referéndum. El sector antisocialista de las primeras frustra el proyecto militar al precipitar la insurrección para el 27 de junio, mientras que es la propia dirección de la UP la que rechazaba el referéndum tres semanas antes, como hemos visto. No obstante, en los meses siguientes y hasta su muerte, Allende persiste en buscar simultáneamente un acuerdo político-legislativo mínimo con el PDC, que la UP acepte la convocatoria de elecciones y que las Fuerzas Armadas respalden ambas líneas de acción, es decir, las instituciones sociopolíticas de legitimación democrática. Estimando que es el momento de la decisión principal, Allende concentra las fuerzas que están a su alcance en torno de la preservación de la unidad interna del movimiento popular y del

marco socioeconómico que asegura a éste libertad de acción y de desarrollo. Pero cuando la resolución estratégica del conflicto tiene lugar por la vía del enfrentamiento directo, los recursos tácticos anteriores se encuentran inhabilitados en la medida que uno de los bloques sociales, en este período el popular, no cuenta con bastante poder socioeconómico, político y militar para imponerlos, y mucho menos para reemplazarlos por los recursos tácticos alternativos, es decir, los que implican la implantación de la dictadura armada del proletariado.

A muchos podrá parecer extraño que un ateo, masón y marxista promueva y participe en una reunión con el presidente del partido democristiano en la residencia del cardenal de Santiago. Pero no piensa igual Allende, que ha solicitado la mediación de este último para agotar las posibilidades de un entendimiento entre los únicos sectores que pueden contener la voluntad de destrucción que se cierne sobre el país, porque tras ellos se alinean las fuerzas sociales, político-económicas y militares dominantes. Tres meses antes, era el cardenal quien ingresaba en el gabinete de Allende, siempre convocado por el presidente. El gobierno solicitaba la colaboración de la iglesia para reducir la exacerbación de las pasiones que amenazaban la paz civil.

Tanto en mayo como en agosto de 1973, monseñor Silva Henríquez manifiesta a Allende su voluntad de contribuir a sus iniciativas conciliadoras, sumándose en la segunda ocasión a sus esfuerzos para convencer a Aylwin de que la Democracia Cristiana no debía rechazar un acuerdo con el gobierno. En el encuentro del 17 de agosto, Allende tiene la oportunidad de constatar que los argumentos y proposiciones del cardenal en torno de la problemática nacional son de mucha mayor altura y calidad que los de Aylwin, y que en sus razonamientos y gestos respalda las iniciativas del gobierno para resolver la crisis. Aylwin, aislado entre ambas personalidades y sin argumentos, acaba por comprometerse ese día a dar instrucciones a sus dirigentes gremiales en huelga para que faciliten el acuerdo con el gobierno y reanuden el trabajo. Lo que efectivamente acaece horas después con los chóferes de la locomoción colectiva particular, y el 20 por la mañana con los transportes interprovinciales de pasajeros. La conversación en casa del cardenal culmina, por otro lado, con el compromiso de continuar las negociaciones en

torno del problema en que más énfasis ponía Aylwin —que se autorizara el aumento de precios a una compañía privada (Manufacturera de Papeles y Cartones, de Puente Alto)—, y el que más interesaba a Allende —convenir un acuerdo con el Parlamento que permitiera fortalecer la estabilidad político-económica y la paz civil—. Con este fin, Allende designa a dos representantes, el ingeniero Víctor Pey para el caso de “La Papele-*ra*” y el jurista Carlos Briones para el del entendimiento legislativo.³ ¿Existía la posibilidad de acuerdo? Briones cree que el cardenal pesa más que Frei sobre el ánimo de Aylwin.

Es posible, quizás, que no sólo el presidente Allende, el cardenal de Santiago y un sector del PDC y de las Fuerzas Armadas pensarán que era posible un acuerdo político que evitara al país una tragedia, sino también el gobierno de EE.UU. Para Washington, la tercera semana de agosto de 1973 debió aparecer como decisiva; había que asegurar a cualquier costo el derrocamiento *inmediato* de Allende, antes de que tuviera tiempo de poner en acción nuevos recursos adicionales que le permitieran, una vez más, derrotar el complot. Lo cierto es que aquel mismo lunes, 20 de agosto, el Comité Cuarenta del gobierno de EE.UU. aprueba una subvención de un millón de dólares para entregar a los partidos y organizaciones privadas chilenas que estaban en huelga insurreccional.⁴ Al tipo de cambio del dólar en el mercado negro en ese momento, semejante inyección de moneda tenía entonces un valor de mercado superior a los cinco millones de dólares.

La derecha del PDC chileno piensa igual que el gobierno de Estados Unidos. Quiere acabar de una vez por todas con la UP y su gobierno, rebelándose contra la acción combinada del cardenal y Allende sobre la Democracia Cristiana. El 20 de agosto, a mediodía, los profesionales democristianos que dirigen la CUPROCH (Confederación Única de Profesionales), se declaran

3. Personas de la confianza de Allende. Pey, que vivió la guerra española de 1936-1939 y sus consecuencias, representaba en el círculo inmediato del presidente una posición contraria a que Chile fuera arrastrado a una guerra civil, y estimaba igualmente necesario evitar un enfrentamiento diplomático o económico con Estados Unidos. Desde junio de 1973 dirigía la gestiones ante la embajada de Estados Unidos para adquirir excedentes agrícolas norteamericanos y reducir la tensión entre ambos países.

4. *Covert action in Chile...*, p. 30.

en huelga indefinida. Y al día siguiente, la dirección nacional del PDC, con Aylwin a la cabeza, se suma a la huelga general impulsada por el PN y el sector Frei de los democristianos.

El proyecto de resolución que el 22 de agosto el PDC hace aprobar a la Cámara de Diputados declarando "ilegítimo" al gobierno, atiende a la necesidad en que se encuentran los oficiales golpistas de poder fundamentar en términos supuestamente "legales" la rebelión contra el gobierno. Así se clausura el ciclo iniciado en octubre de 1970, cuando el ala popular del PDC obligó al conjunto de este partido a votar en el Parlamento en favor de la designación de Allende como presidente de la república. En aquella oportunidad, la resolución del PDC fue adoptada dos semanas antes del golpe militar ITT-Kissinger-Frei, contribuyendo así a frustrarlo en un grado no menor a como tres años después contribuyó a hacerlo triunfar también dos semanas antes de que se llevara a cabo.

El mismo 22 de agosto de 1973, los generales del Estado Mayor del Ejército reunidos en consejo deliberan sobre la petición de su comandante en jefe de que condenen los insultos de que ha sido víctima la víspera. Algunos de ellos se niegan, mientras que seis se solidarizan con Prats: Pinochet, Urbina, González, Brady, Sepúlveda, Pickering... Prats sufre de nuevo el vértigo de vislumbrar la división del Ejército si intenta imponer el respeto de su autoridad. Allende quiere percibir directamente el estado de ánimo en el seno del Alto Mando y, esa noche, invita a comer a los diez generales más vinculados a la persona de Prats, en ausencia de éste y encabezados por el obsecuente Pinochet.

Son las horas en que el fiel de la delicada balanza militar se está deslizando del lado opuesto al gobierno. Allende expone ante los generales las graves amenazas que pesan sobre la estabilidad del país, la acumulación de fuerzas extranjeras y locales que lo sitúan al borde de la guerra civil, la responsabilidad que recae sobre el gobierno, las Fuerzas Armadas en su conjunto y el Ejército en particular. Pinochet toma la palabra para subrayar su profundo respeto y amistad hacia Carlos Prats, así como su lealtad al presidente y la necesidad de afianzar sin vacilaciones la función constitucional de las Fuerzas Armadas. Pero mientras el general González sostiene que Prats está cansado y es conveniente reemplazarlo, Brady —que siempre ha

posado como el más allendista entre los generales— lo reitera como requisito para que la institución siga cohesionada, se refuerce la disciplina y se evite la guerra civil que tanto teme el presidente. El jefe de la División y guarnición de Santiago, por su parte, protesta por la afrenta de que ha sido objeto Prats y la respuesta que ha encontrado, señala que en esas circunstancias no puede continuar en el Ejército y anticipa que presentará su expediente de retiro el día siguiente. Pickering escucha en silencio. En un momento dado se siente indispuerto, debe ser tendido en un sofá y, poco después, es trasladado a su casa. Al día siguiente abandona también el servicio activo.

El 23, a mediodía, Prats acude a la Moneda a confirmar su renuncia a la comandancia en jefe del Ejército y al Ministerio de Defensa. El presidente la acepta. Minutos después de su partida ingreso yo en el gabinete presidencial a manifestar mi sorpresa y disconformidad. Allende responde: "Prats ya no manda a nadie. Además, un general que se halla emocionalmente derribado no está en condiciones de continuar al frente del Ejército en las circunstancias que estamos atravesando". Prats no quiere correr el riesgo de dividir a las Fuerzas Armadas y cree que su partida facilitará el mantenimiento de su unidad tras el gobierno. Recomienda a Allende que designe comandante en jefe a su segundo, que considera como el general más seguro para mantener la disciplina del Ejército. Allende, por su lado, desea preservar la autoridad moral de Prats sobre el Ejército, ante la Unidad Popular y el país entero. En su ánimo, Allende preveía que en un futuro próximo la personalidad política y militar de Carlos Prats sería de gran valor para el país. "Nadie parece entender lo que ha pasado con Prats, siendo así que en unos meses más será el hombre más importante de Chile", me decía la noche del 31 de agosto.⁵

5. En la carta-respuesta que dirige a Prats el 24 de agosto, Allende le dice: "[...] su lección moral lo mantendrá como una meritoria reserva ciudadana: es decir, como un colaborador de la patria con el cual, estoy seguro, ella contará cuando las circunstancias se lo demanden". Sin embargo, también sus adversarios median cabalmente el valor de la personalidad del antiguo comandante en jefe del Ejército y vicepresidente de la república de Salvador Allende: el 30 de septiembre de 1974 era asesinado en Buenos Aires, donde se había exiliado voluntariamente y cuando se disponía a encabezar la resistencia a la Junta Militar.

La hora de Pinochet ha llegado. Sus reiteradas pruebas de identificación con la doctrina militar defendida por el sector Schneider-Prats convencen a todos los que están cerca de él, civiles o militares, incluido el propio Prats y, por supuesto, Allende. Este último le ofrece la responsabilidad y los deberes de la comandancia en jefe, que Pinochet acepta con reconocimiento y con el compromiso de pasar a retiro a los seis generales que aparecían encabezando el asedio contra Prats y el gobierno...

Pinochet da la impresión que va a ejecutar las instrucciones, y pide a sus veintinueve generales que pongan sus puestos a disposición del nuevo comandante en jefe. Dos, sin embargo, se niegan a hacerlo: Bonilla y Arellano, ambos vinculados a la DC y señalados por la información disponible como encabezando la conspiración en el Ejército. Al no presentar su renuncia, quieren reducir las posibilidades de ser alejados de inmediato de las filas. Desconfían que Allende no aproveche la oportunidad, ¿pero también de Pinochet? Este último, sin embargo, presentará la situación al presidente en términos dilatorios: pasar a retiro en ese momento a seis generales significaba correr un riesgo excesivamente alto. El viernes 24 prefiere reducir su número a tres. Pero se las arregla para postergarlo de un día para otro, pretextando esperar la reunión del Consejo de Calificación de las Fuerzas Armadas, cuya reunión anual ordinaria corresponde tener lugar en tres o cuatro semanas más.

El viernes 24 de agosto, resueltos los conflictos surgidos en torno de los comandantes en jefe de la Aviación y del Ejército, el presidente se vuelve hacia la Marina, de donde llegaban noticias inquietantes. El día 8 anterior había asumido su dirección el vicealmirante Toribio Merino, con carácter provisional mientras su titular se incorporaba al gabinete. Pero todo el respeto que merecía la capacidad intelectual y sentido del honor del almirante Montero, le inspiraba desconfianza la persona de Merino. Ese viernes 24, Allende ordenaba a Montero reasumir de inmediato la comandancia en jefe de la Armada y a Merino retornar a Valparaíso, donde tenía sus funciones regulares de comandante de la base naval.

El lunes 27, la huelga nacional del transporte terrestre entra en su quinta semana. Ese día, la Dirección de Operaciones del Estado Mayor, donde se encuentra el coronel Virgilio Espinosa, que tres semanas después dirigía el campo de exterminio del Estadio Nacional, entrega un "Memorándum sobre la situación nacional e institucional", del que se conocen fragmentos que traducen el sentido de la campaña que los agentes de la subversión habían venido promoviendo dentro de las Fuerzas Armadas:

[...] No existe absoluta unidad entre los partidos que integran el gobierno... En la oposición, la unión es transitoria... Se ha agredido económicamente a la clase media por constituir el gran escollo para alcanzar la dictadura del proletariado... Tanto la clase obrera como la dirigente son indispensables e igualmente importantes... La propiedad privada tampoco es respetada... Las Fuerzas Armadas y Carabineros son, por construcción, contrarios a las doctrinas y procedimientos marxistas... Las Fuerzas Armadas cumplen actualmente exactamente su misión constitucional, pero se sienten íntimamente engañadas y frustradas al constatar que grupos extremistas adversos, que no vacilan en atacarlas y socavarlas, actúan con el beneplácito del partido de gobierno. [...] Se ha pasado a una nueva etapa del enfrentamiento, en que las Fuerzas Armadas han sido agredidas y penetradas (Armada, Edecán Naval, etc.). Se estima que la guerra no convencional ya ha comenzado... El Estado Mayor general del Ejército y las Direcciones que lo integran, deben prestar la adecuada y oportuna asesoría al comandante en jefe del Ejército para la toma de decisiones de trascendencia nacional...⁶

El memorándum está dirigido al comandante en jefe del Ejército, apenas cuatro días después del reemplazo de Prats. El martes 28 se suman a la huelga los gremios de comerciantes. Esa tarde, Allende ofrece públicamente a la dirección del movimiento popular su disposición a renunciar. Sin el acuerdo y compromiso de aquella no desea hacerlo, pues en este caso su dimisión supondría la quiebra de la UP, el desencadenamiento de acciones obreras anónimas, el derrumbe de la capacidad de dirección de la UP sobre las masas de trabajadores y la preci-

6. *El Mercurio* (11 septiembre 1974).

pitación del golpe militar, con todos estos fenómenos convertidos de pretexto en legitimación de una eventual masacre obrera.⁷

Las iniciativas para arrastrar a los oficiales vacilantes de la Marina contra el gobierno se suceden. El jueves 30, el vicealmirante Merino agudiza la confrontación con la UP al pedir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su calidad de juez de la I Zona Naval, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del senador Altamirano y del diputado Garretón, para someterlos a juicio bajo la acusación de "subversión de la Armada". Era una iniciativa que formaba parte de la dimensión ideológica y de cobertura propagandística de la insurrección en desarrollo.

El viernes 31, Allende analiza con el ministro de Defensa, Orlando Letelier —que ha asumido tres días antes esta cartera—, la delicada situación planteada en la Marina. Y le pide al ministro de Relaciones Exteriores, el dirigente socialista Clodomiro Almeyda, que intente convencer a Altamirano de la necesidad de hacer frente a la acusación sin poner en entredicho al Partido Socialista, ni las relaciones entre la Marina y el gobierno. Para ello aconseja que renuncie provisionalmente al cargo de secretario general mientras asume la tarea de desenmascarar el alcance real de la impugnación que están haciendo recaer sobre él. Almeyda se manifiesta de acuerdo, pero no persuadió a Altamirano.

Ese viernes, por la tarde, los almirantes de Valparaíso que encabeza Merino han convocado a la oficialidad en la Escuela Naval, para deliberar sobre la situación general de la Marina y del país. El comandante en jefe se ha trasladado a Valparaíso y resuelve encarar personalmente semejante reunión. Sin embargo, en el transcurso del almuerzo que le ofrecen los almirantes, éstos le disuaden de hacerlo "porque los ánimos están muy caldeados en su contra". El contraalmirante de menor antigüedad le sugiere que abandone la jefatura de la Marina. Montero responde que ha sido designado en el mando en no-

7. "No dudaría un momento en renunciar si los trabajadores, los campesinos, los técnicos y profesionales, los partidos de la Unidad Popular... así me lo demandaran o sugirieran" (alocución radiotelevisada en la tarde del 28 de agosto con motivo de la formación del último gabinete ministerial).

viembre de 1970 por el presidente de la república, y que sólo ante éste podía renunciar, ordena a Merino disolver de inmediato la asamblea de oficiales —lo que lleva a efecto— y retorna a Santiago. Esa misma noche, se presenta ante Allende, le informa de lo ocurrido y le manifiesta que debe presentar la dimisión al no contar con la confianza de su Alto Mando. El presidente le responde que necesita unas horas para adoptar una resolución, y ordena al ministro de Defensa que convoque al cuerpo de almirantes para el día siguiente, sábado, y en presencia del comandante en jefe les pida tomar posición sobre la situación en la Marina, mientras que el domingo 2 de septiembre por la mañana, en Cañaveral, recibe al general Orlando Urbina, inspector del Ejército, para analizar el conjunto de la situación militar.

Antes de resolver el problema de la Marina, Allende quiere conocer la evolución última en el cuerpo decisivo que es el Ejército. La víspera, en la reunión del cuerpo de almirantes, cuatro de éstos se han manifestado en favor de la renuncia de Montero y otros tres le respaldan —Arellano, Cabezas y Sepúlveda—. El segundo en el escalafón, Toribio Merino, llega a la edad de jubilación reglamentaria el 31 de diciembre siguiente. El almirante Montero es de la opinión que cederle en ese momento el paso a la comandancia en jefe, hasta su jubilación reglamentaria cuatro meses después, contribuirá a apaciguar el malestar en el Alto Mando. Es decir, razona en términos semejantes a los de Prats el 23 de agosto. Pero a diferencia de éste, Montero no atraviesa una depresión aguda y aparece dispuesto a continuar al frente de la Marina si el presidente lo estima oportuno.

La tarde de aquel domingo, tras la partida del general Urbina, Allende me comenta la situación de la Marina. Yo opino que la agitación en contra de Montero obedece a su lealtad al gobierno, y que al igual que ocurrió con Prats, intentan desplazarlo del puesto clave que ocupa por facilitar la sublevación. En los días anteriores, Montero ha condenado las torturas de que han sido objeto varias decenas de suboficiales y marinos, acusados a comienzos de agosto de "subversión" por su rival Toribio Merino, y ha ordenado la incoación de un sumario disciplinario contra los oficiales acusados de torturadores, así como de otro para investigar las denuncias de incitación a la

rebelión por parte de ciertos oficiales. Yo entiendo que aceptar la dimisión de Montero es contraproducente, al igual que lo era la de Prats, y sugiero lo mismo que propuse respecto de este último en la primera mitad de agosto anterior: pasar a retiro a los oficiales que encabezan la conspiración antes de aceptar reemplazar a un comandante en jefe cuya honorabilidad no ofrece dudas.

El día siguiente, lunes 3, Allende rechaza la renuncia de Montero, y el más activo de sus impugnadores —contraalmirante Huerta— es pasado a retiro. La orden correspondiente es firmada unas horas después.

Paralelamente, en el seno de la Unidad Popular se continuaba debatiendo la oportunidad de forzar una consulta electoral. En la segunda mitad de agosto, Allende había vuelto a plantear ante el comité político la necesidad de proceder a un referéndum, y una vez más encontró un rechazo unánime. Mientras, continuaba impulsando las negociaciones con el PDC a través de Briones. El día 28, éste era designado ministro del Interior.

El lunes 3 de septiembre, Pinochet estima oportuno comunicar al ministro de Defensa que

aquí hay una tropa de locos planteando que las Fuerzas Armadas deben adoptar una definición ahora, aun a costa de cien mil muertos, más bien que no un millón después en una guerra civil. Hago lo posible por pararlos, según las instrucciones que antes me diera mi general Prats y que me ha reiterado el presidente, y estoy visitando las unidades a este efecto. He encontrado en ellas un ambiente difícil... Pasar de inmediato a retiro a los oficiales que así se expresan puede violentar las cosas. Necesito un mínimo de tiempo para afianzar la gente de confianza en las unidades. Si se produce ahora un levantamiento, corremos el riesgo de que esta vez sea del conjunto de las Fuerzas Armadas, no de una unidad aislada como el 29 de junio [...]

Allende convoca al comité político de la UP para que escuche el informe del ministro de Defensa sobre la situación militar. La reunión tiene lugar el miércoles 5, y en ella el presidente expone la urgencia de una opción entre: a) recurrir a las urnas, b) un acuerdo con la Democracia Cristiana, c) formar un gabinete de "seguridad y defensa nacional" (integrado esencialmen-

te por militares). Por último, si los partidos no se ponen de acuerdo sobre alguna de las opciones anteriores, el presidente solicita que durante un período máximo de tres meses acepten que él tome decisiones, según su discreción, sobre las opciones fundamentales, pues el gobierno no puede permanecer semiparalizado en medio de la insurrección. La respuesta de los partidos políticos debía serle entregada, por escrito, el día siguiente, jueves 6.

Preside el comité político de la UP en ese entonces el senador Adonis Sepúlveda, secretario general adjunto del Partido Socialista. Los dirigentes máximos de los partidos deliberan sobre el camino a seguir. No se ponen de acuerdo. Transcurre el día 6, y la contestación no llega a Allende. Pasa el día 7 y tampoco. Pero ya el 4, en cambio, el PDC había resuelto acusar constitucionalmente a los ministros del gabinete, para destituirlos y dejar al país sin gobierno. Esa misma mañana del martes 4, mientras Pinochet llama a Tomás Moro preguntando a qué hora puede recibir el presidente de la república a los tres comandantes en jefe para felicitarle con motivo del tercer aniversario de su elección, la sede del Partido Radical es incendiada, y por la tarde más de setecientos mil personas desfilan ante la Moneda para celebrar la victoria electoral de la UP tres años antes. El día 5, el Partido Nacional pide públicamente que la huelga en curso se prolongue hasta la caída del gobierno. Simultáneamente, a las costas chilenas llega una escuadra norteamericana, con el pretexto de participar en maniobras conjuntas con la chilena, pero ésta se niega a zarpar del puerto de Valparaíso. Allende interviene y el comandante en jefe de la Marina da órdenes terminantes, el viernes 7, de que la escuadra leve anclas e inicie los ejercicios náuticos en alta mar el lunes 10. Los almirantes de Valparaíso se agitan, pero sin el respaldo del Ejército no pueden hacer más.

La tarde del día 5 me dirijo a la Moneda con el exclusivo propósito de exponerle a Allende mi sentimiento de imposibilidad de postergar por más tiempo la adopción de medidas militares extremas que impidan la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas, reiterando lo que había venido proponiendo desde el mes de mayo. Pero esta vez agregó: "Parece obvio que en estos momentos una acción gubernamental de esta envergadura podría llevar a los afectados a precipitar la sublevación mi-

litar, con mayor facilidad que en los meses anteriores. Desmantelar la conspiración disminuyendo el riesgo de guerra civil requiere que el gobierno se halle en una posición militar de neto predominio, lo que no puede lograrse a estas alturas sino armando a los trabajadores de Santiago, en coordinación con los mandos leales del Ejército. De modo que el gobierno asegure en todo caso el control militar de la capital, proclame el peligro de catástrofe nacional en que se encuentra el país y adopte de inmediato las medidas para desarticular al sector putschista de las Fuerzas Armadas. La derecha prepara un golpe para destruir las instituciones. El gobierno sólo puede mantenerse ahora mediante una acción militar en defensa de la legalidad democrática...". Cuando terminé mi exposición, que Allende escuchó sin interrumpir, me respondió en forma reflexiva, como pensando en algo distante: "Para llevar a cabo esa acción necesitaríamos un comandante en jefe del Ejército dispuesto a jugarse entero por ella".

Hacia tiempo que el gobierno estaba moviéndose dentro de un círculo vicioso. En el curso de los meses anteriores, había perdido la supremacía militar, y Allende sabía mejor que yo con qué facilidad ciertas iniciativas podían precipitar la sublevación y sumergir el país en la guerra civil. De ahí que continuara buscando salidas políticas a pesar de que, en esos postremos días, también él estaba persuadido de la necesidad del recurso a medidas de fuerza. Pero le aparecía manifiesto que la capacidad militar era aplastantemente superior del lado de Estados Unidos y sus aliados dentro de Chile.

Paralelamente, los trabajadores se sienten inseguros, indefensos, frente a las manifestaciones de odio y violencia de que son objeto. El terrorismo derechista aumentaba día a día, pero los lugares allanados por las tropas eran los propios centros de trabajo que mantenían en actividad la economía del país. Y los soldados vejaban, cuando no mataban, a los obreros que se encontraban en sus puestos, en las fábricas. La desaparición de Prats, de su significado, acrecentó la incertidumbre entre ellos. Augusto Olivares, asesor de prensa del presidente, insistía todos los días en este punto. Sin preparación orgánica para una realidad como la que estábamos viviendo, la capacidad de disuasión del movimiento popular aparecía más que nunca a merced

de lo que pasara dentro del Ejército. Nunca debió llegarse a situaciones de esta naturaleza, y con menor motivo en pleno ascenso de una crisis contrarrevolucionaria. Como dijera el clásico Spinoza:

Un estado cuya salvación depende de la lealtad de algunas personas, y cuyos asuntos, para estar bien dirigidos exigen que quienes los dirigen quieran actuar lealmente, no tendrá ninguna estabilidad. Para que pueda subsistir habrá que ordenar las cosas de tal manera que quienes administran el estado, ya estén guiados por la razón ya impulsados por algún afecto, no puedan ser llevados a proceder de modo desleal o contrario al interés general.⁸

El viernes 7, por la mañana, el embajador de Estados Unidos —Nataniel Davis— telefona al ministro de Defensa, Orlando Letelier. Ha sido convocado a Washington a una reunión de urgencia con el secretario de Estado, H. Kissinger, y desea saludarlo antes de partir, aquella misma tarde. Davis anticipa que retornará a Santiago el martes 11, y pide una audiencia con Letelier para el miércoles 12, a fin de conocer el pedido de aprovisionamientos que las Fuerzas Armadas solicitan adquirir en Estados Unidos. Sin embargo, el regreso del embajador Davis se ve precipitado en veinticuatro horas, y está de vuelta en Santiago la tarde del lunes 10. Poco después, un portavoz de la Casa Blanca revelaría que la embajada sabía que el golpe de estado debía tener lugar el 11, y que, por supuesto, no se previno al gobierno de Chile...⁹

Lo cierto es que fue al atardecer de aquel viernes 7 cuando llegaron a la Moneda noticias de movimientos anormales en la base naval de Valparaíso. Pinochet, acompañado de otros oficiales, se traslada en helicóptero a ella con el pretexto de "disuadir a los marinos de hacer cualquier locura". Es la noche en que la dirección del complot dentro del Ejército comunica la fecha del golpe de estado: el viernes de la semana siguiente, 14 de septiembre.¹⁰

8. Spinoza, *Tratté politique*, 1676, 1-6.

9. *New York Times* (14 y 15 septiembre 1973).

10. *Ercilla*, Santiago (octubre 1973), declaraciones del teniente coronel P. Ewing, secretario del Estado Mayor antes de la insurrección.

Fue también el viernes 7, por la noche, cuando Allende era el invitado de honor de la ceremonia que el Alto Mando y la oficialidad de Carabineros celebraban en la Escuela de Suboficiales. La misma noche que el general Prats recibía, en su residencia, al ministro de Defensa y le hacía partícipe de su temor de una sublevación el viernes 14. Carlos Prats es de la opinión que sólo la DC tiene a esas alturas la posibilidad de detener el golpe de estado, y en particular Eduardo Frei, presidente del Senado. El sector de la oficialidad que a lo largo de tres años ha venido luchando por evitar una acción bélica contra el movimiento popular, ha terminado por verse reducido a una posición minoritaria en la medida que la oficialidad próxima a la DC se ha sumado a la de extrema derecha.

Los generales vinculados a la Democracia Cristiana aparecían siendo Bonilla y Arellano, ninguno de ellos con mando de tropas. Prats dice desconfiar también en ese momento de los jefes de la III y IV División, generales Carrasco y Bravo, con asiento en Concepción y Valdivia, respectivamente, así como del general Torres de la Cruz, jefe de la V División, en Punta Arenas. Por otro lado, del recién designado jefe de la II División —la de Santiago—, Herman Brady, siempre había tenido profunda desconfianza. Divisiones II, III, IV y V. El Ejército chileno cuenta sólo con seis divisiones.

Prats entendía la noche del 7 de septiembre que el presidente de la república debía alejar de las Fuerzas Armadas a cinco o seis generales antes del viernes 14 siguiente, ante la amenaza del levantamiento en siete días más. Demasiado tarde. El antiguo comandante en jefe recomendaba esta medida dos semanas después de haber abandonado la jefatura máxima del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Era antes de esta fecha cuando hubiera debido ponerse en práctica una medida semejante... Pero Prats continuaba, aquella noche, mostrando gran confianza en Pinochet y en su lealtad hacia el presidente.

El síndrome de la desestabilización del sistema sociopolítico y económico chileno que informaba el plan de golpe de estado de la CIA y las compañías multinacionales, había fracasado en 1970 pero se había producido tres años después. En 1970, la UP accedió al gobierno sumando a sus propias fuerzas las de un PDC dirigido por su sector centro-izquierda, en un contexto en que la lucha entre la burguesía y el proletariado era cualitati-

vamente menos aguda que en 1973. Pero ahora era el propio sector Frei quien controlaba la DC. En semejantes circunstancias, en la medida que la suerte del gobierno UP terminara por estar en manos de la DC, ¿qué otro destino podían esperar las organizaciones obreras sino verse constreñidas a subordinarse a los intereses capitalistas y de Estados Unidos? Éste era el profundo contrasentido que encerraba aceptar que la revolución prosocialista alcanzara a estar un solo momento, en su desarrollo, a merced de la burguesía —democrristiana u otra—, y que por sí mismo revela el principal error estratégico que se cometió después de 1970. Todavía el 24 de junio de 1974, nueve meses después del putsch, el Comité Cuarenta del gobierno de EE.UU. aprobada una partida de 50.000 dólares a entregar al PDC chileno, para retribuirle los servicios prestados para derrocar al gobierno de su propio país.¹¹

La tarde del sábado 8, Allende está persuadido de que el riesgo de una sublevación militar generalizada es inminente. Ha convocado al general Prats y desde las 14 hasta las 20 horas ha estado reunido con él. Carlos Prats¹² le hace partícipe de su sentimiento de que “un golpe se prepara para antes de diez días”. Lo que no sorprende a Allende, pues a lo largo de esa semana Pinochet mismo le ha estado informando que se observaban síntomas de inquietud en el conjunto del Ejército. Tampoco Prats sospecha aún de Pinochet, quien la víspera ha tomado la precaución de dirigirle una carta expresándole su inquebrantable resolución de hacer que el Ejército continúe cumpliendo su función institucional y respaldando el gobierno constitucional. Sin embargo, Prats se muestra muy inquieto de los síntomas que llegan hasta su lugar de retiro, y teme lo peor. En un momento de la conversación, Allende menciona que va a convocar un referéndum. Prats le responde que ya no es tiempo para ello. “¿Qué propone Ud. entonces, general?” Prats: “Una tregua, pida Ud. la autorización del Senado y salga del país durante un año”. Piensa Prats que esto permitirá moderar el agudo conflicto social. Apreciación semejante a la que tuvo el 22 de agosto, creer que la personalización accidental en un individuo de los dilemas colectivos puede hacer que la desapari-

11. *Covert action in Chile...*, p. 61.

12. Del contenido de esta conversación transcribo la versión del general Prats, julio de 1974.

ción del primero resuelva los segundos, llevándole a aceptar la ilusión de que su alejamiento del Ejército satisfaría las exigencias de sus adversarios y contribuiría a conservar su unidad tras el gobierno, cuando en realidad facilitaba la unidad de acción de los sediciosos.

La reacción de Allende fue tajante: "¿Abandonar yo el país en las presentes circunstancias? Eso jamás..., siempre habrá algún regimiento leal al gobierno". Prats cambió el tema de conversación por temor a ser interpretado como que estaba presionando al presidente a dimitir. En el transcurso de la reunión, Allende pidió a su secretaria privada —Miriam Contreras— que convocara para el mediodía siguiente, en Tomás Moro, a los generales Pinochet y Urbina. Terminada la conversación con Prats, la última que debía tener lugar entre ambos, convocó a la comisión política del Partido Comunista a las 10,30, también de la mañana siguiente. El PC y el Ejército. Por este orden. La fuerza obrera más organizada de la UP y la fuerza militar determinante, diferenciadas y vigilantes una de otra pero reunidas alrededor de la autoridad representativa del estado y del movimiento popular en su conjunto. Éste es el triángulo de fuerza sobre el que se había apoyado el gobierno entre 1970 y 1973, cuya fractura constituía el objetivo mayor de la oposición. El nexo de articulación entre las dos fuerzas, el presidente de la república, va a hacer un nuevo esfuerzo el domingo 9 de septiembre para mantenerlas unidas.

Mientras tanto, la noche del sábado 8, Adonis Sepúlveda ha redactado la carta-respuesta del comité político al presidente de la república. Allende está impaciente por conocerla y envía al doctor Bartulín, su médico personal, a buscarla. A medida que la leerá, comprobará una vez más cómo, en el momento de la decisión principal, las divergencias tácticas y estratégicas tienen paralizada a la dirección del movimiento popular. La comunicación fijaba la posición del órgano resolutivo común de los partidos políticos sobre sus proposiciones: acuerdo con la DC, rechazado; convocatoria de un referéndum, rechazado; formación de un gobierno de seguridad y defensa nacional, rechazado; voto de confianza al presidente para que adopte temporalmente decisiones inaplazables, rechazado. Recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores: ninguna.

La dirección de la UP se hallaba paralizada por sus contradicciones internas ante las circunstancias táctico-estratégicas a las que había sido abocado el proceso revolucionario, muy distintas de las que informaba el proyecto del programa común de 1969 y para las que no contaba con los instrumentos idóneos de solución, ni dentro del país ni en su contorno internacional. Contrariamente a lo que ocurría con la burguesía, que había invertido la situación de 1970 al aislar socialmente al bloque popular de modo tal que el centro de gravedad político-militar de la sociedad quedara enfrentado con la UP, mientras que desde el exterior la potencia político-económico-militar de Estados Unidos apoyaba activamente la subversión.

EL "TEMPO" DE LA TÁCTICA NO ES EL "TEMPO" DE LA ESTRATEGIA

Una constatación se impone. El tipo de unión de la clase obrera y de otras fuerzas populares que caracteriza a la UP es una condición necesaria, aunque no suficiente, para conquistar el *gobierno* por la vía político-institucional. Pero aquél no basta para alcanzar el objetivo estratégico —conquista del *poder* por los trabajadores— si, además, no cuenta con una clara unidad en torno de las concepciones tácticas esenciales.

Las formas tradicionales de movilización y acción de masas de la clase obrera, a partir de diciembre de 1971 son progresivamente desarrolladas por la derecha. Así, por ejemplo, la primera huelga general durante el gobierno UP fue organizada por la propia izquierda el 4 de septiembre de 1972. Duró media jornada y tenía un significado disuasivo: demostrar el respaldo al gobierno frente a las actuaciones de la burguesía. Pero cinco semanas después era esta última la que estaba en huelga insurreccional. El 21 de junio de 1973 tiene lugar una huelga nacional organizada por la CUT en apoyo del gobierno popular. Pero ya la insurrección militar estaba fijada para la semana siguiente. Y no fue la huelga del 21 la que la disuadió. Al contrario, mientras esa mañana cerca de un millón de trabajadores desfilaron por las calles de la capital y frente al palacio del gobierno, en los cuarteles se discutía sobre la conveniencia de sacar las tropas a la calle en ese mismo momento. Hasta tal punto había sed de masacre obrera. Cuando la burguesía dispone de fuerza

militar propia en condiciones de abrir fuego, y la clase obrera no, la huelga general de los trabajadores no tiene poder ofensivo ni defensivo.

La UP, como conjunto, no logró que las tácticas y estrategias operacionales que cohabitaban en ella se refundieran en una estrategia general específica, adecuada a la realidad nacional e internacional del país. A pesar de sus esfuerzos y resolución para lograrlo, Allende no consiguió imponer una sola estrategia general por sobre la heterogeneidad interna de los partidos de la coalición. De ahí que las innovaciones tácticas dentro de la UP muestren una cierta tendencia a contradecir o retardar las exigencias de la estrategia específica dentro de la cual actuaba Allende.

En términos globales, dentro de las concepciones de la UP en este terreno encontramos la adaptación diacrónica de tácticas construidas en otras realidades, lo que repercute en un retardo estratégico respecto de la realidad concreta en que se está desarrollando el proceso revolucionario.

Estados Unidos y la burguesía, desde este punto de vista, mostraron mayor clarividencia y capacidad de conjunción de los diversos sectores de la oposición en torno de una táctica dominante. A lo largo de 1972 y hasta el 11 de septiembre de 1973, la insurreccional. Después, la antiinsurreccional. Pero no confundieron o entorpecieron la una con la otra.

Durante 1971 y 1972, táctica y estrategia se hallaron distanciadas en el seno de la UP. El margen de flexibilidad y de acción para la primera era amplio, sin poner en juego la segunda. Después de junio de 1973, las decisiones y acciones tácticas están fundidas con las acciones y decisiones estratégicas.

Así, mientras el recurso al referéndum en 1971 era esencialmente una opción táctica, el 5 de junio de 1973 ya sólo era viable como iniciativa táctica en la medida que formaba parte de un cambio de línea operativa —“prepararse para resistir un enfrentamiento directo en los tres o cuatro meses siguientes”—. Pero en septiembre el mismo referéndum no era viable ni siquiera como acción estratégica, porque se hallaba desprovisto de defensa militar.

Sin embargo, cuando en 1973 un sector del PS, del MAPU, y de la Izquierda Cristiana resuelve prepararse para la guerra civil (obtención de armas, preparación de hospitales clandesti-

nos, cursos de primeros auxilios sanitarios, creación de una infraestructura de comunicaciones, etc.), ello no sólo rompe la unidad táctico-estratégica de la UP —pues Allende y el PC continúan buscando un camino distinto al de la guerra—, sino que contribuye a facilitar la sublevación militar. Pues todos aquellos preparativos son detectados desde un principio y observados muy de cerca por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, lo que permite a los conspiradores manipularlos y magnificarlos para introducir entre la oficialidad vacilante la psicosis de que de un momento a otro van a ser atacados por cuerpos armados “enemigos”. Campaña de movilización psicológica que fue particularmente intensa dentro de los cuarteles en julio y agosto de 1973.

Si la “preparación para la guerra” se halló siempre condicionada por la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales con un sentido corporativo altamente desarrollado, la alternativa para el movimiento popular debió haber sido la “preparación contra la insurrección”, lo que sí podía hacerse abiertamente, en colaboración con el gobierno y un vasto sector de las Fuerzas Armadas. Pero debía haber sido puesto en práctica cuando los fundamentos de la táctica político-institucional eran bien robustos, es decir, en 1971, y para consolidarlos, no para demolerlos como suponía la lógica insurreccional que animaba al sector minoritario de la izquierda.

Entre junio y septiembre de 1973 se produce una manifiesta disociación entre la base y el aparato de los partidos, por un lado, y el gobierno, por el otro. Mientras los primeros comienzan a operar de acuerdo con las exigencias tácticas de la antiinsurrección —demasiado tarde— o de la insurrección pura y simple —siempre sin destino—, estamos viendo cómo Allende, hasta cierto punto respaldado por el PC, se mantiene dentro de las tácticas de la vía institucional. Pero ya para ese entonces las posibilidades de éxito de cualquier opción eran reducidas. Las reservas estratégicas son cada vez más superfluas, cada vez más inútiles y peligrosas, cuanto más general es su propósito. Lo que sí resultaba diferente, y mucho, era el costo inmediato y a mediano plazo para el movimiento popular de cada uno de los desenlaces posibles en 1973.

Surge una cuestión. Las reservas tácticas o estratégicas de la UP en 1971 para prolongar y renovar las condiciones de

realización de su programa, ¿son accesibles cuando el sistema político-económico capitalista se halla en avanzada desintegración? En otros términos; si la táctica político-institucional no alcanza, en tiempo útil y por cualquier causa, los objetivos estratégicos que persigue, ¿no puede ello obligar al cambio de modalidad de acción táctica? En nuestro caso, ello sólo era posible previendo la necesidad desde un comienzo, y actuando en consecuencia. Lo que presuponía, entre otras, las medidas de preparación antiinsurreccional. Pero, además, si la crisis del sistema capitalista coincide con el planteamiento de la cuestión del poder en términos definitorios entre los dos bloques sociales antagónicos en pugna, las reservas tácticas de la vía alternativa a la de la guerra civil sólo son accesibles bajo dos supuestos mínimos: *a)* si los trabajadores pueden ganar la confrontación democrática y cuentan con fuerza militar para hacerla respetar, por un lado, y *b)* si la burguesía, tanto si gana como si pierde el enfrentamiento político, no tiene fuerza militar suficiente para imponer su dictadura o el estallido de la guerra civil.

En cambio, las reservas de la táctica político-institucional no resultan accesibles si las anteriores cuestiones surgen en un contexto en que el proletariado *no* acepta resignada y pasivamente su eventual derrota política —porque teme que ello significa abrir el paso a la contrarrevolución—, o cuando la burguesía cuenta con bastantes recursos militares para movilizar antes que aceptar la pérdida definitiva de su hegemonía político-económica.

Para el gobierno, la situación a partir de junio de 1973 consistió cada vez más en cerrar el paso a la contrarrevolución, agotando todos los recursos políticos, sociales y militares que, aunque quebrantados, aún parecían hallarse a su disposición, dando por descartado que la alternativa —los recursos de la estrategia directa (guerra civil, en una u otra forma)— no existía para la Unidad Popular.

A partir de junio de 1973, el gobierno tiene necesidad de destituir a los mandos militares que parecen comprometidos en la conspiración. Pero desea hacerlo evitando una reacción violenta que precipite la insurrección militar. Entre mayo y agosto de ese año, Allende siente que la correlación dentro de las Fuerzas Armadas no le permite atacar de frente a la oficialidad golpista, pero a su vez ésta no se considera aún bastante fuerte

para derrocar al gobierno. Sin embargo, las circunstancias externas a las Fuerzas Armadas, la situación socioeconómica y política del país, hacían que el tiempo corriera en contra del gobierno.

En la primera semana de agosto el general Prats —promovido ministro de Defensa Nacional—, cree todavía disponer de bastante tiempo para renovar el Alto Mando sin recurrir a medidas de emergencia de aplicación inmediata. Error de Prats, o indecisión en la hora de la verdad, que arrastra a Allende. Pero es la culminación de un error mantenido a lo largo de todo el período de la UP, en la medida que la dirección específicamente política del aparato militar del estado ha sido débil al no disponer la UP de una doctrina militar coherente con el proyecto de sociedad del programa común, sino de una variedad de enfoques contrapuestos entre sí y, en la práctica, insuficientes para construir una política de democratización interna del aparato militar compatible con la realidad de las Fuerzas Armadas y la estructura estatal de la que formaban parte.

En la segunda semana de agosto de 1973, la actuación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ruiz Danyau, precipita la crisis general de la iniciativa político-militar adoptada por el presidente la semana anterior. Ruiz es destituido y, en la semana siguiente, Allende decide alejar del Ejército a los seis generales que se sabe están complotando. Y dispone un plan conjunto CUT-Carabineros-Ejército para llevarlo a cabo, incluso corriendo el riesgo de que ello provoque una insurrección parcial. Pero, una vez más, es demasiado tarde, pues ya hemos considerado cómo Prats se derrumba frente a esta situación y dimite el 23 de agosto, junto con los jefes de la II División, de la guarnición de Santiago y de los institutos militares de la capital. El plan ni siquiera fue iniciado. Ese día el gobierno perdió definitivamente la batalla militar.

Hemos visto que todavía el 27 de agosto, Luis Corvalán se manifestaba reservado ante la intención de Allende —frustrada por Pinochet— de pasar a retiro a los generales del Ejército que encabezan la conspiración. Corvalán teme una reacción adversa de las Fuerzas Armadas. Peligro real, ciertamente, pero que cinco días antes Allende había resuelto asumir como último recurso. El PC continuaba intentando imponer su objetivo polí-

tico inmediato —evitar la guerra civil— sobre la guerra misma. Para ello simultaneaba la amenaza al adversario con la negociación. Pero ya para ese entonces el adversario había subordinado la defensa de su objetivo político específico a la necesidad de recurrir a la guerra.

LA DIRECCIÓN ÚNICA, CONDICIÓN ESTRATÉGICA INDISPENSABLE

La sorpresa en la estrategia constituye un medio infinitamente más eficaz e importante que en la táctica. En esta última, la sorpresa raras veces alcanza el nivel de una gran victoria, mientras que en la estrategia a menudo ha dado por terminada toda la guerra de un golpe. Pero debe observarse que el uso ventajoso de este medio presupone que el adversario haya cometido algunos errores grandes y raros, y al mismo tiempo decisivos.

El recurso a la sorpresa en la hora de la acción, resultaba prácticamente imposible para la UP dada la estructura interna de su organización. Ni el secreto ni la rapidez en las decisiones eran sus características operativas. Con lo que nuevamente nos encontramos con el neurálgico problema: la ausencia de una dirección unitaria en el seno de la UP. El fracaso de los reiterados intentos de Allende para dotar a la coalición de un mando único y disciplinado en torno de una táctica coherente, trajo como consecuencia que el proceso revolucionario entrara en su fase de resolución estratégica sin que el movimiento popular dispusiera de los instrumentos de dirección idóneos para las nuevas circunstancias.

En junio-julio de 1972, cuando el desarrollo del proceso revolucionario ya hacía imperiosa una mayor unidad entre los distintos partidos populares, los partidos de la UP se constituyeron en Partido Federado de la UP, concebido como instrumento para acumular votos en las elecciones parlamentarias de 1973 y evitar su dispersión entre las diferentes listas de candidatos. Sin embargo, a la creación del Partido Federado se opuso una tenaz resistencia, en particular por parte del PS. El presidente Allende tuvo que acudir personalmente a un pleno extraordinario de este último para evitar, *in extremis*, que la iniciativa fracasara. Finalmente, el Partido Federado pudo nacer. Pero, de nuevo, el peso de la inercia se impuso sobre la

necesidad de innovar. La aceptación del Partido Federado por los partidos de la UP fue una simple ficción electoral, sin la menor consecuencia en sus estructuras orgánicas y en su práctica. Cada partido llevó a las elecciones parlamentarias su propia lista de candidatos y slogans, bien diferenciados del de los restantes partidos de la UP. El Partido Federado de la UP apenas contó con algo más de dos millones de escudos para financiar sus actividades. Pero tuvo que ser el presidente de la república quien consiguiera esta suma. Ningún partido quiso aportar al Partido Federado un porcentaje de su presupuesto electoral, ni siquiera de los espacios que tenían contratados en los *mass-media* para la propaganda —Allende había solicitado en vano un 10 por ciento—.

Al día siguiente de las elecciones legislativas, le propuse a Allende aprovechar la coyuntura para intentar de nuevo la unidad de dirección en el seno de la UP, en torno de objetivos precisos y renovados. La sugerencia fue aceptada. El presidente buscaba reconvertir la UP, de coalición heterogénea en un movimiento con conducción y táctica unitarias y propuso hacer del Partido Federado una estructura intermedia entre el multipartidismo centrífugo —realidad de la UP— y el partido único —solución imposible en aquel período—. El 15 de marzo de 1973, Allende planteó públicamente a los dirigentes de la UP la necesidad de adaptar las formas organizativas del conjunto de los partidos a las exigencias de la nueva realidad.¹³

El día 4 de marzo se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias; con ellas culmina todo un período de lucha electoral [...] El extraordinario apoyo recibido por los partidos que conforman la base de sustentación del gobierno está mostrando los inmensos anhelos de continuar avanzando en las transformaciones revolucionarias de nuestra sociedad que se anidan en lo más profundo del pueblo chileno [...] Pero, a la vez, la inmensa confianza depositada en nosotros significa una mayor responsabilidad para quienes dirigimos el proceso revolucionario.

Se han creado las condiciones políticas mínimas para que el Partido de la Unidad Popular salga de su estado embrionario actual y se imponga como instrumento para el futuro de la

13. Carta pública de Salvador Allende al presidente del Partido Federado de la Unidad Popular, senador Rafael Agustín Gumucio (15 marzo 1973).

revolución. Es una exigencia de las masas, es una condición de gobierno, es una necesidad histórica. El pueblo debe contar con una dirección política unitaria y eficaz. Pueblo, gobierno, organizaciones de masas, deben actuar en un mismo sentido.

No se trata de formar un partido único, se trata de articular a los diferentes partidos en un solo organismo que, respetando su autonomía, los integre y complemente mejorando su accionar [...] Dada la realidad de nuestro país y la enraizada personalidad histórica de tres partidos de la UP junto a otros tres de más reciente creación, parece natural que el partido de la Unidad Popular, en esta etapa, tuviera una estructura acorde con la de los partidos, y una base de sustentación en las organizaciones de masas de la clase obrera, de los campesinos, de los trabajadores y del pueblo en general...

La función del partido de la UP debería ser la de dirigir la acción conjunta del gobierno y de las masas. Contando para desempeñar su función con la herramienta fundamental que es el programa básico de gobierno de la UP y su expresión práctica, que es la plataforma de gobierno de la UP [...]. Estimo oportuno plantear la urgencia de organizar un Congreso Nacional del partido de la UP que, de modo orgánico y planificado, promueva la más vasta participación del pueblo que nuestro país haya conocido jamás, que le dé posibilidades reales y auténticas de decisión en todos los niveles, y muy especialmente en aquellas que se refieren a la producción, distribución y consumo de bienes...

El Congreso debiera abordar [...] las grandes cuestiones del momento: consolidar la base del gobierno, rescatar a los sectores populares bajo influencia política e ideológica de la burguesía, ampliar la incorporación de los sectores medios a la magna obra de abrir camino a una nueva sociedad...

Entre las materias a discutir por el Congreso, Allende propone:

[...] lograr la plena incorporación de la clase obrera en la dirección del proceso económico y político, en todos los niveles..., lograr la participación de las organizaciones populares en los aparatos administrativos... desarrollar las instituciones del poder popular... defender la democracia y la revolución contra los sediciosos y los que buscan la guerra civil... establecer las acciones de masas más idóneas para impulsar el cambio de régimen institucional hacia formas de organización política de transición al socialismo...

El Congreso del Partido de la Unidad Popular tuvo lugar, finalmente, en el mes de mayo siguiente. Pero resultó una nueva frustración. Los partidos obreros no aceptaron ni el proyecto que para su organización había propuesto Allende, ni la instauración de una conducción unitaria en el seno de la UP, ni tampoco procedieron a unificar sus tácticas en función de la realidad que vivía el país. En el fracaso de la iniciativa del 15 de marzo de 1973 radica, en mi opinión, una de las últimas causas de la derrota estratégica de la UP seis meses después, y la primera causa del atraso con que los partidos populares han convenido entre ellos una alternativa política viable al régimen de Pinochet —inexistente todavía dos años después del golpe de estado—. La consolidación y desarrollo de todo proceso revolucionario llega un momento que exige y presupone la unidad táctica y de conducción de las organizaciones políticas que lo dirigen. De otro modo, el proceso revolucionario termina en frustración o en el triunfo de la contrarrevolución.

En marzo de 1973, la unidad de conducción en el seno de la UP era un prerequisite para mantener la unidad de comando político-militar del gobierno. De ahí que Allende tomara simultáneamente la decisión de cortar el paso a las iniciativas tácticas del MAPU, convocar el congreso del Partido de la UP y poner término a la participación de las Fuerzas Armadas en el gabinete. Las tres medidas eran complementarias. La primera buscaba lograr que la unidad táctica de la UP se hiciera en torno de una lógica operativa distinta de la directa-insurreccional. La segunda perseguía imponer la dirección unitaria entre los partidos obreros y populares. Y la tercera facilitar la unidad de las instituciones militares en torno de la función que mejor podía mantenerla: la profesional, marginada de la política contingente. En los meses subsiguientes, se dio una estrecha correspondencia entre las sucesivas manifestaciones de divergencias tácticas y de dirección dentro de la UP, por un lado, y, por otro, las de involucración directa de las Fuerzas Armadas en funciones esencialmente políticas.

La resolución de contener al MAPU fue adoptada por Allende el 3 de marzo, unas horas después de que se hubieran hecho públicos los planteamientos de este partido en el sentido de orientar la UP hacia una vía táctica directa, en favor de "una agudización extrema de la crisis económica, social y

política, que significa poner en máxima tensión la lucha de clases, desembocando incluso en la guerra civil..."¹⁴

La línea que el MAPU se proponía impulsar era presentada en términos como los siguientes:

Hay voluntad en el PC, en el sector allendista del PS, en las Fuerzas Armadas y en los sectores reformistas y freístas del PDC, para buscar una salida de centro, un reordenamiento del cuadro político y económico, capaz de evitar la crisis total y la guerra. Y esa salida no parece imposible [...]

Simultáneamente con el predominio que han ido adquiriendo las fuerzas de centro dentro del gobierno, las fuerzas proletarias y revolucionarias (i.e., las adversas a una "salida de centro") se han ido fortaleciendo a nivel de masas y han ido avanzando en la construcción de sus instrumentos orgánicos. Esto les permite aprovechar en su forma las contradicciones que el propio viraje al centro del gobierno va agudizando o creando. Les permite avanzar en el cambio de la hegemonía actualmente existente al interior de la UP e impedir, simultáneamente, la consolidación de una estabilidad de centro [...]

Hoy, más que nunca antes, "en las masas más que en el gobierno reside nuestra fuerza" [...] Nuestro objetivo [...] es ir avanzando en la creación de las condiciones que permitan cambiar la hegemonía centrista de la UP por otra hegemonía, [...] desde dentro de la UP y del gobierno [...] Ante cada paso de las fuerzas de centro tendente a implantar el "reordenamiento", nuestra tarea es plantear la alternativa proletaria [...] para avanzar en la perspectiva nuestra [...]

Es necesario desarrollar, al interior de la UP y del gobierno un "polo socialista", que vaya ganando terreno al polo centrista hoy dominante [...] Entre las tareas que podrían lograr un vuelco a corto plazo en la correlación de fuerzas dentro de la UP [está] una ruptura de nuestras relaciones con el imperialismo, que los sectores de izquierda podrían obligar a provocar [...]¹⁵

Es digno de subrayar la importancia que la anterior perspectiva táctica atribuía a impedir la *estabilización* del gobierno

14. Documento interno del MAPU, del 12 de febrero de 1973, publicado en la primera página de *El Mercurio* tres días antes de las elecciones legislativas del 4 de marzo siguiente.

15. *Ibid.*

de Allende, y a provocar su *enfrentamiento* directo con Estados Unidos. Precisamente dos de los objetivos principales que, como hemos visto, perseguía el gobierno norteamericano como medio de derrocar al de Chile. Por esta razón Allende llevó a cabo las gestiones encaminadas a dividir el MAPU, el 7 de marzo, y aislar a la directiva que buscaba tan irracionales metas.

Pero si con la división del MAPU el presidente Allende deseaba facilitar la unidad táctica dentro de la UP, indispensable para lograr la unidad de dirección, ¿por qué rechazaron los partidos Socialista y Comunista la posibilidad de hacer del Partido Federado de la UP un organismo de conducción unitaria, superior a la alianza electoral tradicional e intermedia respecto del partido único? La concepción teórica del partido que informaba tanto al PC como al PS ¿les llevaba a pensar que la unidad debía establecerse en torno de cada uno de ellos individualmente considerados, no de ambos ni menos del conjunto de los seis partidos coaligados dentro de la UP? La dirección única del proceso revolucionario ¿sólo podía tener lugar cuando el PS hubiera absorbido o subordinado, de un modo u otro, a las restantes organizaciones?, ¿o cuando hubiera logrado algo semejante al PC? Es muy probable que ambos partidos hayan pensado de ese modo, sin percibir que persistir en la misma posición significaba aceptar antes la derrota histórica de uno y otro que no la búsqueda de nuevas formas de organización.

El tercer partido de la coalición que se definía como marxista-leninista, el MAPU, por su parte razonaba en términos semejantes:

La ausencia de un partido consecuentemente revolucionario y proletario, efectivamente marxista, capaz de operar realmente como vanguardia en cada coyuntura concreta, ha sido la manifestación mayor, al mismo tiempo que la causa principal, de la debilidad ideológica del proletariado chileno. [El proletariado] debe construir, a breve plazo, el instrumento partidario que le garantice, en las condiciones históricas actuales, una sólida y eficiente dirección marxista. [...] no es posible hoy día impulsar un movimiento auténticamente revolucionario, en nuestro país, al margen del entendimiento y acción conjunta entre todos los partidos y fuerzas que de una u otra manera

expresan las posiciones proletarias y, en particular, al margen del entendimiento entre el PC, el PS y el MAPU [...]

para agregar a continuación su rechazo a cualquier tentativa de establecer una dirección unitaria que no pasara por la subordinación de los restantes partidos al *propio*:

Sin embargo, ese entendimiento no podrá ser jamás una subordinación a ninguna dirección única que reste autonomía a la propia acción partidaria. Ni podrá ser jamás un entendimiento que busque la conciliación entre las dos líneas estratégicas fundamentales que se expresan en los partidos obreros chilenos [...] Las posiciones proletarias son absolutamente irreconciliables con toda línea estratégica burocrática gradualista, centrista (i.e., PS) o reformista (i.e., PC)... El MAPU es, pues, profundamente unitario, pero entiende esa unidad como un proceso que no excluye la lucha constante contra las concepciones erróneas y contra las desviaciones [de los otros partidos] ¹⁶

Fue esta concepción del partido, asumida en lo sustancial tanto por el MAPU como por el PS y el PC a pesar de las diferencias existentes entre ellos, la que llevó a *decir no* a la invocación de Allende de dotar con urgencia de dirección única al movimiento popular. Actitud de estos partidos que contrastaba con la predisposición del Partido Radical a aceptarla. Las consecuencias trágicas de semejante rechazo no se hicieron esperar. Y se prolongarían durante años, en perjuicio de todos y cada uno de los partidos de la UP y en particular de los trabajadores, víctimas indefensas de la violencia y barbarie de una contrarrevolución que se abrió paso entre disputas internas sobre *quién* era la "vanguardia" que debía dirigir a los partidos que no merecían este título.

En otros términos, el proceso de unificación táctica de la burguesía fue por delante del de los partidos populares en 1972 y 1973. Lo que permitió, por último, a la insurrección burguesa poner de su lado la estructura orgánica y jerarquizada del ejército, proveyéndose de una superioridad operativa que resultó esencial para el desenlace último. Mientras Allen-

16. Resoluciones adoptadas por el II Congreso Nacional del MAPU (diciembre 1972).

de y el alto mando constitucionalista de la oficialidad congregaron en su derredor las fuerzas dominantes de la UP y de las Fuerzas Armadas, resultó imposible derrocar al gobierno. A medida que aquellos centros de decisión unitaria fueron quedando aislados, la unión trabajadores-gobierno-Fuerzas Armadas se fisuraba hasta quebrarse.

LA UNIDAD DE MANDO Y EL RECURSO A LA SORPRESA

El domingo 9 de septiembre de 1973, en la reunión a la que ha convocado la víspera a los dirigentes máximos del PC, Allende insiste en la gravedad de la situación general y militar en particular, y les exhorta a que respalden la convocatoria inmediata de un referéndum. Los comunistas dan su acuerdo de principio, y agregan que al día siguiente entregarán por escrito su posición definitiva sobre el contenido y alcance de una consulta electoral extraordinaria. Por primera vez desde 1971, el PC acepta su convocatoria. Y aunque el PS es ahora contrario a un referéndum, el apoyo del partido obrero más disciplinado podía permitir al presidente recurrir al instrumento táctico que durante muchos meses había venido deseando. Sin embargo, esta vez ya era demasiado tarde.

La derrota absoluta de la oposición no era el objetivo perseguido por el movimiento popular en cada una de las confrontaciones económicas y políticas que se habían sucedido entre 1970 y 1973. Para ello se hubiera requerido asimismo una victoria militar definitiva, que las circunstancias internas y externas hacían imposible.

La vía institucional implicaba, en su diseño inicial, una táctica militar defensiva. Se estaba utilizando el terreno propio de las instituciones del estado, con la ventaja inicial de esperar al adversario. Pero si bien es cierto que cabía prever el recurso a las armas por parte de la burguesía, la previsión para tal eventualidad no fue suficiente entre las organizaciones obreras propiamente dichas. Y aunque sí lo fue en el gobierno y en el seno de las Fuerzas Armadas a través de planes militares de *defensa* de las instituciones democráticas ante emergencias diversas, la utilización por la izquierda del terreno de las instituciones había perdido su ventaja inicial y los planes en cuestión

fueron reconvertidos para *derrocar* el gobierno. De este modo, la superioridad inicial de la táctica militar defensiva se agota en el transcurso de 1973, convirtiéndose en desventajas.

En las circunstancias de confrontación directa entre los bloques sociales antagónicos existentes en septiembre de 1973, en medio de la parálisis de las instituciones políticas representativas del estado, la convocatoria de un referéndum por el presidente de la república no sólo requería su aceptación por al menos un sector de la UP —como en los años anteriores—, sino además un hecho suplementario que no se daba con tanta imperatividad sólo tres meses antes: la disposición *explícitamente comprometida* de las Fuerzas Armadas de respaldar su celebración y hacer respetar el desenlace. La crisis social de las instituciones civiles del estado había dejado éstas a merced de las instituciones militares. En función de este imperativo fueron convocados a la residencia presidencial, el mediodía del 9 de septiembre, el comandante en jefe y el inspector general del Ejército. En este postrer encuentro se decidió la suerte final del gobierno UP y del sistema político global del que era parte integrante.¹⁷

La conversación giró en torno de la situación dentro del Ejército, de las huelgas y de las medidas en curso para su terminación. Pinochet reiteró el cuadro que venía describiendo desde el 24 de agosto, en forma cada vez más insistente: se observaban síntomas inquietantes por todas partes. Allende, sin nombrar a Prats, quiso contrastar la impresión de este último con la información que le entregaba Pinochet. Y coincidían. En un momento dado, tras cambiar impresiones sobre las medidas generales a aplicar en aquella coyuntura, el presidente dijo: “En las próximas horas voy a anunciar la convocatoria de un referéndum para que el país resuelva el camino a seguir”. ¡Cuál no sería la expresión de asombro de los rostros de Pinochet y Urbina al escuchar esto, que treinta y cuatro horas después Allende se detuvo especialmente en describirnos esta

17. En la introducción del libro *El estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende* (Siglo XXI, México, 1973, p. 51), se dice equivocadamente que esta reunión tuvo lugar en la mañana del 7 de septiembre, siendo así que en este día el presidente recibió al general Magliochetti, ministro de Transportes, y al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Leigh, quienes informaron de la evolución de la huelga de los transportistas.

escena: “Los ojos se les pusieron redondos... y los generales preguntaron, balbuceando: «Pero, presidente... ¿es una resolución ya definitiva y firme la de llamar a un referéndum?»” Allende: “Sí, general, está resuelto”. “Eso cambia toda la situación, presidente —agregó Pinochet—, ahora va a ser posible resolver el conflicto con el Parlamento”. Y la reunión prosiguió evocando las medidas concretas que se estaban tomando dentro de las Fuerzas Armadas en función del momento.

Al salir de Tomás Moro, Pinochet siente que sus planes corren el riesgo de verse perturbados:

Nuestra planificación quedó terminada y prácticamente lista para actuar el 14 de septiembre... [pero] tenía que tener un punto de desborde, vale decir, que sin causar alarma nosotros pasáramos de la paz a la guerra. O sea, pasar del ambiente normal a la forma agresiva sin que esto se difundiera... [Antes] no teníamos cómo hacer sin quedar descubiertos.¹⁸

Quizás contaba con la presencia de un hecho anormal de tal envergadura que permitiera a los dirigentes de la conspiración arrastrar al conjunto de las Fuerzas Armadas a la guerra contra las organizaciones obreras. En mi opinión, el desbordamiento que se estaba buscando era el del propio gobierno por parte de los trabajadores, alguna modalidad de acción de fuerza que hiciera aparecer a la UP como abriendo el fuego, o alguna provocación de magnitud, de modo tal que la oficialidad resultara galvanizada y la sublevación legitimada por años ante la “necesidad de restablecer la paz, el orden, la ley, etc., destruidos por la violencia marxista, etc.”. Lamentablemente para los conspiradores, Allende y la mayoría de la UP eran muy conscientes de ello, y pusieron a prueba los nervios y el sentido de la responsabilidad de las organizaciones obreras para no incurrir en este postrer error. Si la violencia generalizada llegaba a desencadenarse, ésta sería de la exclusiva responsabilidad de la derecha. Ello, contemplado con perspectiva histórica, debía condenarla a un fracaso a corto plazo en el supuesto

18. *Vea, Santiago* (12 septiembre 1974), p. 2. Durante la segunda semana de septiembre, las Fuerzas Armadas eran tradicionalmente acuarteladas en todo el país para preparar los desfiles conmemorativos del 18 de septiembre, “día de la independencia nacional”.

de que el golpe de estado tuviera lugar. Era el principio defensivo llevado a sus últimas consecuencias.

La convocatoria de un referéndum en la semana que comenzaba el 10 de septiembre, abría una perspectiva electoral, no de desencadenamiento de la violencia ni tampoco de dimisión del presidente de la república con todas sus consecuencias inherentes. Cabe comprender el apresuramiento de Pinochet. La misma tarde del domingo 9, se reúne con el jefe de la Aviación, Leigh, y un representante de los almirantes de Valparaíso. Este último, Huidobro —jefe de la Infantería de Marina—, se desplaza a Santiago con gran apuro, según él mismo ha contado,¹⁹ y se dirige a casa de Pinochet. “Allí encuentra ya al general Leigh. Se hace un amplio y franco estudio de la situación. El Ejército estaba preparado para actuar el 14 de septiembre, con ocasión de la parada preparatoria, pues en ese momento no despiertan sospechas los movimientos de tropas.”

En su última conversación con Allende, los generales Pinochet y Urbina desviaron la atención del presidente hacia los síntomas de indisciplina en el seno de la Marina, percibidos en el transcurso de la semana que terminaba. La misma tarde del domingo 9, en Cañaveral, Allende tenía convocadas a otras dos personas que llegaban desde Valparaíso: el capitán de navío René Durandot, jefe de Aprovisionamiento del estado, y el almirante Poblete.²⁰

El almirante Poblete expuso sus temores sobre el real alcance de la agitación que se percibía en el principal puerto del país, donde la escuadra se negaba a partir para llevar a cabo las maniobras conjuntas con unidades de Estados Unidos. Pero lo que Poblete desconocía es que en los mismos momentos en que él analizaba la situación de la Marina con el jefe del estado, otro almirante —Huidobro— convenía con Pinochet y Leigh la fecha y hora exacta de la insurrección general de las Fuerzas Armadas.

El problema que se le ha presentado a la dirección del putsch ante la inmediata convocatoria de una resolución electoral y la necesidad de adelantar la fecha de la sublevación mili-

19. *El Mercurio* (11 septiembre 1974).

20. Ambos oficiales se negaron a sumarse a la sublevación de dos días después, y fueron eliminados del servicio activo.

tar, lo aborda parcialmente el general Arellano Starck, coordinador de las operaciones bélicas en Santiago el día del golpe de estado:²¹

Para el fin de semana del 8 de septiembre, nosotros estábamos listos. Había una coordinación total entre las tres fuerzas. El día “D” debía haber sido, en principio, el lunes diez de septiembre. La Marina quería proceder entonces.

Pero los planes habían sido preparados de otro modo y

en el Ejército muchos de los oficiales y hombres no se presentan en sus puestos antes de las 7,00 o de las 7,30 de la mañana. Para llevar a cabo lo que necesitábamos hacer, se requería que estuvieran listos para empezar antes de esa hora. Entonces, señalamos día “D” el martes 11 de septiembre, y durante la noche del 10 preparamos las tropas en los cuarteles. La hora “H” para la Marina fueron las 6,00 del martes en Valparaíso, y las 7,30 para nosotros en Santiago. Allende venía sosteniendo una lucha abierta con la Marina, y la diferencia de tiempo buscaba distraerle para que pensara que sólo se enfrentaba con una pequeña revuelta naval.

De hecho, hora y media era el tiempo que necesitaban las tropas de Infantería de Marina para llegar a reforzar las de Santiago, teatro central de las operaciones. Y lo que silencia Arellano es que el domingo 9, el Cuerpo de Carabineros no estaba todavía integrado al complot. Lo que podía proporcionar al gobierno un respaldo armado suficiente para, en determinadas circunstancias, dividir a las Fuerzas Armadas ante la acción relámpago a que iban a ser lanzadas, y hacer perder a los golpistas algunas de las ventajas de la sorpresa.

¿Por qué el anuncio de un referéndum provoca tantos afa-nes, siendo así que, según Leigh, “la Junta no tenía programas económicos preparados, ya que la decisión de derrocar el régimen fue tomada dos días antes”?²²

El lunes 10, a las diez de la mañana, es Pinochet mismo quien acude al despacho del ministro de Defensa, y durante

21. Declaraciones al *Miami Herald* (18 febrero 1974).

22. Declaraciones ante periodistas extranjeros, *La Prensa*, Buenos Aires (23 septiembre 1973).

dos horas informa a Letelier sobre los temas del día. He aquí un resumen de los últimos planteamientos del comandante en jefe del Ejército:

— la situación militar estaba más tranquila. Se había puesto en contacto con distintas unidades;

— la preparación de la parada militar del día 19 seguía su curso normal y, según programado, esta vez se efectuaría en forma más sencilla que en años anteriores;

— al día siguiente entregaría el memorándum sobre el material que, en su opinión, podría adquirirse en Estados Unidos, y otro sobre el que correspondería adquirir en la Unión Soviética según los acuerdos firmados por la misión que viajó a este país en mayo anterior, presidida por los generales Prats, Bonilla y Benavides; entre la oficialidad, según Pinochet, no se observaba mucha aceptación para el material procedente de la URSS, pero tampoco resistencia. Personalmente, manifestaba ser partidario de diversificar las fuentes de aprovisionamiento;

— era de la opinión que oficiales del ejército soviético no vinieran a Chile a adiestrar personal chileno, sino que era preferible que este último fuera a la Unión Soviética a seguir cursos de entrenamiento, al igual que iba desde hacía años a Estados Unidos;

— el proceso ante la justicia militar del comandante Souper, cabeza visible del putsch del 29 de junio anterior, estaba siendo acelerado, así como el de los oficiales que habían tomado parte en la manifestación contra el general Prats el 21 de agosto;

— en los días inmediatos iba a solicitar a los generales Bonilla y Arellano que presentaran su expediente de retiro, y a darles de baja por desacato al comandante en jefe.

¿Por qué Pinochet se esforzó en mostrar durante casi tres semanas que podía estallar una insurrección en cualquier momento, y bastó el anuncio de la inmediata convocatoria al sufragio universal para que cambiara el sentido de su información? Si antes del 9 había estado preparando personalmente el golpe para el 14, hubiera podido hacerlo adoptando el mismo aire de seguridad que manifestaba el día 10. Si se trataba de desorientar al gobierno, esta estratagema era tan adecuada antes como después del domingo 9 de septiembre. La razón del aparente contrasentido puede radicar en una hipótesis que, a pesar de todo, vacilo en apartar: que Pinochet se plegó al gol-

pe y resolvió ponerse a su frente en el último instante, llevándole su oportunismo a sumarse siempre al sector que parecía más fuerte. En cualquier caso, hay otras razones de peso para explicar el cambio de los planes del golpe, en especial el hecho de que el anuncio del referéndum podía dividir el frente civil de la oposición, requebrajando simultáneamente el frente militar que tenía los planes listos para el viernes 14. Es posible, por último, que aquel anuncio descartara en algún ánimo la esperanza última de ver a Allende renunciar a la presidencia ante la acumulación de fuerzas adversas que enfrentaba.

X EL GOLPE DE ESTADO

En los capítulos anteriores hemos visto la evolución de las principales fuerzas sociopolíticas y económicas que han determinado la suerte del gobierno de la Unidad Popular. El domingo 9 de septiembre de 1973, se encuentran reunidas las condiciones para el estallido de un enfrentamiento directo, según el diseño genérico originalmente elaborado en el plan ITT-Kissinger-Frei de tres años antes. El país entero es consciente de ello. Los protagonistas centrales del proceso histórico han venido previendo esta eventualidad a lo largo de los años, han tomado posición respecto de ella y han intentado influenciar su desarrollo, cada cual conforme a sus intereses inmediatos y proyectos de futuro.

La semana del 10 de septiembre va a resolver las contradicciones principales de la conyuntura que atraviesa el país. La hora de la solución de algunos enigmas ha llegado. Ciertas hipótesis teóricas y prácticas que han venido siendo manejadas por los personajes centrales del proceso, individuales y colectivos, van a ser sometidas a la prueba de los hechos. Una vez más, en la interrelación entre los individuos y las masas de fuerza, éstas van a arrastrar a los primeros. Pero no estamos ante la demostración de la *fatalidad* de un drama. Ni las causas del desenlace estaban dadas desde un comienzo, ni las opciones y combinaciones sucesivas que fueron configurando la estructura de la acción colectiva estaban predeterminadas de antemano, ni la posición y suerte de cada grupo o persona iba a ser independiente del papel que voluntariamente había venido asumiendo.

En la descripción que sigue de las últimas veinticuatro horas del gobierno de la Unidad Popular, pasando de lo general a lo particular, voy a intentar contemplar las líneas de fuerza

que definen el destino del golpe de estado a partir de su incidencia en la persona del presidente Allende y su derredor, punto de encuentro de las corrientes profundas que atravesaban el proceso revolucionario chileno desde 1970.

LA JORNADA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Lunes, 10 de septiembre, una y media de la tarde. En el transcurso de la mañana me han telefonado Augusto Olivares, el suboficial ayudante del edecán presidencial y una de las secretarías de la presidencia: el presidente quiere que vaya a almorzar a la Moneda. Al llegar a la antesala del comedor, encuentro a Olivares, muy preocupado por la evolución de los acontecimientos. Minutos después entra el ministro de Defensa Nacional, Orlando Letelier, quien me dice: "He leído tu informe sobre la crisis del estado y la política militar del gobierno. Está muy bien". Me sorprendió que lo conociera. Se lo había entregado el viernes anterior a Allende. Era un análisis crudo de la situación en que reiteraba mi disconformidad por la política militar que se estaba siguiendo. Desde mi punto de vista, el derrumbe progresivo del aparato del estado había venido reduciendo la legitimidad "institucional" de obediencia de las Fuerzas Armadas a la autoridad del *jefe del estado*. La disciplina del ejército se hallaba rota desde el mes de junio anterior, y la supremacía del sector militar antiputsch sólo podría mantenerse en la medida que se estableciera su articulación directa con las organizaciones de trabajadores. El informe recapitulaba algunas de las observaciones sobre las que yo venía insistiendo desde fines de mayo de 1973, subrayaba los indicios de que estábamos ya dentro del golpe militar—lo que hacía impostergables medidas de extrema urgencia—, y terminaba con la pregunta "¿cuántos días le quedan, presidente?".

Acababa de tener lugar una sesión del Consejo de Ministros. Allende ingresó en el salón donde nos encontrábamos, seguido por el ministro del Interior—Carlos Briones—, José Tohá—ex ministro de Defensa— y Sergio Bitar—ex ministro de Minería—. Nos saludamos y guardé silencio. Aunque la cuestión militar venía siendo objeto de conversaciones cada vez más tensas entre nosotros desde el mes de julio, nunca antes había ido tan lejos en la exteriorización de mis críticas como en aquel texto. Escrito, por lo demás, en un tono perentorio que, de no ser compartido el análisis que lo justificaba, podía provocar el término de más de tres años de estrecha colaboración. Pero yo me sentía impulsado a asumir el riesgo, 15 días después de haber presentado la dimisión

precisamente para reafirmar mi disconformidad con los criterios que venían guiando la política militar, y que acababan de producir la caída del general Prats.

Allende entendió mi silencio. Tras varios minutos de conversación entre los presentes, se dirigió a mí con gesto serio: "Comparto su análisis, estoy de acuerdo con muchas partes de él". La dimisión estaba fuera de lugar.

Nos hallábamos en un salón de decoración heterogénea. A la izquierda, en un ángulo, sobre una mesa con espejo adosado al muro, se veía un crucifijo tallado en madera de casi un metro de altura. Evocaba el arte del siglo XVIII, así como el gran armario policromo que se erguía en el ángulo opuesto, que durante dos siglos debió guardar las vestimentas del culto en alguna sacristía. Pertenecía al Museo de Arte Colonial. Del lado de la calle Morandé, unían el piso con el techo dos grandes ventanales. En medio de ellos, un sofá de terciopelo rojo con dos almohadones en sus costados. Sobre él yacería el cuerpo inánime de Allende a la misma hora del día siguiente. En el muro de enfrente sobre un diván de terciopelo amarillo, un cuadro representaba el momento de la proclamación de la independencia en la Plaza de Armas el 18 de septiembre de 1810. En el centro, una ancha mesa de mármol, recubierta de libros de arte y poesía. Entre ellos, uno obsequiado por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro sobre el lenguaje de las plumas entre los indígenas del Amazonas, y otro por Pablo Neruda, de romances populares chilenos del siglo XIX.

Es interesante recordar algunos de los temas tratados en el transcurso de aquel almuerzo.

— He sabido —comenzó diciendo Allende— que los aviones DC-8 de la Línea Aérea Nacional se encuentran en la base aérea de Cerrillos.

— Está prohibido —repuso Tohá— que los aviones civiles se posen en las bases militares.

Allende:

— Le pedí explicaciones al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Me respondió que los habían llevado allí los pilotos que se declararon en huelga el viernes pasado, según Leigh "para protegerlos". Le pregunté de quién trataban de proteger los aviones, ¿del gobierno, acaso? Le he dado orden de que los retorne de inmediato al aeropuerto de Pudahuel. Dice que la Fuerza Aérea no cuenta con pilotos para mantener el servicio regular de aviones de pasajeros de los DC-8, pero sí de los DC-4, que van a ser movilizados para paliar los efectos de la huelga.

Al día siguiente, sin embargo, los aviones de transporte civil eran utilizados para el traslado de tropas y equipamiento militar a lo largo del

país, en apoyo de la sublevación. Ese era el sentido real de su presencia en Cerrillos. Así, toda la aviación, tanto militar como civil, quedó durante el fin de semana bajo el control de la dirección putschista.

— La Fuerza Aérea —prosiguió Allende— tenía previsto allanar esta tarde tres empresas de Santiago. He dicho a Leigh que suspenda el operativo. He ordenado también suspender los allanamientos en todo el país, mientras se comunica a las autoridades militares un nuevo instructivo sobre el particular. En éste se indicará que la tarea de llevar a cabo los allanamientos corresponde a Carabineros, y que a las Fuerzas Armadas sólo compete actuar como fuerzas de apoyo en los casos graves.

— En esta última forma —dijo Tohá— se hallaba previsto en el proyecto original de la ley de control de armas de 1972, elaborado conjuntamente por el gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. En el Parlamento, la oposición logró alterar la disposición.

— Antenoche —intervino Olivares—, en el desalojo y allanamiento del canal 9 de televisión ¹, los Carabineros trataron con consideración a los trabajadores, sin que se produjera ninguna vejación ni violencia. Muy diferente de lo que ha ocurrido en otros allanamientos.

Allende precisó:

— Leigh me decía: "Nosotros no tenemos interés especial en allanar únicamente a los trabajadores. ¿Pero por qué nadie denuncia a los centros de la oposición para que los allanemos también?"

— Eso es una argucia —terminó diciendo Tohá.

Se analizó la evolución de la huelga general de la oposición. Yo comenté que el día 4 los transportistas en huelga cortaron el tráfico, en Curacaví, de la carretera que une Santiago con Valparaíso, y obligaron a los automovilistas a pagar peaje. Unidades de Carabineros se hallaban presentes, y se limitaron a contemplar la escena durante horas, sin intervenir. Era un ejemplo de convivencia con los huelguistas.

Bitar dijo:

— La Corporación de Fomento (ministerio de Industria) tiene aún inmovilizados los 2.000 taxis que hemos importado del extranjero. ¿Por qué no se les pone en servicio en seguida? La CORFO no tiene claro si debe hacerse así o no.

Mientras, la huelga del transporte tenía a la capital prácticamente sin medios de locomoción colectiva. Se evocó posteriormente la difusión en Valparaíso, la semana anterior, de volantes impresos por la Marina con

1. Ordenado por un tribunal jurisdiccional.

mensajes de significado subversivo que terminaban con la frase “las Fuerzas Armadas son garantía de orden, seguridad y bienestar para todos los chilenos”.

A mi modo de ver, semejante propaganda era más bien propia del período *posterior* a la intervención militar. Su aparición antes de que el golpe de Estado se hubiera producido mostraba la gravedad de la situación.

Letelier manifestó:

— Tengo incoados más de trece sumarios internos en las Fuerzas Armadas. Entre ellos, contra el capitán Ballas y otros oficiales que participaron en la manifestación contra la residencia del general Prats, y por la difusión de esos panfletos de la Marina en Valparaíso.

Aproveché la ocasión para insistir en uno de los temas que venía evocando desde hacía semanas:

— ¿Por qué tanto retraso en instrumentar la coordinación entre la Central Unica de Trabajadores y Carabineros, en los términos previstos en la Ley de Defensa Civil? Me asombra, Tohá, que a estas alturas todavía nadie haya considerado la extrema importancia de crear este medio de acción contra el terrorismo y los sabotajes.

Tohá replicó:

— Pusimos al frente del servicio de Defensa Civil al general Forch Petit.² Pero no le dio esa orientación que tú dices.

— En Chile —intervino Bitar— siempre se ha considerado la Defensa Civil como algo propio de los “boy-scouts”.

Los trabajadores no contaban con ninguna forma de organización defensiva propia, tres años después de que la UP se instalara en el gobierno, y uno después del comienzo de la insurrección contrarrevolucionaria.

— Si no nos derrocan esta semana —manifestó Letelier—, no caemos nunca. Todo lo han venido preparando para que explote ahora.

— Vamos a nombrar de inmediato a Tohá —dijo Briones— director general de Seguridad, función nueva que tendrá a su cargo la dirección conjunta de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Hay que atajar el terrorismo. (El sábado 8, Allende había comunicado a los ministros del Interior y de Defensa su intención de imponer la coordinación y dirección única dentro del aparato del estado. Una manifestación particular de ello debía ser colocar todos

2. En octubre de 1970, el general en retiro Forch Petit había sido uno de los nexos de comunicación entre Allende y el mando del Ejército, en particular en los días que precedieron y siguieron al asesinato del general Schneider.

los Servicios de Inteligencia bajo una sola dirección, dotada de una orientación política conforme a la del presidente de la república. De ahí la selección de José Tohá).

— Y si llega el caso —declaró Allende— aplicar el plan Hércules.

Era el plan militar antiinsurreccional elaborado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en previsión de situaciones de emergencia. Preparado a lo largo de los meses anteriores en función del curso que tomaban los acontecimientos, plasmaba la voluntad del gobierno de continuar desbaratando los intentos de ruptura violenta de la convivencia democrática. De modo complementario, desde mediados de agosto, el presidente había hecho reforzar en mil hombres las fuerzas de Carabineros de Santiago, dependientes del Ministerio del Interior. El dispositivo antigolpe que había frustrado los intentos que se sucedieron a lo largo de tres años, aparentaba aún encontrarse en condiciones de enfrentar cualquier emergencia. Sin embargo, en los hechos, el carácter no revolucionario del aparato militar impedía a los trabajadores asumir la iniciativa de reprimir la ofensiva burguesa que vivía el país y, a su vez, el límite de tolerancia de la táctica del contragolpe había sido también superado. El plan Hércules acabó por aplicarse, pero para derrocar al propio gobierno.

La obra de Pinochet consistió en lograr reconvertir el dispositivo destinado a defender al gobierno en centro de dirección y apoyo de la insurrección. Posteriormente, la centralización de todos los servicios de inteligencia fue efectivamente llevada a cabo, pero cambiándole su naturaleza y subordinándola al propio Pinochet, quien hizo de la naciente DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) el instrumento de tortura y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Pero el éxito de la acción de Pinochet no se explica sin considerar el hecho decisivo: frente del aparato armado del estado no había ninguna organización con capacidad de resistencia militar, no ya autónoma respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros (lo que en las circunstancias chilenas era imposible), sino ni siquiera vinculada a un sector de estos últimos (lo que sí hubiera sido posible preparar legalmente a lo largo de los tres años transcurridos, de haber existido conciencia suficiente de su necesidad). La ausencia de toda capacidad coercitiva proletaria autónoma dejaba a la UP sin otra disyuntiva militar que la de continuar apoyando en la oficialidad que aparentaba conciencia profesional y democrática.

Tohá dijo:

— Hemos estado considerando el nombre de quién podría hacerse cargo de la subsecretaría del Ministerio de Transportes. Pienso que

deberíamos designar a una persona que siempre se ha comportado con lealtad, el coronel-jefe del Despacho Confidencial de la subsecretaría de Guerra. Siempre me ha parecido uno de los oficiales que merece confianza.

Ante la ausencia de medios para cambiar la política militar defensiva por la ofensiva, el gobierno continuaba buscando un acuerdo político que disuadiera al sector militar vinculado a la Democracia Cristiana de continuar impulsando la insurrección.

En los postres, Allende explica el motivo que le llevó a reunimos:

— Me propongo dirigir al país un mensaje. Les he convocado para que viéramos la posibilidad de hacerlo esta noche. Ya está dispuesta la red oficial de radio y televisión. Es muy importante y hay que prepararlo bien (...) Por ello quizás sea más conveniente que hable mañana a mediodía. En cualquier caso, quiero hacerlo antes que se reúna el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, mañana por la tarde. Los demócrata cristianos deben conocer mis planteamientos antes de que empiecen la sesión...

En un momento dado, el presidente se dirige al ministro de Defensa:

— ¿Qué horas son?... Pasadas las tres. Usted, Orlando, vaya de inmediato al Ministerio y asegúrese de que se cumple la orden de suspender los allanamientos de la FACH.

Abandonamos el comedor. En la Galería de los Presidentes, que conduce hacia el gabinete de trabajo, se encuentran el Director General de Investigaciones, el Prefecto-Jefe de Santiago y otras autoridades de la policía civil. Algo grave ocurre, pienso, cuando se presentan de improviso a semejante hora. Augusto Olivares comenta que ha surgido un problema con la Fuerza Aérea. El Presidente encargó una encuesta sobre el allanamiento que el viernes anterior hizo la Aviación en la industria Sumar, y el resultado mostraba que los militares robaron dinero de la empresa e incluso efectos personales de los obreros.

Los jefes de la policía ingresan en el gabinete. Nos despedimos del Presidente. Yo aprovecho para insistir en la gravedad de no contar con una defensa civil organizada.

— Sí, me responde. Llame a Letelier al Ministerio de Defensa, y dígame que acuda esta noche a Tomás Moro. Hacia las 8:30. Allí nos encontramos.

Minutos después, al partir, me cruzo con Frida Modak, secretaria de prensa:

— Vengo de hablar con Belisario Velasco.³ Me ha pedido transmitirle al presidente un mensaje de parte del senador Renán Fuentealba: que no confíe para nada en el PDC. El único problema de Aylwin consiste en cómo deshacerse de Allende más pronto y con el menor costo.

Fuentealba y Velasco forman parte del sector de la Democracia Cristiana que, en 1970, fue decisivo para hacer fracasar el plan ITT-Kissinger-Frei de provocar un golpe de estado. Fue el sector que hizo posible que el Parlamento ratificara el 24 de octubre de aquel año a Allende como presidente de la república, salvando así una crisis constitucional que desembocaba directamente en la intervención militar. Tres años después no sólo había perdido la dirección del partido, sino que se encontraba impotente para refrenar las ansias contrarrevolucionarias de la derecha democristiana.

Frida Modak me comenta también que días atrás había estado en su casa el general Von Schowen, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, manifestándose predispuesto a aceptar la comandancia en jefe de la Aviación —que había rechazado el 17 de agosto anterior—, pero siempre que antes le hubieran “limpiado el Alto Mando de muchos indeseables...”. Resultante, entre los generales no hay ninguno que desee asumir la responsabilidad de hacer frente a la conspiración. En la Aviación, el general Poblete —simpatizante de los socialistas— se ha retirado voluntariamente en febrero de 1973.⁴ En el Ejército, Prats, Pickering y Sepúlveda han aguantado hasta la tercera semana de agosto. En la Marina, Montero se halla dimitido... En cambio, ninguno de los oficiales derechistas se retira espontáneamente. Los marginados del servicio activo lo han sido por mandato imperativo del jefe del estado. Los generales comprometidos con la oposición burguesa conspiran y desean combatir. Los partidarios del gobierno flaquean, dudan, abandonan. No tienen la motivación ideológica y de solidaridad con los intereses de los trabajadores que aquéllos tienen con la burguesía insurrecta. Una excepción, el general de Aviación Alberto Bachelet, siguió un destino semejante al de Schneider. Detenido el 11 de septiembre, murió en la cárcel a consecuencia de las torturas.

3. Dirigente nacional del PDC. Renán Fuentealba fue presidente del mismo partido desde fines de 1971 a mayo de 1973, cuando su candidatura fue derrotada por la de Patricio Aylwin.

4. El general Oriando Poblete, después del golpe de estado, fue, no obstante, detenido y torturado por sus propios compañeros de la Fuerza Aérea. Condenado a varios años de cárcel, a fines de 1974 fue desterrado. En cambio, Von Schowen da la impresión de haber sido el hombre de confianza de los generales Ruiz y Leigh para misiones de diversión o información respecto de la Unidad Popular. En diciembre de 1975 fue nombrado embajador de la Junta en Ecuador.

LA ÚLTIMA NOCHE EN TOMAS MORO: EL TARDÍO REFERENDUM

Tomás Moro es desde 1970 la residencia oficial del presidente de la república. En medio de un pequeño jardín, su interior es de hecho una suerte de museo. Sus muros están repletos de cuadros, donados en distintas épocas por amigos de la familia Allende: Siqueiros, Portocarrero, Miró, Guayasamín, Picasso, Matta... Uno de los Siqueiros lleva en la parte posterior una dedicatoria fechada en la cárcel. Junto a la puerta principal, una enorme imagen medio difuminada en la que destacan con nitidez los ojos y una especie de fusil en la parte inferior. Contemplada desde lejos se identifica al Che Guevara. Obra de José Balmes, Allende gustaba comentarla a los generales que llegaban allí, divertido en su interior por la propia escena que ello significaba. En el living, en medio de más cuadros, una gran ánfora etrusca ocupa un ángulo, mientras que en otro llama la atención una colección de estatuas chinas de marfil. Junto a la chimenea, una silla articulada del siglo XVIII está acompañada de curiosos objetos de artesanía. En el gabinete de trabajo, en estantes adosados a la pared, se alinea un centenar de huacos precolombinos. Antes de llegar al gabinete, en la biblioteca, fotografías dedicadas de Ho Chi Minh y Che Guevara, junto a la de Velasco Alvarado con la inscripción: "Al 'chicho' Allende, el 'chinp' Velasco", con la que el presidente peruano recordaba los nombres familiares de ambos. Una carta manuscrita del príncipe Sihanouk de Camboya, junto a las fotografías de los presidentes chilenos Arturo Alessandri Palma, restaurador del régimen presidencial en 1925, y Aguirre Cerda, portavoz del Frente Popular en 1938...

Aquella noche, los primeros en llegar somos Olivares y yo. Letelier está terminando en el Ministerio de Defensa una conferencia de prensa sobre la posición del gobierno en materia de seguridad nacional y en relación con las Fuerzas Armadas, resumiendo la doctrina del gobierno de la Unidad Popular hacia estas últimas: respeto por su personalidad institucional, mejoramiento de su nivel de preparación y equipamiento profesional, voluntad de acabar con su aislamiento respecto de la sociedad civil, atribución de los medios para evitar el estallido de la guerra civil y el derrumbe de las instituciones democráticas... Es la política que se ha puesto en práctica a lo largo de tres años. Pero ya a estas alturas el contexto sociopolítico original ha cambiado y la oficialidad conservadora se halla preocupada tan sólo de asegurar que las organizaciones obreras y el gobierno no cuenten con respaldo militar orgánico en el momento de la

insurrección que se prepara.

Augusto Olivares se pasea inquieto:

— Quiero decirte algo que me tiene muy preocupado. La situación es muy grave, y es mucha la responsabilidad que asumimos hoy, tú y yo, al participar en estas circunstancias en las definiciones del Presidente, sin discutir previamente sus bases. Los trabajadores se sienten indefensos, como desamparados.

— Coincido contigo. Hace tres semanas que presenté mi renuncia al Presidente.

— No lo sabía.

— Los errores militares que se han cometido en el mes de agosto son una catástrofe para el Gobierno. No tenía otro medio más elocuente para llamar la atención sobre ellos.

— Yo siempre he tenido una sospecha: ¿qué pasó realmente dentro de las FF.AA. el 29 de junio... ?

— Durante el mes de agosto —continúo yo— me da la impresión de que al gobierno lo han tenido engañado los militares en quienes se tiene confianza. En mi informe del viernes pasado he expuesto todo esto, para concluir preguntando cuántas horas nos quedan.

— Yo ya tengo hecho el testamento... —sonríe levemente Olivares.

— Yo no lo he hecho porque no tengo nada que dejar.

— No, si mi testamento es más que nada lírico... Por cierto, he venido escuchando la conferencia de prensa del Ministro de Defensa. No me ha acabado de gustar.

Al llegar Letelier, Olivares le hace el mismo comentario. El Ministro responde que era una intervención pensada y dirigida más hacia el interior de las Fuerzas Armadas que no hacia el público en general.

Había traído conmigo la disposición legal de 1945 que regulaba la defensa civil. Se la dí a leer a Letelier. Se llevaba varios años de retraso en desarrollar una línea de acción semejante.

Poco después entraba el Ministro del Interior y, por último, pasadas las nueve horas, Allende.

Olivares orientó la conversación hacia su tema de inquietud.

— Presidente, acaba de hacerse pública una declaración del P. Comunista describiendo la situación como muy grave, mencionando el peligro inmediato de un golpe. He pedido al canal de Televisión que me las hagan traer.

Una declaración. Pero ¿con qué medios cuentan a estas alturas el PC y los trabajadores para prevenir o responder a un golpe de Estado?

Hacia las 9:30 llaman desde la secretaría privada. Olivares recibe

el mensaje: a La Moneda acaba de llegar la noticia de que dos camiones con tropas han salido de la ciudad de Los Andes en dirección a Santiago.

¿Qué significa ello? Es la hora de cenar. Nos está esperando la señora de Allende —Tencha— e Isabel, su hija, que acaban de retornar de un viaje oficial a México. Tencha hace comentarios sobre el viaje. La acogida de los mexicanos ha sido afectuosa, pero en cambio había recibido varias amenazas de muerte de fuente chilena. Elogia el comportamiento del Comandante Sánchez, Edecán Aéreo del Presidente, que le acompañaba.

La conversación se desvía después hacia nuestro medio. En un momento dado comento el contraste que se observa entre el uso que la derecha está haciendo del terrorismo y de acciones ilegales contra el Estado, buscando cambiar la forma de Gobierno, mientras que nosotros nos hallamos atados por la legalidad. Allende responde:

— Tiene Ud. razón, pero nosotros no podemos romper la legalidad porque somos precisamente el gobierno. Siempre hemos luchado en favor de que el respeto por la ley en un estado democrático corte el paso al despotismo o la arbitrariedad, evitando que los chilenos acaben matándose unos a otros, así como para asegurar a los trabajadores sus conquistas. Entre la ley o la fuerza bruta, siempre hemos sostenido que el país sea regido de acuerdo con las leyes.

Briones dice:

— Así es.

Tencha insiste en que los atentados terroristas están haciendo cada día víctimas inocentes:

— En los tres meses últimos llevamos un promedio de un acto terrorista cada hora.

Isabel le contesta:

— Al terrorismo la Unidad Popular no puede responder con el terrorismo, pues eso sería el caos.

Allende hace un gesto afirmativo.

Mi observación iba dirigida en otra dirección:

— El gobierno puede probar mayor capacidad de reacción y de presencia frente al terrorismo. Por ejemplo, en relación con los atentados organizados por los comandos de barrio de la derecha, haciendo investigar en profundidad en las manzanas de alrededor. ¿Por qué el Ministro del Interior no imparte esta orden? El Gobierno puede tener una respuesta distinta de las declaraciones verbales que acostumbra la izquierda, sin necesidad de dejarse arrastrar tampoco a cometer atentados, que es lo que

desearía la derecha por lo demás.

Letelier argumenta en el mismo sentido. El Presidente se manifiesta de acuerdo. Briones concluye:

— Conforme, así lo haré mañana. Ahora será el Ministerio del Interior quien impartirá órdenes de allanamiento.

Sin embargo, la legalidad hacía tiempo que era desconocida por la oposición en todo aquello que dejaba de proteger sus intereses. Sólo la conjunción de la fuerza social del movimiento popular, por un lado, y de la disciplina del aparato armado del estado, por otro, había logrado mantener el imperio de la ley hasta aquella noche. Al día siguiente, sin embargo, la pérdida del control de las instituciones armadas no sólo implicaría la caída del gobierno, sino la del estado democrático y su legalidad como forma de organización de la convivencia en la sociedad civil. La violencia sin contrapeso y la arbitrariedad iban a tener franco el camino, hasta que un nuevo poder coercitivo se impusiera al servicio del sector social cuya fuerza armada resultara predominante. La referencia a la Constitución y las leyes como marco de definición del uso de la fuerza y como norma del comportamiento colectivo tenían, aquella noche, su última invocación. Un período se estaba cerrando en la historia del país: el del desarrollo de la socialización del poder mediante la creciente democratización de la sociedad dentro de un estado de derecho. El estado de guerra —de la burguesía contra los trabajadores primero, y de éstos contra la burguesía después— se iniciaba en Chile. Por varias generaciones, probablemente.

Terminada la cena, la última de varios de los presentes, Tencha e Isabel se retiraron y los restantes nos reunimos en el gabinete de trabajo. Allende comenta que, por fin, la Armada se ha hecho a la mar y ha partido de Valparaíso.

— ... de algo parece que podemos estar seguros, el golpe no será de la totalidad de las Fuerzas Armadas...

Después pasa a considerar la importancia del mensaje a la nación del día siguiente y los temas que debe contemplar:

— Voy a dar el trámite de urgencia a la discusión en el Parlamento de los proyectos legislativos considerados durante las negociaciones con el PDC. El período ordinario de sesiones termina el próximo día 15. Para el 20 de septiembre convocaré a las Cámaras en legislatura extraordinaria, y sólo figurarán en tabla de deliberaciones los mencionados proyectos de ley. Entre los días 15 y 20 me reservo la implantación eventual del estado de sitio que hasta la fecha me ha negado el Congreso, según la evolución de los acontecimientos. Si en el PDC hay acuerdo en legislar sobre los

proyectos indicados, de inmediato promulgaré las dos reformas constitucionales que ha aprobado últimamente el Parlamento. Si no hay acuerdo, convocaré un referéndum. Ya le he dicho al ministro de Justicia que prepare el articulado del texto, dándole como coordenadas los criterios que manifesté al presidente del PDC en mi carta del 2 de agosto. Sobre la convocatoria de un referéndum, el Partido Comunista me ha entregado a mediodía esta carta. Está de acuerdo, así como también en concederme poderes de decisión en los próximos meses, hasta que superemos la presente emergencia. El referéndum despeja la tensión entre los militares. Medidas económicas de emergencia para asegurar la realización del plan de 1974. Todos los esfuerzos de producción, organización, dirección y control deben concentrarse en asegurar la disponibilidad de los productos esenciales para la mayoría de la población, garantizando el abastecimiento a precios oficiales. Se requiere incrementar la inversión en un sentido favorable a consolidar la reorientación de la producción en beneficio de los trabajadores, dándoles más oportunidades de empleo productivo en el futuro. Se asegurará el pleno empleo actual. Aquí tengo la síntesis de las medidas concretas que me ha hecho llegar el ministro de Industria (*lee*): Ninguna concesión a los gremios en huelga. Las direcciones de los colegios profesionales en paro deben ser desconocidas por los colegiados que trabajan. Ofensiva total contra los terroristas, en especial contra el núcleo fascista de Patria y Libertad. Para el pueblo ha llegado la hora de ser yunque o martillo.

Olivares entiende que el mensaje debe ser dirigido especialmente hacia los trabajadores, la oposición y las FF.AA. y ser combativo en lo restante.

Briones señala:

— En lo que se refiere a los proyectos legislativos, aquí traigo el acuerdo convenido con la dirección del PDC. Están resueltas las divergencias y están de acuerdo en todo. La DC ha dado su conformidad en los términos especificados en estos documentos, así como sobre el modo de promulgar la reforma constitucional de las Áreas de Propiedad.

Horas después, el PDC aplaudía y rendía pleitesía a la Junta Militar, guardando silencio sobre estos acuerdos. De haber fracasado la sublevación, no me cabe duda que habríamos asistido a las habituales profesiones de fe democristiana, de “reafirmación de nuestra inquebrantable voluntad de respetar la legalidad, el régimen institucional, la democracia... y de condenar la violencia, venga de donde venga”, al tiempo que habrían esgrimido los acuerdos a que aludía Briones para

probar “nuestra voluntad generosa y desinteresada de contribuir a superar la crisis presente”. Triste papel el de los democristianos.

La carta de la comisión política del PC al presidente mencionaba la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente.

—¿Qué alcance tiene esta proposición? —pregunté—. No acabo de entender. Hasta la semana pasada, siempre los comunistas han rechazado la convocatoria de un plebiscito. Ahora se desplazan al extremo opuesto. Otro gallo nos cantara si hubieran formulado esta misma proposición dos años atrás. Ahora, creo que no hay tiempo sino para plantear a través del referéndum las opciones políticas y económicas más inmediatas que se debaten en el país. En cuyo caso, el Gobierno no puede poner en cuestión de modo directo su continuidad.

Allende lee en voz alta la carta firmada por Luis Corvalán: “La Asamblea Constituyente sería elegida para introducir reformas limitadas o amplias en la Constitución y, eventualmente, para elaborar un nuevo régimen institucional. Depende de las circunstancias. Funcionaría simultáneamente con el Parlamento ordinario actual (...)” Este punto— dice Allende— debe incluirse en el discurso de mañana.

ES LA HORA DE LOS CAÑONES

El país no alcanzaría a conocer esta proposición para reordenar las instituciones del estado por vías democráticas. La máquina que descaba impedirlo estaba ya en marcha.⁵

Son las once. Suena el teléfono. Responde Augusto Olivares, se reincorpora a la reunión y dice:

— Es Miriam, desde la Moneda. Me ha repetido lo mismo que antes. Que les han llamado diciendo que dos camiones con soldados han salido de Los Andes hacia Santiago, y que el regimiento allí está acuartelado. Hay muchos rumores.

Briones bromea:

— ¡Ahí están de nuevo los camiones de Augusto!

La sesión de trabajo queda interrumpida. ¿Qué está pasando? Minutos después el presidente dice al ministro de Defensa:

5. “Nosotros habríamos actuado aun si Allende hubiera convocado un referéndum o hubiera logrado un compromiso con la opinión política. Nada podía detener el golpe, tras la dimisión del general Prats. Tan sólo estábamos dándole los últimos toques al plan” (Declaración de uno de los oficiales responsables del putsch al periodista Jonathan Kandell, *New York Times*, 27 septiembre 1973).

— Orlando, por favor, llame al jefe de la Guarnición de Santiago y averigüe qué pasa.

Letelier habla con el general Brady, designado jefe de la II División del Ejército en la tercera semana de agosto, tras la dimisión del general Sepúlveda Squella que prefirió seguir a Prats en su camino al retiro. Brady está aquella noche en su casa. Informa Letelier:

— Dice que no sabe nada, que va a informarse. Me ha pedido el teléfono para llamarme en quince minutos más. Le he dicho que yo lo haré.

Poco antes de medianoche Letelier habla de nuevo con Brady:

— Dice que no hay nada de camiones. Se ha puesto en contacto con la guarnición de San Felipe y está todo normal. El acuartelamiento obedece a la preparación de la parada del día 19. Que él se hace cargo de la situación.

A medianoche alguien telefona a Letelier. Es Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista.

— Dice lo mismo —manifiesta Letelier—. Que dos camiones con tropas han salido de Los Andes. ¿Qué hago? ¿Llamo al comandante en jefe?

Briones reitera:

— Ahí vuelven los camiones de Augusto...

Era evidente que esta información había ingresado después de las 9 de la noche en el círculo de personas vinculadas al Partido Socialista y al presidente, y que estaba siendo transmitida de un lugar a otro, retornando al centro que eran la Moneda y Tomás Moro. En la secretaría privada del palacio presidencial hay una permanencia todas las noches, desde el 29 de junio. En esta oportunidad se encuentran allí Miriam Contreras, Carlos Jorquera, Arsenio Poupin, Max Ropert, Víctor Pey. También llegaron Ricardo Pincheira, Max Marambio, Eduardo Paredes y Alfredo Joignant, director general de Investigaciones.

El presidente responde a la pregunta de Letelier:

— No, no me llame a Pinochet. No hace falta. Son tantos los rumores... Hace meses que no dormiría si tuviera que atender cada rumor. El 2 de julio, a las 5 de la madrugada me hizo despertar N.N., para darme todo tipo de seguridades de que una unidad blindada se dirigía hacia aquí. Y así todos los días.

No obstante, Allende no se queda tranquilo con la información que le entrega Brady. A eso de la una interrumpe la discusión sobre el mensaje y telefona él mismo al director subrogante de Carabineros, general Urrutia, persona cuya lealtad no le ofrece dudas:

— General Urrutia, disculpe que le llame a estas horas. Hay muchos rumores. ¿Qué noticias tiene Ud.? ... Conforme. Tome, no obstante, precauciones especiales esta noche.

Yo aprovecho la interrupción para comentar con Letelier el mucho retraso en cambiar la correlación de fuerzas en el Alto Mando.

El presidente ha vuelto a tomar asiento en su sillón. El ministro de Defensa le dice:

— Me gustaría avanzar la Junta de Calificación de las Fuerzas Armadas para muy pronto, sin esperar a fines de mes. Tengo tres caminos para llamar a retiro a los oficiales golpistas. Uno, el insinuado por Pinochet: no acelerar las cosas, la Junta de Calificación se reúne antes de fin de mes y, por razón de haber llegado a la edad de la jubilación, se podría reequilibrar el Alto Mando según los criterios del gobierno. Otro, pasar a retiro mañana mismo a los generales Bonilla y Arellano. El tercero es el recomendado por Prats: llamar a retiro antes del viernes a seis o siete generales.

— El último me parece el mejor —responde Allende—. Mañana comunico este mensaje al país y, luego, sacamos de las Fuerzas Armadas a estos oficiales. Volveremos a conversarlo.

De nuevo se abre la puerta. Comunican que ha llegado el mayor Concha, jefe de la zona de Carabineros donde se encuentra la residencia. Le envía el general Urrutia. Allende sale a conversar con el oficial.

Briones intenta retomar el problema del acuerdo político:

— Las proposiciones legislativas acordadas con la DC son de gran importancia...

Augusto Olivares, cada vez más nervioso se impacienta:

— Sí, sin duda. Pero la gente hoy siente y quiere cosas más inmediatas y materiales. Perdón que cambie de tema, pero estas noticias de los camiones...

Briones exclama:

— ¡Augusto con sus camiones!

Cerca de las dos de la madrugada, Allende levanta la sesión:

— Vamos a reposar; es muy tarde ya. Mañana nos espera un día duro. Augusto y Juan Enrique, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Buenas noches.

Minutos después, el teléfono vuelve a sonar. Es Miriam, todavía en la Moneda:

— Presidente, como a medianoche continuaban las llamadas de teléfono avisando que había movilización de tropas desde Los Andes,

llamé a Flores⁶ a su casa, para que me lo confirmara antes de avisarle a Ud. Le pedí que hablara con el comandante en jefe si era necesario. Me dijo que iba a hablar con otras personas, y que yo llamara al subsecretario de Guerra, coronel Valenzuela. Estaba durmiendo, le expliqué lo que pasaba y que averiguara. Media hora después este último me llamó, comunicando que había hablado con el coronel Ibáñez, que está de guardia en el Estado Mayor, y confirmó que era cierto, pero que no se trataba del regimiento entero sino sólo de dos compañías que venían a reforzar la guarnición de Santiago, pues mañana será un día crudo. Le pregunté qué quería decir con la palabra "crudo". Explica que mañana se conocerá la resolución de los tribunales pidiendo el desafuero de la inmunidad parlamentaria de Altamirano y Garretón, y que se espera que se produzcan ocupaciones de caminos y fábricas como reacción. Por lo demás hay acuartelamiento general hasta las 6 de la mañana.

— Gracias, Paya. Déme el número de teléfono del general Brady.

A las 2:30, Allende telefona a la Moneda:

— He hablado con Brady... Váyanse a descansar. Es muy tarde. Mañana será un día largo y duro.

Poco antes de las 5, se recibe una nueva comunicación en la Moneda. Patria y Libertad había postergado el atentado. Alguien les había dicho que ya no tenía utilidad.

6. Ministro secretario general del Gobierno.

6,30 H: LA MARINA SE HA SUBLEVADO

Minutos antes de las siete de la mañana volvía a entrar en el gabinete de trabajo. Allende estaba de pie, con el teléfono en la mano:

— Se ha sublevado la marinería... La oficialidad del submarino Simpson y la del crucero Almirante Latorre. La escuadra norteamericana está en alta mar, a la altura de Coquimbo... Seis camiones con tropas de la Marina se dirigían desde Valparaíso hacia Santiago. Los ha detenido Carabineros en la carretera. Ninguno de los comandantes en jefe contesta al teléfono. Los Carabineros son los únicos que responden. Están tomando las medidas previstas, salen a proteger la Moneda... He hablado con Brady. Le he dicho que tome las medidas propias de la situación, y que si no las iba a tomar que fuera hombre y me lo dijera. Ahora salen tropas del ejército de Santiago hacia Valparaíso... El Ejército, en Valparaíso, ha salido a controlar la ciudad.

— ¿Son leales?

— Parece que sí. Pinochet no está en su casa. El general Urbina no contesta; ¿estará detenido?

Se había comunicado minutos antes con Letelier, quien desde su casa telefoneó a su gabinete en el Ministerio de Defensa. Se encontró con la sorpresa de que le contestaba el almirante Carvajal, jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional, importante personaje en la preparación del golpe. Todavía no quiere definirse, balbucea, tartamudea...

— Su información es equivocada, señor ministro... No hay tropas en Santiago... Se tratará de algún allanamiento... Estamos intentando comunicarnos con Valparaíso... Estoy viendo...

Letelier transmite al presidente el hecho de que el almirante Carvajal se encuentra a esas horas en el despacho del ministro de Defensa. Allende le indica que acuda de inmediato a ocupar su puesto, si cree poder llegar hasta allí.

Olivares pregunta si telefona al general Prats.

— ¿El general Prats? — Allende esboza un gesto, entre la ironía y la defraudación—. Mejor no hablemos de él...

— Estoy intentando localizar al almirante Montero —añadió Olivares—. ¿Qué le digo si le encuentro?

—Que vaya a Valparaíso. Que sepa comportarse como un soldado y, si es preciso, que sepa morir con honor.

7,15 H: LA AVIACIÓN SE DISPONE A ATACAR LAS INDUSTRIAS.
LA GUERRA CIVIL COMIENZA

—Presidente —intervengo yo—; hay que acallar las radios de la oposición. En los intentos de putsch anteriores fueron el principal medio de movilización a la revuelta. Reduzcamos el apoyo a la insurrección y evitemos víctimas inútiles.

—Conforme. Augusto, llama a Joignant.

El director general de Investigaciones responde:

—Aló, aquí el presidente. Se ha sublevado la Armada. Tome medidas para radio Agricultura, radio Minería y *El Mercurio*.

—¿Le digo lo mismo a Carlos Toro? —pregunto.

—Sí, hágalo.

Llamo a Toro, responsable del servicio de seguridad del Partido Comunista.

—El presidente ha dado orden a Joignant de silenciar las radios de derecha y *El Mercurio*. Tenlo presente. Pero no mencionó a radio Cooperativa, que también es importante. ¿Qué noticias tienes tú?...

—Presidente, según Toro la Fuerza Aérea se dispone a allanar los cordones industriales.

—Si hacen eso, es la guerra civil.

La guerra civil. Habíamos llegado a la situación que tanto queríamos evitar. La Marina sublevada, Carabineros y Ejército parecían leales al gobierno, la Aviación atacando a los trabajadores... Había que proceder con rapidez y decisión para atajar el peligro de incendio total.

Eran las 7,20. Allende se ha acabado de vestir en medio de conversaciones telefónicas.

—Vamos a la Moneda. Los tanques de Carabineros que están aquí en la puerta, díganles que se dirijan también allá...

Parte el auto del presidente, seguido de otros tres con la escolta personal y dos camionetas con armas. A toda velocidad, se dirigen hacia la avenida Kennedy, bordean la ciudad. Los dos tanques de Carabineros que estaban guardando Tomás

Moro, se dirigen también hacia la Moneda por un camino más corto, por Providencia, el "barrio alto".

Asegurado por el jefe de la II División y de la guarnición de Santiago de que el Ejército se mantiene leal, y por el director general de Carabineros de que éstos se están movilizando contra la sublevación, el gobierno puede contar que hasta ese momento controla la capital y que dispone de los sectores decisivos de las Fuerzas Armadas. Tras atravesar la ciudad sin ningún problema, Allende ocupa su puesto de mando, centro del poder del estado y símbolo histórico del régimen institucional.

Cuando a las 7,30 ingresamos en la Moneda, a su alrededor están desplegados gran cantidad de Carabineros, y tanques del mismo cuerpo están tomando posición. Dentro, la guardia presidencial se halla igualmente en posición de combate.

Cinco minutos después, el director general de Carabineros, general Sepúlveda Galindo, entra en el gabinete del presidente. Mientras se saca el cinturón para colgarse la pistola, informa de las medidas que están siendo tomadas. Y parte.

A las 7,40, solo detrás de su escritorio, Allende continúa telefoneando:

—No responden. Me temo que esta vez están comprometidos todos los comandantes en jefe.

Las sospechas empiezan a tomar cuerpo. Pero no hay ningún otro indicio. Cada minuto que pasa puede ser precioso.

—Presidente, no conviene que los trabajadores estén concentrados en puestos fijos. ¿No sería preferible que empezaran a desplegarse, o quizás que se dirigieran hacia el centro? ¿Llamo a Figueroa?

—Sí.

Las 7,45. El presidente de la Central Única de Trabajadores está todavía en su casa. Allende toma el teléfono.

—Aló... Se ha sublevado la Marina... La situación está confusa... Movilidad, movilidad... ¿Ud. dónde va a estar? Déme el número de teléfono. Tome nota —a Raúl, miembro de la escolta—. Mi enlace con usted será Raúl.

Éste se anota el número en la palma de la mano. Con metrallita al hombro, atento y silencioso, no se distancia del presidente.

En el gabinete hay tres teléfonos comunicados con radio

Corporación, radio Portales y radio Magallanes. Están especialmente preparados para que la voz salga directamente al aire. Son las 7,55. Allende toma el auricular de radio Corporación y pide que le den salida al aire:

Habla el presidente de la república desde el palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano.

En estas circunstancias llamo sobre todo a los trabajadores. Que ocupen sus puestos de trabajo, que concurren a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el palacio de gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.

Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, y que eviten provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria, que han jurado defender el régimen establecido que es expresión de la voluntad ciudadana, y que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y le prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias, tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores, fundamentalmente, deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones que les dé el compañero presidente de la república.

No. El término de "movilidad" empleado en la conversación con Figueroa no significa que los trabajadores se desplieguen todavía. El diseño que Allende siempre ha mantenido es que en el terreno militar las organizaciones obreras no están en condiciones de actuar al margen de las Fuerzas Armadas profesionales, sino en conexión con éstas. El mensaje que acaba de transmitir está en esa misma línea; corresponde en primer lugar a los cuerpos armados del estado sofocar el amotinamiento que,

hasta ahora, aparece localizado en la Marina. Los trabajadores, en caso de insuficiencia de aquéllos, pueden actuar como fuerza acumulativa, pero no supletoria.

Durante los tres años anteriores, el gobierno siempre ha contado con el respaldo activo de un sector de las Fuerzas Armadas. Y sobre tal base está montado su sistema defensivo. La información disponible hasta aquel momento indicaba que no había solución de continuidad.

Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno en tanto que institución, el estado se hunde irremediabilmente. Allende es jefe del estado y opera dentro de esta lógica, pero no es el jefe de ninguno de los partidos de la UP ni de los sindicatos, que tienen su organización y jerarquía autónoma de la del gobierno, y han tenido buen cuidado de demostrarlo a lo largo de los tres años transcurridos. ¿Qué tienen previsto los partidos obreros para la eventual suposición de que la autoridad del jefe del estado sobre las Fuerzas Armadas desaparezca, por una causa u otra?

Yo estimo que las organizaciones obreras no pueden estar simplemente expectantes. Que deben actuar. Figueroa es el presidente de la CUT, y miembro de la comisión política del PC. El vicepresidente es Rolando Calderón, del PS.

—Presidente ¿llamo a Calderón?

—Sí...

Son las ocho, está aún en su casa.

—Aló, Rolando, el presidente. ...hagan callar las emisoras de derecha, y *El Mercurio*. Ocúpese de *El Mercurio*...

Pero los sindicatos, por sí solos, no pueden hacer frente a la situación sin respaldo de tropas profesionales, organizadas y equipadas para enfrentarse a otros cuerpos armados. Los comandantes en jefe continúan sin responder. ¿Qué está pasando realmente dentro de las Fuerzas Armadas? Pienso de nuevo en quien era comandante en jefe del Ejército 17 días atrás.

—¿Y el general Prats? —pregunto.

—Lo tenemos en un sitio seguro por si llega el momento... ¿Dónde está el ministro de Defensa? Hace 20 minutos que ha salido de su casa. He mandado un auto a buscarle. Usted —a un miembro de la escolta—, vaya al Ministerio de Defensa a informarse de lo que pasa allí...

La semana anterior, Prats había manifestado que pensaba

en la posibilidad de un atentado contra su vida. Allende le pidió a Víctor Pey que le consiguiera una casa de seguridad donde alojarse. Solamente ambos sabían dónde era.

A partir de las ocho empiezan a acudir a la Moneda las primeras autoridades. A las 8,10 ingresa en el gabinete del presidente el coronel Valenzuela, subsecretario de Guerra, vestido de civil:

—Vengo del Ministerio de Defensa. He querido entrar y no me han dejado... Está tomado por el Ejército.

Es la primera noticia concreta que nos llega sobre el Ejército. De Letelier, tras sus dos conversaciones telefónicas con Tomás Moro, antes de las siete, no supimos más. Había partido hacia el Ministerio de Defensa en su auto, acompañado de su ayudante militar, y al ingresar en el ministerio este último le encañonó con su pistola.

Entra Eduardo Paredes:

—Al salir del edificio de apartamentos donde he pasado la noche, me he encontrado con el general Magliochetti,⁷ que venía entrando. Nos hemos saludado. ¡La cara de asombro que ha puesto al reconocermel

Allende comenta:

—El general Magliochetti... entrando a un edificio civil a estas horas...

Todavía no se sabe nada concreto de la Aviación. A las 8,15, Allende pronuncia una segunda alocución por radio. Mientras está hablando, el suboficial del edecán militar, que está en el despacho contiguo, me comunica que el edecán aéreo llama por teléfono:

—Dígale que espere un momento, que el presidente está hablando por radio.

Segundos después regresa el suboficial:

—El comandante Sánchez insiste en que es muy urgente...

Salgo a la sala de los edecanes a contestar. No hay nadie. Tomo el teléfono:

—Sí, diga...

—Comandante Sánchez en el teléfono. Necesito hablar con el presidente.

7. De la Fuerza Aérea, había sido designado ministro de Obras Públicas el 28 de agosto anterior. Tras el golpe de estado, fue designado jefe de Gabinete del general Leigh.

—Buenos días, comandante. El presidente está hablando por radio. Espere un momento. En cuanto termine tomará la comunicación. ¿Qué noticias tiene Ud?

El silencio fue tan absoluto del otro lado, que juzgué prudente no repetir la pregunta.

Regresé al gabinete. Cuando Allende colgó el auricular de la radio, le dije que el edecán aéreo le esperaba en el teléfono:

—Sí..., escucho ... Dígale al general Von Schowen que el presidente de Chile no arranca en avión y que él sepa comportarse como un soldado, que yo sabré cumplir como presidente de la república. ¿Y usted, qué hace ahí? ... Ha ido a informarse. Bien, véngase de inmediato a la Moneda.

Desde el Ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea ofrece un avión para que el presidente abandone el país. No se atreve a comunicarlo personalmente, y ha obligado a ir al ministerio al edecán aéreo para que éste transmita el mensaje. Era una situación que recordaba extrañamente otra que Allende gustaba comentar en la intimidad:

—En 1939, cuando se sublevó el general Ariosto Herrera en Santiago, me encontraba junto al presidente Aguirre Cerda en la Moneda en el momento en que llegó su edecán aéreo a comunicarle que tenía un avión dispuesto para sacarle del país. Don Pedro, sentado en su sillón, terminó de liar pausadamente su cigarrillo y con voz mesurada le contestó: "Mire, comandante, yo he sido toda mi vida un hombre de derecho. Y ahora soy el presidente de la república. Tendrán que venir a sacarme de aquí, porque yo no voy a irme". Ariosto no llegó a la Moneda. Con su actitud, aquel viejito había hecho fracasar el putsch...

La comparación llega sólo hasta aquí. En 1939, el general Herrera estaba impulsando un putsch "a la chilena", con recursos y horizontes eminentemente locales. No tenía detrás el impulso y mediatización de los servicios del Pentágono de Estados Unidos y los imperativos de la política de Henry Kissinger. ¿Qué estaba pasando en el Ejército de Chile esta vez? Todavía no lo sabíamos a ciencia cierta. La Marina, por sí sola, no podía ir muy lejos. Con la Aviación, tampoco. La clave estaba en el Ejército. ¿Quién estaba intentando moverlo contra el gobierno? ¿Por qué no descubría su rostro? ¿Cuál era la real distribución de las fuerzas militares a lo largo del país? ¿Qué estaba haciendo la escuadra norteamericana en aguas chile-

nas? ¿Cuáles eran las fuerzas amigas y adversarias con las que el gobierno tenía que contar? Los indicios se iban acumulando minuto a minuto, de manera inconexa y dispersa. Las comunicaciones telefónicas estaban funcionando en la ciudad de Santiago, pero estaban cortadas con el resto del país. De todos modos, la suerte del putsch se decidía en la capital.⁸

Hasta el momento, la única certidumbre es que el Alto Mando de Carabineros respalda al presidente. Hecho importante. Carabineros, con sus 25.000 hombres especialmente entrenados y equipados para el combate en ciudades, es el único cuerpo armado extendido a lo largo de toda la geografía nacional. En ese sentido, puede decirse que tiene el principal poder de fuego. Con el respaldo de los sindicatos, la amalgama de carabineros y trabajadores detrás del gobierno representan una fuerza de primera magnitud, capaz de decidir en un primer momento el control de la ciudad de Santiago y de frustrar el golpe. En caso de que los insurrectos den la orden de abrir fuego, Carabineros junto a trabajadores pueden ofrecer una resistencia muy seria. Suficiente en cualquier caso para ganar el tiempo indispensable para que en el seno de las Fuerzas Armadas los sectores antigolpistas puedan reaccionar, organizarse y enfrentar a los insurrectos.

8,20 horas. El general Sepúlveda ingresa de nuevo en el gabinete. Telefona al prefecto-jefe de Carabineros de Santiago, general Parada:

—¿Qué información tiene? ... Cómo que vamos a ver... —el tono de su voz sube progresivamente, y adopta el propio de los cuarteles—. Carabineros ha estado siempre y está con el gobierno ... ¡Estamos en la parada hasta el final, pase lo que pases! ... y el director general de Carabineros ¡soy yo!...

Allende escucha la conversación. No hace ningún comentario y abandona el salón. Desde otro teléfono llama a Víctor Pey.

—... Ve a buscar al general Prats. Que venga a la Moneda...

8. En las declaraciones al *New York Times* de uno de los oficiales dirigentes del golpe, se indica que "[...] durante la tarde del 10 de septiembre, unos cincuenta oficiales sospechosos de ser partidarios del doctor Allende fueron arrestados [...]" (27 septiembre 1973). El número de oficiales que aquella noche estaba al corriente de la insurrección del día siguiente, era de unos 80, según indicaba el teniente coronel Pedro Ewing a *Ercilla*, de Santiago, en octubre siguiente.

Hay que utilizar los recursos de emergencia. Estamos ante un movimiento de gran envergadura. No conocemos todavía a quién tenemos enfrente, pero los indicadores que nos llegan desde dentro del Ejército son cada vez más dudosos y débiles desde que partimos de Tomás Moro, hace una hora.

Tengo puesta en marcha una radio y sintonizada radio Agricultura, propiedad de la Sociedad Nacional de antiguos latifundistas. Suena una marcha militar. Cuando se termina sigue otra. Y otra. No hay comentarios. El más importante medio de comunicación y de movilización de la derecha todavía no sabe bien qué tiene que decir. No orienta a la oposición ni transmite consignas. Pero es evidente que las instrucciones para silenciarla no han sido ejecutadas, ni por la policía ni por los sindicatos.

Estoy solo en el gabinete. Salgo a la antesala un momento. Hay unas diez personas. Percibo al ministro de Educación, a algunos dirigentes de los partidos, al ministro de Trabajo, Jorge Godoy, presidente de la Central Única de Trabajadores pocas semanas atrás y miembro de la comisión política del PC. Converso con él:

—Compañero ministro... parece que el golpe afecta esta vez tanto a la Marina como a la Aviación y el Ejército... Cada minuto que pasa es precioso... Me pregunto si no convendría que los trabajadores se desplegaran hacia algunos objetivos concretos, incluido el centro de la ciudad, en vez de continuar concentrados dentro de las industrias.

—No. Los trabajadores están bien en sus centros de trabajo. Allí saben lo que tienen que hacer.

La respuesta es tajante. No juzgo oportuno insistir. Pero no entiendo. Las fuerzas insurrectas están empezando a desplegarse por la ciudad. En cambio, los trabajadores están inmovilizados en sus fábricas. Ante un adversario en movimiento, centralmente coordinado, dotado de medios ofensivos y de aprovisionamiento infinitamente superiores a los pocos centenares de fusiles y metralletas a los que tienen acceso los trabajadores, éstos esperan en puntos fijos, prácticamente desconectados unos de otros. Como plan de combate, no veo su adaptación al momento que se vive. Más bien parece un plan de no combate. Una duda me asalta: durante tres años, desde 1970, la Central Única de Trabajadores ha repetido que en caso de intento de golpe los sindicatos tenían orden de ocupar sus empresas e iniciar la huel-

ga general. El 29 de junio de 1973, mientras los tanques disparaban por primera vez contra la Moneda, la gran mayoría de las empresas del país fueron ocupadas. ¿Significa lo que me dice el ministro del Trabajo que frente al tipo de movimiento militar que se nos está revelando minuto a minuto esta mañana, los sindicatos continúan pensando que su respuesta es la ocupación de empresas y la huelga general? Frente a una masa militar movilizada y equipada para la guerra, ¿qué puede hacer la huelga general? Nada, pienso yo, si no dispone a su vez de respaldo militar.

8,30 H: PINOCHET Y EL EJÉRCITO DIRIGEN LA INSURRECCIÓN

Retorno al gabinete. No hay nadie. En la radio la música militar ha cesado y están leyendo un comunicado:

El presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile [...] La prensa, radio y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante, de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre [...] Firma: Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Son las 8,30. Por la radio empezamos a saber a qué atenernos. Estos valientes militares no se han atrevido a comunicar sus propósitos personalmente, ni siquiera hablando por teléfono. Han hecho leer a un locutor un comunicado. Por primera vez aparecen los nombres de quienes se responsabilizan de lo que está pasando. Aunque todavía no muestran su rostro ni se oye su voz, algunas deducciones pueden hacerse: en la Marina y Carabineros ha habido un golpe interno. Los comandantes en jefe han sido descabezados, pero ¿con qué eficacia? Por la ventana veo que las fuerzas de Carabineros continúan desplegadas protegiendo la Moneda. En la Aviación y el Ejército son los propios comandantes en jefe que recibieron esta responsabilidad de manos de Allende, el mes de agosto, los que integran la Junta. Leigh no tiene mayor misterio, pero la sorpresa está en Pinochet. El hombre que se hacía pasar por "leal hasta las últimas consecuencias", el confidente que revelaba al gobierno las intrigas de los conspiradores, el que en el mayor secreto dis-

cutía con Prats y Allende de las medidas para controlarlos y eliminarlos del Ejército, el que apenas dos días antes había escuchado al presidente decir que iba a convocar un referéndum para resolver los principales dilemas político-económicos del país, era el que dirigía el levantamiento. Esta sí es una nueva. Ahora se entiende que no respondiera esa mañana. Pero, ¿qué ha sido del jefe de la II División y de la Guarnición de Santiago, general Brady —éste si contestaba— y de las órdenes que a las siete decía a Allende que estaba dando? ¿También lo han descabezado, o también mentía en espera de confirmar de qué lado se decantaba la situación? Horas después, su nombre aparecía al pie de las órdenes de fusilamiento de los abogados, economistas y médicos del equipo personal del presidente, supervivientes del combate de la Moneda.

Allende vuelve a ingresar en el gabinete. ¿Qué información tendrá él? Resumo el comunicado de la radio:

—...y aparece firmado por Leigh y Merino, pero también por Mendoza que se autodenomina director general de Carabineros, y por Pinochet.

No hace ningún comentario. Estamos solos. Toma el teléfono y pronuncia una breve alocución por radio. Es la tercera:

—...holocausto [...] no entregaré el mando [...].

Son las 8,45. De pie, la mano sobre la mesa de trabajo, repiqueteando los dedos, la mirada perdida en la distancia, Allende se limita a decir media voz:

—Tres traidores, tres traidores...

GOLPE DE MANO EN CARABINEROS

Por primera vez en la historia del ejército profesional de Chile, su comandante en jefe encabeza una insurrección contra el presidente de la república. En 1891, la Marina se sublevó en favor del Congreso, enfrentando al presidente Balmaceda, pero el Ejército se alineó tras este último. Se acaba de romper una tradición nacional más, y todo el dispositivo antiputsch que se apoyaba en el Ejército cabe suponer que ha sido neutralizado o desarticulado por el comandante en jefe. Tras la Marina y la Aviación, aparece evidente que también el Ejército está en el golpe.

¿Con qué fuerza cuenta el gobierno? Es imperioso establecer contacto con el interior del Ejército inmediatamente. Se han tomado varias iniciativas. El subsecretario de Guerra, coronel Valenzuela, ha invitado a Pinochet a venir a la Moneda a plantear su posición y evitar una catástrofe de magnitudes desconocidas. La respuesta ha sido negativa. Los tres edecanes, comandante Jorge Grez —capitán de fragata—, teniente coronel Sergio Badiola —del Ejército— y comandante Roberto Sánchez —de la Fuerza Aérea—, se encuentran en la Moneda.

¿Dónde estaba, mientras tanto, el general Prats? Nunca alcanzamos a localizarlo.

Eran las 8,55 y lo único seguro era que el Alto Mando de Carabineros continuaba respaldando al gobierno, así como que sus unidades continuaban desplegadas protegiendo la Moneda. De pronto, Allende se dirige a la ventana, mira y la abre. Se oyen ruidos de motores. Se asoma y mira en todas direcciones. Un centenar de personas que está cerca lo perciben, se acercan y le aplauden. Saluda un instante y se vuelve rápido:

—Que venga el general Sepúlveda.

Éste se hallaba en la sala contigua.

—General, ¿por qué se retiran las tropas de Carabineros, los tanques y los buses?

Sepúlveda mira a su vez:

—No sé qué pasa; voy a informarme.

9,00 H: EL GOBIERNO HA SIDO DERROCADO

Momentos después regresa el director general de Carabineros:

—Presidente, me informan que han tomado la central de telecomunicaciones de Carabineros. Y las unidades reciben las órdenes por radio desde allí [...] El Alto Mando está aislado...

—Mande hombres que recuperen el centro de comunicaciones.

—Presidente, no tengo. Sólo cuento con los que están en la Dirección General —a 200 m de la Moneda—.

—¿Cuántos son?

—Cincuenta, más los oficiales.

—Dígales que ingresen de inmediato aquí.

Definitivamente la oficialidad antiputschista se halla desbordada y sobrepasada. Sepúlveda está a mi lado. Aunque era impropio y fuera de lugar, no puedo evitar la tentación de formular una breve pregunta:

—General, ya no cabe sino repartir armas al pueblo. ¿Puede Ud. hacerlo?

La cara del general no puede ser más expresiva. La sorpresa se confunde con la estupefacción ante mi interrogante.

—¿Repartir armas yo? ¿Cómo quiere que *yo* reparta armas?

¿Era ésta una contestación de un director general de Carabineros aislado de sus unidades, o de rechazo psicológico de considerar semejante alternativa a la situación que acababa de crearse? No lo sé a ciencia cierta. Su semblante daba más bien la impresión de significar lo primero.

Los tres edecanes piden al presidente reunirse con él. Los comandantes Grez y Badiola toman la palabra:

—...las Fuerzas Armadas le piden que entregue el mando. No tiene Ud. otra alternativa. Usted debe salvar su vida, presidente...

La respuesta fue breve:

—Comandantes, si así lo desean regresen junto a sus instituciones. Quedan en libertad de acción.

LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES, SIN DIRECCIÓN UNIFICADA

A lo largo de aquella mañana, igual que durante los mil días de gobierno UP, Allende actuaba en su doble función de presidente de la república y de líder popular. En virtud de la primera, intentaba movilizar los recursos institucionales del estado cuya dirección le competía. Como representante popular estaba proyectando sobre los acontecimientos su personalidad y responsabilidad en tanto que portavoz principal del conjunto del movimiento popular, así como el valor simbólico de su actuar respecto de la suerte inmediata y futura del proceso revolucionario.

Pero aquella mañana también se puso a prueba el hecho básico que tanto había condicionado el devenir del gobierno UP: la dirección del aparato de los partidos políticos era independiente de Allende, y cada partido procedía de acuerdo con la

voluntad de sus órganos de dirección específicos, en función de sus objetivos propios a corto y largo plazo.

¿Qué planes tenían preparados los partidos de la UP para defender a los trabajadores de una acción militar de la contrarrevolución? Yo siempre conocí los del presidente de la república, que se insertaban dentro de la línea estratégica general del gobierno. Pero nunca alcancé a saber los de los partidos. Cuando apuntaba este tema en las conversaciones durante los años anteriores, la reserva y el misterio que yo veía en los rostros me hacían pensar que era prudente no insistir en un tema que quizás por su propia naturaleza los dirigentes preferían guardar secreto. ¿Pero el secreto lo mantenían hasta tal punto que cualquier partido de la UP desconocía o, peor, desconfiaba de lo que los otros partidos pensaban hacer ante la eventualidad de que la burguesía abriera el fuego? En ese supuesto, opinaba yo, los partidos obreros y populares estarían condenados no sólo a improvisar sobre la marcha, sino que además se hallarían imposibilitados de proporcionar una dirección unitaria a la defensa de los trabajadores en el terreno bélico. A poco que la burguesía se dotara de una capacidad de comando militar único, la Unidad Popular sería derrotada espectacularmente si en algún momento el gobierno no podía disponer del respaldo de las instituciones armadas del estado. Precisamente por eso, me replicaba Allende, hay que evitar a toda costa las condiciones que permitan estallar al enfrentamiento armado.

La mañana del día 11 de septiembre, poco antes de las nueve, cuando ya el ruido de los vuelos rasantes de la aviación dificultaba las conversaciones, en el minuto escaso que Allende concedió a Hernán del Canto confluían tres años de interrelación entre la dirección del Partido Socialista y el presidente de la república:

—Presidente, vengo de parte de la dirección del partido a preguntarle qué hacemos, dónde quiere que estemos.

—Yo sé cuál es mi lugar y lo que tengo que hacer —respondió secamente Allende—. Nunca antes me han pedido mi opinión. ¿Por qué me la piden ahora? Ustedes, que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer. Yo he sabido desde un comienzo cuál era mi deber.

Ahí terminó la conversación. Del Canto partió. Los demás partidos no enviaron a preguntar qué hacían.

A las 9, consulto a Allende sobre el estado real de la situación:

—¿No puede desautorizar a los generales que le piden que entregue el mando, no hay nadie capaz de reemplazarlos al frente de alguna guarnición leal, en Santiago o en las provincias? ¿No cuenta con un solo regimiento leal?

—Ni un solo regimiento, Juan Enrique.

La presencia del comandante en jefe del Ejército al frente de la insurrección significaba que el sector democrático de aquél estaba incapacitado para oponerse al putsch. Frente al escepticismo de un sector de la izquierda, Allende siempre había repetido —antes y después de 1970— que el nivel de disciplina de las instituciones armadas del estado y sus características sociopolíticas impedían a los trabajadores dividir “horizontalmente” a las Fuerzas Armadas, al margen de su jerarquía institucional. A las 8,30, cuando se conoció la real posición de Pinochet, Allende tuvo la certeza de que no podría contar con el Ejército a menos que éste se viera resistido militarmente por fuerzas leales al gobierno el tiempo necesario para permitir a la oficialidad, suboficialidad y tropa antiputschista desobedecer a las órdenes de la autoproclamada Junta Militar, lo que permitiría a las organizaciones obreras incorporarse. Esta hipótesis todavía no se podía excluir entre las 8,30 y las 9. El éxito del golpe interno en Carabineros obligaba a abandonarla definitivamente, dado el contexto en que nos encontrábamos. Ningún partido ni organización obrera, sin excepción, estaba en condiciones de hacer frente a la situación. Ni aislada ni conjuntamente, las estructuras del movimiento popular no estaban en condiciones de responder al asalto.

Hacía dos horas y media que había llegado la noticia de la sublevación de algunas unidades de la Marina, y una hora y media que habíamos entrado en la Moneda con la información de que el Ejército y Carabineros obedecían al gobierno. El plan de defensa de éste se había quebrado en su componente militar profesional. El gobierno había perdido el respaldo de los cuerpos armados del estado. En tanto que institución, el estado y sus poderes integrantes acababan de desmoronarse. La fuerza física emergía como sola instancia de poder, sin ninguna limitación. El poder de fundamento democrático, encuadrado dentro de un estado de derecho, estaba derrumbado. Por

primera vez en varios decenios, las organizaciones obreras se encontraban fuera del aparato del estado, reducidas a su sola fuerza. El ejercicio del poder del estado, que habían venido condicionando a través de la lucha por una mayor democratización y participación popular, el poder del estado que habían alcanzado a conquistar en parte, les estaba siendo arrebatado. Las organizaciones populares, sindicatos y partidos, se hallaban reducidos a sus solos recursos.

La destrucción del aparato del estado acababa de producirse. Quienes dentro de las organizaciones populares habían orientado su acción en la búsqueda de este objetivo, bajo el espejismo de que se trataba de un "estado burgués", se encontraban con su anhelo en las manos. Durante unas horas debieron pensar que había llegado su momento, el del enfrentamiento, la única vía realmente revolucionaria para ellos. Durante algunos minutos, el sector de la izquierda que razonaba según esta línea táctica pudo verse realizado. Frente al puñado de miles de oficiales que dirigían sus armas contra los trabajadores, se oyó decir: "Nosotros somos millones". Pronto, muy pronto, la trágica realidad les mostraría la magnitud de la ilusión que habían venido cultivando. Un puñado de hombres, es cierto, pero con la organización y medios técnicos de la guerra moderna, respaldados por el bloque social conservador amenazado en su hegemonía, una vez tomada la resolución de arrasar con cuanta resistencia encontraran, iban a demostrar en los hechos que, frente a un ejército disciplinado y bien equipado, millones de personas sin organización ni recursos militares equivalentes no pueden plantear batalla en el mismo terreno. Esta evidencia, histórica, recurrente en cuantas oportunidades se ha dado el desequilibrio entre una minoría con técnicas bélicas superiores enfrentadas a grandes masas en inferioridad de condiciones, de nuevo iba a ponerse a prueba. Lamentablemente, las ilusiones, los mitos y los dogmas tienen la vida larga. No era en la batalla, en el enfrentamiento armado como los trabajadores chilenos habían llegado al gobierno. Ni tampoco donde podían defender mejor sus conquistas y progresar hacia el logro de sus objetivos históricos.

Pero, a su vez, tampoco estaba en las manos de los trabajadores evitar el enfrentamiento, en la medida que sus enemigos lo buscaban. Si un sector de la izquierda veía equivocadamente

en la batalla militar la vía de acceso al poder, el sector que no compartía este supuesto ¿cómo se había preparado para disuadir a la clase dominante de recurrir a las armas, y para responderle si llegaban a abrir fuego? A lo largo de tres años se había hablado y discutido con fervor de estas cuestiones. La hora de la verdad, del contraste de la teoría y doctrinas con los hechos, había llegado a su punto de verificación.

Poco después de las 9, en su cuarta alocución por radio, Allende fijó su posición. Los recursos que durante tres años le habían permitido contener a los sectores interesados en hacer estallar la guerra, acababan de desaparecer en el transcurso de aquella mañana. En cuanto jefe del estado, sólo le restaba interponer el valor moral de su persona:

Pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a este país. Caerá un baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra, roto la doctrina de las Fuerzas Armadas.

La muerte aceptada como afirmación última de la razón de vivir:

En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo [...]

Sacrificio de la vida en función de su valor espiritual para el futuro:

En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Ésta es una etapa que será superada. Éste es un momento duro y difícil; es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

En ninguna de sus alocuciones de esa mañana, Salvador Allende se dirige a los partidos políticos. Su mensaje va dirigido directamente a los trabajadores como un todo, sin distincio-

nes, indicando unos principios de acción genéricos que no está en su mano —nunca lo ha estado— concretar.

El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar. Pero también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor [...]

¿Qué estarán haciendo, mientras tanto, las direcciones de los partidos de la Unidad Popular? —me pregunto a mí mismo—. ¿Estarán de nuevo cada cual por su lado, o se habrán constituido en comité o frente nacional revolucionario? Por una vez, ¿estarán de acuerdo en lo que corresponde hacer, o cada partido querrá seguir un camino distinto, su propio camino? Nosotros, en la Moneda, todavía no lo sabemos en aquellos momentos. Pero parece que los trabajadores tampoco...

La revolución chilena hace tiempo que ha entrado en la fase armada. Esta mañana ha sido declarada la guerra a los trabajadores, por un adversario que se ha dotado de dirección única. Si es difícil ganar la lucha política sin dirección unitaria, la guerra es imposible. Los partidos políticos, ahora que estamos en plena guerra ¿darán a los trabajadores una dirección única? Con el transcurso de las horas, podríamos ver que la respuesta a estos interrogantes continuaba siendo negativa. El ingreso en la nueva etapa los partidos lo hacen sin solución de continuidad respecto de la etapa anterior. ¡Qué costo tan enorme va a significar ello para los trabajadores y el país entero!

Terminada la cuarta alocución por radio, entran en el gabinete los generales Urrutia y Álvarez, procedentes de la Dirección General de Carabineros. Sus rostros exteriorizan desconcierto ante el curso que están tomando los acontecimientos, y cierto temor.

—Se les madrugó Mendoza —les dice Allende a modo de saludo.

Sepúlveda procura responder a los interrogantes de sus generales, describe el comportamiento de los insurrectos:

—...debían comportarse como hombres. Lo que tengan que decir, tendrían que venir y plantearlo al presidente cara a cara. No enviándole las tropas. Hay que ser hombres, en estas cosas...

A las 9,10, Allende intenta una nueva intervención por radio. Descuelga el teléfono de radio Corporación:

—...no podemos salir al aire; nuestra emisora ha sido bombardeada.

Intenta por radio Portales.

—Presidente, la Aviación ha bombardeado nuestra antena, no podemos transmitir.

Sólo resta una emisora, radio Magallanes; todavía emite. El presidente pronuncia su quinta alocución. Alude a la traición del mando de las Fuerzas Armadas:

Compatriotas: es posible que silencien las radios, y me despido de ustedes. Quizá sea ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio Portales y radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron, soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autoproclamado, el general Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros.

Ante estos hechos sólo me cabe decirles a los trabajadores yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Ésta es una etapa que será superada. Éste es un momento duro y difícil; es posible, que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

Tras resumir las causas y los agentes principales de la insurrección, se despide de los sectores sociales que formaban el gobierno —campesinos, obreros, profesionales que no se sumaron a la huelga, intelectuales—:

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia,

que empeñó su palabra en que respetaría la constitución y la ley, y así lo hizo.

Es éste el momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les señaló Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena conquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días están trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha, me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortado las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, me seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco debe humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

Las ventanas del gabinete han sido cerradas. Allende está sentado detrás de su escritorio. A su alrededor, unas veinte personas escuchan en silencio, con emoción, el último mensaje de un presidente a su pueblo.

Terminada la alocución, Allende se dirige a sus tres edecanes, que también la han estado escuchando:

—Ustedes actúen de acuerdo a su conciencia. Tienen libertad de acción. Si lo desean, regresen con sus instituciones. Yo me quedo aquí.

Los tres partieron. En el exterior, el ruido de los vuelos rasantés de cuatro aviones Hawker Hunter. Allende habla por teléfono. Cerca de las 9,30 nos dice:

—En dos minutos más seremos atacados.

Y sale del gabinete a organizar la defensa del palacio. Se oyen los primeros disparos de ametralladoras, artillería pesada y tanques. El asedio ha comenzado. Desde el interior del palacio responde el fuego de algunos fusiles y metralletas.

LA RAZÓN DE UN COMBATE

El combate de la Moneda tenía más sentido político que militar. Tras la primera hora y media de intercambio de fuego, llegó la noticia de que la Aviación había bombardeado la residencia de Tomás Moro. Las emisoras de radio anunciaron que la Aviación tenía orden de bombardear también el palacio de gobierno a las 11 si Allende no se rendía. Este resolvió reducir el número de víctimas dejando en libertad de acción a la guardia presidencial de Carabineros, la que abandonó el lugar en su integridad, así como los generales Urrutia y Álvarez que, en su temor a combatir, no hallaban excusa para justificar su partida. Una excepción, la del director general de Carabineros, Sepúlveda Galindo, que se mostraba reacio a abandonar al presidente y fue el último militar en salir del recinto, media hora después de haber recibido la orden y apenas unos minutos antes de que cayeran las primeras bombas.

Hacia las 10,45, los ministros presentes —Clodomiro Almeyda, de Relaciones Exteriores, Carlos Briones, del Interior, Jaime Tohá, de Agricultura, José Tohá, ex ministro de Defensa,

y Fernando Flores, secretario general de Gobierno—, solicitan al presidente una reunión a puerta cerrada. No duró más de tres minutos. Allende la interrumpió en cuanto comprobó que algunos ministros le aconsejaban que se entregara y salvara su vida.

El único momento durante aquella mañana en que Allende perdió la calma y dio prueba de indignación, llenando de improprios a alguien, fue cuando Alfredo Joignant le telefoneó para comunicarle que había entregado el mando de la Dirección General de Investigaciones a un funcionario. Aunque reducido, unos seiscientos hombres equipados con metralletas, la policía civil era el único cuerpo armado del estado que tenía a su frente a un militante de un partido obrero. Que fuera precisamente en aquellos momentos, en la hora de combatir, cuando el único militante de la UP con mando de un servicio armado profesional resolviera, por sí y ante sí, abandonar el puesto que le había confiado el presidente de la república en tanto que hombre de confianza, resultó intolerable para Allende. No sólo eran los generales que se declaraban leales al gobierno, pero que no tenían ningún compromiso con los partidos populares, los que no querían combatir. Así, tras Carabineros, la Aviación, el Ejército y la Marina, llegaba la noticia de la neutralización de la policía civil.

Pasadas las 11, un cruce de líneas telefónicas permitió escuchar la voz del general Baeza, jefe de las operaciones en el centro de Santiago:

—...de los de la Moneda no debe quedar rastro, en especial de Allende; hay que exterminarlos como “baratas” [cucarachas]; ... el objetivo debe ser destruido por tierra y aire ...

A esas alturas, dentro de la Moneda, quedaban menos de 50 civiles. De ellos, unos 15 militantes del Partido Socialista y 6 agentes del Servicio de Investigaciones pertenecían a la escolta presidencial. Veintiún hombres de armas era todo el efectivo de combate contra el que se enviaban tropas de infantería, blindados y bombarderos Hawker Hunter. El desenlace no ofrecía dudas. Nos encontrábamos, además, todo el equipo de trabajo del presidente. La sensación de la muerte inminente embargaba el ánimo de todos. Poco antes del bombardeo aéreo, Allende reunió a sus colaboradores personales y les preguntó qué resolvían hacer. El jurista Arsenio Poupin, subsecretario general

de Gobierno, señaló: “Nuestra obligación es quedarnos aquí”. Los restantes contestaron de modo semejante: Augusto Olivares, periodista, Jaime Barrios, economista, Claudio Gimeno, sociólogo y cuatro médicos —Jorge Klein, psiquiatra, Eduardo Paredes, ex director general de Investigaciones, Ricardo Pincheira, del Servicio de Seguridad del Partido Socialista, Enrique Paris, asesor en cuestiones de educación y ciencia, así como Enrique Huerta, intendente de Palacio. Olivares murió durante el combate que siguió al bombardeo. Todos los restantes junto con los supervivientes socialistas de la escolta fueron detenidos y murieron en lo tortura dos días después. También resolvieron permanecer Carlos Jorquera, periodista, Osvaldo Puccio, secretario privado, y su hijo, estudiante de Derecho, el equipo de médicos de la presidencia —Danilo Bartulín, Arturo Jirón, Patricio Arroyo, Óscar Soto, Arturo Gujón—, el abogado Daniel Vergara, subsecretario del Interior, Lautaro Ojeda, subsecretario de Tierras, el economista Fernando Flores, ministro secretario general de Gobierno, y una mujer, Miriam Contreras, secretaria privada de Allende. En el Ministerio de Relaciones se encontraban los ministros Almeyda, sociólogo político, Briones, jurista, Aníbal Palma, abogado, José Tohá, periodista y Jaime Tohá, ingeniero.

En un momento dado, Allende se dirigió a mí y me ordenó partir. Ante mi gesto de sorpresa, argumentó tres razones para explicar su decisión:

—...y, por último, alguien tiene que contar lo que aquí ha pasado, y sólo usted puede hacerlo. ¿No es cierto? —preguntó a sus restantes colaboradores, quienes asintieron. En todos ellos, particularmente en aquellos a quienes veía por última vez, he pensado al escribir el presente libro, inesperado superviviente de la masacre de la Moneda, la primera de las que iban a seguir en miles de fábricas, poblaciones y campos a lo largo de todo el país.

En los mismos momentos que Allende y su equipo personal resolvían rechazar la oferta de rendición y continuar resistiendo, otra reunión tenía lugar en la industria Sumar. La del comité político de la Unidad Popular. Tras media hora de deliberaciones, los dirigentes de los partidos políticos llegaban a una conclusión: no ofrecer resistencia, los trabajadores debían abandonar los centros de trabajo y retirarse a sus casas. A las 11,30

empezaba a circular la orden que refrendaba una constatación de impotencia, resultado de las políticas seguidas durante tres años a que hemos aludido en los capítulos anteriores.

A las 12,20, tras unos 15 minutos de bombardeo aéreo, el recinto de la Moneda ardía por todos los costados. En el interior, el aire tóxico y el humo dificultaban la respiración. Allende y sus colaboradores se distribuyeron las pocas máscaras antigás disponibles, y se aprestaron a continuar el combate. Tropas de infantería comandadas por el general Javier Palacios iniciaban el asalto mientras los tanques disparaban sobre las ventanas. Las dos docenas de civiles lograron resistir en su interior una hora más, en medio de las llamas y del derrumbe de techos y pisos. Hacia las 13,45 los primeros soldados entraban en el ala donde se habían concentrado los supervivientes, la de la calle Morandé, donde se encontraba el comedor. El gabinete presidencial, la sala del Consejo de Ministros, la secretaría privada, eran pasto del fuego. Poco antes de las 2 de la tarde, moría Allende. Tenía entre las manos el fusil con que había combatido. No alcanzó a convocar el referéndum.

Si la dirección principal de la contrarrevolución venía buscando desde hacía meses el derrocamiento del gobierno, aunque no el cadáver del presidente de la república, ¿por qué Allende desoye esa mañana a quienes le aconsejaban salvar su vida y abandonar el país? Las razones son las mismas que le resolvieron a no renunciar a la presidencia dos meses antes, el 16 de julio, cuando nos convocó a Vuskovic, Martner y a mí para pedirnos nuestro parecer sobre la conveniencia de su dimisión, tras llegar a la convicción íntima de que las divergencias entre los partidos de la UP impedían al gobierno poner en práctica las iniciativas que le parecían dramáticamente inaplazables.

Allende estaba persuadido de que la institución de la presidencia de la república y por extensión el estado en su dimensión democrática, era el único frente de contención militar y política contra el desencadenamiento de la violencia y la guerra civil. Sin los recursos del gobierno, las organizaciones de los trabajadores —partidos, sindicatos, cordones industriales, comandos comunales, etc.— se le aparecían como divisiones enteras de un ejército a la merced del adversario, impotentes de ofrecer

por ellas mismas una resistencia orgánica equivalente al nivel de la agresión de que eran objeto desde 1972.

A través de la decisión de defender hasta el fin la legalidad democrática, Allende deseaba imposibilitar a la burguesía la reconstrucción del aparato del estado tradicional, condenándola a entrar en conflicto con el sentido de la evolución histórica del país en su configuración socioeconómica contemporánea. Su propia vida era el último recurso que se había reservado el hombre político singular que era Allende. Muchos dirigentes de la insurrección, desde los democristianos de Frei hasta los militares del general Bonilla, habían alimentado la ilusión de forzar un simple reemplazo del bloque social que detentaba el gobierno, sustituyéndolo por el que era mayoritario en el Congreso, sin alterar sustancialmente las instituciones del estado. Pero semejantes especulaciones no habían contemplado la necesidad de bombardear el palacio de la Moneda con el presidente de la república dentro, obligándoles a arrasar las instituciones políticas que deseaban recuperar.

La tarde del 11 de septiembre, el cadáver del presidente Allende impedía a la oposición instalarse al frente del estado que había existido hasta esa mañana, aun en la hipótesis de que algún sector de la propia dirección de la izquierda hubiera estado predispuesto a aceptarlo a cambio de, por ejemplo, el reconocimiento de la organización sindical o del Parlamento por la Junta Militar. El núcleo burgués tradicional que había dirigido la contrarrevolución, se vio enfrentado al problema —no deseado— de tener que construir otro estado. Lo que le convertía en prisionero del maleficio histórico derivado de haber tenido que demoler la organización estatal construida bajo su propia hegemonía social. Semejante situación, presente en las proyecciones de futuro que se elaboraron en la Moneda entre 1970 y 1973, debía plantear a la derecha un problema prácticamente insoluble a medio plazo —siempre que la izquierda supiera aprovechar el legado histórico acumulado después de 1970—. En el supuesto de que la contrarrevolución se impusiera militarmente, yo estimaba que en un primer momento sería normal que el aparato militar asumiera la totalidad de las funciones del estado, incluida la jurisdiccional a través de la proclamación del estado de guerra y la clausura del Parlamento. Pero más allá de la emergencia de los primeros meses, la necesidad

de edificar un nuevo régimen institucional debía conducir a la burguesía a la aporía de intentar levantar un estado fascista —lo que nos parecía inviable, dadas las condiciones objetivas y subjetivas del país— o de reconstruir alguna variante del estado tradicional, lo que debía resultar asimismo impracticable en la medida que sus fundamentos básicos habían sido apropiados por el movimiento popular, y yacían calcinados el 11 de septiembre de 1973 entre los escombros del gobierno constitucional. Fenómeno éste que, como culminación de la estrategia seguida entre 1970 y 1973, debía contribuir a facilitar “más pronto que tarde” la instauración de un estado democrático y popular.

Había, asimismo, en la opción de Allende, la voluntad de asumir plenamente la responsabilidad que le incumbía en su calidad de principal portavoz de los trabajadores y de máxima autoridad del estado. Desde un punto de vista ético, le resultaba inaceptable que un dirigente gobernante desconociera sus deberes y compromisos, abandonando a sus seguidores a la persecución y al país a la violencia desenfrenada a cambio de garantizar su seguridad personal.

Era un problema de consecuencia consigo mismo, con sus convicciones íntimas y sus planteamientos públicos:

Quienes pretenden sacarnos del camino que nos hemos trazado, quienes mintiendo y calumniando hablan de que en Chile no hay libertad, se ha suprimido el derecho de información, está en peligro la prensa, son los que mixtifican para poder, engañando, encontrar apoyo en determinados sectores, y son los conjurados en el ansia turbia de oponerse a la voluntad popular, y yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de Mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado; pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás; que lo sepan: dejaré la Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defenderé esta revolución chilena, y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado; no

tengo otra alternativa; sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo.⁹

Con su resistencia ante las presiones de la contrarrevolución Allende quiso reafirmar hasta el último instante su voluntad de mantener unido el movimiento popular en torno de su más importante instrumento político —el gobierno—, retardando la disgregación interna de la UP tras opciones tácticas contrapuestas. Con su actitud y sacrificio, deseaba dejar establecido un nexo duradero entre el pasado y el futuro del proceso de desarrollo de la democracia y el socialismo en Chile, entregando a los trabajadores y al país un testimonio de valor y generosidad en la lucha por sus libertades, dignidad y bienestar.

9. Alocución radiotelevisada, pronunciada en el Estadio Nacional de Santiago (diciembre 1971).

INDICE

	Pág.
<i>Nota a la 2ª edición</i>	5
Presentación	7
I. Tradición histórica y praxis presente o la actualidad de un viejo debate	9
Crisis del sistema capitalista y guerra civil, 11. — La insurrección como táctica revolucionaria, 28. — Democracia política y socialismo mayoritario, 35. — La experiencia de Chile, 44. — Insurrección y contrainsurrección, 60.	
II. El plan ITT-CIA-Frei de 1970	65
La derecha y las Fuerzas Armadas locales utilizadas como instrumentos de orden interno, 73. — Desnaturalización de las instituciones políticas y "baño de sangre", 75. — La presión económica y la guerra psicológica al servicio de la cohesión del sistema internacional americano, 78. — El plan de acción para provocar el colapso económico, 82. — Provocar las condiciones de la violencia y arrastrar a Allende a acciones de fuerza, 91. — La desintegración del sistema económico-social como vehículo del golpe militar, 93. — La estrategia indirecta contra un gobierno con voluntad de independencia, 101. — La Weltanschauung de las empresas multinacionales, 106.	
III. La lucha por el poder del estado	113
Coexistencia de clases y dominación de una clase, 127.	
IV. El gobierno popular y las Fuerzas Armadas del estado	132
"Vía pacífica" y "vía no armada" al socialismo, 136. — La relación entre el gobierno UP y unas Fuerzas Arma-	

das profesionales, 143. — Crisis de hegemonía social, crisis del estado y Fuerzas Armadas profesionales, 151. — La evolución militar en su relación con la crisis del aparato del estado, 152. — Del 4 de septiembre al 25 de octubre de 1970, 156. — De noviembre de 1970 a marzo de 1972, 156. — La política militar de una estrategia indirecta, 169. — La política militar de una estrategia directa, 172. — La encrucijada táctica de enero de 1972, 177.

V. El dilema de la Democracia Cristiana 202

El encuentro Allende-Tomic de diciembre de 1971, 209.

VI. El recurso a elecciones y el problema del poder en la táctica político-institucional 215

La opción inicial de noviembre de 1970, 220. — Las opciones de 1971 sobre la infraestructura económica y el estado, 238. — Las opciones de 1972 y la crisis de la supraestructura estatal, 248.

VII. La política militar antiinsurreccional y las tácticas políticas 253

El putsch de marzo de 1972, 253. — Frei pide la ayuda de las compañías multinacionales. La acumulación de fuerzas externas e internas, 259. — El fracaso del putsch militar en marzo de 1972, 264. — La política militar antiinsurreccional. Lagunas y contradicciones, 271. — Junio de 1973: es aislado el sector democrático de las Fuerzas Armadas, 284.

VIII. Las tácticas directa e indirecta en la lucha por el poder del estado 298

Los límites de la táctica político-institucional, 302.

IX. Desajustes tácticos y derrota estratégica 317

En la estrategia, la decisión principal tiene lugar al comienzo de la acción principal, 320. — Los medios de la táctica no son los mismos cuando se alteran las condiciones de la estrategia, 322. — El "tempo" de la táctica

no es el "tempo" de la estrategia, 339. — La dirección única, condición estratégica indispensable, 344. — La unidad de mando y el recurso a la sorpresa, 351.

X El golpe de estado 358

La jornada del 10 de septiembre de 1973, 359. — La última noche en Tomás Moro: el tardío referéndum, 366. — Es la hora de los cañones, 371. — 6,30 h: la Marina se ha sublevado, 375. — 7,15 h: la Aviación se dispone a atacar las industrias. La guerra civil comienza, 376. — 8,30 h: Pinochet y el Ejército dirigen la insurrección, 384. — Golpe de mano en Carabineros, 385. — 9,00 h: el gobierno ha sido derrocado, 386. — Las organizaciones de trabajadores, sin dirección unificada, 387. — La razón de un combate, 395.



También en nuestro catálogo:

Walter Garib, *De cómo fue el destierro de Lázaro Carvajal*

David Turkeltaub, *Ese señor Lagos*

Eduardo Novoa, *Grandes procesos - Mis alegatos*

José Cayuela, *Un rincón de selva**

David Turkeltaub, *Por amor de la muerte*

Carlos Jorquera, *El Chicho Allende*

Walter Garib, *Las noches del juicio final*

Cecilia Bachelet de Miranda, *Mi exilio y la cocina*

Ernesto Malbrán, *Øyeblikk - Historia tesorífica contada por un bufón**

Alexis Guardia, *Chile, país centauro - Perfil del socialismo renovado***

* Producidos bajo el sello **Urano**

** En preparación